



AVISO LEGAL

Título: *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*

Autores: Sosa, Ignacio; Camacho Navarro, Enrique; López Ávalos, Martín; Retana Ramírez, Ruperto; Monroy García, Juan; Figueroa Ibarra, Carlos; Vázquez, Mario R.; Ibeas Miguel, Juan Manuel; Moncada Agudelo, Luis Fernando

Colaborador: Sosa, Ignacio (coordinador)

ISBN: 968-36-6603-5

Forma sugerida de citar: Sosa, I. (coord.). (1998). *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. <https://rilzea.cialc.unam.mx/jsui/>

D.R. © 1998 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.

- © Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.
<https://cialc.unam.mx>
Correo electrónico: cialc-sibiunam@dgb.unam.mx

Los derechos patrimoniales pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este contenido en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>



Usted es libre de:

- > Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- > Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

- > Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Pueden hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- > No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- > Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

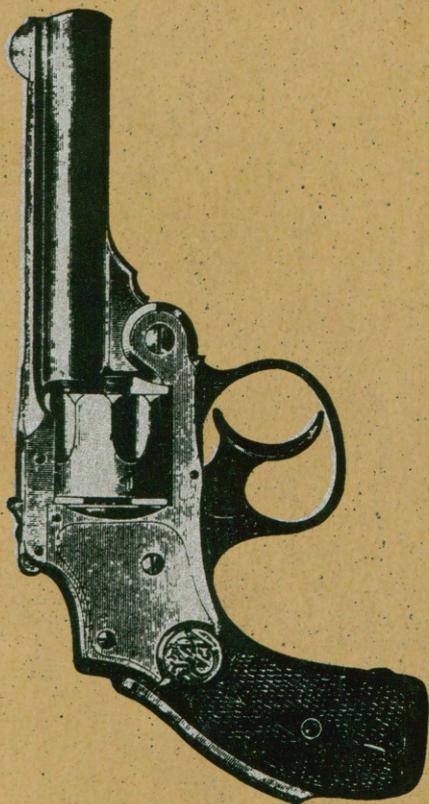
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

INSURRECCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL

CIRCUNCARIBE

IGNACIO SOSA



CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSURRECCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL CIRCUNCARIBE

Serie Nuestra América, 58

**CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

**DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO**

Ignacio Sosa
COORDINADOR

INSURRECCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL CIRCUNCARIBE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO 1997

Primera edición 1998

**Dr © Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.**

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Proyecto de la DGAPA, núm. IN-401095

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-6603-5

PRESENTACIÓN

Ignacio Sosa

Cualquiera que sea la forma en que interpretemos los cambios en el tercer mundo y su gradual descomposición y fisión, hemos de tener en cuenta que difería del primero en un aspecto fundamental: formaba una zona mundial de revolución, realizada, inminente o posible... pocos estados del tercer mundo, cualquiera que fuese su tamaño, pasaron los años cincuenta (o la fecha de su independencia) sin revolución, sin golpes militares para reprimir, prevenir o realizar la revolución, o cualquier otro tipo de conflicto armado interno.

Eric Hobsbawm

En esta parte se analiza la tensión generada entre las fuerzas que pugnaron por democratizar la vida política en la región del Caribe y Centroamérica y las que pretendían continuar con las prácticas autoritarias. Se subraya el aporte de los movimientos insurreccionales en los últimos cincuenta años para lograr un cambio en el autoritarismo imperante desde principios de siglo. El área estudiada, escenario no democrático por excelencia, es la que circunda el mar Caribe —Circuncaribe—, primera zona de influencia de Estados Unidos caracterizada, durante la primera mitad del siglo xx, por la existencia de regímenes tiránicos con discurso democrático y, en la segunda mitad del mismo periodo, por gobiernos con perfil autoritario que se autojustificaban con el discurso de la Guerra Fría, es decir, por la defensa de un desarrollo autoritario con hipotéticos valores democráticos. Para los mandatarios de los dos periodos, la opinión pública de las mayorías no fue factor de legitimidad ni de estabilidad política, así como tampoco elemento digno de consideración a la hora de tomar decisiones políticas.

A finales del primer medio siglo la estabilidad de la mayoría de los regímenes circuncaribeños no se ponía en entredicho porque se hubieran valido de medios ilegítimos tanto para obtener como para conservar el poder. En escenarios no democráticos, la conservación y el uso arbitrario del poder eran cuestiones desvinculadas de la legalidad. La fuerza del ejército, de la guardia nacional, de la policía y hasta del hábito inveterado de obediencia al gobierno se encargaba de mantener el *statu quo*.

En el contexto de los países que bordean el mar Caribe, el debate teórico-práctico sobre los requisitos que el gobierno debía cumplir para poder exigir obediencia a sus mandatos y, cuestión más importante, sobre si la democracia se podía establecer o no por medios democráticos, o si los regímenes basados en la fuerza debían concluir merced a esta última, dio lugar en los últimos cincuenta años a posturas cuyos simpatizantes defendieron con vigor las tesis derivadas de sus experiencias y de los principios doctrinarios que sustentaban.

En el debate político de la región se puso énfasis en la o las formas de establecer la democracia. También se discutió si ésta era o no un atributo anterior al desarrollo económico o, por el contrario, si éste es consecuencia derivada de aquélla. Un rasgo notable de esta polémica consistió en considerar más importante la acción que la teoría y suponer que ésta era uno más de los obstáculos para el cambio. El imperativo de la acción, con el claro propósito de derrocar pronto el régimen autoritario, frecuentemente se impuso al de la reflexión crítica sobre las condiciones que se debían cumplir para establecer una sociedad democrática.

En medio de gobiernos autoritarios, de regímenes de fuerza, y agotadas las vías de la desobediencia y la protesta pacífica, el llamado a la insurrección —por ser el único medio para derrocar las tiranías—, surgió a menudo por parte de quienes ocupaban una posición cercana al poder y de él obtenían beneficios, con el mero fin de cambiar a los gobernantes y no, como afirmaban los insurrectos, para transformar el sistema político. Otros sectores políticos, en su momento tachados de reformistas, rechazaron la vía insurreccional por considerar que los conflictos

sólo se resolvían en forma verdadera a través de mecanismos consensuales.

El estudio de los movimientos insurreccionales planteaba, durante el medio siglo señalado, conflictivos problemas de interpretación, pues les eran inherentes cuestiones que ponían en entredicho el orden político, económico y social vigente. Los movimientos insurreccionales se explicaron en función de argumentos referidos a un orden ideal, distinto del injusto sistema imperante. La necesidad de subvertir éste, así como la de justificar y legitimar el uso de la fuerza, sin recurrir a la ideología marxista, para cumplir su propósito, deben considerarse en cualquier análisis de los movimientos armados.

Hasta hace pocos años era común encontrar en los textos de historia del Circuncaribe un elevado número de pronunciamientos, alzamientos y rebeliones ocurridos desde el momento de la independencia política hasta nuestros días, así como de constituciones creadas al calor de ellos. La explicación del hecho se atribuía en esos textos a la idiosincrasia de los circuncaribeños, que provocaba la inestabilidad política de la región. No se buscaban hipótesis que explicaran la recurrente violencia practicada por un sistema diseñado para garantizar el *statu quo* y no para promover el cambio característico de las sociedades modernas.

El hecho de que en la historiografía política circuncaribeña no aparecieran con la misma frecuencia estudios referentes a la resistencia pacífica ni a la oposición y que entre las expresiones democráticas sólo se estudiara el reformismo, aunque generalmente asociado a la experiencia revolucionaria, no permite deducir ni la inexistencia de grupos opositores al gobierno, ni la supuesta identidad de voluntades entre gobernantes y gobernados; por el contrario, señala que el poder violentó repetidas veces los derechos políticos de la población.

En esta presentación se emplea el nombre de movimientos insurreccionales y no el de guerra de guerrillas o guerrillas simplemente, porque la guerrilla, en su acepción contemporánea, basada en las experiencias de China y Vietnam, se centró en la conquista del poder y en la conservación del mismo, así como en

cuestiones doctrinarias, y éstas se consideraron tan importantes como las armas mismas. En su acepción contemporánea, la guerrilla se ha entendido como un elemento de combate irregular en una guerra entre estados. En este contexto, se trataba de un organismo compuesto por el pueblo o, si se quiere, por las masas populares que prestaban ayuda, en forma discrecional y condicionada, al ejército regular. En la guerra de guerrillas, así entendida, se mezclaban en un solo proceso la lucha social, contra el capital, y la lucha nacional, contra el imperialismo.

En el caso de la América latina en general, y del Circuncaribe en particular, esa noción ayuda poco, puesto que los grupos insurreccionales tenían composición social y programas e ideologías diversas. Por otra parte, se presentaron en un área controlada no por potencias decadentes, sino por Estados Unidos, país con capacidad suficiente para imponer sus decisiones en escala global. En tal contexto, los grupos insurreccionales circuncaribeños ni buscaron ni desearon un enfrentamiento con enemigo tan poderoso; es más, trataron por todos los medios a su alcance de convencerlo de que su verdadero opositor era el gobierno local y, en algunos casos, ciertas compañías de capital estadounidense.

Los grupos insurreccionales del Circuncaribe fueron, a veces, organizaciones cuyo objetivo era la autodefensa, como ocurrió en Colombia cuando la violencia conservadora amenazó a los liberales. En otros casos, se trató de una lucha desesperada de jóvenes con ideología liberal que recurrieron a las armas como única posibilidad de poner fin a las tiranías que asolaron la región, como lo mostró la Legión del Caribe. En otras ocasiones, como en Cuba, sí se formuló un programa político y se pretendió tomar el poder. Sin embargo, en el caso colombiano, como ya se dijo, y en el del actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la toma del poder no es objetivo inmediato y, en cambio, se pretende obligar al gobierno a una solución negociada.

Por las razones mencionadas, aquí se ha preferido emplear la expresión movimientos insurreccionales pues permite tratar en forma conjunta experiencias que, si bien tuvieron en común la protesta armada, la vía violenta, no compartieron la misma ideo-

logía ni persiguieron los mismos propósitos. Asimismo, los impulsaron clases y grupos sociales de diferente composición. En la vanguardia de los movimientos insurreccionales se encontraban desde jóvenes clasemedieros de ideología radical, conservadora y liberal, hasta representantes —pocos— del proletariado, el campesinado y la burguesía. Los movimientos insurreccionales se componían de blancos, mestizos y contados negros. Sólo en su etapa más reciente y específicamente en el área maya de Guatemala y México, la población indígena tiene una participación mayoritaria.

Otra razón por la que se prefiere hablar de movimientos insurreccionales y no de guerrillas —amén del hecho de que luego del triunfo castrista la historiografía latinoamericana las trató como si hubiesen sido una marca registrada por los cubanos, y no una experiencia con hondas y decimonónicas raíces españolas y latinoamericanas— es que hasta ahora, a consecuencia de la Guerra Fría, por guerrilla sólo se entendió lo relacionado con la revolución socialista y se dejó al margen su aporte a la causa democrática.

Los movimientos insurreccionales cubrieron la amplia gama de la lucha revolucionaria, desde la que partía del credo liberal que consagró como primera prerrogativa de los hombres el derecho a la rebelión, la que reivindicó el control nacional de los recursos básicos como parte indisoluble de la soberanía y la que hizo suyo el reclamo justiciero de que la tierra es de quien la trabaja, hasta, por último, la que postuló la igualdad entre los hombres como condición de paz social. Además, hubo movimientos insurreccionales donde participaron miembros del propio ejército, como ocurrió en Venezuela y Guatemala, y numerosos pronunciamientos apoyados moralmente por la iglesia católica, como fue evidente en El Salvador, Nicaragua y, más recientemente, en México.

Llámesese a sus protagonistas guerrilleros, insurrectos o subversivos, o denomínese su programa político reformista o revolucionario, el fenómeno que representaron fue, en la mayoría de los casos, polémico. Pocas nociones como las de insurrección y vuelta tuvieron una carga emocional e ideológica tan conflictiva.

Dicha carga es la que explica la ausencia de estudios ponderados sobre lo que significó para la sociedad circuncaribeña el fenómeno recurrente de la violencia, ya fuese ésta revolucionaria o contrarrevolucionaria.

El signo de las ideologías, característico de la Guerra Fría, marcó la mayor parte de las aproximaciones teóricas o históricas sobre los procesos insurreccionales ocurridos en los últimos cincuenta años. En este periodo, las tesis insurreccionales tuvieron momentos de auge y retroceso, despertaron simpatías y antipatías profundas, provocaron encono entre los miembros de una misma familia y rencores que atravesaron la sociedad entera. Despertaron ilusiones, esperanzas de satisfacer viejos anhelos de justicia social, y, al mismo tiempo, revivieron los viejos fantasmas del pesimismo y del fatalismo.

En esta época se juzgaron, desde la perspectiva de la ideología, las acciones de los insurrectos y de sus opositores. El viejo maniqueísmo sólo cambió de ropajes y de nombres. Durante el desarrollo de la Guerra Fría las fuerzas básicas del bien y el mal se hicieron presentes en la historiografía cuando se describió a los actores políticos en términos de revolucionarios y de reaccionarios, de agentes del imperialismo yanqui o del imperialismo soviético. Según la ideología profesada por los analistas, en los insurrectos encarnaban ya las virtudes, ya los defectos; eran visionarios o ciegos y, por último, eran adalides de la democracia o del autoritarismo. Tales esquemas, moneda corriente en el pasado más próximo, estaban impregnados de intereses y de visiones enmarcados en el conflicto Este-Oeste, y no tomaban en cuenta la realidad imperante en las sociedades circuncaribeñas. Es hora ya de emprender una revisión de los movimientos insurreccionales y de poner, en primer plano, sus aportes a los procesos de transición a la democracia.

Las etapas de la insurrección

Los movimientos insurreccionales iniciados a partir de fines de la década de los cuarenta con la Legión del Caribe, continuados por

las guerrillas foquistas de los cincuenta, que en los sesenta entraron en una fase activa para declinar en los setenta, se consideraron la única vía para alcanzar la democracia, el desarrollo y la consiguiente justicia social. En el decenio de los ochenta, en Nicaragua y en El Salvador, atravesaron una nueva fase caracterizada por la masiva participación popular y, en los años noventa, hizo su aparición en ellos un nuevo sujeto histórico, el indígena, tradicionalmente marginado por los analistas. En su etapa más reciente, el círculo se cierra porque el reclamo democrático vuelve a ser una constante manifiesta en todos los foros.

En su etapa inicial, 1945-1959, se trató de movimientos urbanos, contestatarios, emprendidos principalmente por universitarios. Postularon valores democráticos y adoptaron la vía insurreccional como única alternativa, puesto que los procesos electorales, controlados y manipulados por los gobiernos dictatoriales en turno, no ofrecían garantías a la oposición democrática. Los teóricos del liberalismo fueron su principal inspiración y el problema político, la democracia, fue su asunto prioritario.

En su segunda etapa, 1961-1967, desarrollo y revolución fueron elementos complementarios. El problema de la soberanía nacional, asimismo, era una cuestión acaloradamente debatida. Los movimientos insurreccionales se autoproclamaron vanguardia, reducida, excluyente, foquista. La vanguardia se concibió como instrumento idóneo para destruir el corrupto, ineficiente y entreguista aparato estatal, en que se incluía, en primera instancia, al ejército. El único y excepcional caso de triunfo lo representó Cuba, experiencia que, sin embargo, se pretendió generalizar. Se intentó convertir en dogma el que todos los movimientos insurreccionales prescindieran de los partidos políticos y de las organizaciones partidarias. En este contexto, la experiencia venezolana mostró los límites de la teorización castrista-guevarista o, si se prefiere, la ortodoxia castrista y las herejías insurreccionales hicieron correr mucha tinta.

La transformación del escenario político fue radical en esta etapa. Del asedio impuesto al aparato político por todos los mecanismos institucionales, se pasó al cerco creado por los grupos

insurreccionales. El escenario rural característico de su primer momento, de notable influencia cubana, se convirtió en un referente mítico puesto que fue en las junglas de asfalto donde se desarrollaron las acciones de inteligencia y contrainteligencia.

Un rasgo, sin embargo, se manifestó de modo constante. La extrema juventud y su persistente romanticismo estuvieron presentes en los procesos insurreccionales. Sin importar el credo, la experiencia cubana fue la que permitió dar sentido a lo que aparecía inconexo.

Elemento novedoso fue luego la reaparición del arcaico militarismo. La sociedad se militarizó y, tanto en los grupos insurreccionales como en las camarillas de miembros del ejército que controlaban el poder, predominó la idea de que la solución definitiva se concretaría mediante las armas. El escenario político se redujo drásticamente y la polarización ocupó su lugar. Fue la hora de las definiciones en que ambos bandos sólo distinguieron entre amigos y enemigos sin nada entre unos y otros. Los partidos políticos tradicionales entraron en crisis por su incapacidad de ofrecer una solución distinta de la planteada por sus antagonistas.

Por otra parte, en esta etapa, la tesis guevarista de crear uno, dos, muchos Vietnam, desempeñó un importante papel. El imperialismo fue considerado el enemigo común y las luchas nacionales se escalaron en nivel internacional. Desde esta perspectiva, no se trató ya de pequeños grupos, en alejadas regiones, con demandas locales. Todo se hizo aparecer como un movimiento orquestado y, por tanto, la caída de uno de los escenarios locales repercutiría, inevitablemente, en los restantes. La internacionalización de la represión, de los argumentos y de los escenarios dominó los procesos. A partir de ese momento, los movimientos insurreccionales ya no pudieron estudiarse en su dimensión nacional, regional o meramente local. Al contrario, triunfaron las tesis que sostenían la unidad de propósitos y la hermandad de la lucha: el bolivarismo adquirió renovada vigencia.

La tercera etapa, 1967-1980, se caracterizó por la respuesta de distintos grupos a los severos fracasos de las ideas foquistas y a

su descuido en la organización popular. El *foco* guevarista y su tesis de vía única cedieron su lugar a un complejo organizacional de múltiples variantes: estudiantil, obrero, campesino y popular que incluía, en algunos casos, alianzas con sectores de la burguesía. Gracias a esa variada composición social nueva, dicho complejo pregonó su representatividad popular y nacional, y, al mismo tiempo, marcó su distancia con la ortodoxia revolucionaria. Por otra parte, sus denuncias siguieron siendo las mismas: un Estado corrupto y un ejército ineficiente. Un nuevo elemento se añadió: Estados Unidos, firme aliado de los gobiernos reformistas y autoritarios. La represión pasó a ser necesaria y a justificarse en el enfrentamiento porque, según se declaraba, la democracia corría peligro. La insurrección, de rural, se transformó en urbana; de apartidaria, se convirtió en brazo armado de los partidos políticos, y de estar a la defensiva pasó a la ofensiva.

La etapa más reciente, 1980-1995, se caracterizó, en el área maya, por el abandono de las tesis invocadas durante la Guerra Fría. Las raíces comunales, locales y seculares de los conflictos en Guatemala y en México fueron inocultables. El enfrentamiento entre la población mestiza, partidaria de la propiedad individual, capitalista, la población indígena, defensora de la propiedad comunal, única que le permitió su sobrevivencia, adquirió dimensiones épicas por la centenaria resistencia. En El Salvador y en Guatemala se produjeron los acuerdos de paz y, en México, se estableció un diálogo, con resultado incierto, con la misma finalidad.

Rasgo común de los movimientos en todas sus etapas fue su inocultable vocación continental. La visión latinoamericana predominó en todos ellos y la emancipación de la región entera fue objetivo compartido por los grupos insurreccionales. Por otra parte, ese internacionalismo latinoamericano no fue meramente retórico. Arévalo y Figueres, lo mismo que Betancourt y Castro, ofrecieron su vigoroso apoyo a los grupos que hicieron causa común con ellos. Otra cualidad propia de todos los movimientos insurreccionales fue la de contar entre sus filas a figuras carismáticas que cautivaron —aún lo hacen— a la opinión pública. El Che Guevara, el Comandante Cero y más recientemente el Subcomandante Mar-

cos, con personalidades, objetivos, procedimientos y doctrinas antagónicas, representaron en conjunto el anhelo común de acabar con la injusticia.

El Antiguo Régimen y las insurrecciones

En la historiografía que critica a los movimientos insurreccionales abundan las posturas ideológicas. En ella ha sido frecuente omitir referencias a que dichos pronunciamientos cuestionaban el orden establecido, igual que a las críticas sobre el surgimiento y consolidación de éste. El Antiguo Régimen circuncaribeño, de acuerdo con la historiografía mencionada, nunca existió. En esta historiografía poco se habla de las condiciones políticas y sociales en que los insurrectos emprendieron su acción y, lo más importante, no se precisan sus objetivos; tampoco se señala en ella el orden alternativo que los movimientos pretendían estatuir ni los medios que emplearían para tal fin. Asimismo, no se describen las futuras formas de convivencia que, en el nuevo sistema, se establecerían entre gobernantes y gobernados.

Una posible explicación de estas carencias puede ser que los asuntos relacionados con el orden imperante, con su consolidación cuando los intentos de subvertirlo fracasaron o con la conformación de uno nuevo cuando los rebeldes triunfaron, bordeaban esa zona gris donde la fuerza y el derecho no se distinguían entre sí. Ese espacio indefinido en que los rebeldes, al triunfar momentáneamente, pudieron estatuir un nuevo orden, pero también en el que el orden establecido los juzgó como delincuentes cuando fracasaron luego, se prestó a múltiples polémicas donde las ideologías ocuparon un lugar preponderante. Esa zona gris fue, por definición, cenagosa, puesto que en ella se minaron las bases de la seguridad individual, así como las de la sacrosanta propiedad. Las acciones que vulneraron los pilares del orden son las que explican por qué, desde la perspectiva de sus guardianes, se habló con tanta insistencia del escándalo y la desvergüenza de los rebeldes. Los guardianes del orden vieron los argumentos es-

grimidos por los insurrectos a través de los ojos del código penal, que atribuyó al delito político un parentesco cercano con el delito común. Las razones socioeconómicas que explicaban el surgimiento de la rebeldía, en cambio, no se valoraron con el mismo cuidado.

La diferencia entre delito común y delito político estuvo sujeta al arbitrio de los guardianes del orden, en cuyas manos estaba la interpretación de la ley y del uso de la fuerza para imponerla. Por esa razón los insurrectos debieron mostrar a la opinión pública lo justo de su postura y lo convincente de sus argumentos, y, sobre todo, exponerle el beneficio futuro que sus acciones reportarían a la sociedad entera. En otras palabras, los representantes de los movimientos insurreccionales debían convencer a la opinión pública de la legitimidad de su esfuerzo y de la ilegitimidad de la fuerza, arbitraria violencia, con que el gobierno respondió a los rebeldes. La legitimidad de la fuerza de la ley fue invocada por las partes en conflicto; sin embargo, ambas la entendieron de distinta manera. Para los rebeldes, el gobierno, cuando era espurio, resultaba ilegítimo y, en consecuencia, la propia ley facultaba al pueblo para derrocarlo. La violencia empleada para deponer un gobierno tiránico fue, en este contexto, un recurso legítimo. Por su parte, para los guardianes del orden la continuidad de éste en ningún caso podía alterarse. En síntesis, la batalla ideológica precedió y posteriormente acompañó al ejercicio de las armas. Ni las armas de la crítica ni la crítica de las armas —obligada mención a dos célebres títulos— alcanzaron a la opinión pública mayoritaria. Ésta no comprendió en su momento lo que estaba en juego.

El orden imperial y las insurrecciones

El interés por estudiar en particular la región circuncaribe en los últimos cincuenta años tiene su origen en que en esta zona la política en general y, en particular la insurreccional, se distingue de modo constante, durante todo el siglo xx, por la presencia y la influencia estadounidense, fundada ésta en consideraciones

geopolíticas de seguridad nacional. La movilización de recursos y hombres del Atlántico al Pacífico lo requirió y se complementó con la presencia de las inversiones económicas que desde principio de siglo dominaron el escenario. Por otra parte, la proyección de los intereses estadounidenses en los bordes del istmo centroamericano y del mar Caribe, gozne sobre el que giró la compuerta que abría el camino al Asia a la nueva potencia, hizo que la política interna de los países del área fuese un asunto de la competencia de Washington. Esta incómoda vecindad provocó en el siglo xx múltiples y frecuentes roces que la historiografía ha caracterizado, en cuanto a las primeras décadas del siglo xx, como intervencionismo, y, en cuanto a las posteriores, previas al neoliberalismo, como imperialismo.

Para la tradición liberal estadounidense ambos conceptos fueron inadecuados y no definieron correctamente el interés que la nación del norte tenía en propiciar la estabilidad política y el desarrollo social y económico de sus vecinos del sur; esa ideología tampoco comprendió por qué la estabilidad promovida por Estados Unidos al apoyar a ciertos gobiernos del área a mediados de siglo se ha definido como dictadura o tiranía. Asimismo, a la tradición mencionada le pareció incomprensible que su fórmula de inversiones para impulsar el progreso y el desarrollo haya sido descrita, por intelectuales y políticos de oposición en el Circun Caribe, como el mejor mecanismo para promover el atraso y desarrollar el subdesarrollo.

El brillante papel que en muchas ocasiones desempeñó Estados Unidos en otros escenarios internacionales puede contrastarse con una actuación menos luminosa, inclusive sombría, en Centroamérica y el Caribe. También puede compararse el hecho de que, si bien en otras latitudes la poderosa nación del norte defendió causas democráticas, en su primera zona de influencia, por el contrario, su apoyo se reservó a grupos contrarios a las causas auténticamente populares y democráticas como, por ejemplo, la guatemalteca a mediados de siglo.

La situación creada cuando el encargado de gobernar violenta las leyes para colocarse por encima de los gobernados no es exclusiva de la época estudiada ni del área circuncaribeña. Pero en pocas regiones del mundo y en un lapso tan breve, segunda mitad del siglo xx, hubo una concentración tal de regímenes que compartían el mismo atributo. El autoritarismo vigente en la zona no tuvo paralelo con las experiencias fascistas y comunistas, ambas arquetipos de dictadura, ni pudo identificarse a los autócratas de la región con Mussolini, Hitler o Stalin. Los métodos y los objetivos que perseguían los dictadores circuncaribeños apenas merecieron la atención de los analistas políticos en virtud de que el ejercicio del poder y la forma de conservarlo no plantearon mayores problemas teóricos. Sin propuestas para crear un nuevo tipo de sociedad, sin ideología propia, sin críticas al liberalismo y sin retórica, el papel de los tiranos se limitó a preservar el *statu quo*, privilegiar los intereses extranjeros sobre los nacionales y, por encima de todas las cosas, a enriquecerse ellos en forma escandalosa y permitir que lo hicieran, del mismo modo, sus familiares y colaboradores.

Los rasgos de rapiña, nepotismo y fuerza bruta sólo interesaron a novelistas y a pocos periodistas que, si bien centraron su atención en los rasgos psicológicos de los dictadores, en cambio descuidaron las causas que permitieron la aparición generalizada de las tiranías en la región. No pudo ser una simple casualidad la coincidencia de instrumentos, mecanismos y argumentos de las dictaduras de la región para asaltar, capitalizar y conservar el poder. Tampoco fue coincidencia que el fenómeno se presentase en el área donde el intervencionismo estadounidense, el último imperialismo triunfante del siglo actual, fuera una constante durante las primeras décadas del siglo.

El mar Caribe sólo se transformó en *mare nostrum* estadounidense después de las continuas intervenciones en Cuba, Panamá, Haití, República Dominicana, Nicaragua, etc. Uno de los resultados del intervencionismo fue que los gobiernos de estos países llegaron a considerar más importante el beneplácito estadounidense que la opinión mayoritaria. Para las sociedades de esas naciones una de las consecuencias paradójicas fue considerar mal

menor obedecer a una fuerza connacional, así fuera ilegítima, que a una fuerza extranjera.

El Circuncaribe, arco gigantesco donde coincidieron y lucharon entre sí los imperios del mundo contemporáneo, fue el laboratorio en que Estados Unidos impuso, por vez primera, su voluntad expansionista. Ésta se cultivó con esmero desde principios de siglo en un sistema político donde la formalidad democrática enmascaró gobiernos dictatoriales que, en otras latitudes y otras épocas, se hubiesen denominado cipayos, pues tal era el nombre que en la India se daba a quienes eran hindúes pero hacían causa común con los ingleses y con ellos colaboraban.

El papel de gendarme necesario, que gustosamente desempeñara Teodoro Roosevelt, se encomendó por fin a tiranos o dictadores que, al mando de la Guardia Nacional, organismo ideado por Estados Unidos para suprimir los costosos e ineficientes ejércitos, se encargaban de proteger vidas e intereses estadounidenses. Respetuosos tardíos de las formalidades democráticas, esos gobernantes, aunque hubiesen alcanzado el poder mediante golpes de Estado, se apresuraban a organizar elecciones donde alcanzaban el triunfo ya obtenido de otra manera, con el propósito, muy importante, de que el gobierno estadounidense les diera el indispensable reconocimiento diplomático. Lo demás era una formalidad, puesto que de ahí en lo sucesivo celebraban puntualmente elecciones que los ratificaban en su función. El catálogo de esta especie de gobernantes permite evocar a los más destacados por la historiografía especializada: Machado, Ubico, Somoza, Batista, y Trujillo.

El problema para los demócratas opositores a tales gobiernos consistía no sólo en luchar contra el dictador en turno sino también, lo más arduo, en convencer a Estados Unidos de que la lucha no afectaría sus intereses y —lo cual era más difícil aun— de que una auténtica democracia sería su mejor aliada. Las dificultades, sin embargo, no terminaban ahí. ¿Cómo, sin elecciones auténticas, se podía reconocer la voluntad mayoritaria? ¿Cómo, sin elecciones democráticas, se podía defenestrar al dictador en tur-

no? ¿Cómo, sin elecciones imparciales, el pueblo podía ejercer el credo democrático?

La política exterior de Estados Unidos hacia el Circuncaribe sufrió pocos cambios una vez que logró su control geopolítico. La importancia estratégica de contar con un paso rápido y seguro para trasladar su flota del océano Atlántico al Pacífico se puso de manifiesto con las bases situadas en las islas del Caribe y en Panamá. En forma casi simultánea hicieron su aparición la flota estadounidense y el inversionista interesado en explotar los productos tropicales.

En su primera experiencia como potencia naciente, se advirtió ya una vocación de ir más allá del ámbito regional y alcanzar como horizonte el escenario global. Es necesario destacar el importante papel asignado en esa etapa a los considerandos geopolíticos y a los económicos. El interés por unos y otros contrasta con la nula preocupación por la democracia en la zona.

Las múltiples intervenciones estadounidenses ocurridas en las primeras décadas del siglo tenían como objetivo impedir que el juego de conveniencias desencadenado en los conflictos locales adquiriese una dimensión capaz de alterar el control establecido. Las intervenciones, en todos los casos, cumplieron la función de fiel de la balanza en las pugnas interoligárquicas, las cuales nunca se centraron en cuestiones democráticas.

Durante los primeros años del siglo es difícil encontrar, en los países del área, testimonios que hablen de sentimientos nacionales heridos, de orgullos patrios lastimados y, mucho menos, de soberanía popular. En cambio, abundan las evidencias del rápido enriquecimiento de quienes facilitaron, por todos los medios a su alcance, las concesiones necesarias para que el capital foráneo tuviera las mismas seguridades que en su propia casa. La danza de los millones, descrita por la historiografía especializada en el periodo, muestra los grados de corrupción alcanzados ya en ese tiempo por la clase política, más interesada en el bienestar propio y en el del capital estadounidense, que en la prosperidad común.

El orden y la paz social, o lo que por ésta entendían los políti-

cos y los militares, significaba desinterés por todo aquello que no afectase directamente el tránsito de la flota estadounidense y la seguridad de las inversiones. Los asuntos de política interna eran una cuestión que el gobierno estadounidense dejaba en todos los casos al arbitrio de la clase política local. Ésta rápidamente advirtió los beneficios de contar con un poderoso aliado al cual acudir en caso de problemas con la oposición.

El equilibrio así logrado sólo ocasionalmente se cuestionó. La experiencia única de Sandino en Nicaragua así lo ilustra. En el resto de los países ni la influencia de las revoluciones mexicana y rusa ni la crisis del 29 lograron que el orden imperante sufriese alteraciones mayores. La crónica de las relaciones entre los diplomáticos estadounidenses y los dictadores locales fue obra de William Krehm, periodista inobjetable, quien describió la identidad de moral y propósitos entre los enviados diplomáticos de Washington y los hombres fuertes locales.

La conversión estadounidense de potencia regional en potencia global, ocurrida en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, significó para el área aquí considerada una consolidación de la política tradicional. Ésta se prolongó durante la Guerra Fría mediante la asignación de nuevos ropajes y nuevas justificaciones para conservar el poder a los mismos hombres fuertes. La probada fórmula de desarrollo basado en la inversión estadounidense en la agricultura se extendió a los servicios turísticos. Es la época dorada de los citados Somoza, los Batista, los Trujillo. Como contraparte, la revolución guatemalteca ilustra la suerte de las fuerzas democráticas que aspiraban a un nuevo tipo de relación con Estados Unidos.

Los excesos de los gobernantes de la región, la violencia con que actuaron y la falta de respeto a las normas constitucionales se justificaron por la necesidad de ofrecer seguridad a la vida y a los bienes de los extranjeros. El instrumento para conservar el poder lo constituían las Guardias Nacionales, creadas por mandato y sujetas a la supervisión estadounidense. El pretexto para emplear la violencia fue la idiosincrasia de la sociedad tradicional del Circuncaribe, caracterizada por un arcaico deseo de anarquía que,

según el enfoque de los autoritarios, sólo podían contener hombres fuertes.

En los medios políticos e intelectuales de la región se convirtió en moneda corriente el tópico sobre el atraso de las sociedades centroamericanas y caribeñas consideradas como un todo, puesto de manifiesto en la necesidad psicológica de ser gobernados por hombres fuertes, únicos capaces de mantener la paz. En esta cadena dominada por la fuerza, los hipotéticos hombres fuertes, a su vez, eran débiles si no contaban con el apoyo del Departamento de Estado.

En tal contexto, las insurrecciones estudiadas en los distintos ensayos de este libro son tanto una crítica contra la racionalidad de un sistema fundado en la fuerza, como una denuncia contra el atraso político impuesto y defendido por los intereses metropolitanos. La democratización de los países del Circuncaribe ha sido obra de sus propias fuerzas políticas y no de presiones externas, como lo afirman los actuales políticos estadounidenses.

El derecho a la insurrección en la era liberal

Años de desgaste, de sacrificios, de esfuerzos contra la alianza entre las oligarquías y los intereses estadounidenses terminaron por convencer que el derecho a la insurrección, a la rebeldía, era la única garantía, la vía exclusiva para restituir a los ciudadanos sus derechos políticos. En ese contexto, el ejemplo revolucionario establecido por los países metropolitanos para liberarse de su antiguo régimen se mostraba como la vía a seguir. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano determinaba a la letra, que *La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.*

Cuando los ciudadanos dijeron *basta*, el tajante límite estaba dirigido al gobernante opresivo y no se refería al pacto social descrito por la teoría democrática. Según ésta, mediante tal contrato,

todos los suscribientes renuncian a su derecho a defenderse y se lo confieren al Estado para que ejerza la fuerza, convertida por ese acto en derecho, en exclusiva.

El *basta* fue una exclamación contra los excesos de autoridad del gobernante, así como una referencia a los límites que los principios constitucionales imponen a su acción legítima. El gobernante, cuando excede tales límites, se coloca en forma automática al margen de la ley, pues según ésta en ningún momento y en ninguna circunstancia el gobernante puede, a su arbitrio, situarse por encima de ella ni por encima de los gobernados. Éstos gozan en todo momento de derechos inalienables que el gobernante tiene la obligación de salvaguardar y no vulnerar nunca. Uno de esos derechos, si no el principal, es el de deponer a los gobernantes cuando éstos pretenden colocarse por encima de la ley y la manipulan en su beneficio.

El pacto social, considerado como un todo, según la teoría que se está glosando, no se rompe ni se debilita cuando se registra una insurrección. Tampoco el estado de derecho se debilita como quisieron hacer creer al pueblo los gobernantes autoritarios. Por el contrario, la insurrección es evidencia del vigor de la doctrina liberal que exige congruencia entre la doctrina y la forma en que ésta se lleva a la práctica. El pacto social en ningún momento suspende su vigencia con la insurrección, ya que ésta se dirige única y exclusivamente contra el gobierno opresor y con el objetivo de que éste, como cualquier miembro del pacto, se someta a la legalidad. La insurrección es un acto conforme a la ley, no contra ella. Los insurrectos tienen una motivación política, no un afán delictivo.

Fue la doctrina liberal, no la socialista, la que estableció que, si bien el pacto social no se interrumpía con la insurrección, sí se suspendía en cambio la obediencia que el ciudadano debía al gobierno. Cuando éste no cumple con lo prescrito por la ley, la obediencia es servidumbre pura. El gobierno, cuando hace mal uso del poder que le confiere el pacto social, se pone automáticamente fuera de la ley. Con la insurrección los hombres vuelven al pacto original existente antes del intento de violentarlo. La legalidad

que se desconoce es la del mal gobierno, no la del gobierno en general. La rebelión, en síntesis, en ningún caso es contra el pacto social, como han querido hacer creer los voceros de los regímenes tiránicos.

La legítima resistencia a la opresión se convirtió en la parte central de los movimientos insurreccionales a mediados del siglo xx. En la agenda política el asunto medular se refirió a los preparativos y la puesta en marcha de la insurrección. La lucha frontal contra las tiranías del Caribe corrió a cargo de un pequeño grupo de hombres a los que, en su momento, se consideró ilusos, soñadores, desprovistos de realismo político. Sin más armas que las de la razón, sin otro recurso que su valor cívico, iniciaron el primer y difícil proceso de transición a la democracia. En una época en que los argumentos sobre la transición eran tabú tanto en América latina como en Estados Unidos, los líderes democráticos se vieron obligados a recorrer en pocos años de su vida lo que a las sociedades occidentales les había llevado largos tramos de historia.

A fines de la Segunda Guerra, los países del istmo centroamericano tenían esperanzas de que el ejemplo democrático iniciado en ese momento en Guatemala con la caída de Ubico se extendería a los otros países de la región. Los políticos liberales confiaban en que había llegado el momento en que las tiranías del área correrían la suerte del militar guatemalteco. Confiaban en que el gobierno de Estados Unidos vería con simpatía los esfuerzos democratizadores orientados a poner fin a la gastada fórmula de las tiranías perpetuadas con la única justificación de mantener en calma a la población. Esta confianza de los liberales corre pareja a los quince años que van de 1944 a 1959. Durante ellos, los liberales consideraron que el problema político se resolvería mediante acciones decididas, puesto que la oposición política tradicional vivía en connivencia con el sistema. La insurrección se mostraba como la prueba de fuego mediante la cual se podría diferenciar a los demócratas convencidos de los meros oportunistas que habían coexistido con tiranías, oligarquías, dictaduras, etcétera, formas todas que negaban, en los hechos, la democracia invocada en el discurso.

Situada la insurrección en la avanzada del proceso histórico democrático liberal, podía explicarse en función de una lucha contra las fuerzas antidemocráticas de la reacción, apoyadas en las más poderosas del imperialismo. Portaestandartes de la democracia liberal contra la tiranía, los procesos insurreccionales se comprendían en función de leyes naturales y de compromisos éticos que reclamaban la libertad como condición de vida. El discurso y la práctica de la Legión del Caribe mostraron personalidades legendarias como las de José Figueres, padre de la democracia en Costa Rica, y la de Juan José Arévalo, de la de Guatemala, ambos figuras con aliento mesiánico, visionarios con un credo en que dominó el liberalismo y su sacrosanto derecho a la rebelión contra las tiranías.

Surgieron en ese periodo, en el seno del liberalismo democratizador, como *intérpretes*, intelectuales orgánicos, hombres de poder y de saber, de carisma y de conocimiento, que conocían las leyes naturales, los derechos del hombre, así como el papel que cumplía la libertad del individuo en el desarrollo histórico, y actuaron en consecuencia. Estos liberales lucharon contra las tiranías del Caribe y, sin más armas que las suministradas por la doctrina liberal, se enfrentaron a las dictaduras en el Circuncaribe.

Es de destacar el hecho de que estas y otras vigorosas figuras democráticas no hayan recibido la atención que merecen. Es paradójico que se les recuerde como padres de la democracia y que, sin embargo, se extienda un pudoroso velo sobre sus actividades insurreccionales o el apoyo que prestaron a otros movimientos liberadores. Parece haber un extraño y coincidente interés entre determinadas corrientes liberales y marxistas. Las primeras olvidan que la teoría revolucionaria tiene su matriz en la doctrina liberal y las segundas pretenden creer que con la aparición del socialismo el ciclo liberal revolucionario estaba, por decreto, terminado.

La situación internacional derivada de la Guerra Fría ofreció a los regímenes autoritarios de la región la inesperada oportunidad, sin transformarse, de ser considerados baluartes de la democracia aunque ésta, en la opinión y la práctica de los autócratas circun-

caribeños, no registrara similitudes con los gobiernos así nombrados en otras partes del globo.

En este apartado se pretende demostrar que los movimientos insurreccionales se explican en función de un afán por desencadenar, mediante la democracia, el desarrollo social y económico. No se ignora ni se pretende ocultar que, a partir de la revolución cubana, la ideología dominante entre los grupos insurreccionales, en la década de los años sesenta, fue filosocialista y antiliberal. Empero, la teoría liberal del derecho a la insurrección fue la que permitió engrosar la poderosa raíz en la que, posteriormente, se injertarían las guerrillas. Muchas de éstas, sin formación teórica socialista y con una ideología confusa y contradictoria, fundamentaron su acción en el principio de la legitimidad de la resistencia y en la experiencia de la triunfante revolución cubana, que se convirtió en modelo, aunque sólo en lo que a fines se refiere, pues su dirigencia olvidó paulatinamente sus orígenes liberales hasta que, en el terreno de la historiografía oficial y del imaginario colectivo cubano, se la hizo coincidir con el socialismo.

La ausencia de democracia y la consiguiente lucha por obtenerla fueron rasgos constantes que sirven para explicar, en la mayoría de los casos, los procesos insurreccionales en el último medio siglo. En los análisis comprendidos en este volumen, con la excepción de Venezuela, podrá advertirse que la demanda fundamental de las sublevaciones fue la democratización de la vida política y por ello se comprende su insistencia en denunciar a los regímenes contra los que se alzaban por ser ilegítimos, opresores y tiránicos.

Al revisar la historiografía especializada en temas políticos del área circuncaribeña se aprecia que las demandas de democratización coinciden prácticamente, como se ha señalado, con el fin de la Segunda Guerra. La caída de Ubico, en 1944, marca el fin de una etapa en que los regímenes autoritarios dominaban y el inicio de un nuevo periodo caracterizado por crecientes reclamos de legalidad constitucional. La ola democratizadora que erradicaría las dictaduras no logró la fuerza necesaria en virtud del inicio de la confrontación de los bloques soviético y estadounidense en la Guerra

Fría. Cada uno interpretaría de distinta manera los anhelos democratizadores del área circuncaribeña.

Guerra Fría en el trópico: insurrección y anticomunismo

La historia de los grupos insurreccionales de origen liberal, nacionalista o socialista ha tenido hasta la fecha una fuerte dosis de esoterismo y sólo quienes participaron en ella se creen con derecho a conocerla. Tal vez esa actitud revele una condena moral para la gente que, por una u otra razón, se mantuvo al margen; quizá simplemente exprese el desinterés de esas vanguardias por la opinión pública.

En la historiografía sobre movimientos insurreccionales han dominado seis tipos de problemas planteados de un modo polémico que ha causado confusión a los interesados en el tema. El primero de ellos se deriva de la estrecha vinculación de los análisis y los testimonios con la política partidaria, de grupo. Análisis y alegatos partidarios tienen como principal preocupación justificar y exaltar determinadas acciones y, al mismo tiempo, demeritar las de otros grupos cuyos enfoques eran diferentes.

La cercana relación del documento historiográfico con la política militante se hace evidente por la postura crítica o apologética de las acciones y las motivaciones de los grupos insurrectos: socialistas, comunistas, trotskistas, maoístas, guevaristas. La lucha de siglas que reflejan las aspiraciones de ejércitos, movimientos, frentes, etcétera, sólo es la punta del *iceberg* de las ideologías en conflicto.

La exigencia de objetividad académica necesaria para describir el contexto y el significado que en él tienen los hechos estudiados se pierde fácilmente cuando se abordan los matices ideológicos que justifican los procesos insurreccionales. La labor resulta más difícil porque los análisis, en este contexto, forman parte de la lucha política.

Teoría e insurrección. Reformismo y revolución

El segundo tipo de problemas se presenta cuando se advierte la ausencia sistemática de una teoría sobre el o los significados de revolución. La historiografía sobre los movimientos insurreccionales comparte esa característica común a la mayor parte de los grupos radicales circuncaribeños. Éstos han mostrado escasa inclinación a la reflexión teórica; es más, a partir de la década de los años sesenta, debido a la postura adoptada por Fidel Castro, se la consideró un freno para la acción y una excusa a la que recurrían los indecisos. La ausencia de textos donde los grupos insurrectos expusieran sus principios y propuestas, y en los que se ofrecieran los elementos necesarios para confrontar críticamente a las tendencias políticas antagónicas o divergentes, es notable. Aparentemente los dirigentes de las insurrecciones, así como quienes los secundaban, compartían el supuesto de que todo estaba dicho, o de que todo era tan evidente que no se requería mayor abundamiento. ¿Inmadurez? ¿Desesperación por entrar ya a la acción? ¿Impreparación?

La revolución, cualquiera que fuese su signo, liberal o socialista, en la región circuncaribeña de mediados de siglo, significó un cambio radical para eliminar las raíces del atraso, sentar las bases de la democratización política y conferir al individuo y a la sociedad nuevas formas de identidad y de participación política. Los procesos revolucionarios en el área pretendieron alcanzar la soberanía política y económica y sentar las bases de un desarrollo autosostenido.

La revolución política, por la democracia y la revolución social, la emancipación del proletariado y la insurrección nacional, por la soberanía, se escenificaron en tres contextos y en tres etapas diferentes. El intento de lograr la primera corresponde a Arévalo, a Figueres, a Betancourt y, por paradójico que ahora resulte, a Castro. El modelo de país y de sociedad al que aspiraban encarnaba en Estados Unidos.

En los movimientos insurreccionales aquí estudiados, se puede observar que existió una línea de continuidad entre el liberalis-

mo y el socialismo. Los distintos movimientos insurreccionales surgieron de una raíz común, la injusticia, y se preocuparon más por alcanzar el desarrollo social y económico que por definirse de acuerdo con cánones ideológicos. Con excepción del caso venezolano, los rebeldes o insurrectos esgrimieron a menudo el argumento liberal de la opresión que significaba para la sociedad tener un gobierno de origen espurio, tiránico. La intolerancia interna, sumada al contexto internacional de la Guerra Fría, indujo a los analistas de los movimientos insurreccionales a privilegiar los puntos de coincidencia de éstos con el socialismo y, en consecuencia, a velar los referentes al ideario democrático.

La revolución nacional fue la que menos desarrollo teórico tuvo puesto que no era del interés de los intelectuales metropolitanos. Algunas veces se la hizo coincidir con la revolución colonial de la que hablaban ciertos textos marxistas, pero la diferencia radicaba en que la revolución nacional perseguía un desarrollo que no coincidía con la experiencia de los países que arribaron tempranamente a la industrialización.

La revolución nacional tenía como objetivo principal recuperar las riquezas básicas en poder del capital extranjero. Las cuestiones ideológicas de hipotética validez universal fueron desestimadas en función de los intereses locales. Por tal razón el liberalismo y el socialismo fueron refractarios al fenómeno nacionalista, al que acusaron de retrógrado, populista, etcétera. Una revisión de la historiografía internacional sobre los procesos nacionalistas registrados en América latina, entre ellos la revolución cubana, revela que, sin excepción, fueron calificados de populistas. ¿Sin proletariado, qué otro componente de la sociedad, sino el *popular*, el pueblo, pudo ser convocado para el cambio revolucionario?

Si el interés de los estadounidenses se centró en la lucha contra el comunismo, el de los grupos políticos circuncaribeños se orientó a la democracia y el desarrollo. La conjunción de ambos propósitos provocó un fenómeno que necesariamente representó un desafío para los intereses tradicionales.

Un tercera alternativa para ese tránsito estaba representada por los movimientos de liberación nacional que consideraban la inde-

pendencia política y económica de las naciones el primer paso con el fin de lograr el desarrollo. Los movimientos de liberación nacional aglutinaron distintas ideologías y grupos políticos siempre que unas y otros coincidieran en juzgar irrelevantes los antagonismos internos si de la independencia nacional se trataba. La lucha por la soberanía nacional predominaba sobre la que se libraba por alcanzar libertades políticas y, en consecuencia la solución del problema de la democracia se proyectaba en un horizonte futuro, nunca en el presente.

La historiografía que estudia las insurrecciones en la región circuncaribeña no ha ahondado de manera sistemática en el triple tránsito señalado: liberal, socialista y nacionalista. Por el contrario, dedicó más atención a la lucha que libraban las dos potencias entre sí. Ignoró siempre las motivaciones nacionalistas, por considerarlas irrelevantes para la pugna mundial entre los dos sistemas económicos y políticos que perseguían el dominio mundial. Amén de la obvia motivación política derivada de los cuantiosos intereses en juego, también es fácil advertir el desdén que manifestaban las grandes potencias por los pequeños países, sobre todo cuando se trataba de aquellos que fueron la cuna del subdesarrollo.

La perspectiva ya oriental, ya occidental que se reflejó en la historiografía especializada, en última instancia, consideró impracticable una lucha nacional y la colocó al margen del verdadero combate. Estados Unidos, como se comentará en el siguiente apartado, veía en estas luchas un disfraz ideado para engañar a las mentes cándidas que, si bien rechazaban al comunismo, se dejaban seducir en cambio por el nacionalismo, el cual sólo era una etapa que desembocaría en el socialismo. Por su parte, la Unión Soviética consideraba los movimientos que pugnaban por la recuperación de las riquezas básicas y que convocaban a una alianza nacional con la burguesía y las fuerzas progresistas un ardid para desviar o frenar las demandas de un verdadero socialismo, así fuese éste estatizante y monopartidista.

El nacionalismo y el reformismo, en consecuencia, fueron términos que adquirieron una connotación peyorativa y se emplearon para definir movimientos que proponían mecanismos demo-

cráticos para establecer la rectoría económica del Estado, rechazaban al capitalismo en su noción clásica liberal de economía de mercado y, sin embargo, no pretendían un socialismo radical, estatizante y autoritario.

La actitud de los insurrectos pone de relieve la notable contradicción que se hacía evidente cuando se partía del supuesto de que la democracia ya era un sistema en operación y no un objetivo por cumplir. Los análisis que presuponían la democracia partían de la falsa identidad entre propósito y práctica cotidiana. Desde la perspectiva contraria, la insurreccional, los procesos armados se consideraban intentos de dar un salto hacia adelante, motivados por el impulso de quemar etapas, de reducir distancia con los países que marchaban adelante.

En la segunda mitad del siglo xx, las nociones de desarrollo y de revolución evolucionaron en forma paralela. Si bien en el ámbito internacional se registró una feroz competencia entre capitalismo y comunismo, en la región circuncaribeña el problema se planteó en términos de desarrollo y subdesarrollo. Se consideró a la revolución un instrumento para eliminar las causas estructurales del atraso, no un recurso para destruir al capitalismo.

La identificación entre revolución y socialismo corrió a cargo de los teóricos del Departamento de Estado. Éstos atribuyeron, por ejemplo, a los demócratas guatemaltecos ocultas intenciones socialistas. En el caso cubano ocurrió el fenómeno que los psicoanalistas definen como la profecía que se cumple; es decir, tanto lo anunció el Departamento de Estado, que la dirigencia castrista vio en ello la única posibilidad de no ser aniquilada. En ambos casos, la revolución liberal, democrática, viejo anhelo decimonónico, perdió en forma repentina sus raíces locales y se injertó en la experiencia bolchevique. Por necesidades de la lucha global entre las superpotencias, la historia regional se re-escribió. Como en moderno palimpsesto, la historia apenas puede reconocerse; se resucitó el cadáver de la III Internacional y los pacíficos e inocuos Partidos Comunistas se presentaron como verdaderas organizaciones leninistas con increíbles y poderosas capacidades conspirativas.

La vieja idea de revolución, estrechamente relacionada con la perspectiva liberal de romper con la sociedad colonial, o con la visión positivista de poner fin a la anarquía, quedó arrumbada en los archivos. De un solo golpe el Circuncaribe se incorporó al escenario internacional y ya únicamente muy pocos movimientos insurreccionales fueron capaces de ubicar su lucha en el contexto definido por sí mismos.

La revolución dejó de entenderse como respuesta directa a los urgentes cambios requeridos por la sociedad para eliminar los obstáculos que le impedían cambiar sus arcaicas estructuras agrícolas, patrimoniales, clientelistas, etcétera, y, con ello, lograr su anhelo de transformarse en sociedades industriales, democráticas, modernas.

A mediados de siglo, en los países al borde del Caribe, los movimientos insurreccionales surgieron en el contexto de la búsqueda de desarrollo. Operaron como aceleradores, acicates para alcanzar a las sociedades que marchaban a la delantera. No obedecían tanto a un deseo de cambio en sí mismo o de cambio para beneficio de un grupo en particular, sino a un afán de cambio efectivo que permitiera a la sociedad entera, al país, alcanzar el mismo nivel y el mismo ritmo de avance de los países industriales. Era la nación, en su conjunto, lo que estaba en juego, y no sólo algunas de sus partes.

La pregunta planteada a fines de la década de los cincuenta sobre cómo llegar lo más rápidamente posible al desarrollo perdió sentido, porque en el nuevo contexto revolución pasó a significar alianza con la Unión Soviética y enemistad con Estados Unidos.

La vieja aspiración de alcanzar el desarrollo, para desde éste acceder a la democracia, perdió su razón de ser. Los enemigos de la democracia en los años cuarenta y cincuenta, identificados con la resistencia al cambio, fueron revalorados una vez más por el gobierno estadounidense. En las nuevas circunstancias, los defensores del *statu quo* encontraron en las tesis de la Guerra Fría un eficaz recurso para identificar las demandas de cambio con el comunismo. Asimismo, la doctrina de la Guerra Fría, en forma paradójica, les dio la oportunidad de aparecer como garantes de

la democracia, forma de gobierno a la que, por cierto, no habían mostrado proclividad alguna.

Los procesos insurreccionales a partir de ese momento se ponderaron fundamentalmente de dos maneras. La primera los justificó por ser una respuesta a la ceguera, a la carencia de perspectiva histórica de ciertos sectores sociales que habían estado presentes en forma continua desde el siglo XIX, anárquico, hasta distintos momentos del siglo XX, sectores que se negaron a adoptar formas modernas de convivencia con el pretexto de que la sociedad era inmadura. Los agentes de cambio veían, por el contrario, en la urgente solución de sus problemas, el rezago frente a las naciones industrializadas, la falta de democracia, etcétera, razones para imponer profundas y drásticas medidas de cambio.

La actitud de ruptura y rechazo respecto a los mecanismos institucionales que sólo funcionaban formalmente, se presentó de nuevo a partir del medio siglo, como parte de la “naturaleza” de los pueblos circuncaribeños. Esta actitud se atribuyó a distintas causas, pero ninguna de ellas se vinculaba con la ausencia de mecanismos democráticos reales. Se mencionaron, por ejemplo, estereotipos étnicos como el de la conocida vocación hispánica a la anarquía, la mansedumbre constante de la población indígena y la tradicional rebeldía de los negros. Asimismo, se evocó la tradición colonial, para referirse en forma elíptica a la ignorancia, reacia a la igualdad y celosa de los privilegios, e incluso se señaló la perniciosa influencia de las ideologías totalitarias del corporativismo populista, del fascismo y, sobre todo, del comunismo.

En teoría, la revolución a la que aspiraban los distintos grupos insurreccionales significó no sólo una ampliación en el espectro de quienes participaban activamente en el proceso de dirigir la sociedad, sino también una práctica política que permitió a los individuos hacerse conscientes de su poder y les procuró instrumentos para conservarlo. El hecho de que a lo largo del siglo XX los procesos revolucionarios sólo hayan surgido en sociedades atrasadas que querían superar un estadio histórico arcaico no permitió constatar la supuesta ampliación en la toma de decisiones políticas, puesto que las insurrecciones fueron más el instrumen-

to de que se valieron las sociedades para romper su dependencia con el antiguo régimen, que el vehículo de participación popular efectiva.

La insurrección, así entendida, representó el tránsito del atraso a la modernidad. Este paso, a mediados de siglo, se consideraba liberal democrático, y no se advertían todavía propuestas para un salto al socialismo. No será sino hasta la conversión al socialismo de la liberal revolución cubana cuando liberales y socialistas polemizaron sobre el tránsito verdadero para lograr el desarrollo. Los representantes del liberalismo y del socialismo realizaron notables esfuerzos para desvirtuar las posturas de sus oponentes. Los representantes del socialismo, por su parte, declararon reaccionaria la alternativa liberal, mientras los liberales, por la suya, declararon perversa y equivocada la teoría socialista.

En esta polémica, las viejas tiranías se fueron quedando aisladas puesto que, ante el desafío representado por la izquierda insurreccional, los grupos que no participaban de esa ideología, se vieron en la necesidad de promover, a su vez, una alternativa al viejo estilo, tiránico, de gobernar.

En el difícil paso del rechazo y destrucción del viejo mundo al anhelo de construir uno nuevo intervinieron fuerzas en favor y en contra. El antiguo orden, identificado con la tradición y el inmovilismo, y opuesto al progreso, contra lo que supusieron los partidarios de éste, no se desvaneció en el aire con un suspiro final de las fuerzas derrotadas; por el contrario, mostró redoblado vigor para conservar sus rasgos principales y hacerlos valer. Asimismo, probó tener gran capacidad de adaptación, de organización y de liderazgo. Abandonó rancias doctrinas y propuso, a su vez, un modelo de cambio social.

Si en el terreno del sentimiento y la cultura la tradición tenía un signo positivo, en el de la acción política la nostalgia se abandonó por considerarla un obstáculo para activar el resorte que, con vigoroso impulso, desataría la acción de quienes, con una postura liberal o demócrata-cristiana, también aspiraban a controlar el poder. Se produjo así un fenómeno inédito, en el que Estados Unidos se encontró súbitamente como el único sostén de

gobiernos sin apoyo popular alguno e incapaces de legitimar sus prácticas antidemocráticas.

En el terreno de las ideologías, conservadores, neoconservadores, liberales, demócrata-cristianos y socialistas coincidieron en la necesidad de cambios. La orientación de éstos y el agente responsable de dirigirlos fueron los puntos debatidos en un periodo que la historiografía caracteriza como la pugna entre reformismo y revolución.

La idea del cambio revolucionario como la vía rápida y, por ello, deseable, puesto que el atraso era un estímulo, fue constante en la vida política latinoamericana. Tuvo como adversario al reformismo, que tenía la misma percepción del atraso, pero sugería otro procedimiento para superarlo. En ningún caso, como en el de Venezuela, se manifestaron con tanta claridad las contradicciones entre los proyectos reformistas y los revolucionarios, así como también los agudos conflictos surgidos en el seno de la izquierda misma.

Durante muchos años y en múltiples estudios se hizo notar con insistencia la uniformidad del movimiento comunista internacional. Este dogma convenía tanto a los propios inspiradores de dicho movimiento como a sus detractores. A los primeros, el dogma del monolitismo les sirvió para impedir fracturas en lo interno y así poder ofrecer al enemigo la imagen de un adversario formidable. A los segundos les brindó la oportunidad de mostrar a sus electores que el combate por la hegemonía del mundo estaba en desarrollo y que, en consecuencia, se debían reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, pese a la retórica de la Guerra Fría, quedó claro que los movimientos comunistas y los insurreccionales siguieron, la mayoría de las veces, caminos divergentes que se ventilaban en el Partido Comunista cuando se polemizó sobre las vías parlamentaria y revolucionaria para alcanzar el poder. Venezuela fue el único país donde el Partido Comunista había mostrado sistemáticamente su vocación insurreccional, y no por ello ahí la decisión de tomar las armas fue unánime.

La disyuntiva del desarrollo: capitalismo o socialismo

El tercer tipo de problemas y, de hecho, el que más confusiones causó en la historiografía de los procesos insurreccionales se vincula con la ortodoxia de los cánones de la Guerra Fría y la reiterativa propaganda que la caracterizó. Según la historiografía del periodo, dicho conflicto significó un cambio radical en la forma de entender y conducir las relaciones internacionales. Por vez primera en el mundo moderno y contemporáneo, las potencias europeas dejaron de establecer las reglas para el orbe entero y fueron obligadas a ceder su posición a dos potencias emergentes: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La lucha entre ambas por alcanzar la hegemonía mundial ocasionó un reacomodo internacional en el que inclusive a viejas potencias, como Inglaterra y Francia, les tocó desempeñar por fuerza una función de comparsas. A los países coloniales se les permitió alcanzar su independencia nacional y por ello los países dependientes, como los del área circuncaribeña, consideraron llegado el momento de alcanzar su plena soberanía.

El maniqueísmo de la Guerra Fría, si bien permitió el surgimiento de naciones independientes separadas de los viejos imperios inglés y francés, impidió, en cambio, que el estatuto de la dependencia centroamericana y caribeña se modificara. En otras palabras, las transformaciones se produjeron en las zonas de influencia de los viejos imperios, pero no así en la de Estados Unidos. La visión esquemática y simplista de la Guerra Fría, su supuesto de que toda la humanidad estaba enfrentada al dilema del capitalismo o del socialismo, de que sólo había amigos y enemigos, cubrió con una espesa capa ideológica todos los procesos insurreccionales de la región. Éstos se alinearon en forma arbitraria de acuerdo con la voluntad de los contendientes estadounidenses y soviéticos.

Según los supuestos de la Guerra Fría, dos fuerzas colosales se enfrentaban en una lucha para decidir el destino de la humanidad entera y en esa pugna definitiva nadie podía quedar al margen. Las políticas de eliminación, y no las de incorporación del opo-

nente, fueron privilegiadas. En este escenario internacional donde dominaban los conceptos de lucha, de enfrentamiento, de agresores y agredidos, a los grupos insurreccionales que atribuían mayor importancia a los aspectos locales, nacionales, y que pretendían situarse en posición equidistante de los dos vigorosos rivales, no les era permitido moverse a voluntad. Lo que esas fuerzas políticas propusieran era visto como una máscara que no engañaba a nadie, puesto que los poderosos sabían que la lucha no admitía partes neutrales.

Muchos de los actores políticos circuncaribeños que demandaban la democratización de sus gobiernos se encontraron en medio de una lucha que ni les interesaba ni entendían. Sus inquietudes eran otras, así como otro era el horizonte en que podían hallar respuesta. La solución de sus demandas básicas no tenía por qué formar parte de un equilibrio internacional basado en la fuerza y en el terror nuclear.

En la perspectiva impuesta a partir de la Guerra Fría, se advirtió que el liberalismo estadounidense y el marxismo soviético declararon en forma conjunta que la era de las revoluciones nacionales, locales, había terminado con la Segunda Guerra y que, a partir de ésta, en el escenario mundial sólo actuaban como protagonistas los líderes mundiales del capitalismo y el socialismo.

Durante la Guerra Fría, los movimientos nacionalistas, reformistas e insurreccionales todos, sin excepción, fueron vistos a través del prisma del enfrentamiento entre las dos potencias. La voz propia, nacional, de cada uno de estos movimientos se silenció en forma paulatina. El mecanismo empleado para ello fue el de rechazar e invalidar todo discurso que no se hiciera eco de las tesis dominantes de rivalidad mundial. Cualquier posible diálogo con las enemistadas potencias tenía que establecerse en los términos por ellas dispuestos; los argumentos que no correspondieran a los intereses por ellas establecidos eran considerados sin sentidos.

Las luchas nacionales, explicadas en sus propios términos, fueron sistemáticamente negadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética, con lo cual se creó una confusión generaliza-

da en la historiografía del área, pues explica las acciones insurreccionales en función de los intereses de los observadores y no de los actores.

La visión estadounidense de la época se caracterizó, por otra parte, por la extraña manera de entender la sociedad tradicional que tenían ciertos sectores modernos. Según éstos desconocía las virtudes de la democracia, pues dominaba en ella la admiración por la figura del hombre y no el respeto por las instituciones. En consecuencia, era necesaria, para salvar las instituciones del orden, la labor del gendarme, del hombre fuerte que salva la circunstancia. En tal perspectiva, se reitera, la culpa de que faltara democracia se atribuía a quienes luchaban por establecerla y, en cambio, el autoritarismo baluarte del *statu quo* se ostentaba como defensor de los principios liberales.

En esta etapa, la visión y la práctica revolucionarias de los marxistas de la región era, por decir lo menos, reducida. Entre los rigurosos límites establecidos, por una parte, por las leyes anti-comunistas de Defensa de la Democracia y de Disolución Social y, por la otra, por la ortodoxia stalinista, no podían hacer otra cosa que confiar en la verdad de su doctrina y en que, algún día, la Unión Soviética, por fin, alcanzaría a Estados Unidos y demostraría con ello la superioridad de la causa socialista.

En el contexto de la Guerra Fría y su feroz anticomunismo, las demandas de desarrollo se interpretaron permanentemente como un hábil disfraz empleado por el comunismo para subvertir el orden en el hemisferio americano. Las fórmulas democráticas o, mejor dicho, las que perseguían la transición a la democracia y sus propuestas de modificación institucional se vieron como mecanismos que poco podían aportar a la solución de los graves problemas de rezago histórico y de distribución de la riqueza imperantes a lo largo y ancho del escenario circuncaribeño.

El celo que debieron mostrar los ideólogos de los movimientos insurreccionales para deslindarse de las ideologías en turno constituyó una parte importante de su trabajo. De no hacerlo así, las leyes inflexibles de la Guerra Fría los hubieran arrastrado a una lógica que reducía su acción y propósitos a mero papel de peones,

de jóvenes despistados, de reliquias románticas y soñadoras que habían perdido el paso de los tiempos.

Liberalismo y socialismo: transición o ruptura

El cuarto tipo de problemas se refiere al inexplicado proceso de continuidad o de ruptura registrado entre los principios liberales que ofrecían garantías al individuo y los ideales socialistas que las reservaban a la sociedad entera. Para la historiografía dedicada al desarrollo político de la región, las posiciones enfrentadas se explicaron en función de posturas antagónicas, de contradicciones surgidas entre los principios teóricos de las diversas corrientes. Sin embargo, se dejó de lado el conocido hecho de que los protagonistas de los movimientos insurreccionales tuvieron un credo liberal que posteriormente rechazaron. El paso de un interés por las libertades políticas para el individuo a una preocupación por la justicia económica para la sociedad no fue abordado por los estudiosos de la insurrección. Más interesados por señalar la aparición del socialismo que por estudiar las posibilidades de desarrollo que todavía ofrecía el liberalismo, evitaron cuidadosamente referirse al cambio ideológico experimentado por los protagonistas de la insurrección.

La primera valoración de los movimientos insurgentes corresponde al liberalismo, que veía en ellos un propósito legitimista de establecer un sistema democrático donde se garantizaran los derechos políticos de los individuos. Lo que la violencia perseguía en el primer caso, legitimista, era el restablecimiento del equilibrio democrático roto por el gobernante opresor. La insurrección se dirigía contra éste, no contra el pacto que a todos brindaba garantías para disfrutar una vida con paz y seguridad.

En la década de los sesenta, al amparo de las tesis propuestas por la declarada revolución socialista cubana, en abril de 1961, la noción liberal sufrió un cambio radical. Ahora ésta perseguía la transformación radical de la sociedad liberal, incluida la teoría

política que le daba sustento. La revolución en ese momento tenía como fin destruir el pacto social liberal y crear uno nuevo.

La falsa creencia de que todos los movimientos insurreccionales persiguieron desde su momento inicial la revolución socialista, es decir, la creación de nuevas estructuras políticas y sociales, mediante un proceso radical y violento, no se sostiene cuando se estudian las múltiples evidencias de que aquéllos entendieron fundamentalmente por revolución el reestablecimiento de derechos considerados naturales, es decir, liberales, tal como se puede comprobar en los textos conocidos como *La historia me absolverá*, de Fidel Castro, y *Declaración de la Selva Lacandona*, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los movimientos insurreccionales fueron la evidencia de que el sistema contra el que se rebelaron no reunía características propias de la democracia. Democracia formal, democracia bárbara, transición a la democracia, democracia balbuceante, etcétera, pero nunca democracia. Ésta fue, en el área circuncaribeña, un ideal que, según los gobiernos, ya se había alcanzado y sólo le faltaban detalles para ponerla en pleno funcionamiento. Según los insurrectos, el sistema político imperante era una burla, un remedo, creado para obstaculizar el desenvolvimiento de la democracia y que la falta de ésta, el desprecio por el voto mayoritario había sido un juego de elites que recurrían al fácil expediente de las ideologías exóticas para tender un velo sobre la desigualdad social. Ello explicaba, según los insurrectos, la permanente inestabilidad característica de las sociedades de la región. En éstas eran las minorías las que habían establecido las reglas del gobierno.

El uso del mismo concepto, revolución, sirvió para definir, antes de la así llamada Guerra Fría y durante ella, dos concepciones distintas sobre cómo una sociedad atrasada podía arribar a la modernidad. La primera, liberal, ponía el acento en la democracia. La segunda, socialista, subrayaba el desarrollo. En ambas, la misma acción insurreccional revolucionaria tenía, según se la defina liberal o socialista, dos significados. Para quienes profesaban el credo liberal, la insurrección revolucionaria tenía como propósito principal la organización interna de la sociedad. Para quienes, por el

contrario, profesaban el socialismo, la insurrección trastocaba tanto la organización nacional, como la internacional.

En la historia contemporánea de la región una disyuntiva permanente de muchas de las sociedades que la componen ha sido el tránsito del camino que separa la servidumbre de la dignidad. Esta vía ha estado llena de obstáculos difíciles de remover, de intereses creados, de resistencia al cambio, de inmovilismo político en amplios sectores de la sociedad, de temores a acciones represivas de los gobernantes, de vestigios de prácticas políticas ancestrales. Cada uno de estos escollos ha sido difícil de evitar, y superarlos a todos ellos en conjunto ha representado una tarea colosal que sólo unos pocos visionarios animados ya por el ideario liberal, ya por el socialista, fueron capaces de emprender.

*La misión de las vanguardias democráticas:
¿la insurrección es el primer paso de la democracia?*

El quinto tipo de problemas se vincula con la contradicción surgida cuando un pequeño grupo o un reducido número de grupos realiza sus acciones armadas apelando en todo momento al pueblo. Los movimientos insurreccionales se componían, en lo sustantivo, por una vanguardia que hablaba y luchaba en nombre del pueblo —al que afirmaba representar— y que orientó el combate contra su propio Estado, en particular contra sus fuerzas armadas, fuesen éstas ejército, guardia nacional o policía. El combate, en ocasiones, fue resultado de una decisión madura en que se ponderaron distintas alternativas, pero también obedeció a reacciones espontáneas, sin control jerárquico, tal como sucedió con numerosos grupos en Nicaragua.

La constante mención en la historiografía latinoamericana contemporánea de fenómenos políticos caracterizados como revueltas, revoluciones, insurrecciones, y —más tradicionalmente aun— como motines, asonadas y sediciones al igual que como acciones de alta especialización militar como golpes de Estado, instauraciones de juntas militares, cuartelazos, pronunciamien-

tos, etcétera, se refiere a momentos políticos de ruptura, de violencia, de antiinstitucionalidad. Es fácil advertir en ellos la voluntad de rechazar, por una parte, formas de convivencia democrática y, por la otra, la autoasignación de roles de liberación que, bajo la guía de una vanguardia, sustituyen la soberanía popular o la más modesta de opinión pública.

La abundancia de acontecimientos en que la violencia política estuvo presente en el área circuncaribeña permitió observar la distancia entre esta situación y la de los modernos estados constitucionales donde las decisiones se toman de acuerdo con la voluntad mayoritaria. Si las decisiones no se tomaban conforme al principio de mayoría, y las asumía la minoría que detentaba el poder o la propiedad —o ambos a la vez—, la oposición sólo cumplía una función ritual que, en los hechos, servía para justificar a tal sistema. Cuando así ocurrió, el problema que se planteó fue el del tránsito de un gobierno autoritario a uno democrático. ¿Cómo se produjo este cambio? ¿Quién lo promovió? ¿De qué forma? ¿Cómo se sustituyó la voluntad mayoritaria? ¿Qué argumentos sirvieron para rechazarla?

Hubo argumentos históricos y razones teóricas que se usaron para intentar justificar la ausencia de democracia. Entre los históricos estaban los derivados del pensamiento ilustrado para el cual la razón, la mayoría de edad, característica de la modernidad, no era un atributo del pueblo circuncaribeño y, en cambio, sí de quienes aspiraban a gobernarlo. Las masas debían ser tuteladas permanentemente por los dirigentes, quienes las conducirían por sendero seguro hasta su madurez.

El pensamiento liberal, originalmente, parte del supuesto de la igualdad natural de los hombres. El pueblo, de acuerdo con esa doctrina, se compone de hombres libres e iguales en derecho. Por este principio, en consecuencia, no necesitan ninguna otra guía que la de su libre albedrío, políticamente expresado a través del voto. ¿Por qué, entonces, los liberales no promovieron el principio de la mayoría para decidir las cuestiones de gobierno? La explicación, histórica, era que el pueblo, por haber sido sojuzgado durante siglos por la corona española, no podía, en forma re-

entina, ejercitar su derecho. Por tal razón, las vanguardias liberales, ya no ilustradas, debían seguirse sacrificando por ese sempiterno menor de edad encarnado en el pueblo.

Ese argumento explica —cuando del análisis sobre la falta de democracia en la región se trata— que se abandonen las nociones de individuo, de mayoría y de minoría, y que se las sustituya por las de vanguardia y pueblo. La lucha política en los procesos insurreccionales se expresó en términos vanguardias, no de voluntad mayoritaria.

El accionar de las vanguardias armadas, liberales y socialistas fue, en el Circuncaribe, una constante explicada en función de la carencia de los elementos propios de la vida democrática, como la participación popular y la vigencia de un estado de derecho. La ausencia de estos factores, en opinión de las vanguardias, hizo necesaria su participación para que la sociedad tomara, o no perdiera, el rumbo que ellas consideraban adecuado para toda la población.

La tajante división política establecida por las vanguardias foquistas se definió en función de saberes y, en consecuencia, de ignorancias. La desigualdad no se justificó por las vanguardias políticas contemporáneas ni por el nacimiento ni por la propiedad. Éstos eran argumentos de oligarquías trasnochadas, nostálgicas de un pasado ilustrado, preliberal. Por el contrario, las vanguardias contemporáneas, fuertemente ideologizadas, con saberes técnicos de alta especialización adquiridos en universidades del extranjero, pusieron el acento en credos igualitarios y democráticos, de corte liberal o social, cuyas profecías se cumplirían no por la acción del conjunto ignorante de la sociedad, sino por la parte sapiente, pensante, de la misma.

Los conflictos de las vanguardias, de las elites, en los últimos cincuenta años, se resolvieron frecuentemente mediante la violencia. Aunque para justificar sus acciones invocaron al pueblo, éste se mantuvo por lo general al margen. Así se explica el reducido número de bajas en una región donde durante tantos años se combatió y que tan frecuentemente convocó a la violencia. Los casos de Colombia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde

sí participaron en el conflicto amplios sectores, sirve como prueba para demostrar que las vanguardias, cuando sólo combaten entre sí, son en extremo cautelosas.

Las continuas rupturas de la marcha institucional promovidas en los últimos cincuenta años se debieron, en lo fundamental, a la acción de izquierdas y derechas y a la opinión que ambas tenían de la sociedad donde se desenvolvían. Unas y otras demostraron desconfianza en los canales institucionales y hallaron en la fuerza el mejor recurso para dirimir cualquier conflicto político. Esta actitud puso en evidencia la opinión de quienes ejercían el liderazgo tanto en la izquierda como en la derecha. Fueron los dirigentes políticos quienes mostraron la inmadurez que atribuían al pueblo en su conjunto.

Victoria sin héroes: negociación y transición democrática

El sexto grupo de problemas se centra en el desenlace de los conflictos armados por la vía de la negociación. Ésta significó que el fin del conflicto sólo podía alcanzarse si se aceptaba que la paz requería que no hubiese vencedores ni vencidos.

Las negociaciones requirieron un balance, no excluyente, del largo y sostenido esfuerzo realizado por todas las fuerzas políticas para crear las condiciones que posibilitaron la democracia y, con ello, la necesidad de explorar vías alternativas a la de las armas. El balance también incluyó los altos costos sociales que involucró una guerra sin fin. Los movimientos insurreccionales no lograron el triunfo total, como tampoco lo obtuvieron las fuerzas políticas que se les opusieron. Los primeros lograron el control de amplios territorios rurales como ocurrió en El Salvador y sucede actualmente en Colombia; los segundos siguieron dominando los principales espacios urbanos, produciéndose así condiciones para que el conflicto se perpetuase.

El control de distintos espacios y de distintos sectores económicos que cada parte del conflicto había alcanzado logró una especie de empate cuya salida no podía ser militar y sí política. Los

nostálgicos de la Guerra Fría pretendían perseverar hasta aniquilar al enemigo, pero las fuerzas emergentes comprendieron que las sociedades, al democratizarse, crean nuevos espacios para la participación política en que las armas ya no pueden seguir decidiendo la suerte de todos.

La negociación, al no tener el *glamour* ni el aura romántica que rodea a quienes con un gesto heroico desafían a la muerte, no ha recibido la atención que merece. La responsabilidad, el compromiso y la exigencia de someter a quienes no piensen en términos de negociación implican un gran desgaste, porque los negociadores pueden ser vistos ya como cobardes, ya como débiles, ya como oportunistas que han abandonado la pureza ideológica, sin olvidar el considerable riesgo de que cualquier error cometido al pactar puede significar la entrega de los combatientes. Sin embargo, los casos de El Salvador, Guatemala y México ilustran cuál es el futuro de los movimientos insurreccionales: la negociación está en el horizonte y desde esta perspectiva se toman acuerdos.

¿Todo fue inútil? ¿La sangre derramada fue otro absurdo más? ¿Los hombres que en el Circuncaribe lucharon serán, tal vez, recordados como románticos sociales, pero políticamente inmaduros? No es de creerse. Su aporte al establecimiento de la democracia es fundamental. Ellos y no otros son quienes ejercieron el derecho a la rebelión. Ellos y no otros son los que reclamaron los derechos de los hombres a una vida digna, una vida justa, una vida sin explotación. Ellos, los insurrectos, mostraron que la generosidad no es patrimonio de ninguna ideología, de ningún credo, de ninguna clase social.

LA LEGIÓN DEL CARIBE. LA INSURRECCIÓN DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (1940-1954)

Enrique Camacho Navarro

I. Explicación introductoria

La historia de América latina registra en la revolución cubana un acontecimiento de insospechada resonancia. El triunfo logrado el 1° de enero de 1959 por las fuerzas comandadas por Fidel Castro, así como su entrada victoriosa escenificada pocos días después en La Habana, provocaron un vertiginoso periodo de transformación dentro del ámbito político latinoamericano. De allí en adelante toda experiencia política insurreccional encontraría una referencia en el caso cubano, toda actividad revolucionaria sería vinculada con el castrismo y todo interés de los sectores progresistas del continente por materializar sus ideales de cambio buscaría apegarse a la táctica foquista empleada por el movimiento triunfante. Analizar causas, características y proyecciones de la revolución en Cuba constituyó una necesidad y determinó ciertas líneas de estudio.

Ese comportamiento llevó a considerar lógica la pretensión de llegar al poder político por el mismo camino que los insurgentes cubanos. Al saberse “punta de lanza” del movimiento revolucionario en América latina, la cúpula revolucionaria —en una actitud que mostraba su preocupación por justificar su nuevo papel en el plano internacional— principió la estructuración de una nueva historia que correspondiera a la época también nueva y que impulsara a un “hombre nuevo”. Del pasado sólo se quería man-

tener aquello que resultara útil para explicar el proceso de cambio, aquello que pudiera parecer su génesis y estímulo. Olvidar sería una tarea premeditada. Muchos de los elementos ausentes en la explicación revolucionaria han sido desechados por cierta historiografía latinoamericana más preocupada por responder a los lineamientos emanados desde la dirigencia cubana que por contribuir a la amplia explicación del suceso. Un buen número de pasajes históricos han sido omitidos a pesar de sus estrechos vínculos con el desarrollo político en la etapa previa al triunfo de la guerrilla cubana.

Luego de referir tal situación, y con un franco interés por brindar un antecedente explicativo de la lucha política anterior a 1959, en este texto se tratará en general el proceso insurreccional ocurrido durante las décadas de 1940 y 1950, y en particular el movimiento conocido como la Legión del Caribe, fenómeno que perdió relevancia a causa de la apabullante significación del triunfo castrista y que aquí se expondrá con los siguientes fines:

1. Brindar un panorama de la situación política regional, particularmente del Caribe.

2. Señalar que antes del triunfo de la guerrilla en Cuba se generó un movimiento político insurgente al que se ha brindado poca atención, pese a su significado como importante antecedente de la insurrección en la zona circuncaribeña.

3. Comprobar cómo la lucha armada, a la cual se identifica casi como resultado de la práctica guerrillera sostenida en la Sierra Maestra, se consideró necesaria aun muchos años antes del castrismo.

4. Mostrar que la lucha armada se inserta en proyectos políticos democráticos, es decir que no se contrapone a la democracia, sino que, por lo contrario, surge por la necesidad de defenderla.

II. Tiempo de dictaduras

Cuando se inicia el siglo XX, el conjunto de países latinoamericanos aspira en forma natural a encontrar en el liberalismo una po-

sibilidad de progreso. Esa creencia influyó en la decisión de apoyar a los inversionistas extranjeros interesados en rubros económicos que podrían brindarles jugosas ganancias.

Las condiciones creadas al imponerse los intereses norteamericanos en la región y al prosperar las oligarquías vinculadas con ellos condenaron a la extrema pobreza a los ciudadanos comunes que también esperaban, sin éxito, verse beneficiados con los frutos de las riquezas nacionales. Esto obligó a algunos sectores políticos identificados o comprometidos con las causas de las mayorías populares, a denunciar tal estado de cosas. Así, al final del primer cuarto del siglo, en la lucha contra el imperialismo destacaron la organización antiimperialista del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) y su Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el cubano Julio Antonio Mella en representación del comunismo en América latina y también, en cierto momento, por su espíritu de lucha, el nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934). De estos tres personajes, fue este último quien más sobresalió en la época y a quien vale la pena mencionar por su papel como insurrecto.

Con el interés de organizar una lucha antiimperialista que luego adquiriría dimensiones latinoamericanas, el general Augusto C. Sandino, miembro del Partido Liberal, organizó un movimiento para demostrar que los intereses nacionales podían prevalecer por encima de los foráneos. Se logró eliminar la presencia militar extranjera, aun cuando la experiencia, finalmente, también serviría a los intereses imperiales. La necesidad de formular una estrategia que permitiera mantener su hegemonía en la región, con una paralela garantía de su seguridad, los llevó a promover la formación de fuerzas “nacionales” que mostraran su lealtad al capital mediante una defensa incondicional del mismo. La formación de las “Guardias Nacionales” como instituciones armadas de los regímenes latinoamericanos permitió materializar ese mecanismo de representatividad, así como, consecuentemente, formar una clase de “lacayos” al servicio de los norteamericanos.

Además, para Estados Unidos fue importante la presencia de personajes adueñados del poder por vías caudillistas, autoritarias

y antidemocráticas, con quienes se podría garantizar la seguridad de los intereses norteamericanos. Entre los dictadores más destacados se podría mencionar a Manuel Cabrera Estrada y Jorge Ubico en Guatemala (en el poder de 1898 a 1920 y de 1931 a 1944, respectivamente), Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (gobernante de 1931 a 1944), Tiburcio Carías Andino en Honduras (presidente de 1933 a 1949), Anastasio Somoza García en Nicaragua (dueño del control del país de 1936 a 1956), y Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (mandatario de la nación de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952). Esta “negra” presencia impondría un clima de violencia aun en casos de regímenes “blandos”. La actitud represiva, los encarcelamientos masivos y la ruptura de los designios constitucionales, aunque se aparentara mantener la formalidad democrática, resultaron normales en la vida cotidiana de muchos países de América latina, pero particularmente en la zona bañada por el Caribe. El indiscriminado uso de la fuerza se convirtió en recurso constante de gobiernos que, por tal razón, eran señalados como duros o dictatoriales. A este factor de violencia debe añadirse simpatía profascista, desdén por la unión centroamericana y actitud entreguista respecto a los intereses extranjeros, factores todos que contribuyeron al descontento popular. No obstante, esos gobiernos seguían proclamándose legítimos, cuando era patente un profundo odio contra ellos.

Una de las características peculiares de este periodo de auge dictatorial es la crisis de la autoridad, reflejo del desequilibrio generalizado de las tareas estatales, económicas, educativas, políticas, etcétera. La falta de madurez dentro de los partidos políticos permitiría el surgimiento de poderes unipersonales, así como la falta de adecuación de los preceptos constitucionales a la realidad centroamericana y caribeña. El llamado “cesarismo democrático” entra en escena como única alternativa del desarrollo político y social de las sociedades donde los habitantes no alcanzan los beneficios del desarrollo nacional. A las masas populares se las consideraba inconscientes y por ello parecía necesario conducir las.

Pese a la justificación del “cesarismo”, la resistencia de grupos opositores no se hace esperar. En vista de que la lucha democráti-

ca por vías legales y pacíficas no permite alcanzar el poder y dar respuesta a las demandas, se considera forzosa la incorporación de nuevos caminos que posibiliten la caída de los considerados “tiranos” del área y, por consecuencia, la terminación del dominio imperialista.

Al principiar la década de 1940 la oposición a las dictaduras se hizo evidente. Las protestas de los habitantes de las zonas urbanas, tales como universitarios, profesionistas, comerciantes y funcionarios públicos, así como algunos militares progresistas, lograrían considerables avances para la mitad de los años cuarenta. A la cabeza de los grupos que empezaron a formular cuestionamientos contra los regímenes antidemocráticos, estuvieron algunos opositores políticos que debieron exiliarse para escapar de la persecución a que eran sometidos en sus respectivos países. Se trataba de miembros de las elites tradicionales, con alto nivel económico heredado de sus ascendientes oligárquicos, estudios en el extranjero y amplia cultura, que además figurarían como aspirantes natos a ocupar las cúpulas gubernamentales en sus naciones. México actuaba como un imán para ellos, ya que su diplomacia solidaria les resultaba favorecedora. Allí iniciarían sus planes de luchar contra las dictaduras de sus lugares de origen.

III. Brotes insurreccionales durante la década de 1940

La manifestación de una lucha en donde el argumento antidictatorial es básico dentro de la justificación discursiva hace necesario el tener que preguntarse a qué clase de dictadura se referían aquellos grupos que se le oponían, ya que si bien se trataba de gobiernos que mostraban una tendencia autoritaria, o bien poco apego a la constitucionalidad, así como desdén hacia las posibilidades del juego político democrático, no en todos los casos se podría hablar de regímenes que vivieran características estrictamente apegadas a un concepto predeterminado de dictadura. Si se pensara en la permanencia ilimitada y unipersonal en el po-

der,¹ basada en una actitud abiertamente represiva por parte de quien detenta la autoridad, como rasgo mínimo para definir dictadura, sin duda pueden calificarse así específicamente los gobiernos de Jorge Ubico, Anastasio Somoza García y Rafael Leónidas Trujillo. En otras situaciones, en general, se trata de administraciones civiles que, si bien han logrado su permanencia en el poder a través de “títeres”, de componendas y fraudes, logran darles tintes democráticos y de respeto a las instituciones políticas respectivas. En estos casos, el señalamiento de que sean gobiernos “autoritarios” o “tiránicos” responde a la necesidad de crear una denuncia común, que aglutine en una sola fuerza al mayor número de interesados en efectuar cambios en aquellos panoramas políticos en donde se encuentren obstáculos para la participación democrática. Debido a las experiencias fascistas registradas en Europa, en el ámbito latinoamericano se mostraba interés por caracterizar a los regímenes dictatoriales como totalitarios, ya que con ello se pretendía resaltar la necesidad de evitar la posible instauración del fascismo en el área.

Con el caso costarricense se puede ejemplificar la manifestación contraria a los regímenes considerados dictatoriales, aun sin apegarse a una definición certera. Además, ese mismo caso es importante como introducción al tema básico y puntual de las insurrecciones en el área. El 8 de julio de 1942 sería arrestado el costarricense José Figueres cuando emitía un discurso en contra del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. En cuestión de días se encontraría exiliado en México. Allí se relaciona con desterrados de otros países e inicia con ellos pláticas relacionadas con la idea de hacer caer a los dictadores de América Central y el Caribe.² Este caso, por citar un ejemplo, sería uno de los muchos que vivieron quienes no compartían las cuotas de poder político monopolizado en sus propios países.

¹ Esta afirmación concuerda con la idea de Alain Roquie, expresada en su artículo “Dictadores, militares y legitimidad en América Latina”, en Julio Labastida Martín del Campo [coord.], *Dictaduras y dictadores*, México, Siglo XXI, 1991, p. 10-26.

² Véase Stephen Earley, *Arms and Politics in Costa Rica and Nicaragua, 1948-1981*, Nuevo México, University of New Mexico, 1982 (Research Papers Series, 9), p. 4; Eugenio

El gobierno de Calderón Guardia, instalado en Costa Rica entre 1940 y 1944, deja el poder en manos de Teodoro Picado Michalski, incondicional del régimen que le precedió. Pese a la innegable actitud continuista, no se puede hablar de desconsideración tajante a la institución electoral; sin embargo, el señalamiento de régimen dictatorial aparece de manera constante en la historiografía de sus detractores. En tanto se definía al Estado autoritario como obstáculo democrático, era necesario imponer esa condición autoritarista al régimen en el poder.

De acuerdo con el importante trabajo de Charles Ameringer, un año antes, o sea en 1943, Figueres, quien se ubica como uno de los personajes más destacados de la oposición al régimen Calderón-Picado, tiene en México un encuentro importante con el nicaragüense Rosendo Argüello hijo, quien, por diferencias de su padre con Somoza García, tuvo que exiliarse en México. Argüello hijo y Figueres coincidían, por obvias razones, en el afán de terminar con la situación imperante en sus países. Figueres, quien denuncia que la “escenografía democrática” no correspondía a la realidad política de su nación, mostraría un abierto deseo de entrar en acción para derribar del poder a Calderón Guardia, al que consideraba “el más débil eslabón” de la cadena dictatorial del área.³ El 21 de mayo de 1944 Figueres regresa a Costa Rica,⁴ donde reanuda su trayectoria en la actividad política, dotada ahora de mayor fuerza debido a su destierro. Con él viaja Argüello, quien un año después regresa a México para continuar, mediante ayuda brindada por los exiliados nicaragüenses, con el plan de apoyo a una insurrección figuerista.

En el panorama regional, y precisamente en julio de 1944, se escenifica un importante suceso: la caída de Jorge Ubico y el ascenso de un poder revolucionario cívico-militar en Guatemala.

Rodríguez, *De Calderón a Figueres*, San José de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, 1981, p. 60; y Charles, Charles Ameringer, *The Democratic Left in Exile. The Antidictatorial Struggle in the Caribbean, 1945-1959*, Coral Gables, Florida, University of Miami Press, 1974.

³ Ameringer, *op. cit.*, p. 63.

⁴ Rodríguez, *op. cit.*, p. 106.

Con el fin del régimen de Ubico se da un paso importante en la lucha antidictatorial de América latina. Terminaban catorce años de control político de quien ofreció concesiones sumamente benéficas a la transnacional estadounidense United Fruit Co. se impuso un gobierno provisional deseoso de mantener intactas a muchas de las figuras políticas del ubiquismo y contrario a los ideales del cambio. Desde la Argentina, donde trabajaba —en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Plata—, el guatemalteco Juan José Arévalo exaltó la labor de los rebeldes ante las prácticas totalitarias y antidemocráticas, y a la vez denunció la traición maquinada contra el ambiente revolucionario gestado en su país. La presión contra el triunvirato gubernamental encabezado por el general Federico Ponce Vaides cosechó sus frutos al triunfar un levantamiento cívico-militar en octubre del mismo 1944.⁵ La formación, a partir del 20 de octubre, de una Junta Revolucionaria que garantizaría la realización de elecciones para acabar con aquella larga trayectoria de vida antidemocrática, inclinó a la historiografía dedicada a ese episodio de la vida en Guatemala a denominarlo *revolución*.

El hecho de que surgiera una rebelión cívico-militar que anunciara una etapa revolucionaria confirmaba la posibilidad de que la insurrección apoyara el cambio democrático.

El Partido de Renovación Nacional y el Frente Popular propusieron a Arévalo que fuera candidato presidencial cuando aún estaba en Argentina, luego de ocho años de exilio. Él aceptó y anunció una doctrina propia llamada *socialismo espiritualista*, cuya parte medular propugna una liberación moral y económica. Arévalo triunfó en las elecciones y asumió la presidencia el 15 de marzo de 1945.

El alza en los precios del café en el mercado internacional, constante hasta el término de la década de los cincuenta, fue otro

⁵ Sobre la campaña del 20 de octubre de 1944, véanse los trabajos de Juan José Arévalo, “Palabras leídas por radio para todo el país el 23 de octubre de 1944”, “20 de octubre de 1944”, “Navegar contra la corriente” y “Conservadores, liberales y socialistas”, en *Escritos políticos*, Guatemala, Tipografía Nacional, 1945, p. 123-149.

factor notable en los tiempos de cambio que se veían llegar. La estabilidad económica permitía pensar en solucionar problemas sociales que aquejaban a Centroamérica y el Caribe desde la época de la independencia. No obstante, debido a la inequitativa distribución de la riqueza y la despreocupación de la oligarquía ante los males de la sociedad, éstos perduraron, en particular los vinculados con alimentación, vivienda y salud, entre los inmediatos. Al surgir inquietudes por modificar las condiciones de vida de los sectores obreros y campesinos, las capas medias formadas por profesores, estudiantes, funcionarios, pequeños comerciantes y artesanos, se iniciaron tareas para echar a andar proyectos de reforma democrática.

Dentro del programa resultante, y aun cuando la referencia al “socialismo espiritual” indujera a asociarlo con una ideología socialista, los objetivos eran plenamente liberales. Entre ellos se distinguía la preocupación por un seguro social, el derecho a sindicalizarse, el seguimiento de un código de trabajo, el financiamiento para la producción, la reforma agraria y la diversificación de la economía, así como el apego a la constitución, el respeto al voto para garantizar una democracia representativa y una política nacionalista que, dentro del liberalismo, evitara la pérdida de soberanía, todas ellas prácticas ajenas a la dictadura en su etapa de auge.

Vale la pena abrir en este momento un paréntesis para reflexionar sobre la idea entonces predominante del término *revolución*. En la época, hablar de ella era referirse a una experiencia política donde la violencia se convertía en necesidad, debido a la rigidez con que habían actuado hasta entonces los gobiernos dictatoriales. Sin embargo, desde una perspectiva actual, el término posee una distinta connotación. Luis Villoro lo define como un concepto moderno que entra en crisis por la imprecisión de su manejo, lo que le hace perder su capacidad explicativa del fenómeno. Ante la disyuntiva de abandonar o reformular el concepto, Villoro propone lo segundo y lo define como un movimiento colectivo amplio, con una presencia de intereses de grupos o clases dominados, los cuales intentan la ruptura del orden social y jurídico esta-

blecido, mediante la racionalización de la actitud colectiva de renovación social —punto que marca una diferencia con movimientos que, pese a ser de otra naturaleza, podrían parecer revoluciones. La labor de la razón se distingue por introducir orden en el caos y establecer una homogeneidad en la diversidad.⁶

Como en los sucesos de Guatemala de entrada no se registra un movimiento colectivo amplio, se descarta que se trate de un proceso revolucionario, de acuerdo con la definición señalada arriba. La nula intervención de indígenas en la revuelta, cuando en la población de aquel país constituye un sector mayoritario, representa un argumento de peso en respaldo de tal calificación. Asimismo, había poca profundidad en el cambio propugnado, tal como lo demostraría el mantenimiento de un proyecto en lo económico apegado al liberalismo, como lo era la doctrina que había guiado al ubiquismo. Mientras mayor sea un proyecto de cambio, mayor será la posibilidad de participación colectiva. Sin embargo, para esos años, la experiencia se vuelve revolucionaria y se autoimpone como tal por la misma necesidad por la que se aplicaba el calificativo de dictatorial a casi todos los gobiernos de la zona caribeña. Es decir que considerar revolucionario al gobierno arealista, que terminaría su periodo en 1951 para dar paso a otro régimen (el de Juan Jacobo Arbenz) identificado con él, era importante ante la mirada internacional, especialmente para quienes se habían propuesto derrocar a todas las dictaduras del área.

Las situaciones de Venezuela y Cuba constituirían también otros importantes antecedentes de la lucha política. Serían dos casos ilustrativos más del perfil democrático anhelado en ese periodo.

En Venezuela, luego de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, prolongada de 1908 a 1935, y de un periodo militarista de diez años, llegó al poder en 1945 una Junta Revolucionaria de Gobierno, la cual permanecería provisionalmente hasta 1948, cuando dejó la presidencia a Rómulo Gallegos, quien a su vez

⁶ Conferencia presentada el día 22 de octubre de 1992 en la Facultad de Filosofía y Letras con el título "Sobre el significado de revolución", publicada en *Teoría*, México, año 1, núm. 1, UNAM, julio de 1993, p. 69-86.

sería derrocado el mismo año, en lo que abrió paso a una segunda etapa militar.

Durante este periodo (1945-1948), el partido de Acción Democrática (AD) alcanzó gran fuerza política al participar en un golpe militar que llevó a la presidencia a Rómulo Betancourt e impulsó una política nacionalista, democrática y social en donde el petróleo, principal fuente de ingresos y producto para el intercambio comercial con el extranjero, se mantuviera bajo el control de los venezolanos⁷ mediante una reforma fiscal que obligara a las empresas estadounidenses e inglesas a contribuir al fomento industrial, la creación de empresas de utilidad pública, el estímulo de la producción nacional y la satisfacción de necesidades sociales básicas, como la de vivienda.⁸

Para referirse al caso de Cuba pueden considerarse como antecedente los hechos del 12 de agosto de 1933, cuando cayó la dictadura que desde 1925 padeció el pueblo cubano a manos de Gerardo Machado (1871-1939). Luego entró en escena el sargento Fulgencio Batista (1901-1973), quien dominó la escena política e impuso su control a los gobiernos provisionales y de corta duración sucedidas entre 1933 y 1940, año en que fue designado presidente constitucional. Se inició con él un nuevo periodo notable por su brutalidad, pese a cierta historiografía que exalta su figura al máximo e incondicionalmente.⁹

A Batista le sucedería la presidencia civil de Ramón Grau San Martín, vencedor en las elecciones que, por presión del Departamento de Estado norteamericano, se celebraron en 1944. Grau San Martín consideró peligrosa la presencia de Batista en Cuba, por lo que lo obligó a dejar el país. Luego seguiría el periodo presidencial de Carlos Prío Socarrás (1948-1952), un antiguo

⁷ Véase el capítulo dos, “El preludio de la revolución, 1945-1948”, en Robert J. Alexander, *La revolución democrática de Venezuela* (trad. de Armando Arrangoiz), Medellín, Colombia, Albon-Interprint, 1967, p. 36-55.

⁸ Gobierno Revolucionario de Venezuela, *La revolución venezolana ante la opinión de América*, Caracas, Imprenta Nacional, 1946.

⁹ Véase Isa Caraballo, *Batista: una vida sin tregua*, 2a. ed., México, Iberoamericanas, 1945 (Hombres de América, 1).

ministro durante el régimen de Grau y miembro del Partido de la Revolución Cubana (PRC), también conocido como Partido Auténtico y dirigido por el propio Grau. Ambos gobiernos se distinguirían por su exaltación de la vida democrática. Su crítica hacia las actitudes dictatoriales también contribuyó a que, en su momento, se les distinguiera como baluartes de la democracia.

Estas tres experiencias, las de Guatemala, Venezuela y Cuba, tenían mucho en común, sobre todo en lo que respecta a la beligerancia contra los gobiernos antidemocráticos de la región. Durante una gira de Betancourt realizada en 1946 para corresponder a la invitación del gobierno mexicano, decidió visitar también Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia. De su estancia en Cuba y Guatemala, que serían los casos que por ahora interesa destacar, se pueden rescatar datos que revelan la profunda identificación entre Betancourt, Grau San Martín y Arévalo. La prensa cubana habló del encuentro de dos personajes que, más que como presidentes, se saludaron como amigos, y además reseñó que Betancourt condecoró personalmente, con el Cordón de la Orden del Libertador, a Prío Socarrás, entonces primer ministro de Gobernación.¹⁰

Durante la conferencia ante los periodistas cubanos, diría: “Nosotros nos sentimos medio cubanos, como los cubanos se sienten también medio venezolanos. Y es que estamos en estos tiempos hermanados por idénticos ideales de reivindicación democrática y de lucha por la consolidación de nuestras libertades.¹¹ Aunque pareciera contradictorio, campeaba un espíritu nacionalista que, al expresarse mediante hechos de alguna manera similares, tomaba fuerza en el plano internacionalista.

Cuando Betancourt llegó a Guatemala, el presidente Arévalo emitió un discurso, la noche del 26 de julio de 1946,¹² en el cual destacó que Venezuela y Guatemala “se han enlazado más aún en estos días por la modalidad social de las recientes revoluciones,

¹⁰ Gobierno Revolucionario de Venezuela, *op. cit.*, p. 12-13.

¹¹ *Ibid.*, p. 15.

¹² *Ibid.*, p. 79-85.

caracterizadas para ejemplo de los vecinos por una alianza de militares de nueva estirpe con las masas populares alzadas contra el vasallaje”; matizaba además que ambos países vivían los estragos dejados por amplios periodos dictatoriales.

Dentro de aquel mismo discurso, Arévalo centró su atención en la necesidad de luchar contra las dictaduras de América con una nueva actitud, sin complejos, sin temores, sin aceptar en silencio. *En lo que podría señalarse como primer antecedente latinoamericano de lo que luego se entendería en el ideal guevarista como “hombre nuevo”, el presidente guatemalteco dirigió la atención al desarrollo democrático por ser éste virtual garantía de la caída de las dictaduras.*

Así estamos nosotros —afirmaría Arévalo—, los hombres nuevos de América, enfrentados a la terrible consigna de nuestros países. Después de un siglo de dictaduras, muchas de militares pero quizás las peores de civiles, hay todavía gentes que creen que para gobernar se necesita ser déspota, tener instintos sanguinarios y ningún escrúpulo. Estamos tan habituados física, mental y moralmente a la rusticidad de los recursos dictatoriales, que los timoratos se asustan ante lo complejo de los problemas sociales y económicos en un Estado democrático de nuestro siglo. Estamos tan habituados al silencio de la opinión pública, a la inexistencia de partidos políticos, a la obediencia de los partidos legislativo y judicial, a la paz de los cementerios, a la anulación de todos los funcionarios en homenaje de un solo amo comprador de fincas y repartidor de injusticias, que las gentes habituadas a ese esquema totalitario ya no se orientan ni se entienden ni pueden dormir de sólo pensar que los militares, los estudiantes, los obreros, los agricultores, los economistas, los maestros compartan en su esfera propia las responsabilidades del gobierno.¹³

Referirse a los vínculos entre los tres personajes es fundamental para comprender los sucesos que se aproximaban en esas fechas; además, porque son algunos de los pocos datos que pueden reflejar su papel en intentos de organización insurreccional que

¹³ *Ibid.*, p. 81.

no podían aceptar abiertamente pues de lo contrario, por ocupar puestos públicos, podían ser acusados de incitar a la violencia.

Debido a la actuación autocrática de Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) en la República Dominicana, prolongada durante los periodos presidenciales de 1930-1938 y de 1942-1952, no se hizo esperar la aparición de opositores que pretendían derrocarlo a como diera lugar, incluso mediante la lucha armada si ésta era la única posibilidad. Podría considerarse al exilio dominicano como uno de los grupos más organizados dentro de la lucha contra la tiranía en América latina. Entre sus figuras relevantes se encontraban el escritor Juan Bosch, Ángel Morales, Miguel Ángel Ramírez Alcántara, quien mantenía vínculos muy estrechos con expatriados cubanos que, luego de recibir el apoyo para derrocar a Machado, querían ahora devolver la ayuda, y el general Juan Rodríguez García, quien se uniría al grupo en 1945 para consumar una intentona de derrocar a Trujillo, emprendida en 1947 y conocida como *Cayo Confites* —nombre del lugar geográfico, situado en la costa cubana, donde sucedieron los hechos.

Cuba sería la base principal de ese movimiento. Allí, la ayuda brindada por el propio gobierno de Grau sería amplia. Desde julio hasta septiembre, la preparación se desarrollaba a pesar de que Trujillo presionaba en el ámbito internacional al denunciar que en territorio de su país se fraguaba un intento armado en su contra. La medida del dictador y la incapacidad de Grau para procurar apoyo al movimiento llevaron a éste a un fracaso rotundo. Cabe destacar que entre los integrantes de Cayo Confites estaba Fidel Castro, entonces estudiante de la Universidad de La Habana, quien luego ocuparía un lugar de primer orden dentro del proceso revolucionario latinoamericano.

Por ahora es necesario volver a los sucesos de Costa Rica, particularmente para fijar la atención en Figueres. Aun antes de la experiencia de Cayo Confites, el proyecto Figueres-Argüello sufrió un gran revés en febrero de 1947. Las autoridades mexicanas descubrieron las actividades preparatorias para arrancar el poder a Teodoro Picado, quien, gracias a su victoria en elecciones de 1944, hacía posible la continuidad del *calderonismo* costarricense.

se. Se detuvo al propio Argüello y otra de las figuras de mayor trascendencia dentro de la lucha democrática del periodo: Edelberto Torres Espinoza, y se les decomisa equipo bélico.

Luego de las dificultades surgidas para que Cuba continuara sirviendo de base de operaciones de los exiliados, Guatemala se desempeñó como tal. Allí se conformaría en diciembre de 1947 el llamado *Pacto del Caribe* que, por instancias de Arévalo, debería coordinar los esfuerzos de “los líderes de los grupos revolucionarios de Costa Rica, la República Dominicana y Nicaragua”.¹⁴ Con una información distinta, sobre todo en cuanto a la fecha del *Pacto del Caribe*, Susanne Jonas Bodenheimer señala que éste “fue firmado en 1943 por José Figueres, Juan José Arévalo, Rómulo Betancourt, Juan Bosch y otros, con el intento de democratizar el área por la vía armada. En él, Figueres se comprometía a iniciar el movimiento en Costa Rica, para de ahí extenderlo a otros países de la región”.¹⁵ Este grupo sería al que luego se identificaría como la Legión del Caribe. Según Jaime Delgado, se declaraba textualmente constituido el pacto “para derribar las dictaduras imperantes en sus patrias y restablecer en ellas la libertad y la democracia”. Se asentaba como una necesidad continental la inmediata reconstrucción de la República Centroamericana. Además, dentro del punto nueve del documento se precisarían como sus principales objetivos:

consolidar y depurar la vida democrática en los pueblos de la alianza; exigir el respeto internacional para cada uno de sus componentes; recuperar las posesiones europeas que perduran en el Caribe, propender a la formación de una nueva República integrada por las Antillas menores; construir una sola unidad de mutua defensa económica, militar y política; exigir la alternatividad en el poder en cada uno de los países contratantes; mantener las mejores rela-

¹⁴ Ameringer, *op. cit.*, p. 73.

¹⁵ Susanne Jonas Bodenheimer, *La ideología socialdemócrata en Costa Rica*, San José, Costa Rica, EDUCA, 1984. Cita tomada de Mónica Lobatón y Susana Mendoza, “El estado liberacionista y su proyecto nacional en Costa Rica: 1948-1978”, en *Revista Nueva América*, 18, México, CCYDEL, UNAM, septiembre-diciembre de 1986, p. 70.

ciones con las naciones del continente, cumpliendo estrictamente las convenciones internacionales y, particularmente, declararse permanentes en el plano militar, de los Estados Unidos y Méjico (*sic*), para la defensa común.¹⁶

Los sucesos políticos de Costa Rica parecían estar de acuerdo con Figueres para que fuera en ese país donde se centrara la insurrección democrática.

Con el fin de contraponer fuerzas a las del oficialismo, que buscaba la reelección de Rafael Calderón Guardia a la presidencia en 1948, la burguesía cafetalera y las clases medias se unieron en torno del Partido Unión Nacional, con la candidatura de Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, a pesar del triunfo legítimo de Unión Nacional en las elecciones presidenciales, por la mayoría obtenida en las Cámaras, el gobierno de Picado decidió anular la votación, rompiendo así la tradición de sufragio efectivo que hasta entonces había mantenido la estabilidad política del país. La oposición vio cerrada su puerta de acceso al poder por la vía pacífica, sin tener otra alternativa que la acción militar.¹⁷

Ante esa única alternativa, el 12 de marzo se inició la insurrección, con José Figueres como comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional. En un periodo breve de 40 días se logró tener un control de la situación y se prometió reinstalar la república mediante una Junta Fundadora de la Segunda República que funcionaría de modo provisional. La lucha armada se consideraba parte intrínseca del proceso democrático. La máxima que lanzó Figueres en el discurso pronunciado el 28 de abril de 1948 al celebrarse el Desfile de la Victoria, “Las armas dan la victoria; sólo las leyes dan la libertad”,¹⁸ ratifica la consideración de que no hay un divorcio entre rebelión y búsqueda de respeto a las

¹⁶ Jaime Delgado, *El Partido Liberación Nacional. Análisis de su discurso político-ideológico*, 2a. ed., Heredia, Costa Rica, Universidad Nacional, 1983, p. 74-75.

¹⁷ Mónica Lobatón y Susana Mendoza, *op. cit.*, p. 69-70.

¹⁸ José Figueres, *Escritos y discursos, 1942-1962*, (selección, prólogo y notas de Alfonso Chase), San José, Costa Rica, 1986, p. 139.

decisiones tomadas por la sociedad. La Junta Fundadora de la Segunda República, como se la llamó en el Pacto Ulate-Figueres,¹⁹ se comprometía a dejar el poder luego de 18 meses, periodo en el cual prepararía las condiciones necesarias para institucionalizar la vida democrática costarricense y dejar posteriormente el poder a Otilio Ulate, vencedor de las elecciones de 1948. Con el triunfo de la así denominada por los propios impulsores del movimiento revolución de 1948, se anunciaba una etapa con mayor participación de sectores medios que no pretendían alejarse de un desarrollo capitalista. Para Susanne Jonas, la situación apenas había cambiado en la superficie: “Estos *revolucionarios* —escribe— no ratificaron a través de su acción una nueva estructura de poder, más bien dejaron el sistema político como había sido antes de la *revolución*, aunque ahora ellos estaban incluidos en él”.²⁰ Sin embargo, pese a la veracidad del comentario anterior, con Figueres en la presidencia del gobierno provisional, las esperanzas de los *legionarios* parecían tener posibilidades de materializarse.

IV. La Legión del Caribe

Aunque es de aceptarse que entre 1940 y 1948 se logró un avance en el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de los costarricenses, la intención de continuar en el poder, a pesar de la voluntad popular, y aun por encima del derecho, generó la respuesta de los defensores de la democracia.

Melvin Sáenz Biolley explica la situación a la luz de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua:

Así se gestó el germen de la insurrección liderizada (*sic*) por José Figueres Ferrer que, en marzo y abril de 1948, derrocó al gobierno de Teodoro Picado e instaló una Junta que ejerció provisionalmente el poder por 18 meses y realizó una serie de actos que con-

¹⁹ *Ibid.*, p. 151.

²⁰ Cita de Susanne Jonas B., tomada de Lobatón y Mendoza, *op. cit.*, p. 71.

solidaron las reformas emitidas por Calderón Guardia y definieron un régimen de respeto a las garantías individuales. Durante este periodo, que algunos han denominado revolucionario, el gobierno de Somoza García intervino directamente y sin tapujos en el desarrollo de los acontecimientos apoyando con tropas y armas al gobierno de Picado y combatiendo de forma abierta la insurrección de Figueres. Es necesario tener en cuenta que esta actitud del gobernante nicaragüense se justificaba, además de su amistad con Calderón Guardia, por el hecho de que junto a los insurrectos costarricenses combatía un grupo de centroamericanos y caribeños que conformaban la denominada Legión Caribe y cuyo objetivo era el derrocamiento de todos los dictadores del área, incluido el propio Somoza García.²¹

La participación de exiliados extranjeros en la guerra del 48 en Costa Rica implicó un compromiso por el cual Figueres les brindaría ayuda contra Somoza. Fue precisamente a uno de los movimientos realizados entonces, justo la incursión al costarricense Puerto Limón, el 12 de abril de 1948, al que se denominó Operación Legión del Caribe.²² Ese nombre, usado en ese momento por vez primera, continuaría aplicándose para referirse a los movimientos militares de exiliados.

Con Rosendo Argüello a la cabeza, como comandante en jefe, pronto se organizó el Ejército de Liberación Nacional de Nicaragua, fuerza armada del gobierno revolucionario formado en el exilio. Se encargó al intelectual de ese país Juan José Meza que contactara a hombres con experiencia militar. Así, reclutó en México al español Alberto Bayo Giraud, oficial de aviación republicano. En texto fechado el 25 de junio de 1948, en San José de Costa Rica, se designa a ese personaje general de brigada de las fuerzas revolucionarias, cuando se hubiera derrocado al régimen somocista. Entre los firmantes del documento, como representantes del gobierno revolucionario, se hallaban Rosendo Argüello,

²¹ Melvin Sáenz Biolley, "Costa Rica y Nicaragua: tensiones naturales, dificultades constantes. Vecinos [...]"; en Francisco Rojas Aravena [coord.], *Costa Rica y el sistema internacional*, Costa Rica, Nueva Sociedad, Fundación Friedrich Ebert, 1990, p. 166.

²² Ameringer, *op. cit.*, p. 78.

Gustavo Manzanares, Edelberto Torres, Juan José Meza y Felipe Argüello Bolaños.²³ La existencia de ese escrito mostraría el apoyo abierto de Figueres en tanto se organizaba el movimiento en Costa Rica, a la lucha antisomocista, es decir la ratificación de su acuerdo con Rosendo Argüello para continuar la lucha contra las dictaduras caribeñas. La participación de Bayo en la preparación del alzamiento mostró la necesidad de conocer más sobre estrategia militar, así como de que los dirigentes alcanzaran una verdadera posición de liderazgo merced a su preparación ideológica. Además, el testimonio de su intervención representado por su libro *Tempestad en el Caribe*²⁴ permitió conocer más de los detalles de la organización de la Legión del Caribe. En la dedicatoria de dicha obra menciona, por ejemplo, a Juan José Arévalo, entonces presidente de Guatemala; a Rómulo Betancourt, ex presidente del gobierno de Venezuela; a don José Figueres, “fundador de la Segunda República Costarricense”; al coronel Jacobo Arbenz, entonces ministro de Guerra en Guatemala. Ello ilustra la cohesión imperante entre quienes se comprometían con la lucha antidictatorial. Además, también en la dedicatoria, llama la atención el nombre del general don Juan Rodríguez, a quien se señala como “organizador de la *Legión del Caribe*.” Todos esos hombres, unidos a escritores también participantes en la lucha, se presentan en la obra como “Soldados con la pluma o con la espada, por la libertad del género humano y contra las dictaduras de América”, con lo que se señala la necesidad de la insurrección, espada en mano, ante los gobiernos dictatoriales. Otro de los aspectos del texto que vale la pena destacar es la influencia de la Guerra Fría en aquella época. Gracias al libro de Bayo se puede apreciar la preocupación del movimiento en lo que se refiere a evitar cualquier posibilidad de que se lo considerara “comunista”. Se deseaba impedir que los norteamericanos se valieran del pretexto de un presunto “indicio rojo”.

²³ Alberto Bayo, *Tempestad en el Caribe*, México, 1950, p. 7.

²⁴ *Ibid.*

Aunque parecería que el poder de Somoza se tambaleaba, la evolución del movimiento mostraría lo contrario. Diferencias e indecisiones en su interior provocarían el debilitamiento de la tentativa antisomocista. El apoyo de Figueres continuaba, pero limitado esencialmente al orden financiero. Podría pensarse que la existencia en la región de gobiernos “revolucionarios” aseguraba una situación óptima a las actividades de los *legionarios*. Pero, de manera paradójica, el hecho de que entre las figuras más comprometidas con la lucha antidictatorial se encontraran líderes de gobiernos institucionalmente establecidos afectaba el desarrollo de sus experiencias nacionales. Así, tanto Figueres como Arévalo, observados con detenimiento por conocerse las características de sus políticas, de pronto se vieron atados de manos en cuanto a sus intenciones de apoyar a la *legión*.

Adicionalmente, las fuerzas castrenses de Nicaragua y de la República Dominicana eran en ese momento los ejércitos más poderosos del Caribe.²⁵ Un caso que demuestra la importancia de tales instituciones es que, sin duda gracias a sus actividades de espionaje, en octubre de 1948 Somoza pudo denunciar que los gobiernos “comunistas” de Cuba, Guatemala, Venezuela y Costa Rica tenían planes de atacar Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Esos dos factores, es decir el descontrol de las fuerzas de los *legionarios*, así como la respuesta somocista, repercutirían en el debilitamiento de aquéllos, tal como se reflejó en el hecho de que Figueres recomendara que la preparación militar se efectuara en Guatemala. De acuerdo con Ameringer, a principios de septiembre Prío Socarrás, entonces presidente electo cubano, visitó a Figueres y prometió, según Argüello, proveerlos de las armas necesarias para invadir Nicaragua.²⁶

²⁵ Véase Richard Leroy Millet, *Guardians of the Dynasty* (introducción de Miguel D'Escoto), Maryknoll, Nueva York, Orbis Books, 1979; así como Vin Goldwert, *The Constabulary in the Dominican Republic and Nicaragua: Progeny and Legacy of United States Intervention*, Gainesville, University of Florida Press, 1962 (Latin American Monographs, 17).

²⁶ Ameringer, *op. cit.*, p. 84.

Las armas llegaron. No obstante, era claro que los intentos de lucha política debían considerar factores vinculados más bien con el extranjero. Se dependía de la ayuda financiera de los países interesados en continuar expandiendo la lucha democrática, las fuerzas armadas se constituían en parte con elementos foráneos y con seguridad la desconfianza, la indecisión y la división entre los dirigentes se debían a la incierta respuesta que podría generarse en el país. Las fuerzas sociales internas no parecían desempeñar un papel activo en los planes de lucha, aunque por razones políticas se expresara que el pueblo participaría luego de iniciarse los combates. Era patente la idea de que con sólo invadir se produciría una reacción de las fuerzas deseosas de arrancarse las cadenas de las dictaduras. Además, la falta de preparación ideológica sin duda explicaba la actitud de los dirigentes que, por su pertenencia a las elites, no sabían si valía la pena perder la tranquilidad que, aun con inconvenientes, podían encontrar en el exilio, lejos del dictador al que estaban a punto de enfrentar, en muchas ocasiones a muerte.

Las cosas empeorarían a fines de 1948. El primer día de diciembre Figueres destruyó el ejército, lo que actualmente es gran motivo de orgullo para los “ticos”. Pero en ese momento no sería un acto de tanto beneplácito. Diez días después entraría por la frontera nicaragüense una unidad armada, organizada por Calderón Guardia y apoyada por Somoza García. Los *legionarios* decidieron responder y acordaron que el general Ramón Raudales, Santos López y Nemesio Benavides, nicaragüenses que habían participado en la lucha encabezada por Sandino, fueran enviados a las montañas de la Nueva Segovia, al norte de Nicaragua. Debido a la constante falta de discreción, el plan se conoció en la presidencia, donde se temía la fuerza del ejército somocista, por lo que se ordenó cancelarlo. La salida que encontró Figueres para arreglar la situación fue acudir a la OEA, que en su intermediación reportaría el apoyo de Somoza a los “calderonistas”. Pero, a la vez, aquel organismo sacaría a luz pública el apoyo prestado a la Legión del Caribe por el gobierno de Costa Rica.

El Comité de Expertos Militares enviado por la OEA reportaría, el 17 de febrero de 1949, satisfactoria la actitud costarricense para

disolver a la Legión del Caribe.²⁷ Días antes habían dejado el país los emigrados nicaragüenses. Un *Pacto de Amistad* sería suscrito entre los dos países el 21 de febrero de 1949. Somoza continuaría al frente de su gobierno dictatorial, lo que se traduciría en derrota de los legionarios.

De esta manera, se reducían los espacios de aquella lucha conjunta que se pretendió continuar hasta que el área se encontrara libre de toda dictadura. Sin embargo, era indudable que la lucha insurreccional continuaba siendo el arma preferida. La OEA dictaminó que desapareciera el apoyo a fuerzas extranjeras que actuaran contra los gobiernos del área. No obstante, germinó el descontento porque la misma OEA no intentaba exterminar el cáncer representado por las dictaduras en la política latinoamericana, es decir que continuaba vivo el motivo de lucha de los insurrectos democráticos.

El nuevo centro de operaciones pasó a ser Guatemala, cuyo gobierno no tardó en ser señalado como marxista e instrumento de expansión roja. El argumento de la amenaza comunista empezaba a funcionar eficientemente como mecanismo de presión ante aquellos proyectos que intentaran romper el sometimiento impuesto por Estados Unidos y sus cómplices locales.

El apoyo de Arévalo, de Prío y hasta de Figueres continuó, ahora con el nuevo objetivo aparente de derrocar a Trujillo. Sin embargo, el general Juan Rodríguez sería la figura principal no sólo del financiamiento, sino de la dirección del movimiento. Los ideales seguían sin ser marxistas, como se acusaba, y ni siquiera podrían considerarse muy revolucionarios. La búsqueda de un gobierno democrático, libertad individual, reforma agraria, código laboral, seguridad social y medidas alfabetizadoras, así como del respeto a la propiedad privada, constituía el programa político.

A causa de la insularidad del lugar donde se quería instalar la democracia, la fuerza aérea cumpliría un papel importantísimo en

²⁷ *Ibid.*, p. 86. Cita tomada de Unión Panamericana, Departamento de Asuntos Jurídicos, *Aplicaciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1948-1960*, Washington, D. C., 1960, p. 39.

el proyecto. Ello daría realce a la intervención del aviador español Alberto Bayo G., pues resultaría fundamental entre marzo y junio, meses de preparación insurreccional, aunque luego se lo relevaría del cargo y no viajaría con los grupos que intentaron la expedición. Si bien se corrigieron muchos de los errores cometidos en la etapa en que se preparaba el levantamiento en Nicaragua, el resultado sería igualmente negativo.²⁸ En una actitud de espontaneísmo debida a la poca preparación político-militar, se esperaba que con el simple desembarco se desencadenaría un movimiento en el país. Ambas fuerzas, la proveniente del exterior y la surgida en el interior, confluían en la creación de las condiciones necesarias para alcanzar el poder. La supuesta respuesta popular en apoyo de Juan Rodríguez y en contra de Trujillo nunca se llevó a cabo, como sí sucedió con la feroz represión desatada por el triunfante dictador, quien en cuatro días sometió la intentona iniciada el 18 de junio en la Bahía de Luperón, y luego continuó la persecución y la matanza entre el pueblo dominicano.

Con la derrota sufrida en República Dominicana se dispersaría el ideal de lucha insurreccional de conjunto con que comulgaron centroamericanos y caribeños. Al agotarse los intentos colectivos de alcanzar el desenvolvimiento democrático y al presionar el imperialismo estadounidense a los gobiernos para atacar las experiencias que simbolizaban la posibilidad de perder el control ganado en el área, se dio pauta a la reacción. El proceso de la “revolución guatemalteca” es violentamente interrumpido en 1954 mediante una invasión apoyada por Estados Unidos, que alegraría temer el avance soviético en el continente. Dentro de distintos sectores progresistas latinoamericanos circuló la idea de que el desarrollo democrático debió defenderse con las armas, respuesta que no tuvo el gobierno de Arbenz. Como las dificultades para cimentar la democracia en América latina eran aún patentes, no desapareció del todo el anhelo de llevar a cabo una insurrección, aun cuando se manifestara de manera independiente, tal como ocurría en esos años en Cuba y Nicaragua.

²⁸ Bayo, *op. cit.*, p. 159-209.

V. Epílogo

Con lo expuesto aquí, bien pueden comprobarse varias de las afirmaciones que pretendían dar coherencia al trabajo. Dentro de la región tratada ha existido un proceso significativo a través del cual se marca oposición hacia sistemas que entorpezcan el desarrollo de la vida política democrática. Tal rechazo se ha expresado aun mucho antes del triunfo de la revolución cubana. Es más, podría considerarse a la Legión del Caribe como una experiencia insurreccional vinculada estrechamente con el movimiento que alcanzaría el triunfo en la Cuba de 1959. No obstante, luego del giro ideológico experimentado a raíz de la adopción del socialismo como nueva meta del proceso cubano, la identificación de éste con el proceso *legionario* pierde significado y hasta llega a ser necesario desarticularlo, en lo cual cumple un papel decisivo la creación histórica. En tanto el ideario de los demócratas insurreccionales no podía encuadrarse dentro de los nuevos requerimientos de una meta socialista, sólo se recuperarían los elementos que apoyaran o fortalecieran el nuevo proyecto político. De esa manera se explica por qué la Legión del Caribe cae en un cierto olvido y deja de verse como antecedente de significación para el proceso insurreccional latinoamericano.

Otra de las cuestiones derivadas del acercamiento al tema es la prueba de que la insurrección es una práctica desarrollada aun mucho antes del movimiento guerrillero de Sierra Maestra. Es decir que, en contradicción con una enorme cantidad de fuentes que lo afirman, el castrismo no es el principio de esa actividad. En algunos casos, la insurrección ya venía planteándose de antemano como necesaria dentro de la lucha de los movimientos democráticos. Para ellos, sin embargo, era preciso diluir la contraposición que podría señalarse entre democracia y proceso insurreccional. Desde entonces, y como está sucediendo en la actualidad, se adoptaría como factor que garantizaría el funcionamiento de la vida democrática, como herramienta que permite superar los obstáculos impuestos por quienes se enquistan en el poder y que actúa como garantía del buen funcionamiento de la vida institucional.

Pero la situación no continuaría un mismo camino. Los acontecimientos iniciados a partir de 1959 generarían una distinta dinámica. Las características de los nuevos procesos serían otras. Pese a ello, se mantendría una gran constante regional, pues la insurrección seguiría siendo considerada arma vital para algunos sectores políticos de la sociedad, con lo que se puede apreciar la vinculación estrecha entre el desarrollo de las sociedades latinoamericanas y el proceso insurreccional que históricamente las acompaña.

Bibliografía comentada

Cabe decir que, en general, no hay textos recientes sobre el tema. El fenómeno revolucionario cubano ocupó grandes espacios e influyó considerablemente en la historiografía latinoamericana producida a partir de la década de 1960. No es sino hasta 1974 cuando Charles Ameringer publica un estudio sobresaliente. Pese a su innegable calidad, se hace necesaria una nueva reinterpretación del proceso al que nos hemos acercado en este trabajo.

Alexander, Robert J., *La revolución democrática de Venezuela* (trad. de Armando Arrangoiz), Medellín, Albon-Interprint, 1967. Panorama histórico del proceso político venezolano, a partir de 1948 y durante la década de 1950.

Ameringer, Charles, *The Democratic Left in Exile. The Antidictatorial Struggle in the Caribbean, 1945-1959*, Coral Gables, Florida, University of Miami Press, 1974. Texto fundamental para el estudio del caso. Sistemático, con excelente manejo de una amplia bibliohemerografía; además se apoya en entrevistas realizadas con algunos de los participantes de la “izquierda democrática”.

Arévalo, Juan José, *Escritos políticos*, Guatemala, Tipografía Nacional, 1945. Recopilación de los principales documentos que reflejan el ideario político de los primeros años de la revolución guatemalteca y el pensamiento de su líder.

- Argüello, Rosendo, *Quiénes y cómo nos traicionaron*, Costa Rica, s.e., s.f. Obra del aliado nicaragüense de José Figueres, donde se da testimonio particular de la preparación de la lucha insurreccional en Costa Rica, así como de la que se intentó en Nicaragua contra Anastasio Somoza García.
- Bayo, Alberto, *Tempestad en el Caribe*, México, s. e., 1950. Importante testimonio sobre la *Legión del Caribe*, cuya riqueza reside en que su autor, un internacionalista español empeñado en el ideal y la práctica de la lucha antidictatorial en Centroamérica y el Caribe, presenta de manera seria los hechos.
- Blandón, Jesús Miguel, *Entre Sandino y Fonseca*, Managua, s.e., 1980. Presenta una relación de las principales acciones insurreccionales dirigidas contra los Somoza, desde su ascenso al poder hasta su debilitamiento político.
- Caraballo, Isa, *Batista: una vida sin tregua*, 2a. ed., México, Iberoamericanas, 1945 (Hombres de América, 1). Exaltación de la figura de Batista. Ejemplo historiográfico de la apología hecha a quienes se supone defensores del desarrollo de las naciones que representan.
- Cardenal, Luis, *Mi rebelión. La dictadura de los Somoza*, México, Patria, 1961. En este libro sobre Nicaragua se puede observar el entrelazamiento de los movimientos “insurreccionales democráticos” y aquellos que luego caen en la órbita castrista. Además, se encuentran referencias a las líneas de parentesco, amistad o vinculación política entre los miembros del régimen somocista y sus opositores.
- Delgado, Jaime, *El Partido Liberación Nacional. Análisis de su discurso político-ideológico*, 2a. ed., Heredia, Costa Rica, Universidad Nacional, 1983. Visión local y partidista del desarrollo político del partido fundado por José Figueres en la década de 1950.
- Earley, Stephen, *Arms and Politics in Costa Rica and Nicaragua, 1948-1981*, Nuevo México, University of New Mexico, 1982 (Research Papers Series, 9). Estudio de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, en función de los enfrentamientos armados y políticos surgidos desde el triunfo figuerista en 1948 y hasta después del triunfo sandinista de 1979.

- Figueres, José, *Escritos y discursos, 1942-1962* (selección, prólogo y notas de Alfonso Chase), San José, Costa Rica, 1986. Colección de documentos que revelan las características del proceso costarricense conocido como “revolución de 1948”, así como la visión de Figueres sobre el desarrollo político de la región.
- Gobierno Revolucionario de Venezuela, *La revolución venezolana ante la opinión de América*, Caracas, Imprenta Nacional, 1946. Visión oficial del proceso revolucionario en Venezuela, donde se pueden apreciar las coincidencias entre los programas políticos de la lucha regional.
- Goldwert, Vin, *The Constabulary in the Dominican Republic and Nicaragua; Progeny and Legacy of United States Intervention*, Gainesville, University of Florida Press, 1962 (Latin American Monographs, 17). Estudio explicativo de la creación de las “guardias nacionales” en República Dominicana y Nicaragua, como muestras de la política intervencionista estadounidense orientada a respaldar a los dictadores Trujillo y Somoza.
- Jonas Bodenheimer, Susanne, *La ideología socialdemócrata en Costa Rica*, San José, Costa Rica, EDUCA, 1984. Uno de los pocos libros que aportan datos o mencionan a la *Legión del Caribe*.
- Labastida Martín del Campo, Julio [coord.], *Dictaduras y dictadores*, México, Siglo XXI, 1991. Reflexión sobre el concepto de dictadura, así como presentación de los principales casos de ese fenómeno en América latina.
- Lobatón, Mónica, y Susana Mendoza, “El estado liberacionista y su proyecto nacional en Costa Rica: 1948-1978”, en Revista *Nuestra América*, 18, México, CCYDEL, UNAM, septiembre-diciembre de 1986. Panorama de la trayectoria política costarricense, desde la victoria figuerista de 1948, con la cual se impulsaría el afán insurreccional en el área.
- Millet, Richard Leroy, *Guardians of the Dynasty* (introducción de Miguel D’Escoto), Maryknoll, Nueva York, Orbis Books, 1979. Obra de primer orden para conocer el funcionamiento de la Guardia Nacional en Nicaragua, en la cual se basó considerablemente la dinastía Somoza para mantener un profundo y prolongado control político.

- Rodríguez, Eugenio, *De Calderón a Figueres*, San José de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, 1981. Panorama general del periodo previo al triunfo de Figueres, con una caracterización del proceso político iniciado con la revolución del 1948.
- Sáenz Biolley, Melvin, “Costa Rica y Nicaragua: tensiones naturales, dificultades constantes”, en Francisco Rojas Aravena [coord.], *Costa Rica y el sistema internacional*, Costa Rica, Nueva Sociedad, Fundación Friedrich Ebert, 1990. Aporte de algunos datos mínimos sobre la “*Legión del Caribe*” y su influencia en el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua.
- Sosa, Ignacio, Martín López *et al.*, *Cuba: de la utopía al desencanto*, Toluca, Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Social, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Humanidades, 1993. Análisis serio y actual sobre la revolución cubana, en donde se destacan temas que van desde el surgimiento de la corriente castrista, las modificaciones del proyecto político original y la presencia de Cuba en el ámbito mundial, hasta el “desencanto” producido por el proceso mismo.
- Villoro, Luis, “Sobre el significado de revolución”, en *Teoría*, núm. 1, año 1, UNAM, julio de 1993. Nueva interpretación del concepto de revolución.

EL LLANO Y LA SIERRA: DOS CONCEPCIONES INSURRECCIONALES EN LA REVOLUCIÓN CUBANA

Martín López Ávalos

En la madrugada del 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista irrumpía en el campamento militar de Columbia con el beneplácito de los jefes militares en turno. El gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás, sin oponer resistencia alguna, dejó el camino libre para que Batista tomara el poder sin ningún problema. Los golpes de Estado no eran tan ajenos a la historia política cubana y, sin embargo, éste sería el punto de partida para una serie de acontecimientos que en poco tiempo cambiarían la historia de Cuba.

El 10 de marzo se rompía una institucionalidad difícilmente cuajada en la frágil tradición democrática cubana, alcanzada apenas un par de décadas atrás en un proceso por demás traumático y que de alguna manera se cerraba con este suceso. Se abría, entonces, en el debate político, la cuestión relativa a la pertinencia del sistema democrático entre la clase política isleña. Discusión que, pese a su trascendencia, no provino de sus estratos más representativos, sino de una nueva generación que en esos momentos apenas asomaba a la vida cívica de su país y se incorporaba a las actividades políticas formales.

El debate sobre la democracia impulsará el reagrupamiento y la formación de nuevos grupos que, de impugnadores, se convertirán en transformadores de su propia realidad política hasta revolucionar los cimientos mismos en que se basaba la clase política cubana. A veces imperceptible en su momento, este proceso dará origen a una nueva clase política que se fundará en el debate

democrático sobre el propio sistema político y la legitimidad de la elite para gobernar. En este proceso, encontraremos una nueva “fórmula política” que argumentará la necesidad de renovar mediante la insurrección, por estar canceladas las vías democráticas para hacerlo.

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 marcaría a una joven generación sobre la política y sus representantes tradicionales, incluidos los comunistas del Partido Socialista Popular, la cual pensaba que las posibilidades de cambiar la situación de su país eran mínimas, mientras prevaleciera la estructura política favorable a Batista y a la corte de políticos que medraban tras él. La clase política cubana, en esta coyuntura, eludió el reto representado por la nueva llegada al poder de Batista para justificarse ante su propia sociedad, al mismo tiempo que una nueva generación sentía amenazada sus expectativas de ascenso social y político al reeditarse el gobierno de Batista e imposibilitarse la circulación natural en el ejercicio del poder.

El presente ensayo tiene como finalidad mostrar las condiciones donde surgió la estrategia insurreccional cubana, a partir de lo apuntado anteriormente, así como revisar la problemática interna del Movimiento 26 de Julio en torno a dicha estrategia. Como veremos, el desarrollo del proceso insurreccional no está exento de contradicciones y vaivenes que explican su desenlace final.

Con objeto de agilizar la exposición de los temas propuestos, hemos tratado de no abundar en notas de pie de página referentes a las fuentes documentales consultadas. Al final del texto, el lector encontrará una bibliografía comentada que puede orientarlo en los diferentes aspectos tratados en este texto.

Primera parte

El gobierno del presidente Prío cayó como una hoja seca en otoño ante los embates de los vientos, como si fuera algo natural y previsible. Ni la clase política cubana ni mucho menos la sociedad vieron en el retorno de Batista la amenaza de una dictadura. Si

bien en esta ocasión Batista se arrogó para sí todos los poderes del Estado y el gobierno, rompiendo con ello las más elementales formas del sistema representativo, la clase política cubana procuró acomodarse ante esta nueva situación y “negociar” los nuevos espacios políticos dejados por la dictadura; sólo el mayor organismo político de oposición, el Partido del Pueblo Cubano, conocido como “ortodoxo”, hizo pronunciamientos para condenar el golpe y señalar la quiebra del Estado de derecho en Cuba.

La coalición gubernamental que apoyó al gobierno de Prío, es decir, los partidos liberal, demócrata y republicano, además del propio, el Partido Revolucionario Cubano, llamado “auténtico”, no hicieron pronunciamiento alguno para señalar la crítica situación del país; por el contrario, maquinaron vanos intentos de hallar una “fórmula constitucional” con los personeros de Batista para asegurar que estos partidos siguieran siendo los vehículos indispensables ante cualquier gestión, como señalaba uno de sus impulsores. El abandono de la lucha por la democracia por buena parte de la clase política cubana hizo que el gobierno de facto del 10 de marzo fuera controlando en muy poco tiempo la situación; sólo el partido ortodoxo articuló una respuesta de resistencia que, por lo menos, señalaba la necesidad de restaurar la legalidad y legitimidad del sistema político.

La respuesta ortodoxa ponía énfasis en las formas jurídicas de respeto a la Constitución, apoyando así una resistencia civil y pacífica que muchos de sus militantes identificaron con inmovilismo e inacción. La respuesta moderada de los dirigentes ortodoxos impacientó a una parte de su militancia juvenil que veía la oportunidad de luchar por todos los medios posibles por la misma causa.

El debate sobre la democracia será, primero, una polémica en el seno de la ortodoxia que repercutirá en todo el espectro político cubano, pues radicalizará las posibles soluciones y sus líneas de acción. Más que a tratar la pertinencia o no de la democracia, las discusiones se orientarán a precisar las acciones necesarias para defenderla de un gobierno surgido en contra del espíritu mismo de todo sistema democrático.

Resulta interesante observar que la polémica la desencadenan las juventudes del partido, que poco a poco irán mostrándose cada vez más escépticas ante la moderación de sus dirigentes. En primera instancia, a los jóvenes ortodoxos los anima un alto espíritu sobre *el deber ser* en el que hacía hincapié el fundador de la ortodoxia, Eduardo Chibás.

Olvidada actualmente por la historiografía cubana, la figura de Chibás constituirá el modelo político de los jóvenes radicales de la ortodoxia. Ahí se encuentran muchos de los modos de la clase política cubana actual, aunque sólo los veteranos recuerden su origen político. Muchos de ellos fueron cautivados por la fascinante elocuencia oratoria de Chibás, quien a través de las ondas de radio emprendió una campaña contra la corrupción del sistema político. Víctima de su propia pasión, Chibás encontró en su inmolación la salida para ser consecuente consigo mismo.

Dispuesta a seguir sus pasos, la juventud ortodoxa encontraba como una reafirmación de sus dogmas el continuar la tarea inconclusa del maestro, que se resumiría en el lema ortodoxo: “Vergüenza contra dinero”. Esta divisa resumía el reclamo de la juventud hacia sus mayores que habían sucumbido frente al dinero. Ellos aceptaban la vergüenza y la asumían como su seña de identidad generacional, pues concebía la política como un continuo ejercicio de virtudes cívicas. La muerte de Chibás dejó un vacío que hasta entonces había llenado su liderazgo carismático y su verbo encendido. Los sucesores de Chibás en la dirección ortodoxa no supieron percibir este cambio de aires surgido dentro del partido y mostraron poco interés por las inquietudes de sus noveles militantes.

Un vacío político empezaba a ser percibido por esta nueva generación. El joven militante ortodoxo Jesús Montané describía el clima reinante entre los de su generación luego del golpe del 10 de marzo:

El escepticismo reinaba por doquier. La nación no encontraba quien la guiara a un puerto seguro y feliz. El artero golpe del 10 de marzo del 52 había sumido a nuestros politiqueros en un mar de dudas y vacilaciones.

...[Los jóvenes] tocaron muchas puertas buscando la orientación correcta, la consigna de combate, pero sólo recibieron de esos falsos líderes (verdaderos ídolos de barro) consejos paternos de que había que tener calma, que había que esperar, etc., etc.¹

Uno de los más aguerridos jóvenes, llamado Abel Santamaría, hacía ver tal situación a José Pardo Llada, en ese entonces vocero del partido, al comentar la manifestación ortodoxa frente a la tumba de Chibás el 16 de marzo en estos términos:

Haciendo un recuento de la jornada de ayer [...] quiero manifestarle, primeramente fiel a la consigna de nuestro partido, que no se hicieron ahí los pronunciamientos necesarios que de acuerdo con el estado de cosas imperantes, y después, como partidario decidido a acabar con este régimen de fuerza, que ahí no salía lo que el pueblo de Cuba quiere.

Se esperaban muchas cosas, hasta los papelitos necesarios en estos casos, que dicen mucho, pero en el fondo no dicen nada; pero sobre todas las cosas, se esperaba la combatividad ortodoxa, irreductible en todos los momentos, persiguiendo como meta única acabar de una vez y para siempre con el ladronismo, el bandillaje y otros desmanes que han representado la mayoría de todos los gobernantes que hemos padecido los cubanos.²

El clima político prevaleciente luego del golpe del 10 de marzo correspondía a las condiciones para la ruptura institucional que se avecinaba pues, como lo percibía Abel Santamaría, no era posible seguir haciendo política a través de los canales tradicionales, esto es, los partidos, al mismo tiempo que se abría la vía de disputar el poder por cualquier medio, más allá del proceso electoral, por el momento cerrado. En el mismo acto comentado por Santamaría, otros jóvenes se inconformaron por la política del partido; se cuenta que, una vez que Emilio “Millo” Ochoa termi-

¹ Citado por Mario Mencía, *Tiempos precursores*, p. 7.

² Carta de Abel Santamaría a José Pardo Llada, 17 de marzo de 1952, en *Moncada, antecedentes y preparativos*, p. 106-107.

nó la lectura del *Manifiesto de la ortodoxia*, un espigado joven alzó la voz para gritar: “Si Batista capturó el poder por la fuerza, debe ser derribado por la fuerza”. Era Fidel Castro, abogado de 25 años de edad, delegado del barrio de Cayo Hueso en La Habana y aspirante a candidato a congresista por el partido ortodoxo en las malogradas elecciones de 1952.

En el mismo acto, se repartió a los asistentes un pequeño manifiesto titulado “Revolución no, zarpazo”, firmado por el mismo Castro, donde exhortaba a los militantes del partido de Chibás al sacrificio y la lucha en momentos en que la patria se encontraba oprimida por un tirano. Era un exhorto de lucha contra el golpe de Estado perpetrado por Batista, el cual no contaba con ninguna justificación política o moral. Añadía el joven abogado: “Su asalto al poder carece de principios que lo legitimen, riase si quiere, pero los principios son a la larga más poderosos que los cañones. De principios se forman y alimentan los pueblos, con principios se alimentan en la pelea, por los principios mueren.”³

Castro hace un recuento de la situación previa al golpe y argumenta que sí se vivía el desgobierno, pero que se esperaba la oportunidad constitucional para “echar abajo un gobierno de malversadores y asesinos, y eso intentábamos por la vía cívica con el respaldo de la opinión pública y la ayuda de la masa del pueblo”. Ante esto, enfatizaba, “no hay nada más amargo que el espectáculo de un pueblo que se acuesta libre y amanece esclavo”.

Frente a la opresión, concluía Castro, se abría la puerta de la lucha por la libertad para no “ser esclavo”. La lucha anunciada era la insurrección, lo cual provocaba un debate interno en la ortodoxia sobre las vías propuestas por la dirigencia y esta deman-

³ Sobre la fecha de divulgación de este escrito existen dos versiones. Tad Szulc, *Fidel: un retrato crítico*, p. 248-249, y Mencía, *op. cit.*, p. 127, exponen la versión señalada arriba; Raúl Castro recuerda, por el contrario, que en esa ocasión se repartió un pequeño periódico llamado *El Acusador*, donde apareció un artículo de Fidel titulado “Recuento crítico del PPC”. Cfr. Raúl Castro, *Selección de discursos y artículos, 1959-1974*, I, p. 43. Si se desea conocer el texto íntegro, véase Fidel Castro, “Revolución no, zarpazo”, en Miriam Fernández Sosa [comp.], *Selección de lecturas de historia del pensamiento político cubano*, vol. II, cuarta parte, p. 12-15.

da, apenas articulada, poco a poco tomaría forma y los jóvenes radicales se agruparían en torno a ella.

El golpe del 10 de marzo era la justificación para proclamar la necesidad de buscar cambios urgentes en el sistema político. La urgencia se explicaba por una sencilla razón: los miembros de la clase política cubana, con Batista a la cabeza, carecían de legitimidad democrática para ejercer el poder, mientras quienes no se habían sumado al golpe habían claudicado en la defensa del mismo sistema democrático.

El reclamo de los jóvenes ortodoxos está enmarcado en este sentido y llaman a toda la sociedad a realizar lo que en ese momento conciben como una revolución, es decir, la toma del poder por medios insurreccionales para restablecer la legitimidad democrática. En otra parte de su carta a Pardo Llada, el mismo Abel Santamaría reflexionaba sobre el camino que debía seguirse en esos momentos:

La inactividad consume, y no podemos dejarnos consumir de ninguna forma. ¿Para qué, en este momento, dogmas ni doctrinas, si lo que necesitamos se llama acción, acción? Basta ya de pronunciamientos estériles, sin objetivos determinados. Una revolución no se hace en un día, pero se comienza en un segundo. Hora es ya: todo está de nuestra parte, ¿por qué vamos a despreciarlo? —y finalizaba— [...] hay que ayudar [...] pero hay que indicar la forma. Usted y los demás la palabra.⁴

Resulta interesante advertir que, al mismo tiempo que se habla de insurrección, por razones que se ubican más en el terreno de la ética, también se hablará de legalidad para justificar un principio universalizado por el liberalismo: *el derecho a la rebelión*. La invocación de este principio permitirá a los jóvenes radicales de la ortodoxia sentar un precedente jurídico importante para entregarse a su “revolución”, como Fidel Castro lo señaló poco tiempo después del 10 de marzo.

⁴ Carta de Abel Santamaría..., *op. cit.*

Fidel Castro presentó ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de La Habana una demanda donde pedía que el ascenso al poder por parte de Batista se declarara anticonstitucional. Al mismo tiempo, el propio Castro presentó otro alegato judicial en idéntico sentido al Tribunal de Urgencias de La Habana, el 24 de marzo, donde reclamaba la pena de 100 años de cárcel para Batista por la violación de seis artículos del Código de Defensa Social.⁵

La demanda de Fidel fue la única que cubano alguno presentó en forma individual, en esos momentos, para reclamar el restablecimiento del equilibrio democrático. Esta demanda judicial, con el paso del tiempo, se ha convertido en un documento histórico invaluable, pocas veces valorado en su dimensión real; en él, Castro pone el dedo en la llaga de toda la clase política cubana que pretende justificarse con la argumentación democrática, señala responsabilidades e insuficiencias, al mismo tiempo que advierte salidas ante la dimensión del problema. El documento comienza así:

Fidel Castro Ruz, abogado, con bufete en Tejadillo 57, ante este Tribunal de Justicia expone lo siguiente:

Los hechos que motivan este escrito son harto conocidos, pero no obstante vengo a hacer formal denuncia de los mismos bajo mi absoluta responsabilidad, y demandar la aplicación de las leyes vigentes, lo cual aunque parezca absurdo frente al desenfreno imperante, se ajusta a normas jurídicas no abolidas por nada ni por nadie, haciendo, por tanto, si más difícil y abrumador el deber de los magistrados, más meritorio y digno de la patria el cumplirlo.

Castro nos muestra, de entrada, un manejo sobrio de la teoría política liberal. Apela, por principio, al derecho natural de los hombres, es decir, a los derechos humanos inherentes a todo conglomerado social, al mismo tiempo que señala la responsabilidad política y ética de los hombres encargados de impartir la justicia;

⁵ Hay varias fuentes donde se puede consultar dicho documento; por ejemplo, Mario Mencía, *El grito del Moncada*, vol. II, p. 606-610; Miriam Fernández Sosa [comp.], *op. cit.*, p. 16-24. Las siguientes citas textuales provienen del texto de Mencía.

sin ésta, cualquier sociedad está indefensa frente a las acciones del poder. Así, no es extraño que Fidel Castro señale los hechos que dieron origen a esta controversia constitucional, cuando:

En la madrugada del 10 de marzo, un senador de la República, traicionando sus propios fueros y atribuciones, penetró en el campamento militar de Columbia previo concierto con un grupo de oficiales del ejército.

Auxiliados por la noche, la sorpresa y la alevosía, detuvieron a los jefes legítimos asumiendo sus puestos de mando, tomaron los controles, incitaron a la sublevación a todos los distritos, e hicieron llamada general a la tropa que acudió tumultariamente al polígono del campamento, donde la arengaron para que volvieran sus armas contra la Constitución y el Gobierno legalmente constituido.

La ciudadanía, que estaba ajena por completo a la traición, se despertó a los primeros rumores de lo que estaba ocurriendo. El apoderamiento violento de todas las estaciones radiales por parte de los alzados, impidió al pueblo noticias y consignas de movilización y resistencia.

Atada de pies y manos, la nación contempló el desbordamiento del aparato militar que arrasaba la Constitución, poniendo vidas y haciendas en los azares de las bayonetas.

El 10 de marzo Fulgencio Batista encabezó a una parte de la clase política cubana para desbaratar el estado de derecho imperante en Cuba hasta entonces. La figura utilizada por Castro es correcta: “arrasar” la Constitución, al violentar la organización misma del Estado liberal, que la propia sociedad en ejercicio de su soberanía había determinado. Al desaparecer esta estructura, la sociedad queda indefensa, en “vidas y haciendas”, al capricho no de un poder sino de un individuo, como se señala a continuación:

El jefe de los alzados, asumiendo el gobierno absoluto y arrogándose facultades omnímodas, ordenó la suspensión inmediata de las elecciones convocadas para el 1° de junio.

Las más elementales garantías personales fueron suprimidas de un borrón.

Como un botón fueron repartidas todas las posiciones administrativas del Estado entre los protagonistas del golpe.

Cuando el Congreso pretendió reunirse acudiendo a la convocatoria ordinaria, fue disuelto a tiro limpio.

En la actualidad están llevando a cabo la total transformación del régimen republicano, y plantean la sustitución de la Constitución nacional, producto de la voluntad del pueblo, por un mamotreto jurídico engendrado en los cuarteles a espaldas de la opinión popular.

La voluntad popular, es decir, la soberanía, sólo puede expresarse por medio del consenso democrático expresado en los procesos electorales, mecanismo erigido para tal efecto; sin embargo, cuando éste deja de operar, la sociedad no puede ejercer su soberanía con el único control que tiene para ello. De ahí la importancia de restablecer este mecanismo y de defenderlo, como Castro señala a los magistrados:

Todos estos hechos están previstos y sancionados de manera terminante en el Código de Defensa Social.⁶ Por todos estos artículos y otros más que sería prolijo enumerar, el señor Fulgencio Batista y Zaldívar ha incurrido en delitos cuya sanción lo hacen acreedor de más de cien años de cárcel.

No basta con que los alzados digan ahora tan campantes que la revolución es fuente de derecho, si en vez de revolución lo que hay es “restauración”, si en vez de progreso “retroceso”, en vez de justicia y orden, “barbarie y fuerza bruta”.

Aspecto importante señalado por Castro es la fuente del derecho. Adelantándose a la respuesta que los magistrados encarga-

⁶ Los artículos citados por Castro establecen las siguientes penas: quien cambie total o parcialmente a la Constitución y el gobierno por medio de la fuerza sufrirá pena de cárcel de entre seis y diez años; quien incite a una rebelión armada contra los poderes constitucionales del Estado será recluido entre tres y diez años; la pena será de cinco a veinte años si la insurrección se lleva a cabo; quien impida al Senado, al Congreso, al presidente o a la Suprema Corte el ejercicio de sus funciones constitucionales permanecerá en prisión entre seis y diez años; quien sea culpable de sedición será encarcelado entre tres y ocho años; quien trate de incitar a las tropas o a otros miembros de las fuerzas armadas a cometer crimen o sedición será privado de su libertad entre dos y cinco años.

dos del caso darán a su querella, Fidel rechaza la tipificación del golpe de Estado como “revolución”, la otra vertiente del pensamiento liberal que faculta el ejercicio de la soberanía en determinados casos, aunque no abunda en ello. Sin embargo, Castro deja abierta una rendija en caso de que:

La actuación de este Tribunal ante los hechos relacionados tendrá una alta significación para el pueblo de Cuba. Evidenciará si es que sigue funcionando con plenitud de facultades, si es que no se ve imposibilitado por la fuerza, si es que no ha sido abolido también en el cuartelazo.

Bueno sería que el Tercer Poder del Estado diera señales de vida cuando los otros dos han sido decapitados, si es que no se ha decapitado del mismo modo el poder judicial.

Al Tribunal de Urgencia se lleva a un ciudadano cuando se le acusa de sedición o de cualquier otro delito de su competencia, se le juzga y si resulta probado se le condena. Así lo ha hecho muchas veces.

Si se niega a comparecer se le declara en rebeldía y se tramitan las órdenes pertinentes.

Si el Tribunal se aleja de su deber de ejercer el derecho en beneficio de la sociedad y no del poder, entonces queda abierta la posibilidad de que cualquier ciudadano se rebele, con los medios a su alcance, contra ese poder que lo oprime y ante el cual está indefenso. Es decir, queda justificada jurídicamente cualquier acción que devuelva el ejercicio de la soberanía a la sociedad:

Si frente a esta serie de delitos flagrantes y confesos de traición y sedición no se le juzga y castiga, ¿cómo podrá después ese Tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición y rebeldía contra ese régimen ilegal, producto de la traición impune? Se comprende que eso sería absurdo, inadmisibles, monstruosos, a los más elementales principios de justicia.

No prejuzgo el pensamiento de los señores magistrados, sólo expongo las razones que fundamentan mi determinación de hacer esta denuncia.

Acudo a la lógica, palpo la terrible realidad, y la lógica me dice que si existen tribunales Batista debe ser castigado, y si Batista no es castigado y sigue como amo del Estado, presidente, primer ministro, senador, mayor general, jefe civil y militar, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, dueño de vidas y haciendas, entonces no existen tribunales, los ha suprimido. ¿Terrible realidad?

Si es así, dígame cuanto antes, cuélguese la toga, renúnciese al cargo: que administren la justicia los mismos que legislan, los mismos que ejecutan, que se siente un cabo de una vez con 'sus bayonetas en la sala augusta de los magistrados. No cometo falta alguna al exponerlo así con la mayor sinceridad y respeto; malo es callarlo, resignarse a una realidad trágica, absurda, sin lógica, sin normas, sin sentido, sin justicia.

La insurrección, en la perspectiva planteada por Castro, no es un acto aventurero. Es, por el contrario, la acción consciente del ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos de una sociedad democrática una vez que todas las vías legales han sido canceladas. La respuesta negativa de los magistrados del Tribunal a emprender acción penal contra Batista abría la última puerta para tomar las armas; éstas serían el instrumento para llevar a cabo la tarea cívica de restaurar el orden democrático.

Para Castro, la acción del 10 de marzo no cumplía con los requerimientos para convertirse en parte de un proceso revolucionario, tal como lo entiende el liberalismo: “Sin una concepción nueva del Estado, de la sociedad y del ordenamiento jurídico, basados en hondos principios históricos y filosóficos, no habrá revolución generadora de derecho”, escribió el entonces joven abogado.⁷

En este punto es necesario reflexionar sobre las palabras de Fidel para entender el contexto y el contenido de conceptos tan importantes como “insurrección” y “revolución”; para él, el proceso revolucionario pasa por una etapa previa que lo desencadena, esto es, sin la insurrección no será posible iniciar ese movi-

⁷ Mencia, *El grito del Moncada*, p. 610. Por otro lado, recordemos que Batista había justificado el golpe de Estado como una acción revolucionaria generadora de derecho.

miento legítimo contra los usurpadores del poder, que han obtenido por la fuerza y el engaño y, por eso mismo, constituyen gobiernos opresores. El derrocamiento de una tiranía, por sí mismo, se convertirá en un movimiento de avanzada; de lo contrario, no pasará de ser una asonada o sedición para asaltar el poder. La insurrección se transformará en un instrumento “legítimo” de lucha para liberarse de la opresión política. La etapa posterior al golpe del 10 de marzo fue para Fidel Castro el espacio para denunciar ese desequilibrio que sólo podrá romperse de acuerdo con la tradición revolucionaria del liberalismo, donde la insurrección adquirió su significado moderno de movimiento en contra de la opresión del pueblo, mediante el derribamiento del gobierno existente. Fue la Revolución francesa la que le dio un carácter universal, es decir, aplicable a toda sociedad, cuando, en la célebre *Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano* (artículo 35), consignó que si el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección se convertirá, para los pueblos e individuos, en “el más sagrado de los derechos y en el más indispensable de los deberes”.⁸

Para la juventud ortodoxa radicalizada, con Fidel a la cabeza, la restauración democrática es la tarea histórica de su generación y su destino ineludible, pues hay que salvar a la patria de la degradación de la política.

Establecer esta serie de premisas nos permitirá identificar, por otro lado, el verdadero desafío, la disputa por el poder, como escribió Castro a un amigo de entonces:

[...] sólo faltaría, después, que los exitados priistas se postularan en cualquiera de estos frentes y tendríamos el punto de partida perfecto para la verdadera lucha nuestra: de un lado todos los criminales, ladrones, politiqueros, apóstatas traidores y corrompidos, repartiéndose la República, y de otro, lo que queda de limpio,

⁸ Sobre esta parte del pensamiento de Fidel Castro confróntese la serie de escritos relacionados con la denuncia del golpe militar, aparte de los ya citados: “¿Qué diferencia hay?”, “Yo acuso”, y “Recuento crítico del PPC(O)”. Véase, Miriam Fernández Sosa, *op. cit.*, p. 11-31.

idealista y sinceramente revolucionario en Cuba junto al pueblo. Mientras más pronto se produjera esa división sería mejor.⁹

En efecto, los argumentos planteados por Fidel Castro establecen, por llamarlo de algún modo, el derecho a disputar el poder a una clase política integrada por políticos corruptos y oportunistas, que además oprimen a una sociedad indefensa, sin derechos políticos.¹⁰ Esta disputa buscará restablecer los mecanismos mediadores entre el poder y la sociedad; sin embargo, aquí encontramos un asunto importantísimo: la solución de rompimiento con la clase política tradicional, como lo plantea Castro, establecía una *salida autoritaria y radical*, pues planteaba la liquidación de la elite política adueñada en ese momento del poder.

En el documento de denuncia antes citado, Castro aludió a este corte al señalar la carencia de una “fórmula política” sustentada en una filosofía política que, además, simbolizara las aspiraciones de la sociedad en ese momento histórico:

[...] politiqueros sin pueblo, en todo caso convertidos en asaltantes del poder. Sin una concepción nueva del Estado, de la sociedad y del ordenamiento jurídico, basados en hondos principios históricos y filosóficos, no habrá revolución generadora de derecho —y rematará— [...] nunca los reaccionarios, los retrógrados, los que sirven intereses de camarillas ambiciosas: éstos serán siempre delincuentes comunes para quienes jamás estará justificado el asalto al poder.¹¹

⁹ Fidel Castro a Luis Conte, en Conte, *Cartas del presidio*.

¹⁰ Un indignado Castro profundizará en ese sentido: “¿Y esos que se pasaron a las filas del enemigo buscando actas de senadores y representantes; qué hacían dentro del Partido del Pueblo? Esos terratenientes, millonarios y explotadores de campesinos y obreros ¿qué hacían dentro del partido cuyo deber primero es la justicia social? Mientras las masas luchaban en la calle esos hombres estaban prostituyendo a la ortodoxia, apoyándose en las dirigencias y aspirando a convertirla en un partido tradicional más. ¡Magnífica lección para el futuro! *Ibid.* El adjetivo “priista” debe entenderse en el contexto cubano, es decir, en relación con los partidarios del derrocado presidente Carlos Prío.

¹¹ En otro documento, se extendió esta argumentación al resto de la clase política cubana cuando reclamaba: “Los que no pudieron hacer del país lo que mil veces prometieron teniendo en sus manos el poder [...] los que, si bien no ahogaron la expresión

El Tribunal de Garantías Constitucionales determinó que no había elementos para enjuiciar a Fulgencio Batista debido a que su poder era resultado de una “revolución” y que ésta era la fuente de la ley. Con tal respuesta, y el consiguiente reacomodo de la clase política en la nueva situación, los radicales de la ortodoxia empezaron a organizar un movimiento encaminado a llevar a cabo su objetivo.

Segunda Parte

Justificada la insurrección como método político para combatir, una vez que los canales democráticos habían sido cerrados, el siguiente paso de los jóvenes radicales se encaminó a definir el tipo de organización para llevarla a cabo. Herederos de una rica tradición conspirativa e insurreccional como alternativa política, la discusión sobre la forma de hacerla resurgir empezó desde el mismo año de 1952. Diversos agrupamientos de carácter insurreccional¹² surgieron como respuesta al golpe del 10 de marzo. En

serena de la libertad, tampoco contribuyeron a hacerla justa y eterna para nuestro país, para arrancar de raíz de nuestra historia el trágico golpe insólito [...] Ni puede triunfar en el ánimo y la conciencia popular otra idea como no sea la desaparición total de este estado latente, de este caos infecto donde nos han sumido tanto los culpables del atentado madrugador a las instituciones nacionales, como los que han podido ver en calma el crimen.” Véase “A la Nación”, documento conocido como “Manifiesto del Moncada”, en Mencia, *El grito...*, vol. II, p. 628.

¹² Entre los organismos fundados a partir de 1952 y hasta 1955 encontramos a la Triple A, encabezada por Aureliano Sánchez Arango y financiada por el depuesto presidente Prío; Agrupación Montecristi, encabezada por Justo Carrillo; Acción Libertadora, radicada en la provincia de Oriente y encabezada por Raúl del Mazo; en la misma región, Acción Revolucionaria Oriental, fundada por Frank País; Directorio Revolucionario, fundado por los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria, encabezados por José Antonio Echeverría; Directorio Revolucionario 13 de Marzo, columna guerrillera formada en el Escambray a la muerte de Echeverría por Rolando Cubela y Faure Chomón; Movimiento Nacionalista Revolucionario, encabezado por el profesor universitario Rafael García Bárcena; y, por último, pero no al último, Movimiento 26 de Julio, encabezado por Fidel Castro. Al margen de estos grupos, hubo otros cuyas motivaciones insurreccionales eran muy discutibles, como la organización encabezada por Rolando Masferrer, el Movimiento Socialista Revolucionario.

ese sentido, Fidel Castro y sus camaradas de la ortodoxia no fueron los únicos que pensaron en rebelarse; la diferencia radicaba, en primer lugar, como hemos visto, en la justificación para hacerlo y, en segundo, en el tipo de organización creada para tal fin.

El problema del tipo de insurrección giraba en torno al papel de los militares y las organizaciones políticas que apoyarían las acciones. Para Castro, convertido en líder indiscutido de los radicales ortodoxos, la insurrección no debería depender de ningún complot militar ni mucho menos de la conducción política de algún político de viejo cuño.

El rompimiento con la clase política era claro; no había posibilidad de llegar a una verdadera revolución si ésta no se desligaba del pasado político y sus representantes. Por eso, los radicales ortodoxos formaron una organización paramilitar, donde predominaba más la disciplina y la obediencia que la discusión política.

Aprovechando el entusiasmo juvenil de la ortodoxia, además de los contactos que su frustrada campaña electoral le había proporcionado, Castro avanzó en la organización de células compuestas por diez o quince integrantes. El reclutamiento se aceleró a partir de la división del mismo partido ortodoxo a principios de 1953, cuando su Consejo Director Nacional se escindió en tres fracciones al discutir la política de alianzas con otros partidos para luchar contra Batista.

La frustración política entre la joven generación fue en aumento, como lo sintetiza la frase de Fidel al salir de la reunión donde se dividió la ortodoxia: “Vámonos de aquí. Con estos políticos no se puede contar para hacer la revolución.” Este sentimiento de insatisfacción fue el aglutinante que, en torno a la insurrección, permitió a Castro reclutar a cada uno de los miembros de las células de su movimiento.

Tal vez con excepción del mismo Fidel, los miembros del incipiente movimiento insurreccional tendrían motivaciones de inconformidad que todavía no racionalizan políticamente. Había, sí, un profundo sentimiento de rechazo a lo que estaba pasando en el país, situación que llevaría a la acción directa, más allá de las definiciones políticas que cada quien pudiera dar a sus inquietudes.

tudes. Un participante de este proceso recordaría un par de décadas después:

Yo no tenía ni una conciencia marxista ni comunista. Sencillamente, las prédicas de Chibás me habían despertado una conciencia de rechazo contra todo lo que estaba ocurriendo[...] Nunca había estudiado teoría política. Sólo me guiaba por los discursos de Chibás, y por aquellas denuncias de Fidel. Nosotros éramos ortodoxos, teníamos mucha disposición de lucha, odiábamos a Batista, y esto era lo que llevaba a adoptar aquella actitud de rebeldía intransigente contra el régimen.¹³

La estrategia del proceso insurreccional se ha explicado como el inicio de un movimiento más amplio, es decir, de una revolución. Los hermanos Castro, cada uno por su lado, han dicho que la acción armada era el comienzo para motivar al pueblo a levantarse en contra del régimen e iniciar un programa de “liberación nacional”, en beneficio de los sectores populares, además de restablecer la Constitución de 1940.

La participación popular está condicionada por la acción de un pequeño grupo que guíe, dirija y conduzca el proceso. El movimiento insurreccional, en palabras de Raúl Castro, será el pequeño motor que eche andar el gran motor de la revolución. Convenida del poder de la voluntad, la insurrección castrista se basa en un ideal romántico del levantamiento popular por medio de la imitación, y no en el trabajo político ni en los acuerdos con otros sectores organizados de la sociedad. También es interesante observar que la insurrección es urbana y la participación campesina, por lo menos al principio, brilla por su ausencia. Y como todo

¹³ Orbelín Hernández a Mario Mencía, en Mencía *Tiempos...*, p. 60. Melba Hernández, por su parte, recuerda la formación del movimiento en los siguientes términos: “En nuestras filas, en aquella época, jamás se hablaba de comunismo, socialismo o marxismo-leninismo como ideología, sino del día en que, cuando la Revolución se hiciera del poder, todas las propiedades de la aristocracia se entregarían al pueblo y las utilizarían los niños por los que luchábamos [...] El problema de la explotación de los trabajadores no se discutía pero sí nos referíamos a sus salarios, a cómo se abusaba del obrero y del campesino”. Szulc, *op. cit.*, p. 253.

depende de factores muy inestables, la táctica militar tendrá que ajustarse al desarrollo de los acontecimientos. La insurrección castrista pretende generar un gran movimiento de masas a partir de la identificación de ciertos ideales y aspiraciones de la sociedad, condensados en un programa político, y dirigirlo al calor del combate. Ésta fue la concepción que se impuso en la mente de Castro y sus más allegados colaboradores cuando emprendieron la acción del asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.

Si bien el intento de tomar tal instalación militar en la oriental ciudad de Santiago fracasó en sus objetivos inmediatos, sirvió como un escalón para perfeccionar el movimiento y, al mismo tiempo, reafirmar su estrategia insurreccional, aunque en mayor escala y tomando en cuenta la necesidad de ampliar su base política.

Al reflexionar sobre estos acontecimientos, Fidel Castro acomoda y racionaliza sus ideas hasta darles forma en un coherente y sólido discurso conocido como *La historia me absolverá*, que presentó como alegato en su defensa jurídica para justificar el intento de insurrección del Moncada.

A consecuencia del movimiento armado, Fidel Castro se perfiló como una de las figuras políticas más importantes de Cuba. Su liderazgo como el más serio opositor a Batista cobraría dimensiones nacionales en poco tiempo. La etapa de la prisión en la Isla de Pinos serviría al movimiento para iniciar un proceso de educación política entre los sobrevivientes del Moncada. Durante esa fase, el mismo Fidel reconocería la necesidad de formar un nuevo movimiento, sobre todo ante la situación política imperante: Batista anunciaba la celebración de elecciones generales para legitimar su poder.

Fidel urgía a sus seguidores a mantener los principios, pues a partir de ellos “surgirá más purificado y limpio el ideal redentor”. La campaña electoral de 1954 confirmó la pretensión de barrer con el pasado, al definirse como una batalla de ladrones que se repartían la república. A la vez que se justificaba la necesidad de cambio, Castro parecía ser el único capaz de llevarlo a cabo, al representar la encarnación de los buenos sentimientos de la nación. Para ello contaba con un método: la insurrección; había que

construir el instrumento: el Movimiento 26 de Julio. El 14 de agosto, desde la soledad de la prisión, Fidel escribía:

En primer lugar yo debo organizar a los hombres del 26 de Julio y unir en un irrompible haz a todos los combatientes, los del exilio, la prisión y la calle. La importancia de tal núcleo humano perfectamente disciplinado, constituye un valor incalculable a los efectos de la formación de cuadros de lucha para la organización insurreccional o cívica. Es evidente que un gran movimiento cívico o político tiene que tener la fuerza necesaria para ganar el poder por medios pacíficos o revolucionarios; de lo contrario correrá el riesgo que le arrebaten el poder.¹⁴

En la prisión, Fidel fue pensando las características que el movimiento habría de tener en su nueva etapa. Observaba, estudiaba y reflexionaba; miraba con cierta distancia los acontecimientos. De este modo, concluyó que había tres condiciones para construir la organización: la ideología —que ante todo era un conjunto de principios de carácter universal—, la disciplina y el mando. La unión de estos elementos conformaría la fuerza de la organización, como él mismo expresaba:

[...] No puede organizarse un movimiento donde todo mundo se crea con derecho a emitir declaraciones públicas sin consultar a nadie; ni puede esperarse nada de aquel que se integre por hom-

¹⁴ Cfr. Conte, *op. cit.*, p. 60 y Carlos Franqui, *El diario de la revolución cubana*, p. 107. Este párrafo es muy estimulante para las especulaciones. Recordemos que, de acuerdo con el propio Fidel, para asaltar el cuartel Moncada se reclutaron alrededor de 1200 hombres, de los cuales participarían finalmente 120 más 40 encargados de hacer la misma operación en Bayamo; si a éstos restamos las bajas producidas por la represión posterior al 26 de julio, que según recuento de Marta Rojas, *La generación del centenario y el juicio del Moncada*, fueron 61, nos quedamos con 99 sobrevivientes. En la cita señalada, Fidel contabilizó alrededor de 80 jóvenes como el núcleo a partir del cual debería partir la organización del movimiento; entonces, ¿dónde quedó el millar de reclutas que no participó ni en el Moncada ni en Bayamo? Sólo hay dos explicaciones, o nunca existieron o la organización insurreccional en 1953 era tan deficiente que se disolvió al saberse el destino de sus principales dirigentes. Queda todavía por preguntarnos: ¿por qué Castro no los menciona en este momento? ¿Por qué sólo se refiere a los que participaron y sobrevivieron en estos hechos de armas?

bres anárquicos que a la primera discrepancia toman sendero que estimen más conveniente, desgarrando y destruyendo el vehículo. El aparato de propaganda y organización debe ser tal y tan poderoso que destruya implacablemente al que trate de crear tendencias, camarillas, cismas o alzarse contra el movimiento.¹⁵

La renovada organización insurreccional pensada por Castro pasaba por una cuidadosa selección de los futuros cuadros y por una sostenida campaña propagandística destinada a divulgar los ideales del movimiento, basados en esos principios universales expuestos en *La historia me absolverá*. En ambos casos, Fidel se mostraría inflexible en su aplicación: celoso de la unidad del movimiento, no permitiría fisura alguna, tal como ocurriría en la época de la Sierra Maestra con la polémica entablada con la rama urbana del 26 de Julio, ni posteriormente con los aliados de izquierda al triunfar la revolución. Por lo que respecta a la acción propagandística, sería de carácter constante, para extender y dar a conocer las actividades del movimiento, y recurriría a la prensa escrita y la radio.

La estancia en la Isla de Pinos se convertiría en el experimento piloto para la formación de los cuadros que continuarían la lucha. Formados de acuerdo con la idea de Fidel del deber ser revolucionario, los veteranos del Moncada, y posteriormente los sobrevivientes del *Granma* y de la Sierra Maestra, se convertirían en los cuadros políticos del castrismo, en tanto ideología política sustituta de la filosofía original del Movimiento 26 de Julio.

Siete meses después de su llegada a la Isla de Pinos, una campaña pro amnistía de presos políticos logró que los moncadistas lograran salir de la cárcel. Inmediatamente, Castro empezó a aprovechar cualquier ocasión para hacer propaganda en favor del movimiento insurreccional y denunciar con insistencia la ilegalidad del régimen pese a la celebración de elecciones generales.

En los primeros días de junio tuvieron lugar varias importantes reuniones para discutir las características del Movimiento 26 de

¹⁵ *Ibid.*, p. 61, y Franqui, *op. cit.*, p. 107.

Julio, llamado así como un homenaje a los caídos en el asalto al Moncada. La concepción insurreccional original se mantenía sin mayores cambios: un pequeño grupo desencadenaría todo el proceso por medio de la acción armada, pero ahora incorporaría un aparato logístico en apoyo de la insurrección, que ampliaría su acción no sólo en el plano urbano, sino también en el rural. La estructura del movimiento mostraba pocas variantes respecto a la empleada en el Moncada: la dirección seguía centralizada en un pequeño grupo que concentraba los poderes político-militares, apoyado por varios comités, como los de guerra (armamento y acción), finanzas, propaganda, obrero y juvenil, responsables estos últimos de las relaciones con los militantes.

Para entonces, también quedó claro que Fidel partiría hacia el exterior para preparar el primer contingente armado y desembarcar en la isla; que la dirección nacional del movimiento sería una tanto al interior como al exterior; que la lucha armada debería ser apoyada por la acción política en las ciudades. Fidel Castro se convertiría en una suerte de profeta de la revolución, al anunciarla en cada uno de sus artículos y discursos; declaraba que, al igual que el Apóstol nacional José Martí, desembarcaría con sus seguidores para ser “mártires o héroes” y anunciaba que 1956 sería el año del inicio de la saga revolucionaria. Llevado al exilio, el profeta de la gesta preparaba con cuidado la espada.

En 1957 se logró consolidar la guerrilla y, con ella, cambiar la táctica fidelista. Durante los primeros meses del año aún se concebía a la guerrilla como un *instrumento más* para derribar a Batista; no era la herramienta que estaba por encima de otras actividades del movimiento insurreccional, como por ejemplo las acciones urbanas. Esta situación resulta evidente, ya que sin el apoyo logístico montado por el Movimiento 26 de Julio en Santiago de Cuba, al mando de Frank País, el experimento guerrillero no hubiera tenido éxito.

Al respecto, cabe mencionar la capacidad organizativa y de dirección de Frank País. En agosto de 1956 había viajado a México para entrevistarse con Fidel, de quien consiguió una mayor autonomía para dirigir al Movimiento en Oriente, que llegó a con-

vertir en una sólida estructura clandestina de eficaz acción, como se hizo patente cuando los expedicionarios del *Granma* arribaron a las costas cubanas en diciembre de 1956 (para cumplir la promesa de Fidel) y luego fueron dispersados y diezmados por el ejército cubano. Los famosos 12 del *Granma* pudieron reagruparse gracias a la intervención de los campesinos de la zona, quienes los rastrearon y pusieron en lugar seguro.

La organización de Frank País, por medio de Celia Sánchez, llegó hasta esos lugares e inició una incipiente base de apoyo sin la cual hubiera sido casi imposible que la guerrilla sobreviviera. La organización campesina era una realidad cuando Fidel y sus menguadas fuerzas pudieron reagruparse en la finca de Creencio “Mongo” Pérez después de la desbandada de Alegría de Pío. Los del *Granma* no dependieron de sus propias fuerzas para reagruparse e iniciar las acciones guerrilleras, como tampoco para incrementar el número de efectivos del Ejército Rebelde. Aun el trabajo político de Celia Sánchez no hubiera sido posible, en primer lugar, sin el amplio conocimiento que tenía de la zona y sus hombres y, en segundo término, sin la organización clásica propia de los campesinos de la zona. El prestigio personal de Celia Sánchez entre los campesinos serranos y la participación de familias enteras en las actividades logísticas de ayuda a los rebeldes explican la facilidad con que el ejército rebelde pudo reponer fuerzas y emprender la ofensiva militar que en poco tiempo los colocaría en el poder. Fueron, pues, varios factores previos los que condicionaron el encubamiento de la fuerza guerrillera.

Los primeros meses de 1957 se invirtieron en reorganizar lo que quedaba de las fuerzas expedicionarias, mientras el movimiento de las ciudades ponía en marcha, nuevamente, la logística para llevar pertrechos a la Sierra. En febrero, Fidel anunció la reactivación del movimiento al publicitar su “Llamamiento al pueblo de Cuba”, donde reafirmó las bases del proceso insurreccional como se había concebido desde la época del Moncada, es decir, con un chispazo militar combinado con un levantamiento popular en las ciudades, pero ahora entendido a largo plazo, como una guerra prolongada.

Sin embargo, al entrar en contacto con los campesinos, Fidel cifraría todo su entusiasmo en el futuro militar de la guerrilla, luego de los primeros reclutamientos y las primeras exitosas acciones armadas, como la toma del cuartel de La Plata, pero sobre todo la batalla del Uvero. Ahí, por primera vez, el ejército rebelde se enfrentó con una fuerza bien armada y entrenada del ejército cubano, y salió airoso de ello. Un observador más o menos imparcial en esos momentos, como el Che Guevara, observaba los inconvenientes, ya que las condiciones para el desarrollo de la guerrilla eran todavía incipientes, pues el campesinado no estaba preparado para convertirse en un sujeto revolucionario, al mismo tiempo que dentro del movimiento había ambigüedad respecto a la táctica insurreccional que debía seguirse en esos momentos: la concepción que predominaba en el 26 de Julio era una combinación de levantamiento popular en las ciudades acompañado por los golpes que la guerrilla pudiera dar en el campo al ejército, frente a una concepción militarista con base campesina que veía con desdén cualquier otra opción.

La propaganda, en ese sentido, serviría a Fidel para crear una imagen favorable a la guerrilla y a su propia personalidad como líder revolucionario en aras de su nueva opción táctica. En febrero de 1957 el reportero Herbert Matthews, del *New York Times*, realizaría la primera entrevista a Fidel en plena Sierra Maestra, la cual tuvo un gran efecto propagandístico, pues hizo de Castro una celebridad internacional y de los guerrilleros una especie de Robin Hoods del Caribe.

Después de la entrevista con Matthews, Fidel insistiría ante la Dirección Nacional en que todo el movimiento trabajara para la guerrilla y que la rama urbana se subordinara al ejército rebelde al recaudar y distribuir los recursos destinados a la Sierra; Fidel quería una aparato de ayuda, no de lucha. En un comunicado enviado a Celia Sánchez, un enfático Castro expresaba: “Todas las armas, todas las balas y todos los pertrechos a la Sierra.” Por el contrario, el movimiento en las ciudades, llamado “el Llano”, planteaba la necesidad de descentralizar las decisiones, debido al aisla-

miento de Fidel y la guerrilla en la Sierra, para poder incrementar las acciones de sabotaje en contra del régimen de Batista.

Una cada vez más intensa lucha interna amenazaba dividir al Movimiento 26 de Julio. Las discusiones entre el “Llano” y la “Sierra” iban más allá de la estrategia: se trataba de una discusión táctica. A mediados del 57, Frank País envió una extensa carta a Fidel Castro donde anunciaba la necesidad de reorganizar el movimiento, debido a la confusión reinante, y propuso redistribuir responsabilidades para evitar que la dirección se centralizara. El propósito de País era redistribuir el poder de acuerdo con la importancia y peso de cada una de las ramas del movimiento; de esa manera, por ejemplo, la dirección nacional del 26 de Julio quedaría integrada por seis coordinadores provinciales y un representante del ejército rebelde, al mismo tiempo que se crearían milicias armadas en todo el país y se redactaría un programa mínimo. La propuesta del Llano despojaba de cualquier papel estratégico a la guerrilla en el plano militar, mientras en el político Fidel era acotado por un programa doctrinal y una dirección donde era minoritaria la voz de la Sierra.

El debate interno se modificaría debido a dos acontecimientos, uno circunstancial y el otro con una clara intención de buscar alianzas para correr, por el momento, el centro de gravedad política hacia el centro. El primero, la muerte de Frank País, el 30 de julio, a manos de la policía de Santiago, alteraría significativamente las posibilidades de reformar la estructura del movimiento, pues, fuera de él, ningún otro dirigente del Llano estaba a la altura para atraer consensos en torno a una estrategia por encima de la órbita fidelista, como se vio al caer en el olvido el plan de reforma propuesto por País antes de su muerte. El segundo hecho fue el arreglo al que Fidel llegó con dos figuras representativas de la ortodoxia, Raúl Chibás y Felipe Pazos, al dar a conocer el “Manifiesto de la Sierra”.

Tal documento era la expresión de una alianza entre el núcleo duro del 26 de Julio, es decir, la Sierra, y el ala moderada del partido ortodoxo, pues en él se establecía el compromiso de convocar a elecciones una vez que se derrocara a Batista y crear un

llamado Frente Cívico Revolucionario con una estrategia común de lucha, además de nombrar a un presidente provisional. Al verlo como un “compromiso” necesario, los dirigentes de la Sierra pensaban que era un alto en la “trayectoria revolucionaria”, pues la correlación de fuerzas no les era favorable todavía para imponer su perspectiva insurreccional.

Los desacuerdos tácticos y estratégicos dentro del 26 de Julio siguieron latentes y aumentaron las tensiones. Testimonios de ambos bandos dan fe de esta disputa que estallaría después del llamamiento a la huelga general lanzado por el Llano en abril de 1958.

Resulta asombroso que un asunto de tal magnitud para el futuro de la revolución haya tenido tan poca atención por parte de los historiadores cubanos, quienes presentan al 26 de julio como una organización homogénea en torno al liderazgo de Fidel. Un observador atento, y participante activo de estos acontecimientos, como el Che Guevara, nos ha dejado uno de los pocos testimonios de los dirigentes de la Sierra en la disputa contra el Llano. En sus “Pasajes de la guerra revolucionaria”, el Che admite la debilidad de la guerrilla frente al Llano, ya “que en la práctica, habían conducido los asuntos del 26 de Julio”. Además, reconocía la pugna subterránea entre las dos concepciones insurreccionales respecto a la conducción de la guerra; las milicias del Llano eran vistas en la Sierra como tropas paralelas sin control guerrillero. Sin embargo, Guevara iba más a fondo del contenido de la disputa, pues advertía, atinadamente, que se debía a las diferentes bases sociales que cada uno había generado en el proceso mismo.

Por un lado, el Llano tenía actividades marcadamente urbanas y apostaba a la caída del régimen a partir de la huelga general en las ciudades, acompañada de sabotajes, mientras la Sierra tenía en los campesinos su principal fuente de apoyo social y pensaba en el asedio de la ciudad desde el campo.

Las diferencias en cuanto a la táctica insurreccional resultaban de estas condiciones: a partir del entorno social en que habían actuado los guerrilleros de la Sierra y por su contacto con el campesinado, incorporaron una demanda básica para éste, como lo es la reforma agraria.

El fracaso de la huelga general organizada por el Llano el 9 de abril de 1958 dio la oportunidad de ajustar las cuentas en la dirección nacional del 26 de Julio. En una decisiva reunión en la Sierra Maestra, en el mes de mayo, la dirigencia del Llano fue literalmente juzgada y desmantelada por la guerrilla. A partir de esa junta clave, de la cual sólo queda el testimonio del Che Guevara, Fidel asumiría el control total sobre el Movimiento 26 de Julio en lo político y militar, con su cargo de *Comandante en jefe*.

Fidel dio preponderancia al aparato militar, representado por la guerrilla de la Sierra Maestra, como la táctica para la toma del poder a partir del apoyo campesino. Sin embargo, quedan varios cabos sueltos que impiden explicar el porqué del triunfo revolucionario desde que la insurrección se ruralizara.

El desarrollo de la experiencia guerrillera en Cuba tocó cuerdas muy sensibles en *toda* la sociedad que permitieron ganar consensos sociales y políticos inalcanzables para la base campesina por sí misma. La actividad guerrillera tiene importancia a partir de lo que hoy llamamos *sociedad civil*, cuando se rebela contra el poder. A lo largo de 1958, la sociedad cubana contempló con horror la impunidad de los cuerpos de seguridad de Batista contra los rebeldes y sus simpatizantes; al actuar sin ningún control, la represión se extendió a estratos cada vez más amplios de la sociedad. La reacción de la sociedad en su conjunto ante ello permitió la caída de Batista después de su frustrada ofensiva contra la guerrilla a mediados de ese año. Sin ningún consenso social en su favor, pese a que había legitimado su mandato, Batista debió abandonar la isla el último día de 1958. El 1° de enero del año siguiente la ciudad de Santiago se rindió al ejército rebelde y recibió como libertador a Fidel.

Una rápida experiencia insurreccional, hasta entonces inédita en América latina, abrió los cauces para una nueva oleada revolucionaria en la región acosada por la guerra fría y el anticomunismo, oleada compuesta por movimientos de liberación nacional que reclamaban, como hoy, una mayor apertura democrática.

Bibliografía comentada

Las referencias citadas a continuación se señalan en la medida en que resulten accesibles para el lector mexicano. Si bien muchas de ellas actualmente sólo se pueden consultar en bibliotecas, las consignamos por su utilidad para comprender el proceso insurreccional cubano. Al mismo tiempo, consideramos el mismo criterio en cuanto a las obras editadas en Cuba, en virtud del intenso intercambio cultural que tradicionalmente ha habido entre ese país y México; el lector con mente investigativa podrá encontrar, con suerte, algunos de estos libros a la venta en librerías mexicanas. Las referencias bibliográficas se listan en orden alfabético, acompañadas de un pequeño comentario sobre su contenido, con el objetivo de guiar al lector.

Castro, Fidel, *La historia me absolverá*.

El documento clásico de la revolución cubana. De él hay diversas ediciones, tanto mexicanas como cubanas, donde se presenta la filosofía original del movimiento. Ahí Castro reúne sus ideas respecto a la insurrección, el liberalismo y las reformas sociales. Escrito en prisión, sigue siendo un texto de obligada consulta para los que quieran adentrarse en la revolución cubana.

_____, *La revolución cubana*, 5a. ed., México, Era, 1983, 636 p.

Esta recopilación, efectuada por Adolfo Sánchez, presenta documentos de diversa índole, incluido *La historia me absolverá*, que ayudan a comprender las etapas que atravesó el movimiento hasta la salida de Batista.

Conte Agüero, Luis, *Cartas del presidio*, La Habana, Lex, 1959, 93 p.

El autor recopila una serie de cartas escritas por Fidel donde expone sus ideas durante el periodo de la Isla de Pinos.

Algunas cartas pueden consultarse en Marta Harnecker, *La estrategia política de Fidel del Moncada a la victoria*, México, Nuestro Tiempo, 1986, 151 p. Quitando el sesgo partidista de la autora, el libro

tiene interés por el material que reproduce de los archivos del Consejo de Estado Cubano.

Dubois, Jules, *Fidel Castro. ¿Rebelde, libertador o dictador?*, Buenos Aires, Grijalbo, 1959, 334 p.

Documentado libro escrito a manera de reportaje periodístico; se encontrarán en él muchos de los documentos citados en este ensayo.

Fernández Sosa, Miriam, *Selección de lecturas de historia del pensamiento político cubano*, vol. II, cuarta parte, La Habana, Universidad de La Habana, 1989, 329 p.

Aquí podemos encontrar, entre otros, todos los artículos escritos por Fidel Castro después del golpe de marzo de 1952.

Franqui, Carlos, *Diario de la revolución cubana*, Barcelona, R. Torres, 1976, 754 p.

Recopilación de cartas, comunicados y testimonios del Movimiento 26 de Julio y el ejército rebelde. Tal vez sea la recopilación documental más completa para estudiar al Movimiento 26 de Julio y el ejército rebelde.

Guevara, Ernesto, *Obra revolucionaria*, 10a. ed., México, Era, 622 p.

Recopilación de artículos, discursos y conferencias del Che Guevara respecto a los problemas del proceso revolucionario desde la perspectiva insurreccional campesina. Invaluable documento para establecer las bases ideológicas del castrismo.

Mencia, Mario, *Tiempos precursores*, La Habana, Ciencias Sociales, 1986, 356 p.

_____, *El grito del Moncada*, 2 vols., La Habana, Política, 1986.

_____, *La prisión fecunda*, La Habana, Política, 1986, 356 p.

El autor es uno de los historiadores más serios de la revolución cubana; en esta trilogía nos muestra detalladamente todas las etapas por las que pasa el movimiento revolucionario cubano; reproduce abundante documentación de la época de difícil acceso, empleada por diversos historiadores extranjeros. Muy útil pese a la línea ideológica oficial que impera en él.

Moncada, antecedentes y preparativos, 1952-1953, La Habana, Fuerzas Armadas Revolucionarias, 1972, 263 p.

Recopilación de reportajes periodísticos de la época, cartas y demás documentación que describe muy bien los preparativos del asalto al Cuartel Moncada.

Szulc, Tad, *Fidel: un retrato crítico*, Barcelona, Grijalbo, 1987, 789 p.

Biografía no autorizada por Fidel Castro, que relaciona la vida de Fidel con la historia contemporánea de Cuba. Interesante y útil por el material a que tuvo acceso el autor, además de las entrevistas que sostuvo con los veteranos del Moncada y la Sierra.

Thomas, Hugh, *Cuba: la lucha por la libertad, 1762-1970*, 2 vols., Barcelona, Grijalbo, 1973.

Libro monumental sobre la historia de Cuba desde la llegada de los españoles hasta el triunfo castrista en 1959. Interesante por el manejo de la investigación histórica y los datos que proporciona; en él se puede encontrar material hemerográfico de la época y entrevistas con los actores del proceso.

DE LA CRÍTICA DE LAS ARMAS A LAS ARMAS DE LA CRÍTICA: LA INSURRECCIÓN EN VENEZUELA

Ruperto Retana Ramírez

Introducción

Venezuela comenzó un proceso de transición democrática pactada a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. La transición convenida entre Acción Democrática, COPEI y URD excluye a los comunistas del poder. Éstos, que habían desempeñado un importante papel para poner fin a la tiranía e instaurar un régimen democrático, irán a la lucha armada con el objeto de implantar un régimen con un carácter distinto del encabezado por Betancourt para resolver la problemática nacional. Venezuela vive entonces uno de los movimientos insurreccionales más importantes de la década de los sesenta en América latina. A diferencia de los diversos movimientos surgidos o reimpulsados en muchos países a raíz del triunfo de la revolución cubana, fue el Partido Comunista el que encabezó la lucha armada, en alianza, principalmente, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y constituyó así la tendencia revolucionaria de la transición democrática venezolana.

La situación de crisis interna del país y del propio gobierno surgido con base en el Pacto de Punto Fijo, más la influencia de la Cuba revolucionaria son poderosos factores que confluyen en la decisión de optar por la vía violenta del cambio; también están presentes los antecedentes insurreccionales del propio Partido Comunista de Venezuela (PCV).

La tendencia revolucionaria, ante su exclusión del gabinete ejecutivo y la hostilidad desatada contra ella y los sectores sociales que se manifestaban por reivindicaciones económicas y sociales, recorre el camino de iniciar la lucha armada, primero como autodefensa ante las acciones de los cuerpos represivos o paramilitares del gobierno de coalición encabezado por AD y luego como parte de la estrategia para la toma del poder. En la lucha armada pueden distinguirse tres grandes momentos; en el primero se asigna importancia fundamental a la lucha urbana y a la sublevación de sectores del ejército contrarios al gobierno de Betancourt; en el segundo, ante el fracaso de la insurrección urbana, se impulsa primordialmente la lucha guerrillera, que en el primer momento había sido concebida como retaguardia de la insurrección urbana. En el tercero, tanto PCV como MIR toman conciencia de la derrota —no sin grandes desgarramientos internos— e inician una difícil y penosa rectificación para insertarse en la vía electoral-democrática del cambio. En el presente trabajo se abordan fundamentalmente estas tres etapas de la lucha armada, a las cuales hemos denominado, respectivamente: el camino de las armas, la crítica de las armas y las armas de la crítica; antes se examina la participación del PCV en la lucha contra la dictadura (1948-1958) y su exclusión del Pacto de Punto Fijo.

1. La democracia excluyente: el Pacto de Punto Fijo

El Pacto de Punto Fijo (13 de octubre de 1958) es muy importante porque establece los principios rectores en que se sustentará el sistema político venezolano. Este famoso pacto¹ tenía anteceden-

¹ El cual establece: a) el compromiso de practicar una política nacional de largo alcance, sustentada en el derecho efectivo al sufragio y en la garantía de la unidad de las agrupaciones para la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes; b) defensa de la legalidad; c) gobierno de unidad nacional, de tal manera que ninguna de las organizaciones mantuviera la hegemonía en el gabinete ejecutivo; d) programa mínimo común capaz de afianzar la democracia como sistema; e) unidad compatible con la eventualidad de diversas candidaturas. "Pacto de Punto Fijo", en *Documentos que hicieron historia*, t. II, Caracas, Presidencia de la República, 1988, p. 455-457.

tes en las conversaciones sostenidas en el exilio por los tres principales líderes de AD, COPEI y URD: Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, respectivamente, en las que acordaron el compromiso de sus organizaciones partidistas de gobernar juntas en Venezuela.

Mediante este pacto, Venezuela se encaminará a un régimen de partidos que dominará el escenario político contemporáneo y constituirá uno de los primeros modelos de transición democrática pactada en América latina, aunque excluyente de la tendencia comunista y de otras fuerzas radicales.

Durante la dictadura, particularmente en su última fase, se conforman las fuerzas políticas y militares que, tanto dentro del régimen dictatorial como en la oposición, pondrán fin a la misma y se reagruparán para establecer un nuevo régimen. La dictadura, como se sabe, se había iniciado con el golpe de Estado que derrocó en 1948 al primer gobierno de AD.²

El PCV, a diferencia de AD, que plantea como estrategia fundamental derrocar el régimen dictatorial, aprovecha la situación creada por los militares para plantear los problemas nacionales y sortear la represión:

[...] Acción Democrática expedirá manifiestos de ocasión generalmente agitativos, pero los comunistas enfocarán sin pausas los grandes problemas del país. Estragada por cuatro años de recio martirologio, Acción Democrática perderá en el cementerio y en la cárcel a sus jefes más insignes. El Partido Comunista logrará mantener, hasta el 23 de enero, a la mayoría de sus dirigentes más calificados.³

Las definiciones políticas del PCV en la última fase de la dictadura van a ser de gran trascendencia. Plantean como objetivo prin-

² Para un estudio de las distintas fases que atraviesa la dictadura y la oposición del PCV y de AD, véase Ruperto Retana Ramírez, *Izquierda y modernidad en América Latina: Venezuela, Cuba y México*, México, UAEM-CCYDEL-UNAM, 1996.

³ Domingo Alberto Rangel, citado por Elena Plaza, *El 23 de enero de 1958*, Caracas, G&T, 1978, p. 47.

cial la conquista de la democracia, para lo cual impulsan la formación de un amplio frente nacional anticontinuísta. De acuerdo con este objetivo, a propuesta suya se constituye la Junta Patriótica (junio de 1957) con la representación de URD, AD y COPEI. Dicho organismo tenía como objetivos luchar por el respeto a la constitucionalidad, impedir la reelección de Marcos Pérez Jiménez y celebrar elecciones libres, además de pugnar por un gobierno democrático respetuoso de las libertades públicas.

La Junta impulsó la integración de organismos de la sociedad civil para luchar contra la dictadura; así, constituyó primero el Comité Femenino y luego el Comité Obrero con la representación de las fuerzas opositoras en el movimiento laboral. A principios de octubre coordinó acciones con el combativo Frente Universitario. Pronto comenzó la participación de agrupaciones que pasaron abiertamente a la oposición, tales como de asociaciones de médicos, ingenieros, abogados, periodistas, etcétera; también se incorporaron connotados intelectuales y personajes de la propia oligarquía.

Dos instituciones clave muestran el grado de inconformidad con la dictadura: el ejército y la iglesia. En las filas castrenses se preparaba una sublevación contra Pérez Jiménez; en la iglesia algunos sectores se manifestaban abiertamente contra la continuidad del gobierno.

El año de 1958 es recibido con el primer alzamiento militar contra la dictadura, que termina rápidamente aplastado, pero el hecho revela ante la nación que el ejército, principal baluarte de Marcos Pérez Jiménez, ha perdido su unidad. La estabilidad de la dictadura, que parecía inamovible, mostraba signos de deterioro.

Después del fallido alzamiento militar, la Junta Patriótica convoca a la nación a una huelga general, la cual estalla el 21 de enero, con amplio respaldo en Caracas y en diversas regiones del interior. El gobierno responde intensificando la represión, no sólo contra los opositores civiles, sino contra numerosos oficiales del ejército, lo que genera mayor inconformidad en las filas castrenses, particularmente en la oficialidad militar.

En el contexto de la huelga nacional organizada por la Junta Patriótica, los militares antiperezjimenistas realizan una subleva-

ción militar que pone rápidamente fin a la dictadura el 23 de enero. Pérez Jiménez y sus colaboradores más cercanos salen exiliados del país. Se constituye luego un Gobierno Provisional que encabeza el contralmirante Wolfgang Larrazábal, uno de los artífices más connotados de la sublevación militar.

La burguesía, que se había sumado a la lucha contra Pérez Jiménez en el último momento, ocupa los puestos claves del nuevo gabinete⁴ y aprovecha la nueva situación en su favor, ya que realiza un pacto obrero-patronal en defensa del nuevo régimen, a cambio de prorrogar las revisiones contractuales con los sindicatos y de la renuncia de éstos en la práctica al derecho de huelga; luego agregará el congelamiento de los salarios. Los partidos políticos, incluido el PCV, colocan por delante la unidad nacional para impedir una vuelta al régimen autoritario; ponen el acento en el apoyo al nuevo gobierno y respaldan el pacto obrero-patronal.

El Gobierno Provisional enfrenta con éxito dos intentonas golpistas y logra encaminar el país hacia elecciones libres. En tanto, los partidos políticos reorganizan sus filas. Al principio buscan algunas fórmulas para lanzar candidatos de unidad, pero fracasan, por lo que apoyan a distintos candidatos presidenciales. Acción Democrática postula a Rómulo Betancourt, los socialcristianos de COPEI a Rafael Caldera y la centro-izquierdista URD a Wolfgang Larrazábal. El PCV apoya la candidatura de este último.

Los resultados de las elecciones (17 de diciembre) favorecen a Rómulo Betancourt. Wolfgang Larrazábal ocupa el segundo lugar. El PCV ocupa el cuarto lugar de la votación para la Asamblea Constituyente. Betancourt, consecuente con el Pacto de Punto Fijo, con el argumento de que su filosofía es incompatible con la democracia, excluye del poder a los comunistas. Éstos consideran que, de no incluirseles en el gobierno de unidad nacional, las cosas podrían complicarse. El camino a la vía armada era apenas una posibilidad. Otros acontecimientos encaminarán al PCV por esa senda.

⁴ *Ibid.*, p. 103-104.

2. *El camino de las armas*

La lucha armada en Venezuela puede dividirse, reitero, en los siguientes momentos: a) el camino de las armas, b) la crítica de las armas y c) las armas de la crítica. Estas fases son indicativas del círculo completo que desarrolla la lucha armada.

El PCV no va a la lucha armada inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno; antes bien, busca un cambio en las políticas del mismo. Así, a mediados de 1959, plantea la “política del viraje”, consistente en buscar un cambio en la orientación del régimen favorable a la solución de las demandas populares, para que de esa manera el gobierno logre el apoyo de las masas y de los propios comunistas. Mediante esa propuesta buscaba, además, converger con las fuerzas opositoras a la administración que actuaban dentro de AD y de URD, para que presionaran en el mismo sentido. Hacia fines de 1959, el PCV plantea explícitamente la posibilidad de ser incluido en el gobierno de coalición.⁵

Diversos factores van a conjugarse para que el PCV modifique su actitud: la formación del MIR como desprendimiento de AD y la salida de URD de la coalición gubernamental, así como la hostilidad de Betancourt. Todo ello en un contexto de crisis económica, de crecientes protestas populares y de inconformidad en ciertos sectores del ejército. Pero las motivaciones principales de los comunistas para cambiar de táctica para hacer la revolución en Venezuela parten de la fuerte influencia de la revolución cubana y de la manera en que aprecian, conforme a esa influencia, la situación del país a partir de los acontecimientos del 23 de enero de 1958.

Por otra parte, el ámbito internacional condiciona el proceso de lucha interna. El desarrollo de la revolución cubana y la política castrista respecto a los movimientos revolucionarios del conti-

⁵ “Somos contrarios a la ruptura de la coalición y a la formación de un gobierno unipartidista o bipartidista en estos momentos. Pero estimamos que sería deseable su evolución hasta la izquierda, donde tengan cabida otros sectores más progresistas, inclusive los comunistas”. “Resolución del XXI Pleno del CC del PCV”, en Agustín Blanco Muñoz. *La lucha armada: hablan cinco jefes*, Caracas, UCV, 1980, p. 97.

nente adquieren un alto grado de confrontación con EU, lo cual agudiza la política de *Guerra Fría*. En tanto los comunistas de Venezuela se alínean al lado de Cuba y de la Unión Soviética, Betancourt lo hace con los EU. Aquéllos y éste obtendrán el respaldo del respectivo campo mundial en que se ubican.

En el interior del país se va formando un importante movimiento opositor al régimen de Rómulo Betancourt. El sector más radical de su partido, AD, se escinde para formar el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en abril de 1960. La nueva agrupación se define marxista-leninista y se pronuncia por la lucha armada antes que los comunistas.⁶ El PCV verá en este movimiento un fuerte competidor a su izquierda por constituirse en la vanguardia de la revolución. El MIR dejaba, a su vez, a AD sin fuerza en el estudiantado, ámbito de donde procedían fundamentalmente sus militantes y lugar donde se reclutaba a muchos de los miembros que participarían en la lucha armada.

Al mismo tiempo que sucedía esta escisión en AD, ocurría un levantamiento militar caracterizado de derecha y dirigido por el general Castro León. Aunque rápidamente controlado, mostró la inconformidad de las Fuerzas Armadas. Todos los partidos condenan el alzamiento, incluido el PCV. En julio, el atentado contra Rómulo Betancourt, auspiciado por el dictador de República Dominicana, enrarece aun más el clima político del país.

En agosto, la negativa del urredista ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Betancourt, Ignacio Luis Arcaya, de firmar la Declaración de San José, donde se condenaba al régimen cubano, desencadena una crisis dentro de la coalición gubernamental, lo que lleva a URD a retirarse de la misma poco después. Este hecho ensancha el bloque opositor al gobierno, constituido

⁶ El MIR surge como una escisión de AD, encabezada por su Buró Juvenil. Éste critica a AD y al gobierno por seguir una línea política de conciliación con la burguesía y de capitulación ante el imperialismo. El CEN de AD suspende a todo el Buró Juvenil. El 13 de abril se constituye el "Comité Nacional de AD de Izquierda", para transformarse el 16 de agosto en MIR. En éste participan, entre otros: Domingo Alberto Rangel, Américo Martín, Moisés Moleiro, Lino Martínez, Octavio Lepage, Gumersindo Rodríguez, Simón Sáez Mérida, Jorge Dager, Héctor Malavé Mata y Celso Fortul.

ahora por PCV, MIR y URD y, dentro del ejército, tendencias tanto de derecha como de izquierda.

En octubre y noviembre de 1960, el movimiento antigubernamental alcanza su máxima expresión. El Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con fuerte presencia de miristas y comunistas, llama a huelga general y a la “rebelión popular”. Estallan huelgas de empleados bancarios y telefonistas y fuertes disturbios estudiantiles con saldo de muertos y heridos. La jornada culmina con más de 4 000 detenidos y la amenaza de enjuiciamiento contra el PCV y el MIR por el delito de rebelión militar.⁷

A estas alturas comienzan a actuar los primeros grupos de autodefensa armados. Éstos se habían formado desde el periodo de lucha contra la dictadura y encontraron condiciones propicias para su desarrollo gracias a la represión betancourtista. Sin embargo, se organizaron sobre los hechos, ya que la dirección del PCV no tomaba la decisión de promover la lucha armada y de asignarles un papel en la misma.

En coincidencia con la ola de protestas sociales contra Betancourt y con las acciones de los grupos armados de autodefensa, el XXV Pleno del CC (octubre de 1960) llama no a transformar la política del gobierno, sino a cambiar el régimen mismo, para establecer un gobierno “patriótico y democrático”. Tres meses después el III Congreso ratificará la nueva línea política.

Esta conclusión de nuevo régimen surge del análisis efectuado ahora tanto del 23 de enero como de la situación del país. En el examen del primero no se menciona el carácter nacional de la lucha contra la dictadura, como se hiciera en su momento. Por cierto, este enfoque coincide con el efectuado acerca de la revolución cubana, que pone el acento no en el movimiento nacional contra la dictadura de Batista, sino en la lucha guerrillera. El 23 de enero, según la nueva apreciación, logró cambios importantes en la forma de gobierno, pero no modificó en lo esencial el carácter del Estado venezolano.

⁷ Pastor Heydra, *La izquierda, una autocrítica perpetua (50 años de encuentros y desencuentros del marxismo en Venezuela)*, Caracas, UCV, 1981, p. 120.

Los líderes comunistas coincidirán en que el error básico del 23 de enero fue la carencia de un objetivo de poder, ya que mantuvieron las mismas consignas elaboradas contra la dictadura.⁸ Lamentarán no haberse planteado formar parte del gobierno, por considerar que no habían participado en el movimiento con el fin de tener acceso al poder, sino “para devolverle al pueblo las libertades democráticas”.⁹ En cuanto a la situación nacional, al analizar los sujetos sociales del cambio siguen sosteniendo tesis tradicionales. Ven a la clase obrera como “la más consecuente y abanderada de la democratización más profunda”; al campesinado, de manera particular los pobres del campo, como la fuerza más firme en la lucha contra el latifundio. En seguida están las clases medias, estudiantes, profesionales, pequeños comerciantes y artesanos, que necesitan mejorar sus condiciones de vida. También están los “sectores de la burguesía nacional”, comprometidos con un desarrollo industrial independiente. La burguesía venezolana, pues, podía tomar parte en la revolución, porque ésta se dirigía contra el imperialismo y el latifundismo, porque el capitalismo tendría todavía un carácter progresista.

Mención especial requiere el papel asignado al ejército. La revolución venezolana no se concibe sin la participación del ejército, de “los militares que recojan las tradiciones heroicas del ejército libertador”. En esto radica una de sus diferencias con el proceso cubano y con otros de Latinoamérica y es la idea más novedosa en la política del PCV.

⁸ “Nosotros —dice Pompeyo Márquez— quisimos corregir los errores del 58 en forma apresurada, desesperada. Lo que no hicimos en el 58 lo quisimos hacer después a toda marcha. Entonces comenzamos a dar bandazos [...] Y además hay un factor externo que fue la Revolución Cubana, la frustración nuestra ante la victoria de la Revolución Cubana, y de inmediato la manía de comparar cómo se habían resuelto los problemas de por allá y cómo se habían resuelto aquí...”, en Blanco, *op. cit.*, p. 85.

⁹ Guillermo García Ponce, expresa que ésta era una idea compartida por el comité cívico-militar; el teniente José Luis Fernández, coordinador del golpe en la Escuela Militar; el capitán José Vicente Azopardo, jefe de la insurrección en las Fuerzas Navales; Óscar Centeno y otros oficiales de la marina plantearon incluso que no participara ningún militar en la Junta.

En enero de 1961, se promulga la nueva Constitución Nacional, en la cual el gobierno de Betancourt da sustento al régimen democrático venezolano y consolida en el plano formal la “revolución democrática”. A pesar de la nueva Carta Magna, la situación en Venezuela discurre por caminos distintos a los formalmente estipulados. Casi un mes después de promulgada aquélla, se produce otro intento de golpe de Estado de derecha.

Respecto a la izquierda, Betancourt percibe que marcha hacia una estrategia de tipo insurreccional¹⁰ y se apresta a pasar a la ofensiva, para lo cual busca el apoyo de sectores que en otro tiempo se lo negaban, pero que, al sentirse amenazados por la izquierda, deciden brindárselo. Tal es el caso de la poderosa Fedecámaras (aglutinante de los sectores económicamente más poderosos de Venezuela), el ejército y la Iglesia; pero también, y esto hay que destacarlo, Betancourt contaba con el respaldo de sectores populares que, aunque afectados por la crisis económica, veían en la violencia de la izquierda una amenaza a sus aspiraciones de mejorar su nivel de vida y consolidar el régimen democrático.

La estrategia de Betancourt consistió en provocar a los comunistas y al MIR,¹¹ acentuar cada vez más las presiones sobre esas agrupaciones, con el propósito de empujarlas a posiciones más radicales, de arrebatarles las bases de sustento social con que contaban, ilegalizarlas, aislarlas y, una vez logrado esto, derrotarlas militarmente.

2.1. Una pequeña isla señala el camino

El PCV en su III Congreso (marzo de 1961), elabora una formulación general sobre el sentido de la revolución en Venezuela: la im-

¹⁰ En un discurso del 28 de noviembre dice: “se está proyectando una insurrección de los sectores extremistas, de los cuales han sido episodios una serie de acontecimientos violentos que se han realizado a lo largo del país”; citado en Julio Godio, *El movimiento obrero venezolano, 1945-1980*, Caracas, Ateneo de Caracas, 1982, p. 232.

¹¹ Gustavo Machado dice que les puso el peine enfrente; sin embargo, Teodoro Petkoff considera que Betancourt quería un Partido Comunista en la oposición, dentro de los marcos de la democracia representativa; lo que no esperaba era que el proceso se desarrollara dentro de una confrontación armada. En Blanco, *op. cit.*, p. 192.

posibilidad de recorrer un camino pacífico. La influencia de la revolución cubana es muy grande; se ve como el camino a seguir: “Una pequeña isla [...] nos está señalando el camino que habremos de recorrer los pueblos latinoamericanos”. Asimismo, se adhiere a la *I Declaración de la Habana*. Reafirma la posición de considerar al gobierno de Betancourt aliado del imperialismo, de violar la propia Constitución y de ser obstáculo para el progreso democrático del país.

La vía armada no era, sin embargo, algo nuevo en el PCV. A lo largo de su historia, que comienza en 1931, en su seno se conformaron dos grandes tendencias: la pro-electoral, que en general fue dominante, y la insurreccional. Debido a ello surgieron constantes pugnas internas, muchas de las cuales terminaron con expulsiones y escisiones del partido. A principios de la década de los treinta, cuando surge en la clandestinidad como un proyecto antidictatorial y modernizador, influido por las políticas de la Internacional, proclama la lucha armada; no otra cosa significa la cita de la consigna de Lenin al final de su primer manifiesto: “El fusil en el hombro es la única garantía de la democracia”.¹²

En México, años antes, exiliados de la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre los que se hallaban algunos comunistas venezolanos, fundaron el Partido Revolucionario Venezolano. Sus principales acciones fueron el asalto y la toma de la guarnición holandesa de Curazao (junio de 1929), situada cerca de la costa venezolana, y la fallida invasión a Coro, con la finalidad de derrocar al dictador Juan Vicente Gómez que había alcanzado el poder en 1908. Consideraban entonces que, de no existir fuerzas suficientes para presentar batalla al ejército, organizarían una guerra de guerrillas.¹³

¹² “Manifiesto del Partido Comunista al pueblo trabajador de Venezuela”, en José Agustín Catalá, *Libro Rojo. La verdad de las actividades comunistas en Venezuela, 1923-1935*, Caracas, 1972, p. 26.

¹³ “Resolución del CCE del Partido Revolucionario Venezolano sobre la situación actual de Venezuela, línea política del Partido y plan de acción inmediata”, presentada y aprobada en la sesión del 26 de septiembre de 1929, citada por Guillermo García Ponce, *Memorias de un general de la utopía*, Caracas, COTRAGRAF, 1992, p. 139.

Durante la etapa de los frentes populares (1935-1941), una vez que muere Gómez, continúa la pugna entre ambas corrientes; la electoral, que mantiene mayoría en la dirección del partido, y la insurreccional, que sigue siendo minoritaria.¹⁴ La oposición se extiende hasta 1946, cuando se realiza un congreso de unidad. En éste se critica a ambas tendencias, a una por *browderista* y otra por su proclividad a la insurrección.¹⁵

Durante la dictadura perezjimenista los comunistas se encuentran divididos en dos agrupaciones: el propio PCV y el Partido Comunista Venezolano Unitario (PCVU); sin embargo, a la política de unidad que siguió con las otras fuerzas políticas correspondió una similar dentro de sus filas, de tal manera que, al finalizar la dictadura, había logrado una consistente unidad, gracias a la cual, a la hora de decidir la orientación armada del partido, la gran mayoría de sus dirigentes apoyaron ésta; ello no significaba que cesaran las divergencias en su interior, las cuales se manifestarían luego sobre todo en cuanto a las formas que adquiriría la lucha armada.

Es así como la vía armada encuentra a un PCV sólo aparentemente monolítico, porque en su seno se movían tendencias que irían reagrupándose de acuerdo con diferentes motivaciones. En un partido de corte leninista como era el PCV, las corrientes internas encontraban un espacio reducido para expresarse de modo franco. Teodoro Petkoff lo señala elocuentemente así: “[...] el peso

¹⁴ La corriente electoral fue encabezada por Jesús Faria, secretario general del PCV y la proinsurreccional por diversos dirigentes y en distintos momentos, entre ellos los hermanos Eduardo y Gerardo Machado, Salvador de la Plaza. Horacio Scott Power, Germán Tortosa, Ángel J. Márquez y Juancho Castro.

¹⁵ De esta última se dice: “tendencia a sustituir el lento y penoso trabajo de organización y de la educación de las masas, por la fraseología revolucionaria y las acciones desesperadas. Tendencia a la insurrección como única salida durante el periodo de López Contreras, guerra obrera y campesina contra el golpe reaccionario en vez de amplio frente democrático [...]”. *Tesis, acuerdos y resoluciones del Primer Congreso de los Comunistas*, Ediciones del CC del PCV, p. 24. Como se sabe, el *browderismo*, —por Earl Browder, secretario general del PC de los EU—, consistía en considerar que la alianza en la guerra entre Estados Unidos y la URSS significaba una era de cooperación; por tanto, cesaba la lucha de clases y era innecesaria la dictadura del proletariado y el propio partido comunista, en tanto que los países atrasados serían apoyados por EU; también sería innecesaria la lucha antiimperialista.

de la tradición monolítica y el temor a la acusación de fraccionalismo era tan grande que el fraccionalismo no era explícito. Como no lo fue en los años 61, 62, 63. Era una cosa un poco vergonzante. Uno se sentía en verdad como en pecado.”¹⁶

En función del problema sobre la forma o las formas que debería asumir la lucha armada se constituyen tres corrientes: la guerrillera, la golpista y la insurreccional.¹⁷ Para la primera, la guerrilla era, evidentemente, el eje de la lucha armada, aunque se discutía el tipo de guerrilla que convenía impulsar con base en las experiencias china, vietnamita y cubana. Para los golpistas, en cambio, el problema giraba en torno a las fuerzas armadas, a las cuales había que descomponer para provocar un golpe de Estado; consideraban que mientras peores estuvieran las cosas era mejor, ya que se radicalizarían las masas y en una coyuntura favorable habría una salida revolucionaria. La línea insurreccionalista era más global, porque concebía el movimiento de masas, la participación militar y, en general, una concurrencia de factores semejantes a los de la experiencia rusa.

Esta discusión sobre la forma de lucha armada que debía adoptarse en Venezuela da como resultado una opción consistente en combinar todas las formas de lucha posibles; en este caso, la lucha parlamentaria, la conspiración militar, los comandos urbanos y las guerrillas rurales. En la pugna de corrientes no estaba excluida la lucha generacional.¹⁸

Las lecturas en que se inspiraban eran las de los ideólogos vietnamitas, chinos y argelinos, en las que se hablaba de la combina-

¹⁶ En Blanco, *op. cit.*, p. 265. Este punto de vista coincide con el de otros dos relevantes dirigentes del proceso armado venezolano, Pompeyo Márquez, quien dice que eran tendencias “muy difusas” y de Guillermo García Ponce quien señala que las diferencias se expresaban en “las murmuraciones” y “en los corrillos”.

¹⁷ Esta clasificación de Pompeyo Márquez nos parece la más cercana a la realidad y coincide con la de Teodoro Petkoff, que habla también de tres tendencias similares: la ruralista, la urbanista y la golpista. Pompeyo Márquez se ubica a sí mismo en la insurreccionalista, en tanto que Teodoro Petkoff se sitúa en la guerrillera o ruralista.

¹⁸ Teodoro Petkoff, al referirse a Gustavo Machado y Eduardo Gallegos Mancera, representantes de la vieja guardia, dice: “no creo que nuestra generación esté condenada a repetir la misma cosa: ser sencillamente testimonios de una pasión revolucionaria, y testimonios a la vez de una enorme ineficacia revolucionaria.” En Blanco, *op. cit.*, p. 296.

ción de las diversas formas de lucha, y en las de los cubanos, que ponían énfasis en la formación del foco guerrillero, de acuerdo con las ideas del Che, divulgadas por Regis Debray.

3. *La crítica de las armas: ¿camino sin regreso?*

Cuba se yergue ante los comunistas venezolanos como el gran ejemplo a seguir. Sus respuestas a la contrarrevolución interna y externa contribuyen a incrementar la popularidad del gobierno revolucionario en toda América latina; las figuras de Fidel Castro y el Che Guevara se alzan en todo el continente, sobre todo después de Playa Girón (abril de 1961). La política exterior castrista consiste en apoyar e impulsar la revolución antiimperialista basada en el modelo guerrillero propio de la experiencia cubana. En esta apreciación el punto nodal reside en el foco guerrillero, sin repararse en las peculiaridades que hicieron posible su triunfo: organización del movimiento sindical, agrario, crisis económica, unidad nacional contra la dictadura, etcétera. En fin, se trataba de trasplantar la experiencia cubana en América latina, en una actitud ideologizada, voluntarista, desdeñosa de las realidades de los países latinoamericanos.

El PCV, sin embargo, sigue un camino distinto de la experiencia cubana, aunque finalmente termina por imponerse el modelo guerrillero. De la autodefensa armada pasa al enfrentamiento armado con las fuerzas del gobierno. Lo que en un primer momento significó defenderse de las agresiones de AD y de la policía mediante la constitución de grupos armados, no sancionados oficialmente por el Comité Central, en un segundo momento consistió en formalizar la vía armada como línea política para realizar la revolución en Venezuela.

A los grupos armados de la ciudad vienen a unirse numerosos focos guerrilleros rurales.¹⁹ Una vez que habían ido transitando el

¹⁹ Plaza, *op. cit.*, p. 176.

camino de la lucha armada, los comunistas ven un horizonte en el cual triunfarían inevitablemente y de manera rápida. Su consigna “Liberar a Venezuela o morir por la patria” no significaba otra cosa que la determinación última de vencer o morir. De aquí que Douglas Bravo diga que un día, cuando vuelven sobre el camino recorrido, se encuentran ante el hecho de que toda posibilidad de retirada está definitivamente cortada y les resulta ya imposible echarse para atrás; no les queda ya ninguna ilusión: o vencen o desaparecen.²⁰

En la seguridad del triunfo pesó el papel que los comunistas les asignaron a las Fuerzas Armadas. Como hemos visto, son un elemento clave en la estrategia del PCV; la insurrección podría hacerse contando o prescindiendo del ejército, pero nunca en contra de él. La crisis interna surgida en las Fuerzas Armadas parecía confirmar esta posición. La crisis prolongaba las divisiones que dieron lugar al 23 de enero y a los alzamientos posteriores, en el marco de una difícil situación para el gobierno.

Otro sector en que sustentaban su seguridad de triunfo era el movimiento sindical, donde tenían una notable influencia, particularmente en Caracas y en algunas regiones petroleras.²¹ Las políticas de recuperación económica impulsadas por el régimen de Betancourt generaban protestas en el sector sindical. Así ocurrió con la rebaja general de salarios, mejor conocida como la “Ley de Hambre”, causa de fuertes protestas callejeras que terminaron en enfrentamientos con la policía. Por otra parte, en el interior del movimiento sindical, la pugna entre miembros de AD y comunistas se intensificó, lo que condujo a expulsar del Comité Ejecutivo de la CTV a los dirigentes comunistas y miristas en el IV Congreso efectuado en noviembre de 1961. Estos líderes constituirán después la Confederación Unitaria de Trabajadores de Ve-

²⁰ Regis Debrays, *Ensayo sobre América Latina*, México, Era, 1981, p. 23.

²¹ En junio de 1961 las fuerzas enfrentadas en el plano político nacional se encuentran muy niveladas en el plano sindical: la CTV está integrada por 27 dirigentes de AD, 17 comunistas, nueve de URD, siete copeyanos y siete del MIR. Es decir, 34 oficialistas y 33 de la oposición; véase Heydra, *op. cit.*, p. 122-123.

nezuela. El Comité Ejecutivo quedará integrado fundamentalmente por comunistas de vieja data y por miristas.²²

Julio Godio, sin embargo, ha demostrado que, cuando la izquierda va a la insurrección, no sólo se aísla de la clase obrera, sino que parte de una apreciación equivocada del impacto de las políticas de AD sobre ese sector y sobre el agrario. En términos generales, la producción tanto industrial como agraria se incrementa un poco más de cinco por ciento, se eleva el nivel de consumo de las capas altas y medias que deciden entonces apoyar al régimen y así la izquierda su base social en la pequeña burguesía y en los trabajadores del campo.²³ Por otra parte, la formación de nuevos sindicatos, donde AD y COPEI cuentan con todas las facilidades legales en su favor contribuye a aislar a los comunistas. Los conflictos sindicales expresados a través de huelgas son, relativamente, poco trascendentes.

La visita del presidente de EU, John F. Kennedy, realizada a mediados de diciembre de 1961, poco después de que Venezuela rompiera relaciones con Cuba, confirma el apoyo al régimen de Betancourt y la importancia asignada a él para contener la influencia cubana no sólo en su país sino en el subcontinente. La política de la Alianza para el Progreso (ALPRO), aprobada por la OEA en la reunión de Punta del Este, Uruguay, diseñada para detener la ola revolucionaria en América latina mediante reformas económicas, políticas y sociales, encuentra acogida en los programas de gobierno venezolanos e incluso se logran algunos resultados que superan las metas trazadas por la ALPRO.

²² Horacio Scott Power, presidente, Américo Chacón, secretario general; Cruz A. Villegas, Bonaerge Villalobos, José Marcano, Manuel Taborda, Vicente Piñate, Carlos Muro, Roberto Hostos y Antonio Zambrano, secretarios ejecutivos.

²³ La Reforma Agraria permite al gobierno contar con el apoyo del empresariado rural capitalista y de los propios trabajadores agrícolas, obreros y "conqueros" que entre 1958 y 1963 vieron aumentar sus ingresos en un quince por ciento. Por otra parte, entre 1960 y 1964 la tasa de empleo en el sector industrial, aumentó; el valor de la producción en la industria creció 77 por ciento entre 1960 y 1966, y se generaron 141 000 nuevos empleos en este sector; los puestos de trabajo aumentan en 485 000, al tiempo que disminuye la tasa de desempleo de un trece a un nueve por ciento en 1966. Godio, *op. cit.*, p. 246-247.

Mientras tanto, el PCV, en noviembre de 1961, ratifica el carácter armado de la lucha y considera que el “foco principal es la ciudad”. Bajo la consigna de “Nuevo gobierno ya”, que sucede a la de “Renuncia Rómulo”, busca combinar la lucha armada en la ciudad donde actúan las Unidades Tácticas de Combate (UTC), con los efectivos militares y las guerrillas. La mejor coyuntura para llevar a la práctica esta política, se presenta a finales de 1961 y principios de 1962. La segunda división de AD, la pérdida del gobierno de la mayoría en la Cámara de Diputados y el estallido de una poderosa huelga del transporte que comienza en el estado Táchira y se extiende a todo el país, más la inconformidad en las filas castrenses y en diversos sectores sociales, constituyen los principales factores de dicha coyuntura.

Sin embargo, el PCV y el MIR no pudieron capitalizar el descontento manifiesto. Guillermo García Ponce dice que las masas se encontraban sin aliento, prácticamente desarmadas, porque se agotaron los proyectiles y explosivos y no tenían de dónde recibir armas para reabastecerse. “Hasta el último cartucho y la última botella —agrega— se habían consumido”.²⁴

3.1. La chispa que incendiaría la pradera

Con la idea de que un levantamiento militar sería la chispa que incendiaría la pradera, de acuerdo con la célebre frase de Mao Tse Tung, comunistas y miristas prepararon el alzamiento de Carúpano. Los jefes de la conspiración eran militares nacionalistas, progresistas, muchos de los cuales mantenían vinculaciones con el PCV y el MIR.²⁵

El argumento en que se fundaba el levantamiento era que la crisis había estallado en la clase obrera, en el campesinado, en los intelectuales, en los estudiantes y había que extenderla al ejérci-

²⁴ Guillermo García Ponce, citado por Heydra, *op. cit.*, p. 128.

²⁵ Guillermo García Ponce afirma que se reunía con unos 300 oficiales; otros actores hablan de la implicación de 30 o 40 oficiales influyentes en las filas del ejército.

to, el cual sería el detonante de una crisis general. Además, Molina Villegas, quien encabezaba la conspiración, había sido descubierto. El plan del alzamiento²⁶ comprendía a los efectivos militares opuestos al gobierno de Betancourt y no sólo los de Carúpano. La insurrección militar iba a ser acompañada por la actividad armada y no armada de sectores civiles nucleados en torno al PCV.

La conspiración llevada a la práctica el 4 de mayo fue rápidamente sofocada, debido a fallas que no sólo reflejaban problemas técnicos, sino insuficiencias más profundas relacionadas con el escaso nivel de desarrollo alcanzado por la izquierda militar y por el movimiento revolucionario en su conjunto.²⁷ En la práctica, el alzamiento de Carúpano se constituyó en un intento de golpe de Estado que subestimó el poder del gobierno y sobrevaloró las fuerzas de la izquierda insurreccional. La frase de “el gobiernito de Betancourt” y la convicción mesiánica de que el siguiente Congreso lo realizarían en el poder expresan claramente el análisis equivocado conforme al cual entraron en acción comunistas y miristas.

La reacción del régimen ante el alzamiento y la rápida derrota de Carúpano no se hace esperar: detenciones masivas, allanamientos y asaltos a sindicatos y liceos e inhabilitación del PCV y del MIR. El país vive una situación de virtual guerra civil: el gobierno y una parte de la oposición se enfrentaban con las armas.

Muchos de los principales dirigentes políticos del alzamiento siguen actuando en el Congreso Nacional; aquí, los diputados del PCV dicen recoger el programa proclamado por Carúpano el 4 de mayo.²⁸ Betancourt los toleró probablemente porque deseaba

²⁶ Pedro Ortega Díaz, en Blanco, *op. cit.*, p. 53-54. Según Teodoro Petkoff, el plan consistía en alzar la Infantería de Marina y tomar todo el litoral, lo cual era facilísimo, “puesto que los dos cuerpos armados principales estaban en nuestras manos, el Batallón de la Infantería y el 99. Entonces con eso, abrir las puertas, armar el gentío, montar las armas en los camiones, avanzar hasta Caracas, llegar hasta la Plaza de Catia, encontrarnos con el Motoblindado y con los tanques, avanzar sobre Miraflores. Simultáneamente debían alzarse Carúpano, Puerto Cabello, Fleming en Apure, Echeverría en Caracas.” *Ibid.*, p. 106.

²⁷ Plaza, *op. cit.*, p. 178.

²⁸ El programa de Carúpano, de corte nacionalista, constaba de cuatro puntos básicos: a) restablecer las libertades cívicas luego de desplazar al actual gobierno, b) constituir un

mantener el juego democrático conforme a la política que se había trazado y que en este y otros aspectos coincidía con los postulados de la ALPRO de ampliar la democracia en los países de América latina.

Al alzamiento de Carúpano siguió un mes después el de la principal base naval del país, Puerto Cabello, también conforme a la idea de un vasto alzamiento militar en el que participarían 32 guarniciones, que a la hora de los acontecimientos no intervienen, pues algunos de los soldados al parecer comprometidos finalmente no apoyaron la sublevación.²⁹

Descubierto el plan insurreccional con sus ramificaciones, Betancourt ordenó detener a los militares implicados y relevar de sus cargos a los que consideraba sospechosos. Esto hace apresurar los dispositivos del plan militar y el 2 de junio se sublevan, comandados por Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva y Víctor Hugo Morales, el Batallón de Infantería de Marina, el Destacamento 55 de la Guardia Nacional, la Policía Naval asentada en Puerto Cabello y el Destructor Zulia. Pese a contar con intensidad y fuerza muy superiores a las del levantamiento de Carúpano, la sublevación de Puerto Cabello fue sofocada al día siguiente, con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos.³⁰

Los focos guerrilleros existentes no tuvieron prácticamente ninguna actuación durante los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello; la derrota de esas sublevaciones militares los aisló; luego serían cercados y sufrirían duros golpes del ejército.

Puerto Cabello es una gran derrota para la lucha armada. Ahí es donde las fuerzas revolucionarias ponen su empeño más serio,

gobierno provisional que actuara en nombre del Congreso, c) hacer que las fuerzas armadas no siguieran siendo utilizadas como instrumento de represión y d) condenar el falso exilio impuesto a destacadas personalidades militares. Véase Luigi Vasalice, *La guerrilla castrista en Venezuela y sus protagonistas (1962-1969)*, Caracas, Centauro, 1979, p. 33.

²⁹ Para Manuel Quijada, uno de los principales contactos entre los militares y los partidos de izquierda, había 32 guarniciones comprometidas en la sublevación militar. Agustín Blanco Muñoz, *La conspiración cívico militar: guairazo, barcelonazo, carupanazo y portañazo*, Caracas, UCV, 1981, p. 33.

³⁰ Heydra, *op. cit.*, p. 130.

donde comprometen sus fuerzas fundamentales en el ejército. El PCV no había sabido aprovechar la valiosa participación de los militares nacionalistas antibentacourtistas y, con ello, perdió su mejor oportunidad de acceder al poder mediante un golpe de Estado cuyos protagonistas principales eran un grupo de oficiales, muchos de los cuales, por cierto, no tenían definiciones ideológicas favorables al comunismo.

Con Carúpano y Puerto Cabello la izquierda inicia un proceso de marginación respecto a bases sociales conquistadas hasta entonces; marginación que corresponde a una mejor estructura de su aparato militar.

3.2. La formación de las FALN

Después de la derrota de Carúpano y Puerto Cabello y de la inhabilitación del PCV y del MIR, el V Pleno del CC (julio de 1962) formula una visión global de la lucha armada. Se constituye el Frente de Liberación Nacional (FLN) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), para conducir al pueblo por la vía armada y establecer un “gobierno democrático y patriótico”. A la dirección de las FALN entran altos oficiales.³¹

Las FALN se conciben como la unión de las Fuerzas Armadas, los oficiales, los contingentes patrióticos nacionalistas de las mismas, con las UTC, los destacamentos guerrilleros, y con las fuerzas de izquierda civiles.

A partir del segundo semestre de 1962, el PCV pretende aprovechar sus acciones como medios eficaces de propaganda, pero muchas de ellas se volvieron en su contra y contribuyeron a un mayor aislamiento e incluso concitaron la condena pública. Sin embargo, el partido continuó justificándolas: “Cuando un combatiente de las FALN vuela un oleoducto; cuando una UTC reparte

³¹ Como Ponte Rodríguez, Moncada Vidal, Molina Villegas, Vegas Castejón y Víctor Hugo Morales, entre otros.

entre los hambrientos desempleados de los barrios caraqueños un camión de carne expropiada a los supermercados que Rockefeller tiene instalados en los barrios más lujosos de la capital; cuando se incendia una propiedad o instalación del enemigo, la Revolución Venezolana está abriéndose paso...”³²

Los objetivos de las acciones armadas se dirigían no sólo contra el gobierno, sino contra las empresas estadounidenses que lo apoyaban, en especial las compañías petroleras y los locales de firmas de esa nacionalidad como *Sears, Dupont*, etcétera. Otros ataques estaban destinados a llamar la atención internacional sobre lo que sucedía en Venezuela, como en el caso del secuestro del buque de la armada venezolana *Anzoátegui* o el del futbolista hispanoargentino Di Stéfano.

A finales de septiembre de 1963, con el proceso electoral enfrente, el destacamento “César Augusto Ríos” de las FALN atacó un tren de excursionistas —entre ellos mujeres y niños— que viajaba al parque El Encanto, en los alrededores de Caracas, con la finalidad de apoderarse de las armas que llevaban los militares de resguardo. Este hecho sirvió a Betancourt para ordenar la detención de los parlamentarios del PCV y del MIR.³³

Ante la proximidad de las elecciones del 1° de diciembre de 1963, los partidos empiezan a elegir a sus candidatos. En AD triunfa como tal Raúl Leoni, no grato a Betancourt. El PCV, por su parte, considera que una crisis política vendría como resultado de las elecciones y opta por “la abstención militante”.³⁴ Prepara una

³² “Frente de Liberación Nacional”, en Revista *Política*, núm. 90, México, 15 de enero de 1964, p. XXII.

³³ Se somete a juicio militar a Gustavo Machado, Jesús Faría, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce, Teodoro Petkoff, Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio.

³⁴ El FLN convoca a no votar y llama a los ciudadanos a no salir a la vía pública el 1° de diciembre o hacerlo armados y dispuestos a luchar: “¿Quién ganará las Elecciones Libres el 1° de diciembre con las calles en manos del Ejército de Briceño Linares y las bandas armadas de Betancourt? ¡No te arriesgues! No salgas de tu casa el 1° de diciembre, o sal armado y listo para la pelea. ¡”Contra la farsa electoral, abstención revolucionaria!” Alejandro del Corro [comp.], *Dossier*, núm. 36, “Venezuela, la violencia -V- FLN-FALN”, p. 4/305.

huelga general que impediría las elecciones, elabora el llamado “Plan Caracas”, que consistía en un levantamiento general de las UTC y el ataque a las principales tropas del gobierno en la capital. Contaba para ello con el suministro de armas de alto poder, pero el gobierno venezolano las descubre y comprueba que provienen de Cuba. A raíz de la acusación derivada de ello, la OEA, expulsa a Cuba de su seno.

Durante las elecciones, el PCV va a la “abstención militante” mediante acciones de comando en barrios urbanos, movilizaciones guerrilleras y sabotajes, pero fracasa. Los ciudadanos salen a votar masivamente para dar el triunfo al candidato de AD. El PCV y el MIR terminan derrotados en el proceso electoral; su aislamiento se acentúa aún más porque URD sí participó en las elecciones y en enero del 1964 abandonará la oposición al gobierno.

3.3. La guerra larga

La derrota electoral del 1º de diciembre de 1963 provoca un considerable descenso de la actividad del PCV. Después de los sufragios declara una tregua unilateral que extiende hasta mediados de 1964. Con esta pausa buscaba dar al gobierno de Leoni la oportunidad de probar sus intenciones pacificadoras; asimismo, pretendía demostrar a las otras fuerzas políticas su disposición a ceder en la lucha armada.

En su VI Pleno del CC (abril de 1964), el PCV plantea ya la necesidad de efectuar una retirada general; sin embargo, predomina la tendencia guerrillera. El pleno resuelve concentrarse en las guerrillas rurales, conforme a la tesis de guerra prolongada y al ejemplo de la vía china de revolución. Abandona entonces la idea de obtener el poder de una manera rápida; ahora el camino por recorrer sería más largo y otro el escenario: las zonas rurales de Venezuela. Las etapas de esta guerra larga serían tres, al igual que en China: ofensiva estratégica del enemigo y defensa estratégica de la guerrilla; defensa estratégica del enemigo y prepara-

ción de la contraofensiva guerrillera y contraofensiva guerrillera y retirada estratégica del enemigo.³⁵

El MIR comparte esta nueva política, pues considera que la forma principal de la lucha en Venezuela es la armada de carácter prolongado y que la guerra de guerrillas rural era estratégicamente idónea. Este tipo de lucha pretendía involucrar a todos los sectores revolucionarios y patrióticos en un amplio frente (FLN) contra el imperialismo y “sus lacayos”. Las tareas más importantes asignadas ahora a las UTC son las de desarrollar la lucha en la retaguardia del enemigo, en las ciudades, para servir de apoyo a la lucha guerrillera.³⁶ La tesis de que no era preciso esperar a que estuvieran maduras todas las condiciones objetivas y subjetivas para hacer la revolución, pregonada por los ideólogos cubanos, es asumida por la guerrilla venezolana, según la cual tales condiciones pueden fomentarse o acelerarse.

El VI Pleno significó el triunfo de la tendencia encabezada por Douglas Bravo, Freddy Muñoz y otros, quienes se encontraban al frente del aparato armado; en tanto, los dirigentes presos en el San Carlos —por igual los hermanos Machado y Jesús Faría que los líderes impulsores de la lucha urbana, aun con diferentes tendencias—, Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce empiezan a distanciarse de la nueva orientación que cobra la violencia en Venezuela.

Los frentes guerrilleros inician la aplicación de la nueva estrategia, pero ahora sobre la base de que el enemigo era fuerte y la guerrilla débil. Durante esta etapa, los mayores éxitos guerrilleros se lograron en el estado Lara, donde la influencia tanto política como armada del PCV-MIR alcanza sus mejores formas de expresión en todo el periodo. La guerrilla de Falcón también realiza algunas de sus acciones más importantes, como toma de poblados, emboścadas al ejército y sabotajes contra oleoductos. En Oriente, en el estado Monagas y en parte de los estados de Sucre

³⁵ Pompeyo Márquez en Blanco, *op. cit.*, p. 148. Douglas Bravo aplica este modelo a la guerrilla de Falcón.

³⁶ Cfr. *Confidencial*, núm. 5, 15 de agosto de 1964, p. 14-15.

y Anzoátegui se registran acciones guerrilleras constantes, lo mismo que en Balvento, donde el MIR tenía su foco guerrillero.

A raíz del célebre caso Smolen,³⁷ ocurrido en octubre de 1964, el gobierno desató una fuerte represión que destrozó los comandos urbanos de Caracas y muchos de sus líderes fueron aprehendidos. A partir de aquí se inicia el decaimiento de la acción en las zonas urbanas y el relativo desarrollo de las actividades guerrilleras en varias zonas rurales del país, aproximándose a la visión clásica de la guerrilla, como son los casos señalados antes.

En lo que se refiere a los frentes guerrilleros, a mediados de 1965 el ejército logra propinarles fuertes golpes, destruir sus bases campesinas y desarticular el aparato clandestino del PCV y del MIR.

4. Las armas de la crítica: la conciencia de la derrota

La conciencia de la derrota se irá imponiendo por la fuerza de las circunstancias. El PCV recorre un intenso y penoso camino que va de la llamada “paz democrática” hasta las elecciones de 1967. El mito acerca del triunfo de la revolución a través de la vía armada impedía al PCV y a su aparato armado comprender su derrota y obrar consecuentemente. La conciencia de la derrota nace con la táctica de paz democrática, la cual había empezado a manejarse desde mediados de 1964, pero es aprobada en el VII Pleno del Comité Central (abril de 1965). Este pleno resuelve luchar por un gobierno que haga realidad el programa de paz democrática, el cual comprendía los siguientes puntos: amnistía general, legalidad del PCV y del MIR, vigencia plena de la Constitución, libertad de prensa, medidas económicas en favor de las masas populares y política exterior de amistad con todos los pueblos del mundo.”³⁸

³⁷ Un comando de las FALN capturó al teniente coronel Michael Smolen, de la misión militar estadounidense, con el objeto de protestar por la intromisión de EU en la dirección y ejecución de la represión política. Guillemos García Ponce afirma que la represión desatada a raíz de este caso tocó puntos sensibles del partido y de la juventud comunistas; *El Túnel de San Carlos*, Caracas, La Muralla, 1968, p. 102.

³⁸ *Confidencial*, núm. 24.

La paz democrática sería producto de un acuerdo, no de una imposición gubernamental.

La nueva táctica implica un cambio en el tipo de gobierno por el cual se luchaba; ya no es el régimen patriótico y democrático, sino uno menos radical en cuanto al programa por desarrollar. Las resoluciones del pleno, por otra parte, planteaban la continuación de las operaciones guerrilleras y el fortalecimiento de las FALN-FLN en escala nacional. Por entonces la prensa cubana hablaba de Venezuela como “el Vietnam de Latinoamérica”.

La “paz democrática” no dejó de presentar ciertas ambigüedades. Para algunos significaba la rectificación de la vía armada y el inicio del repliegue militar; para otros era una especie de tregua establecida con el fin de recobrase de los golpes militares recibidos y luego impulsar nuevamente la lucha armada.

En este momento empiezan a perfilarse las nuevas tendencias que habrán de definir el destino de la lucha armada. Por un lado los partidarios del repliegue, sea definitivo o como tregua, y por otro los que prefieren continuar las hostilidades armadas. Estas tendencias habrán de definirse con mayor claridad unos meses después.

Los reveses sufridos durante 1965, particularmente el descubrimiento por la policía de un desembarco de armas y el secuestro y posterior muerte de Alberto Lovera, quien había quedado al frente de la jefatura militar del partido al caer preso Guillermo García Ponce, su titular, influyen en el ánimo de los dirigentes encarcelados en el San Carlos para decidirse a proponer un repliegue táctico. Estos líderes publican en noviembre dos cartas diferentes pero que coinciden en proponer la rectificación. A tal tendencia se enfrenta la dirigida por Douglas Bravo, quien sostiene la posición de guerra de guerrillas como método para realizar la revolución en Venezuela.

La táctica del repliegue divide a los comunistas, produce la separación del PCV y el MIR, la escisión de las FALN y las FLN, y el enfrentamiento con Fidel Castro.

Douglas Bravo y Fabricio Ojeda publican el “Manifiesto de Iracara”, donde expresan su rechazo a que la dirección del PCV abandone la lucha armada y su defensa de la primacía de la lucha

guerrillera rural dentro de la política general de las fuerzas revolucionarias.

Douglas Bravo, Luben Petkoff, Édgar Rodríguez Larralde, Freddy Carquez, Francisco Prada y Fabricio Ojeda, entre otros, se separan del PCV y adoptan para sí el nombre de “FLN-FALN”. En abril de 1966 reestructuran el aparato de las FALN-FLN y Douglas Bravo es elegido comandante de las FALN, Fabricio Ojeda presidente del FLN y Américo Martín secretario general.

El Buró Político del PCV, ya en plena pugna por el control del aparato militar y político del partido, condena el fraccionalismo del grupo de Douglas Bravo y ratifica que el proceso de reorganización de las FALN-FLN está bajo la dirección del Buró Político y de su Comisión Militar.³⁹ El grupo de Douglas Bravo es acusado de pretender la dirección del “movimiento liberador” sin el PCV y contra el PCV, de ser una fracción antipartido y ultraizquierdista.⁴⁰ El grupo de Douglas Bravo fundamenta su postura en la legalidad al defender los acuerdos del III Congreso.

Una vez expulsado Douglas Bravo del PCV, funda el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) junto con Fabricio Ojeda, Manuit Camero, Salvador de la Plaza, Ángel J. Márquez y otros. Poco después, la detención y posterior muerte en prisión de Fabricio Ojeda fue un duro golpe para la naciente agrupación proguerrillera. Fabricio Ojeda, procedente de una escisión de URD, era uno de los más prestigiados dirigentes guerrilleros del país.

A mediados de 1966, con excepción de Falcón y algunos focos de la zona de Portuguesa, el aparato del PCV estaba destruido. El desembarco de Luben Petkoff en las costas de Falcón al mando de unos catorce hombres, varios “patriotas latinoamericanos”, según Douglas Bravo, y cubanos, según el gobierno de Leoni, apenas si vienen a reanimar un poco las acciones guerrilleras, preocupadas ante todo por eludir el cerco militar que se les impu-

³⁹ *Confidencial*, núm. 31, p. 19-20.

⁴⁰ Véase Pompeyo Márquez, *La vigencia del PCV no está a discusión*, Caracas, Documentos, 1967, p. 93-102.

so y los bombardeos del ejército. Después, el mismo Lucen se separará de Douglas Bravo.

La división, la frustración, el derrotismo y las deserciones hacen presa del PCV-MIR y los fracasos de la lucha armada generan gran descontento. Pero no iba a ser fácil el regreso a la contienda legal. Los muertos, los presos, los desaparecidos y la tendencia guerrillera pesan mucho para reconocer abiertamente la derrota; de aquí que el PCV siga hablando, al igual que de sus intenciones de avanzar por la vía democrática, de sus destacamentos armados y de la necesidad de un cambio táctico para acopiar recursos y mejorar su aparato armado. Admitir la derrota irrita mucho al principio. No había una idea clara de cómo hacer el repliegue: “Nosotros —dice Guillermo García Ponce— no teníamos una dirección que asumiera esa responsabilidad. Nosotros hicimos incluso el repliegue, llenos de vergüenza, temerosos del chantaje, de las acusaciones.”⁴¹

A fines de 1966 el gobierno de Leoni percibe una agudización de la lucha interna en el seno del “extremismo” y amplía sus acciones contra el movimiento armado, principalmente contra los “duros”, los que estaban por la continuación de la violencia. La Primera Conferencia de las FALN-FLN realizada por el grupo encabezado por Douglas Bravo acuerda no llevar a cabo operaciones militares con el fin de evitar represalias y permitir la reorganización de sus disminuidas fuerzas.⁴²

4.1. La polémica con Castro. Revolución en problemas

El planteamiento de replegar el más importante foco guerrillero, en momentos en que la estrategia revolucionaria castrista en el continente atravesaba por momentos difíciles y se hacían preparativos para las acciones del Che en Bolivia, motiva que Fidel

⁴¹ Guillermo García Ponce en Blanco, *op. cit.*, p. 381.

⁴² Cfr. Alfredo Peña, *Conversaciones con Douglas Bravo*, Caracas, Ateneo de Caracas, 1978, p. 124.

Castro intervenga públicamente en la pugna escenificada en las filas del movimiento armado venezolano para apoyar al grupo guerrillero. Este forcejeo revelará a la larga que lo discutido iba más allá de la situación interna del PCV y abarcaba todo un concepto de la revolución en Latinoamérica.

En marzo de 1967, Fidel Castro impugna a la dirección del PCV por emprender un repliegue militar y recomendar la suspensión de acciones armadas con objeto de reagrupar sus fuerzas y prepararse para una nueva etapa revolucionaria.⁴³ La respuesta del PCV no se hace esperar: cuestiona la “arrogancia y autosuficiencia” de Fidel Castro por ser impropias de un jefe de Estado; a continuación señala diferencias sustanciales con respecto a su política, la primera de ellas que los comunistas venezolanos, si bien reconocen haberse inspirado y guiado por la revolución cubana, no aceptan el tutelaje de Castro pese a sus muchos méritos revolucionarios: “[...] no somos —declaran— ni seremos nunca agentes de Cuba en Venezuela, como no somos agentes de ningún otro partido comunista del mundo. Somos comunistas venezolanos y no admitimos tutela de nadie, por grandes que puedan ser sus méritos revolucionarios.”⁴⁴

Acusan a Fidel de querer asumir el papel de árbitro de los destinos revolucionarios de América latina y de pretender establecer una especie de papado revolucionario. Rechazan la acusación de cobardía y critican la tendencia del líder cubano a creerse en posesión del monopolio del valor y el coraje. Señalan que la historia del PCV está llena de actos heroicos, desde Curazao hasta la lucha guerrillera emprendida años antes. Finalmente, apuntan que si bien la desagradable polémica serviría al enemigo, habían llegado al límite y estaban obligados a contestar y a no tolerar “el insolente y provocativo lenguaje que empleó (Fidel) en su discurso del 13 de marzo”.

⁴³ “Nadie que pretenda llamarse comunista apoyará la jefatura oficial derechista que se opone a Douglas Bravo. Los partidos comunistas han de establecer las diferencias entre las guerrillas que están luchando en Venezuela y los derrotistas que desean renunciar a la lucha, quienes en la práctica quieren renunciar al movimiento guerrillero...” Discurso de Castro, 13 de marzo de 1967.

⁴⁴ *El amigo del pueblo*, marzo de 1967.

Pompeyo Márquez, asimismo, profundiza en la polémica sobre otros aspectos. Algunos de ellos se refieren a la ortodoxia revolucionaria fidelista, la teoría de las etapas y la vía no pacífica de la revolución venezolana. Márquez establece la pauta teórica más importante de todos esos años, en torno a aspectos tales como el otorgamiento de solidaridad sin condiciones impositivas, la imposibilidad de asumir una sola táctica de lucha en la escala continental, la inoperatividad de los trasplantes mecánicos y la independencia de cada partido para asumir la política juzgada por él más conveniente.

El debate significaba el alejamiento de la vía revolucionaria conforme al modelo guerrillero de un sector tanto del PCV como del MIR. Era una vuelta al encuentro con la realidad venezolana. En el fondo de la polémica se hallaba el problema de quién dirige la revolución y por qué caminos: ¿el grupo del Cuartel San Carlos donde estaban Márquez, García Ponce, Petkoff y los antiguos dirigentes del PCV, o el grupo emergente de Douglas Bravo, Núñez Tenorio, Pedro Duno, etcétera, quienes a la sazón se hallaban al frente de la lucha armada? Esta discusión reafirma en los dirigentes del PCV la idea de abandonar la senda armada, aunque no se atreven a plantearlo explícitamente; otra vez serán los hechos los que se encarguen de confirmarlo.

En mayo de 1967 se apresó a un grupo de guerrilleros después de que desembarcara en la costa venezolana; entre ellos venían algunos cubanos. El PCV no duda en condenar el entrometimiento de Cuba en los asuntos internos de Venezuela. En julio de 1967 no se lo invitó a la fundación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en La Habana. Esta reunión revelaba ya las discrepancias que provocaba el castrismo en el continente, expresadas en lo sucedido en Venezuela. Una resolución de las OLAS condenó “la torpe y oportunista posición de la jefatura del PCV, que, al abandonar la senda de la lucha armada traicionó principios revolucionarios para servir a los intereses del imperialismo y de las oligarquías...”⁴⁵ Fidel se habría referido en esa reunión a la

⁴⁵ Resolución de las OLAS, citada en Alexander Robert Jackson, *The Communist Party of Venezuela*, California, Hoover Institution Press, 1969, p. 200.

jefatura del PCV con el más duro lenguaje de la izquierda comunista: “grupo de traidores”, “enemigos de la revolución”, abandono de “los luchadores de la guerrilla” y tomar “la senda de la conciliación y sumisión”.⁴⁶

El peso de Fidel Castro a nivel internacional era muy grande. El PCV es visto como traidor por la gran mayoría de los partidos comunistas y los grupos guerrilleros y como una confirmación de que esas agrupaciones no podrían dirigir la revolución latinoamericana. Sin embargo, el PCV reafirma una capacidad de autonomía e independencia política como no había tenido en su historia.

La arraigada concepción de combinar todas las formas de lucha que había caracterizado la línea armada del PCV, con las variantes que ya hemos visto, le impide plantear con claridad y decisión el paso a la vía legal. El VIII Pleno del Comité Central (abril de 1967), de nuevo bajo la presidencia de Pompeyo Márquez, quien junto con Guillermo García Ponce y Teodoro Petkoff habían escapado del San Carlos, reconoce explícitamente la derrota y decreta una retirada militar, anunciada como “repliegue táctico”. Todavía sigue manteniendo la proposición doctrinaria de vía no pacífica de la revolución venezolana. Teodoro Petkoff explica el objeto de este viraje: “[...] proporcionar a la izquierda el balón de oxígeno de la lucha política, permitir a un movimiento vencido en el terreno militar apoyarse en los anchos márgenes políticos existentes en una democracia representativa, salir del aislamiento, reconstituirse”.⁴⁷

En estas circunstancias, la muerte del Che en Bolivia, que simbólicamente cerraba el ciclo de la revolución castrista en Latinoamérica, no fue una gran sorpresa para los comunistas de Venezuela; algunos interpretan el hecho como una confirmación de que el movimiento guerrillero no era capaz de crearlo todo.⁴⁸

Consecuente con la política del viraje, el PCV participa en las elecciones de 1968, a través de un organismo electoral denominado “Unión para Avanzar” (UPA). El gobierno de Leoni reconoce a

⁴⁶ *Ibid.*, p. 201.

⁴⁷ Teodoro Petkoff, *Proceso a la izquierda*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 64.

⁴⁸ Teodoro Petkoff, en Blanco, *op. cit.*, p. 232.

este organismo en el entendido de que era un aparato electoral del PCV y éste es nuevamente partícipe activo del proceso electoral venezolano, punto nodal de la participación política para acceder al poder por la vía democrática.

El triunfo del doctor Rafael Caldera de COPEI y la derrota de AD significaron un cambio político en el cual el PCV encontró mejores condiciones para actuar abiertamente en la legalidad y dar por concluida la última etapa de la lucha armada. Caldera decretó la política de “pacificación”, a la cual se acogió el PCV en marzo de 1969 para obtener su reconocimiento legal. El ciclo de la vía armada se había cerrado.

Conclusiones

El PCV realiza un aporte importante en la transición a la democracia en Venezuela al convertirse en un factor importante de la caída de la dictadura y de la formación del nuevo régimen democrático, que terminó por excluir a la tendencia comunista y a otras fuerzas políticas. La tendencia revolucionaria aglutinada en torno al PCV-MIR defendió su derecho a existir y a tomar el poder por la vía insurreccional.

En el proceso transicional esta tendencia reivindicó los intereses sociales identificados con la clase obrera, los campesinos, las capas medias y la propia burguesía nacional. Si bien la democracia resistió la embestida de la lucha armada en Venezuela, muestra que alejar a fuerzas radicales de las decisiones del poder y del libre juego para alcanzarlo abre las puertas a la violencia armada. Por otra parte, prueba que las limitaciones de la propia democracia, es decir, la falta de aplicación de los derechos constitucionales, aunadas a los momentos cruciales de crisis económica y social, no excluyen la opción armada del cambio social, aunque en Venezuela esa vía fue derrotada. Sin embargo, el énfasis puesto en una democracia social, no sólo política, contribuyó a generar una cultura que demanda mayor igualdad social y política en el país.

LA INSURRECCIÓN DEMOCRÁTICA EN NICARAGUA: CONSERVADORES, LIBERALES Y MARXISTAS

Juan Monroy García

Introducción

El triunfo de la revolución nicaragüense fue un acontecimiento significativo para América latina, pues abrió nuevas expectativas de cambio y de cancelación de la dependencia. Después de la victoria de la revolución cubana, en 1959, y aun cuando se desencadenó una serie de movimientos guerrilleros donde campeaba el ideal revolucionario, lograr el poder político a través de la lucha armada parecía utópico; Estados Unidos de América afinó sus mecanismos de combate contra la guerrilla en la región, para lo cual contó con la ayuda de los regímenes locales.

La década de los sesenta se caracterizó por el fracaso de los focos guerrilleros de inspiración castrista; la muerte de Ernesto Guevara el 8 de octubre de 1967 cerró un capítulo de la lucha revolucionaria en el subcontinente, y no precisamente en forma victoriosa. En la primera mitad del decenio siguiente, también sufrieron una dura y violenta derrota los movimientos guerrilleros urbanos, los cuales quisieron encontrar caminos diferentes de los de tipo rural. En estas circunstancias triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el 19 de julio de 1979; este movimiento fue fundado a principios de los sesenta, con una profunda inspiración castrista y con el propósito de recuperar la gesta heroica de Augusto C. Sandino como sustento nacionalista.

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental analizar y comparar los proyectos de insurrección por la democracia en Nicaragua, originados en diferentes momentos históricos por grupos políticos conservadores, liberales y por el FSLN como representante de la izquierda.

La hipótesis que pretendo confirmar en este ensayo es la de que la insurrección en Nicaragua responde a una necesidad de abrir nuevos espacios de participación política y por ende a la búsqueda de la democracia.

1. La dictadura somocista

En enero de 1933, cuando Estados Unidos entregó al gobierno nicaragüense el control de la Guardia Nacional (GN), tal como se había convenido en los acuerdos de paz firmados para terminar la resistencia de Augusto C. Sandino, se nombró a Anastasio Somoza García director en jefe de dicho organismo. Somoza era persona cercana al general José María Moncada, dirigente de las fuerzas liberales que en 1926 se opusieron a los conservadores y levantaron la bandera del constitucionalismo. El titular de la GN era también amigo personal de Mathew Hanna, ministro plenipotenciario del gobierno estadounidense en Nicaragua. La GN fue un organismo creado en diciembre de 1927 por acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua y EU; la instrucción y el mando del mismo habían quedado bajo la responsabilidad de oficiales de marina de la nación norteamericana cuya presencia en Nicaragua se remonta a enero del mismo año, con el pretexto de restablecer el orden y mediar en el conflicto entre liberales y conservadores. Desde su creación, la GN fue la única fuerza militar y policial reconocida oficialmente, y controlaba todas las armas y municiones del país.

A finales de 1935, Anastasio Somoza García anunció su deseo de ser candidato a la presidencia en las elecciones del año siguiente. Pero había dos obstáculos constitucionales para ello: un familiar cercano al mandatario en funciones no podía ser candidato; tampoco era posible que lo fuera el comandante de la GN.

Con el fin de lograr la presidencia, Somoza García encabezó en mayo de 1936 el golpe de Estado de la GN contra su tío el presidente Sacasa; éste, obligado por las circunstancias, renunció el 6 de junio. Somoza impuso a Carlos Brenes Jarquín como Ejecutivo interino. Al comandante de la GN sólo le restaba abandonar el cargo, lo cual hizo formalmente en noviembre del mismo año. Poco después, se lanzó la convocatoria para elecciones presidenciales y participaron en ellas dos partidos políticos, el Liberal Nacionalista (PLN) y el Conservador Nacionalista (PCN). Este último fue una organización política creada por Somoza para sustituir al Partido Conservador (PC), que se abstuvo de intervenir por considerar que en ese momento los sufragios eran poco confiables debido al control ejercido por la GN. Los organismos políticos participantes postularon como candidato único al ex-director de la GN.

El primero de enero de 1937 Anastasio Somoza García tomó posesión como presidente de la República; con ello se marca el inicio de una dictadura militar que se prolongará por 45 años. Durante ese periodo el régimen somocista se convirtió en expresión de los intereses económicos y geopolíticos de EU en la región.¹

En marzo de 1939, el Congreso decidió convocar a una Asamblea Constituyente que, dominada por liberales incondicionales de Somoza, acordó disolver el Congreso convocante y redactar una nueva Carta Magna. La misma asamblea nombró a Anastasio Somoza García presidente de la República hasta el primero de mayo de 1947. Con estas maniobras, el dictador reafirmó el poder político en sus manos.

Entre 1941 y 1943, el tirano expropió los bienes de las plantaciones cafetaleras de alemanes residentes en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Las tierras incautadas pasaron a ser de Somoza, que en 1944 era ya el terrateniente más grande del país.

¹ Para mayor información, véase Richard Millet, *Guardianes de la dinastía*, San José, Costa Rica, EDUCA, 1979, p. 228-254. También Claribel Alegría y Flakoll, *Nicaragua: la revolución sandinista. Una crónica política (1855-1979)*, México, ERA, 1982, p. 105-117. Gregorio Selser, *Nicaragua, de Walker a Somoza*, México, MexSur, 1979, p. 229-236. Además véase Enrique Camacho Navarro, *Los usos de Sandino*, México, UNAM, 1991, p. 59-61.

En marzo de 1944, en el seno del Partido Liberal Nacionalista (PLN) se inició la polémica sobre las pretensiones de Somoza García para reelegirse en la presidencia después de 1947. Producto de las divergencias suscitadas por este hecho, el PLN se dividió y una fracción del mismo fundó el Partido Liberal Independiente (PLI). Estos datos muestran el descontento de los grupos políticos del país por la concentración de poder económico y político en manos del déspota.

En enero de 1946, Anastasio Somoza García, presionado por el presidente estadounidense Harry Truman, renunció a sus pretensiones de reelegirse. El dictador impulsó dentro de su partido, el PLN, la candidatura de Leonardo Argüello, quien se enfrentó al opositor Enoc Aguado, del PLI. Triunfó el primero de ellos gracias al respaldo de la GN y del fraude electoral. El primero de mayo de 1947, Argüello tomó el poder e intentó de inmediato algunos cambios en la GN, al margen de la autoridad del director; entre dichos cambios destituyó al mayor Anastasio Somoza Debayle como comandante del primer batallón de la GN y jefe de la policía de Managua. Estos acontecimientos provocaron que Somoza García y elementos conservadores decidieran dar un golpe de Estado contra Leonardo Argüello. El Congreso del país, obligado por Somoza, declaró a Argüello mentalmente incompetente para gobernar y designó como presidente interino a Benjamín Lacayo Sacasa. EU no reconoció tal nominación.

En agosto de 1947, Somoza García convocó a una nueva asamblea constituyente, con el fin de redactar otra carta fundamental y nombrar al nuevo jefe del Ejecutivo. La asamblea nombró como tal a Víctor Román y Reyes, tío del dictador: el poder político cambió de forma pero seguía en manos del tirano. EU siguió sin reconocer a ese gobierno ilegítimo. El primero de enero de 1948, se aprobó la nueva Constitución; en el mes siguiente la dictadura y la oposición conservadora firmaron un acuerdo, conocido como pacto Somoza-Cuadra. Carlos Cuadra Pasos, signatario de dicho convenio en su calidad de dirigente del PC, logró a cambio una participación minoritaria del poder. Ese acto marcó el inicio de

una serie de acuerdos entre liberales y conservadores, y puso fin a sus constantes disputas por el poder.²

A principios de 1950, Emiliano Chamorro, general conservador, y Anastasio Somoza García firmaron un arreglo político, conocido como pacto de los generales. Con base en él Somoza buscó una vez más la candidatura a la presidencia en las elecciones de 1951; los conservadores, a cambio, aseguraban como mínimo un tercio de curules en el Congreso y la participación minoritaria en los puestos de poder. Este acuerdo también significó el reparto del poder económico entre los grupos financieros nacientes del país y la dictadura. El primero de mayo de 1951, Somoza asumió oficialmente el poder una vez más.

2. *De la insurrección liberal conservadora a la insurrección del FSLN*

Entre 1954 y 1958, hubo varios intentos entre los grupos liberales y conservadores por derrocar a la dinastía somocista mediante un golpe Estado. Estas fuerzas políticas representaban intereses burgueses y pretendían mayor participación política y mejores condiciones económicas para invertir. En dichos movimientos figuraban antiguos colaboradores de Sandino, a quienes se incluyó por sus conocimientos sobre las áreas rurales, pero sin pretender rescatar el ideario político del guerrillero.

Bajo la influencia de la Legión del Caribe, el 4 de abril de 1954, se intentó un golpe de Estado contra Somoza apoyado por José Figueres Ferrer, entonces presidente de Costa Rica. Un grupo de conservadores antisomocistas y algunos miembros de la GN, inconformes con el régimen, intentaron organizar un movimiento armado para derrocar al déspota; entre los dirigentes de ese movimiento destacan el general Emiliano Chamorro, Fernando Agüe-

² Para obtener más información véase Alegría, *op. cit.*, p. 118-140. Pedro Joaquín Chamorro, *Estirpe sangrienta: los Somoza*, México, Diógenes, 1980. Selser, *op. cit.*, p. 229-299. Del mismo autor, *Apuntes sobre Nicaragua*, México, Nueva Imagen, p. 69-74.

ro y otros miembros prominentes de la familia Chamorro: Pedro Joaquín, Humberto y Tito; la asonada fue frustrada por la GN, pero ya mostraba que el descontento de la sociedad iba en aumento.

En 1955, Somoza reformó de nueva cuenta la Constitución con el fin de poder reelegirse en 1957. El 20 de septiembre de 1956 fue postulado como candidato del PLN. Al día siguiente sufrió un atentado a manos del poeta Rigoberto López Pérez en la ciudad de León; el escritor cayó muerto en ese momento por la GN y el dictador murió ocho días después en un hospital de la zona del canal de Panamá. El 30 de septiembre se nombró presidente provisional Luis Somoza Debayle, hijo mayor del gobernante fallecido; Anastasio, hijo menor, asumió el mando de la GN. Se implantó el estado de sitio en el país y se inició una fuerte represión contra la población civil. Se encarceló y asesinó a múltiples opositores al régimen.

En las elecciones de febrero de 1957 intervinieron dos partidos: el PLN y el PCN. El Partido Conservador (Tradicional) (PCT) boicoteó los sufragios. Los resultados favorecieron a Luis Somoza Debayle y la continuidad de la dinastía se consumió; con ello la política interior y exterior sufrió pocos cambios.

El 26 de junio de 1957 elementos conservadores y miembros de la Fuerza Aérea Nicaragüense organizaron un levantamiento armado contra Luis Somoza; la GN capturó a los dirigentes del alzamiento y los envió a prisión. El año siguiente se caracterizó por los frecuentes movimientos estudiantiles estallados en León y Managua, así como también por los frecuentes pronunciamientos armados, como el del PCT organizado desde Honduras; el de Ramón Raudales, veterano combatiente del ejército de Sandino. Los rebeldes de este movimiento fueron estudiantes, conservadores exiliados y miembros del Partido Liberal Independiente (PLI). Como corolario de esta efervescencia política, a finales del año se integró la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición heterogénea de partidos contrarios al régimen, integrada por el PCT, el PLI, el Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Renovación Nacional (PRN) y el Partido Movilización Republicana (PMR). Esta organización, controlada por los conservadores, tuvo pocos vín-

culos con las masas y mantuvo siempre una actitud negociadora ante la dictadura.³

Con la participación de 30 activistas, entre estudiantes y campesinos, el 29 de agosto de 1958, se originó un movimiento más en contra de la dictadura somocista, encabezado militarmente por Ramón Raudales, exlugarteniente de Sandino, Heriberto Reyes, exsandinista, y Julio Antonio Leclair, exmiembro de la GN. La dirección política corrió a cargo de elementos liberales y conservadores; cabe señalar que por primera vez actuaron algunos representantes de izquierda. Entre los puntos más importantes del programa de este movimiento destacan: reforma agraria, conciliación nacional, reorganización de la GN, reforma de la enseñanza, nacionalización de las minas extranjeras y expropiación de los bienes mal habidos de los funcionarios del gobierno.⁴

A partir de 1959, los movimientos armados contra el régimen de Luis Somoza se intensificaron. El triunfo de la revolución cubana alentó y estimuló las luchas populares y revolucionarias en Latinoamérica. En Nicaragua surgió el movimiento reformista conservador, inspirado por el carácter antidictatorial de la revolución cubana. Organizado en territorio costarricense y dirigido por Pedro Joaquín Chamorro y Enrique Lacayo, pretendió incursionar en la zona de Olama y Mollejones. Este alzamiento se propuso la caída del somocismo, la apertura política, el respeto a la propiedad privada y el apoyo de EU al nuevo gobierno, y exaltó la guerra de guerrillas, que equiparó con el golpe de Estado. La empresa conservadora contó con el apoyo de José Figueres y algunos venezolanos. La incursión en territorio nicaragüense se realizó a través de dos frentes; uno de ellos llegó el 31 de mayo a Mollejones con 65 efectivos que la GN controló de inmediato; a Olamo arribó el otro grupo de 48 efectivos desorganizados e improvisados que, después de una semana de resistencia, se rindieron ante la propia GN.

³ Véase Millet, *op. cit.*, p. 297-330. Alegría, *op. cit.*, p. 141-165. Selser, *Nicaragua, de...*, p. 229-300.

⁴ Véase, Jesús Miguel Blandón, *Entre Sandino y Fonseca Amador*, S.L., Impresiones y Troqueles, 1980. p. 67-81. Camacho, *op. cit.*, p. 79-88.

De manera simultánea se gestó otro movimiento guerrillero en la región del “Chaparral”, dentro del territorio hondureño, que contó con apoyo cubano y la aceptación secreta de Villada, entonces presidente de Honduras. En los últimos días de junio de 1959 la columna recibió armas provenientes de Cuba. Participaban en esta insurrección elementos de izquierda y miembros del PLI. Varios factores provocaron el fracaso del movimiento; entre otros: la improvisación, la falta de estrategia y la indiscreción respecto a los detalles del operativo. La rebelión fue descubierta y atacada por Oswaldo López Orellana, comandante del ejército hondureño, auxiliado por la GN nicaragüense y fuerzas armadas estadounidenses; el movimiento fue aniquilado el 23 de junio, con un saldo de nueve muertos, doce heridos y la aprehensión de algunos rebeldes; entre los heridos se hallaba Carlos Fonseca, quien fue hospitalizado en Honduras, donde posteriormente escapó hacia Cuba. Al año siguiente creció el clima de efervescencia insurgente.

En febrero de 1963, Luis Somoza abandonó el poder después de cumplir el periodo normal para el que fue electo. Pero, antes, el dictador aseguró el poder para una persona incondicional a su política: el liberal René Schick. El PCT retiró de la contienda a su candidato Fernando Agüero y boicoteó los comicios; por su parte, el régimen somocista, para legitimar el proceso, revivió al PCN.⁵

La maniobra de Luis Somoza de imponer como presidente a una persona ajena a la dinastía apaciguó los ánimos de la población, que en años anteriores manifestó fuerte resistencia al régimen despótico. Sólo el FSLN mantuvo su propósito de derrocar a la dictadura; en consecuencia, en los primeros años de la década de los sesenta, organizó movimientos guerrilleros, asaltos bancarios y actividades basadas en la idea del foco guerrillero. A finales del mencionado decenio, el frente se consagró al trabajo político de organizar a los campesinos, estudiantes y habitantes de barrios populares.

⁵ Véase Blandón, *op. cit.*, p. 67-113. Camacho, *op. cit.*, p. 79-116. Selser, *Nicaragua de...*, p. 229-299.

En 1966, los sectores burgueses antisomocistas, organizados en la UNO, apoyaron a Fernando Agüero como candidato para las elecciones presidenciales del año siguiente. La dictadura alentó la formación del grupo para-militar Asociación de Militares Retirados, Obreros y Campesinos Somocistas (AMROCS) que, junto con la GN, se encargó de hostigar a la oposición en campaña. El 22 de enero de 1967 la UNO convocó a una manifestación de apoyo a su candidato por las calles de Managua. La concentración fue reprimida por la GN, con un saldo de más de 200 muertos, decenas de heridos y detenidos. Estos hechos significaron la liquidación política del PCT. El FSLN condenó los acontecimientos y rompió con la izquierda tradicional por su actitud indiferente ante los hechos.

En febrero de 1967, se llevaron a efecto los comicios controladas por el Estado y mediante notorio fraude resultó triunfador Anastasio Somoza Debayle, quien tomó posesión el primero de mayo del mismo año. Con estas simulaciones electorales la dinastía aseguró el poder político por seis años más. En abril de 1967 falleció Luis Somoza por una complicación cardíaca.⁶

El 27 de marzo de 1971, Anastasio Somoza Debayle, del PLN, y Fernando Agüero, del PCT, firmaron un acuerdo, avalado por el embajador de EU, Turner B. Shelton, para disolver el Congreso, llamar a elecciones para una asamblea constituyente en febrero del siguiente año y nombrar una junta provisional de tres miembros: Agüero y dos liberales designados por Somoza. Esta junta gobernaría del primero de mayo de 1972 hasta diciembre de 1974, fecha en que se convocaría a comicios. Durante ese periodo, Somoza conservaría el mando de la GN y podría postularse como candidato. El dictador garantizó a los conservadores 40 por ciento de los escaños en las elecciones para integrar una nueva Asamblea Constituyente, encargada de reformar la carta fundamental en 1972.

⁶ Véase Chamorro, *op. cit.*, Selser, *Nicaragua de...*, p. 229-299. Además, FSLN, *Y se rompió el silencio*, Managua, Departamento de Propaganda y Educación Política, 1982. Lucrecia Lozano, *De Sandino al triunfo de la revolución*, México, Siglo XXI, 1985, p. 61-64.

Pedro Joaquín Chamorro, director del diario *La Prensa* y miembro del PCT, no aprobó los acuerdos con Somoza, por lo que lo expulsaron de su partido. Después integró una corriente política nueva, Acción Nacional Conservadora (ANC).

En septiembre de 1974 se efectuaron nuevos comicios presidenciales en Nicaragua. Con una abstención de 50 por ciento, y en condiciones de fraude, fue electo Anastasio Somoza Debayle presidente de la República. En las elecciones intervinieron dos partidos: el PLN del dictador y el PCN. Este último, por no ser realmente de oposición, tuvo un papel de comparsa en el proceso. En el mes siguiente 27 miembros de diferentes organizaciones políticas contrarias al régimen, entre los que destacan Pedro Joaquín Chamorro y Ramiro Sacasa, publicaron un documento de repudio a la farsa electoral y calificaron el régimen de Somoza de inconstitucional. La dictadura ordenó detener y enjuiciar a los 27 opositores; la sentencia consistió en nulificar sus derechos políticos. El descontento de los sectores de la burguesía excluidos del poder político aumentó considerablemente en los meses siguientes.⁷

3. *El Frente Sandinista de Liberación Nacional y la insurrección de 1961-1974*

El FSLN es producto de dos condiciones fundamentales: la necesidad de una apertura democrática en Nicaragua y el surgimiento de los movimientos insurreccionales en Latinoamérica, con participación de militantes de izquierda. La primera de ellas es explicable dada la existencia de la dictadura y la segunda es consecuencia del triunfo de la revolución cubana.

La fundación del FSLN ocurrió en Tegucigalpa, Honduras, a mediados de 1961. Al principio se llamó Frente de Liberación Nacional (FLN) y lo crearon Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge

⁷ Véase, Rosa María Torres y José Luis Coraggio, *Transición y crisis en Nicaragua*, San José, Costa Rica, DEI, 1987, p. 23-25. Lozano, *op. cit.*, p. 66-75. Alegria, *op. cit.*, p. 166-273.

Martínez, Silvio Mayorga y Santos López. Los dos primeros eran estudiantes de la Facultad de Derecho de León. Mayorga fue compañero de estudios de Carlos Fonseca en Matagalpa y en la Facultad de Derecho, y murió en agosto de 1967 en Pancasán. Santos López representó para el frente el eslabón que unía la lucha de Sandino y el foco guerrillero, pues había sido combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y asistió a la casa de Sofonías Salvatierra la noche del 21 de febrero de 1934, cuando asesinaron a Sandino; López fue herido entonces, pero logró huir.

En 1962, el FLN comenzó a publicar un periódico clandestino, *Trinchera*. Aproximadamente en 1963, al FLN, por insistencia de Fonseca, se le agregó el calificativo de sandinista, con objeto de eslabonar el movimiento guerrillero con la lucha e ideario antiimperialistas de Sandino. Ello obedeció también a la política internacional de la revolución cubana, consistente en tratar de rescatar figuras nacionales como símbolos de la lucha guerrillera en América latina.⁸

En enero de 1963 se realizó el Segundo Congreso de Estudiantes Revolucionarios, que revivió al Frente Estudiantil Revolucionario (FER), de sello sandinista. Los estudiantes cumplieron un papel importante desde el origen mismo del Frente y su protagonismo estará presente en todas las etapas del mismo.

En marzo del mismo año, un escuadrón del FSLN, comandado por Jorge Navarro, asaltó la Radio Mundial de Managua y difundió una condena a la reunión en Costa Rica del presidente de EU, John F. Kennedy, con los mandatarios centroamericanos. En mayo, el frente asaltó la sucursal del Banco de América en Managua y realizó la primer acción de recuperación económica.

Entre junio y octubre de 1963, el FSLN preparó el primer comando guerrillero en la zona montañosa situada entre los ríos Coco y Bocay, en el departamento de Jinotega. Dicho comando se orga-

⁸ Sobre el origen del FSLN véase Alegría, *op. cit.*, p. 166-222. Fernando Carmona, *Nicaragua: la estrategia de la victoria*, México, Nuestro Tiempo, 1980, p. 58-167. Además, Tomás Borge, *Carlos, el amanecer ya no es una tentación*, Managua, Nueva Nicaragua, 1981. Humberto Ortega, *50 años de lucha sandinista*, México, Diógenes, 1979.

nizó en Honduras para después entrar en territorio nicaragüense. Los dirigentes de ese grupo eran Silvio Mayorga, Tomás Borge, Santos López y Francisco Buitrago. El movimiento fue aniquilado por la GN en octubre y perdieron allí la vida Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Modesto Duarte, Faustino Ruiz, Mauricio Córdoba, Iván Sánchez y Bonaerges Santamaría; el resto del grupo logró huir hacia Honduras.

Como resultado del revés, el frente interrumpió su actividad militar y conspirativa entre 1963 y 1966, para centrarse en un trabajo abierto y legal entre las masas urbanas y rurales. En este periodo estableció alianzas con sectores de la izquierda tradicional: el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y el Partido Movilización Republicana (PMR).

En julio de 1964, Carlos Fonseca y Víctor Tirado fueron aprehendidos en Managua. EL FER organizó manifestaciones para exigir su liberación y denunciar la política represiva de la dictadura. En enero de 1965, Fonseca fue deportado a Guatemala por el presidente René Shick. Instalado en la selva del Petén, Fonseca conoció a Luis A. Turcios Lima, subteniente del ejército guatemalteco y más tarde dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Luego, cuando el gobierno de Guatemala liberó a Fonseca, éste marchó hacia México. El FSLN organizó sindicatos obreros en Matagalpa, Estelí y Jinotega y profundizó y extendió el trabajo político entre los campesinos de las montañas del norte del país.⁹

No fue hasta 1966 cuando el FSLN reinició las actividades armadas y preparó la lucha militar en las montañas del norte de Nicaragua. Militantes del frente actuaron, como parte de su entrenamiento, en el movimiento guerrillero de Guatemala dirigido por Luis Turcios Lima.

Los partidos políticos tradicionales alistaban su intervención en las elecciones de febrero de 1967. En noviembre de 1966, el

⁹ Véase, Alegría, *op. cit.*, p. 166-222. Carmona, *op. cit.*, p. 58-167. También, Pilar Arias, *Nicaragua: revolución. Relatos de Combatientes del Frente Sandinista*, México, Siglo XXI, 1981, p. 15-41.

FSLN hizo un llamado al pueblo nicaragüense para repudiar dichos sufragios. Mediante un comunicado que firmó por primera vez la Dirección Nacional (DN), advirtió que la única alternativa para acabar con el régimen de Somoza era la lucha armada.

La última actividad guerrillera realizada todavía conforme a los lineamientos de la teoría del foco fue la experiencia de Pancasán, lugar situado a 50 kilómetros al oriente de la ciudad de Matagalpa. Allí se inició un movimiento insurreccional con una columna de 35 hombres dirigidos por Carlos Fonseca. El alzamiento, iniciado en noviembre de 1966, terminó en octubre del siguiente año. A fines de agosto de 1967, aquella columna se dividió en tres: un primer grupo, comandado por Tomás Borge, se dirigió a Matagalpa; otro, dirigido por Fonseca, permaneció en la región; un tercero, conducido por Silvio Mayorga, exploró terreno hacia Quirragua. Este último pelotón fue atacado por tierra y aire por la GN el 27 de agosto; los guerrilleros Silvio Mayorga, Francisco Morno, Otto Casco, Fausto García, Carlos Reyna, Carlos Tinoco, Rigoberto Cruz, Danielo Rosales y Nicolás Sánchez murieron. De los 35 hombres que iniciaron la revuelta sólo sobrevivieron quince.¹⁰

La GN prosiguió con la operación de limpiar la zona por tres meses más, durante los cuales asesinó a más de 300 campesinos, sospechosos de colaborar con la insurrección.

Después del revés militar de Pancasán, el frente concentró su atención en definir su proyecto revolucionario; sin abandonar del todo la acción guerrillera en las montañas, se privilegió el trabajo organizativo de estudiantes, obreros y habitantes de barrios populares. En 1969, el FSLN publicó su programa, donde definía una nueva estrategia para tomar el poder: “Hemos llegado a la conclusión de que el triunfo de la revolución popular sandinista y el derrocamiento del régimen enemigo del pueblo, surgirá como consecuencia del desarrollo de una dura y *prolongada guerra popular*.”¹¹

¹⁰ Véase Alegría, *op. cit.*, p. 179-181.

¹¹ Lozano, *op. cit.*, p. 65.

En noviembre de 1969, Édgar Munguía, dirigente sandinista y del FER, triunfó en las elecciones para presidente del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). Su victoria significó para el FSLN mayor influencia en el medio estudiantil, es decir la posibilidad de conquistar más cuadros importantes para apoyar la insurrección.

El 15 de enero de 1970, la GN descubrió una casa de seguridad sandinista, donde se encontraban tres militantes: Leonel Rugama, Mauricio Hernández y Roger Núñez. Los tres se enfrentaron a 300 efectivos de la GN, reforzados con tanquetas y helicópteros artillados.¹²

A partir de 1970, la guerrilla avanzó en la zona montañosa de Matagalpa, en la región de Zinica-El Bijao, como a 100 kilómetros al norte de Pancasán. El responsable político en la región era Rigoberto Cruz (Pablo Ubeda). Pero hacia finales del año la GN desmanteló la guerrilla en la zona; pese a ello, lo trascendente del trabajo clandestino con los campesinos consistió en que buena parte de éstos se incorporaron más tarde a la guerrilla en la misma área y brindaron una base importante a la Tendencia Guerra Popular Prolongada (TGPP).

En abril y mayo de 1970, murieron más militantes sandinistas: Enrique Lorente, Luisa Amanda Espinoza e Igor Ubeda. El proceso represivo de la GN era sistemático en contra de la guerrilla, en las montañas o en las ciudades, pues la dictadura había comprendido que debía emprender una guerra a muerte contra el FSLN.

En 1971, aumentaron las protestas estudiantiles y populares, las tomas de iglesias y colegios en las principales ciudades del país. A causa de tal clima de rechazo al régimen somocista, éste se vio obligado a liberar a trece sandinistas prisioneros.

Al término de 1973, al perder militantes importantes como Ricardo Morales, Óscar Turcios, Juan José Quezada y Jonathan González, el FSLN tuvo que reestructurar su dirigencia interna. En efecto, el 17 de septiembre de 1973, la GN capturó a Ricardo Mo-

¹² Véase, Arias, *op. cit.*, Carmona, *op. cit.*, p. 58-167. Además, Manlio Tirado, *La revolución sandinista*, México, Nuestro Tiempo, 1983, p. 42-45.

rales y Óscar Turcios en una casa de seguridad en Nandaime. El primero de ellos era el responsable de la dirección regional del FSLN en Managua, mientras el segundo lo era de la actividad guerrillera en el norte del país. Al día siguiente murieron Juan José Quezada y Jonathan González al enfrentarse con la GN; estos militantes sandinistas intentaron escapar de la casa de seguridad descubierta el día anterior. La GN llevó a Ricardo Morales y Óscar Turcios al lugar de los hechos, con el pretexto de identificar a sus compañeros caídos, pero la GN los asesinó en dicho sitio. Semejantes acontecimientos estimularon la participación política de los nicaragüenses y generaron mayor participación en la guerrilla urbana.¹³

En octubre de 1974, el FSLN publicó un documento titulado “Guerra popular prolongada en Nicaragua”,¹⁴ en el que se identificó a la dictadura somocista como el enemigo inmediato y también señaló a la montaña como escenario fundamental de la lucha revolucionaria; el campesino fue considerado la base social del movimiento y la clandestinidad la forma principal del trabajo político.

4. Las tendencias del FSLN y su concepto de la insurrección

Al preparar el presente ensayo se logró identificar a las tres tendencias del FSLN: Tendencia Guerra Popular Prolongada (TGPP), Tendencia Proletaria (TP) y Tendencia Insurreccional (TI), que mantuvieron separadas de 1975 a marzo de 1979.

A. La TGPP y la insurrección

La TGPP adoptó la táctica de guerra popular prolongada; en consecuencia, pugnó por desarrollar una guerra de liberación a largo plazo, que enfrentara a la dictadura y al imperialismo. El objetivo

¹³ Véase Arias, *op. cit.*, Alegría, *op. cit.*, p. 166-273. Lozano, *op. cit.*, p. 66-72.

¹⁴ Véase Lozano, *op. cit.*, p. 73.

final era destruir el orden burgués y no exclusivamente derribar a la dictadura. Su táctica fue la lucha guerrillera, para posteriormente conformar un ejército popular revolucionario encargado de liberar zonas importantes del país. Esta tendencia consideró al campesinado como la base social fundamental para el movimiento insurgente, por su sentido de justicia y sus formas de vida poco apegadas a la enajenación burguesa de las ciudades. Carlos Fonseca se percató de algunos obstáculos para incorporar a los campesinos a la lucha guerrillera, como son la falta de conciencia política e histórica. Fonseca mostró sumo interés por integrar a los estudiantes al movimiento guerrillero, por su cultura y su capacidad de comprender los problemas sociales del país. El Programa de 1969 fue guía de esta fracción; abarcó medidas de índole económica, social y política, tales como la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria. Los integrantes de la TGPP consideraron la montaña el lugar que permitía al militante transformarse en un hombre nuevo, con un nivel superior en la escala humana. Las figuras de Augusto C. Sandino y Ernesto Guevara eran el modelo ideal perseguido, asociadas a la imagen del guerrillero en la montaña. Los militantes de esta tendencia pretendieron una vida nueva identificada con el campesino, y el rechazo del orden burgués. Aspiraban a suprimir la enajenación ligada a las formas de vida burguesas y a evitar el individualismo como supremo valor de la sociedad capitalista.

B. La TP y la insurrección

En 1975, se gestó en el FSLN una nueva tendencia autodefinida como marxista-leninista ortodoxa. Esta fracción indicó que su ideología era producto de la transición del espontaneísmo de Sandino al marxismo ortodoxo. La Tendencia Proletaria (TP) planteó la necesidad de organizar a la clase trabajadora urbana y rural, con el fin de crear una amplia masa revolucionaria en las ciudades e impulsar la lucha reivindicativa con miras a construir un partido de la clase obrera. Las demandas inmediatas fueron mejo-

res salarios para los trabajadores, tierra para los campesinos y servicios adecuados para las colonias populares. Esta tendencia fue partidaria de la insurrección armada, pero apoyada en un trabajo organizativo previo de la clase obrera y hasta haber logrado la madurez del proceso. Los militantes de procedencia católica se identificaron con esta fracción.

C. La TI y la insurrección

En 1977 surgió la Tendencia Insurreccional (TI) como alternativa a las dos ya existentes. Fue partidaria de efectuar acciones ofensivas en las ciudades con el propósito de generar una crisis en el país y aislar al régimen somocista. Es decir, de provocar una situación de insurrección general. La TI generó una política amplia de alianzas con diferentes sectores antisomocistas, dentro y fuera del país, con el objeto de sumar esfuerzos contra la dictadura. Esta tendencia descartó al campesinado y al proletariado como sujetos sociales revolucionarios y fincó su esperanza en una tercera fuerza social, la pequeña burguesía y las capas medias urbanas. Mantuvo la idea de una ofensiva militar para hacer estallar las contradicciones entre pueblo y dictadura.

La TI publicó su plataforma político militar el 4 de mayo de 1977. En ella planteó que su objetivo consistía en instaurar el socialismo, pero con una fase previa de transformación democrática popular revolucionaria, no abiertamente marxista-leninista, con un gobierno de representación nacional, incluida la burguesía; esta etapa afectaría únicamente las propiedades de Somoza, a los terratenientes y grupos financieros. Otra característica suya sería la revolución cultural y la consolidación del ejército sandinista. Los argumentos terceristas para no pasar directamente al socialismo eran el atraso económico del país y la dependencia del capitalismo extranjero. Esta fracción juzgó oportuno abandonar el discurso marxista-leninista para tener mayor influencia en la sociedad civil. Para ella, la juventud y los estudiantes eran la vanguardia de la base social revolucionaria, porque sus conceptos

son ajenos al conservadurismo y sus formas de vida no estaban alienadas por los valores del sistema y la cultura burguesa.¹⁵

5. *Las tendencias del FSLN y la actividad insurreccional*

El FSLN inició los preparativos para la ofensiva de octubre de 1977 desde seis meses antes. El plan fundamental consistía en tomar algunos cuarteles de la GN en el occidente del país y distribuir las armas ahí obtenidas entre la población. Así lo comentó Sergio Ramírez:

La tesis que planteó Humberto es que había llegado el momento de realizar un alzamiento de la población vanguardizada militarmente por el FSLN. Se iba a atacar el cuartel de Rivas, el de San Carlos, el de Ocotol, el de Masaya y posiblemente el de Estelí, si se lograba conquistar Ocotol; todo en un solo día. Y dentro de esa misma operación, el mismo día se podía anunciar la instalación de un gobierno provisional en el territorio nicaragüense, encabezado por el grupo de Los Doce.¹⁶

Sobre dicho plan, Humberto Ortega se expresó así: “Bueno, como que nunca habíamos realizado la experiencia de una insurrección se nos ocurrió que así podríamos movilizar a las masas...”.¹⁷

Humberto dirigió el operativo desde Costa Rica. El 12 y 13 de octubre el Frente Norte Carlos Fonseca (FNCF) atacó a la GN en la región de Ocotol. Dos días después Germán Pomares, dirigente del FNCF, tomó el cuartel de la GN ubicado en Mozonte. El Frente Sur Benjamín Zeledón (FSBZ), asentado en la comunidad de Solentiname,

¹⁵ Véase Gabriel García Márquez *et al.*, *Los sandinistas*, La Oveja Negra, Bogotá, 1980, p. 188-241. Alegría, *op. cit.*, p. 223-273.

¹⁶ Arias, *op. cit.*, p. 130.

¹⁷ Tomás Borge *et al.*, *Sandinistas speak*, Nueva York, Panthfinder Press, 1984, p. 59.

atacó el cuartel de la GN en San Carlos el 13 de octubre. El 17 del mismo mes el comando tercerista atacó la guarnición de Masaya, en el centro del país. Este ataque provocó seis bajas al FSLN. Pedro Arauz, dirigente de la TGPP, murió en la misma fecha cerca de Mazaya. Los Frentes Sur y Norte fueron fuerzas militares de la TI.

El balance realizado por Humberto Ortega fue positivo, a pesar de las bajas sandinistas y de la escasa respuesta de la sociedad. Según el dirigente tercerista, el FSLN logró presencia como fuerza política y las columnas militares se fortalecieron en el norte y sur del país.

El grupo de Los Doce, aliado político de los terceristas, reunió en Costa Rica, preparó un gobierno provisional para tomar el poder. Para ello requería que los terceristas liberaran una región, objetivo que no pudieron lograr. Este grupo optó por un proyecto político consistente en reemplazar a Somoza por un régimen partidario del cambio social, con la participación del FSLN. Así lo expresa un documento del grupo de Los Doce:

El país anhela un cambio sustancial: conquistar una nueva forma de organización democrática y social.

Los encuentros armados se multiplican, resultado del enfrentamiento del aparato represivo del gobierno dinástico y el claro sentimiento nacional de repudio a la dictadura [...]

Llamamos a todos los nicaragüenses para dar una solución nacional al angustioso problema de Nicaragua. Solución en la cual no se puede prescindir de la participación del FSLN.¹⁸

Los terceristas reconocieron públicamente su vinculación política con el grupo de Los Doce y se comprometieron a derrotar a Somoza, nacionalizar las propiedades de éste e instaurar las libertades democráticas.

En el plano internacional, los terceristas trataron de proyectar una imagen moderada. Plutarco Elías Hernández, de la Dirección

¹⁸ Julio López *et al.*, *La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua*, San José, Costa Rica, EDUCA, 1979, p. 141.

Nacional, declaró al *New York Times*, el 26 de octubre de 1977, que el FSNL había abandonado el marxismo-leninismo porque la preocupación fundamental era la insurrección y la instauración de la democracia.

Debemos atravesar la etapa de la *democracia*, pues no se puede construir el socialismo de la noche a la mañana.

Se equivocan quienes piensan que marcharemos directamente hacia el comunismo. Nuestro programa básico no es comunista y no representa amenaza alguna para todo aquel que está a favor de una sociedad justa.¹⁹

La oposición democrático-burguesa integrada en la UDEL consideró que el FSLN, dominado por los terceristas, era una fuerza política moderada contraria a los marxistas y comunistas de las otras dos tendencias. El 10 de enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado en Managua, durante el trayecto de su casa al periódico *La Prensa*. Este acontecimiento provocó protestas importantes en el país, entre las que destaca la convocatoria de la UDEL para realizar una huelga general con el fin de obligar a Somoza a renunciar.

Después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro se desencadenó una mayor participación espontánea de la población civil en el proceso de insurrección: las protestas aumentaron hasta desbordar la estructura organizativa del FSLN; la TI trató de canalizar dicha insurrección a través de una serie de acciones; Camilo y Humberto Ortega atacaron Granada; Edén Pastora hizo lo propio con Rivas; Germán Pomares y Daniel Ortega atacaron la base militar de Santa Clara. El 20 de febrero de 1978, Monimbó registró un espontáneo movimiento de insurgencia armada del pueblo, específicamente del barrio de Masaya, reprimido con lujo de fuerza por la GN. Humberto Ortega reconoció que la insurrección de Monimbó había sido espontánea, sin importante participación del FSLN

¹⁹ Citado por David Nolan, *La ideología sandinista y la revolución nicaragüense*, Barcelona, Ediciones 29, 1986, p. 122.

y sin dirección política, lo que explicaba su derrota. Este movimiento se inició el 20 de febrero y el FSLN participó cinco días después con solamente tres militantes, entre ellos Camilo Ortega, hermano menor de la familia Ortega Saavedra, quien perdió la vida en combate.²⁰

Al cabo de estos acontecimientos, los terceristas se inclinaron por la insurrección en el medio urbano. Producto de las reflexiones sobre Monimbó, se decidió disolver la columna del FNCF, integrada por 40 guerrilleros enviados a Estelí y León. Los meses siguientes se caracterizaron por la escasa actividad militar; en cambio, las huelgas y disturbios obreros y estudiantiles aumentaron, pues los terceristas canalizaron el movimiento espontáneo de las masas y se vincularon con la oposición moderada.

En octubre de 1977, la oposición burguesa, aglutinada en la UDEL, había lanzado la convocatoria al diálogo nacional; a las organizaciones de la UDEL se unieron el PC (auténtico), PC (oficialista), PLN y el Instituto Nacional de Empresarios (INDE).

En marzo de 1978, un grupo de empresarios nicaragüenses renuentes a ingresar a la UDEL fundaron el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), dirigido por Alfonso Robelo.

El 5 de julio de 1978, se constituyó el Frente Amplio Opositor (FAO), integrado por el grupo de Los Doce: Partido Liberal Independiente (PLI), Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC), Acción Nacional Conservadora (ANC), Partido Socialista Nicaragüense (PSN), Partido Conservador de Nicaragua (PCN), Partido Conservador Auténtico (PCA), Partido Social-Cristiano (PSC), Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), Partido Popular Social-Cristiano (PPSC), Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-I), Confederación de Unificación Sindical (CUS) y Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN).

El 17 de julio se constituyó el Movimiento Pueblo Unido, una organización de masas donde participaba activamente dos ten-

²⁰ Véase César Arias de la Canal, *Los tambores de Monimbó*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1981. También, Alegría, *op. cit.*, p. 300-315.

dencias del FSLN, la TP y la T/GPP, así como el Partido Comunista de Nicaragua (PC de N).

A mediados de 1978, la Dirección Nacional del FSLN, controlada por la TI, publicó un programa de 25 puntos contrario al difundido en 1969. El nuevo manifiesto era plural y proponía un gobierno de representación proporcional con la inclusión de sectores burgueses. El renglón de expropiaciones solamente afectaba a Somoza y sus colaboradores más cercanos. Destacaban los rubros de nacionalización de la banca, minería, industria maderera, pesquera y revolución agraria. El texto era abundante en buenos propósitos, pero escaso en soluciones económicas concretas; podemos señalar como buenos deseos: salarios más elevados para el campo y la ciudad, mejores condiciones laborales, aumento de los servicios a la comunidad, en salud, educación, agua, drenaje y electrificación; dignificación de la mujer, desarrollo de la costa atlántica, libertades de expresión y asociación religiosa o política. También es importante señalar los temas ausentes: conceptos marxistas como burguesía, proletariado, lucha de clases, y otros como imperialismo estadounidense, deuda externa, unificación centroamericana, nacionalización del comercio y planificación económica.²¹

Las organizaciones de la sociedad civil proliferaron durante 1978, a causa de la efervescencia política del país; surgieron organismos de la burguesía opositora al somocismo, cuyo proyecto político trató de atraer a la pequeña burguesía con el fin de ofrecer un programa alternativo al del régimen imperante. El 21 de agosto de 1978 el FAO dio a conocer un programa de 16 puntos, que proponía un gobierno provisional encargado de llamar a elecciones más tarde.

El discurso político de la TI trató de adecuarse a las condiciones del país, con el fin de obtener mayor aceptación entre la burguesía antisomocista y aglutinar la mayor fuerza política posible en favor del proyecto sandinista. Dicho programa tercerista era

²¹ Véase García Márquez, *op. cit.*, p. 245-257.

de corte socialdemócrata, pues tuvo como fin obtener apoyo amplio de la población y evitar confrontaciones con EU. Por esos días, la Dirección Nacional del FSLN sopesó la fuerza de la burguesía y percibió el peligro del proyecto estadounidense y la burguesía nicaragüense, que deseaban de implantar un nuevo régimen del que los sandinistas serían excluidos.

Consideramos que varios factores inclinaron las condiciones políticas del país en favor del proyecto sandinista: la moderación del discurso por parte de la TI, el surgimiento del grupo de Los Doce vinculado con el FSLN, la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, el 10 de enero de 1978 y el fracaso de las negociaciones entre la burguesía y el gobierno somocista, así como el aumento del descontento y las protestas espontáneas de la población civil, permitieron a la TI planear la insurrección tan esperada.

6. El proceso de reunificación del FSLN y la insurrección

A finales de 1978 se inició el proceso de reunificación del FSLN. Dos tendencias habían trabajado desde un principio en la organización del Movimiento Pueblo Unido (MPU). Después se incorporó la TI. El programa del MPU bosquejó un futuro Estado planificador y corporativo, basado en la economía mixta, regulador del comercio, con participación de representantes sindicales y empresariales. Dicho programa tenía mucha similitud con el proyecto tercerista. En lo referente a las formas políticas del nuevo régimen, se destacaba una asamblea constituyente donde actuaran los partidos políticos y las organizaciones opositoras al somocismo; el fin principal era redactar una nueva Carta Magna. Como hecho sobresaliente, cabe mencionar que no se preveía convocar a elecciones de manera inmediata. En política internacional, el MPU se proponía establecer relaciones de amistad y respeto con todos los países, independientemente de su ideología o sistema político.²²

²² Véase López, *op. cit.*, p. 360-372.

La oposición democrático-burguesa, representada por el FAO, no compartía el proyecto insurreccional del FSLN; por ello, dio a conocer su programa el 21 de agosto de 1978 y convocó a huelga general por tiempo indefinido. El programa del FAO incluía algunos puntos del proyecto tercerista, como libertad de asociación, reforma agraria, servicios de salud pública, construcción de vivienda, transporte, control de precios y campaña de alfabetización. En cambio, el documento del FAO se distinguía del plan de FSLN porque exigió el respeto a los derechos humanos, un ejército despolitizado para reemplazar a la GN, abolición del aparato de seguridad del Estado, autonomía administrativa de los municipios y un proceso electoral libre sin discriminaciones ideológicas.²³

Como respuesta, los terceristas decidieron acelerar el proceso revolucionario, rebasar las propuesta de huelga general del FAO e incentivar las posibilidades de un golpe de Estado de la GN.

Los terceristas impresionaron a la opinión pública nacional e internacional, mediante un golpe espectacular. El 22 de agosto de 1978, un comando del FSLN-I tomó la cámara de Diputados, en cuyo interior los representantes discutían el proyecto de Somoza para aumentar los gastos militares. Edén Pastora, Hugo Torres y Dora María Téllez dirigieron el operativo. Los logros de la toma del palacio fueron: liberación de 60 prisioneros, incluido Tomás Borge; 500 000 dólares y la difusión de un mensaje de insurrección. El comando salió del país el 24 de agosto con destino a Panamá, en medio de “[...] la apoteósica despedida que el pueblo tributó a los guerrilleros sobre la carretera norte en su viaje al aeropuerto, la alegría de éstos al abrazarse con sus hermanos sandinistas liberados de las ergástulas de la dictadura [...] y el rápido despegue de los aviones que los llevarían a tres países diferentes que gustosamente les habían otorgado asilo”.²⁴

El mensaje tercerista lo leyó Dora María Téllez. Insistió en destruir la dictadura, pero no aludió a la lucha de clases. El docu-

²³ *Ibid.*, p. 357-359.

²⁴ Manuel Eugarríos, *Dos... Uno... Cero comandante*, San José, Costa Rica, Lehmann, 1979, p. 108-109.

mento hizo un llamado a los obreros, estudiantes, mujeres y cristianos, para sumarse a la insurrección general contra la GN y el gobierno vigente. El proyecto tercerista planteó el reemplazo de la dictadura por un régimen democrático popular dirigido por el FSLN y el grupo de Los Doce. En un significativo acto, los terceristas rindieron homenaje a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro.

En un comunicado desde la clandestinidad, la TI aplaudió la participación de la burguesía nicaragüense en la lucha contra Somoza. Dicha tendencia adoptó posiciones de alianza con esa clase con objeto de evitar un régimen de continuidad, aunque el dictador ya no estuviera presente.

La toma del palacio permitió al FSLN lograr consenso popular. Edén Pastora emergió como figura carismática. Este personaje estableció la distinción entre “el sandinismo verdadero” de la TI y la antigua tradición marxista-leninista de las otras tendencias. Pastora se autodefinió como conservador, cristiano y revolucionario sandinista; dicha autodefinición adolece de incongruencias ideológicas y es prueba de la heterogeneidad de la militancia de la TI y la escasa claridad histórica de algunos militantes.

En septiembre, Pastora retornó a la región colindante con Costa Rica para asumir el mando del Frente Sur. Con motivo de ese hecho, el carismático personaje del 22 de agosto declaró en rueda de prensa que el objetivo del movimiento sandinista era implantar la democracia en Nicaragua, similar a la costarricense, con pluralismo político y respeto a las libertades individuales. Por otra parte, el dirigente tercerista vaticinó que luego del triunfo de la revolución las posiciones marxistas desaparecerían. A finales de octubre, la TI nombró a Edén Pastora Jefe del Ejército Sandinista; este acontecimiento sirvió para consolidar la imagen del guerrillero forjada por los medios internacionales de comunicación.

A raíz de estos sucesos, la TGPP reclamó a la TI la tolerancia ideológica permitida a sus militantes. La respuesta fue que los nuevos militantes recibirían la instrucción adecuada.

A finales de agosto de 1978 se registró un importante hecho: la huelga general nacional de obreros y empresarios. El 25 de agos-

to el MPU convocó a huelga general; al día siguiente el FAO y la Cámara de Comercio hicieron lo propio. Ello puede interpretarse como la pérdida total de consenso por parte del régimen somocista.

El 27 del mismo mes, un grupo de 400 jóvenes armados irregularmente tomaron Matagalpa, en un movimiento espontáneo apoyado por un comando de la TGPP. La GN solicitó refuerzos a la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI) para sostener los combates que se prolongaron por una semana y en los que, al final, las fuerzas del gobierno se impusieron. En relación con estos sucesos, Humberto Ortega expresó: “Era obvio que no podíamos oponernos al movimiento de masas, detener esa avalancha. Por el contrario, debíamos ubicarnos en la línea de fuego, con el fin de dirigir el movimiento y canalizarlo en cierta medida”.²⁵

Después de fuertes discusiones con las otras dos tendencias, los terceristas decidieron lanzar la ofensiva en el medio urbano. El inicio de la insurrección fue planeado, pues se atacó simultáneamente a cinco ciudades. Por su parte, Edén Pastora tuvo como misión liberar la ciudad de Rivas e instalar allí un gobierno provisional que sería reconocido por Venezuela y Panamá.

La noche del 9 de septiembre, unidades del FSLN atacaron Masaya, Managua, León, Chinandega y Estelí. A excepción de Managua, en las demás ciudades el operativo fue un éxito. Las comunidades de base católicas resultaron fundamentales para organizar esta ofensiva.

Los ataques los dirigieron militantes de las tres tendencias y los resultados fueron favorables, con la salvedad de que Pastora falló en dos intentos de cruzar la frontera el 12 y 17 de septiembre. En respuesta a la ofensiva del frente, el régimen somocista logró recuperar las ciudades insurrectas, entre el 12 y 20 del mismo mes. En esta última fecha el FSLN se retiró a las montañas.

Humberto Ortega en un balance de la ofensiva de septiembre, reconoció que la GN había conservado movilidad e iniciativa, des-

²⁵ Borge, *op. cit.*, p. 66.

trezas que le permitieron recuperar el terreno perdido. Lo favorable para el frente estaba representado por la experiencia de los combates callejeros y las ventajosas condiciones posteriores a ellos. El dirigente tercerista estimó pertinente subsanar las carencias de organización y logística y para ello se crearon comités de defensa civil coordinados por el MPU.

La tesis de Humberto Ortega, basada en la acumulación de fuerza activa, encontró respuesta favorable debido a las armas capturadas y el aumento espontáneo de combatientes.

En cuanto al número de bajas, éstas fueron superiores en las fuerzas del gobierno. Pero el mayor costo social lo sufrió la población civil, debido a los bombardeos indiscriminados y las operaciones de limpieza de la GN.

Jaime Wheelock criticó severamente a la TI por lo precipitado de la insurrección, a la que calificó de irresponsabilidad política. Sin embargo, en los hechos la población civil no retrocedió ante la represión del somocismo y aceptó el proyecto sandinista de derrocar al dictador.²⁶

En el plano internacional, la opinión pública se inclinó en favor de la insurrección, la Internacional Socialista respaldó al FSLN y el gobierno de Carter se convenció de que Somoza no podía gobernar más el país.

Por algunos meses, entre octubre de 1978 y enero del año siguiente, EU, a través de la Comisión de la OEA, trató de mediar en el conflicto entre el régimen somocista y el FAO, con el ánimo de hallar una salida política, posible porque dentro del FAO estaba incluido el grupo de Los Doce. En ese momento, la postura de la TI fue moderada, pues se limitó a afirmar que se rechazaría la continuidad del somocismo expresada en la GN.

El 25 de octubre, Sergio Ramírez, representante del grupo de Los Doce, abandonó las negociaciones de paz, sostenidas entre el dictador y el FAO, porque Somoza se negaba a abandonar el poder.

Después de la ruptura de las conversaciones, el grupo de Los Doce se retiró del FAO y otros grupos decidieron lo mismo. En

²⁶ Jaime Wheelock, citado por Nolan, *op. cit.*, p. 132.

diciembre, quienes abandonaron el FAO se unieron al MPU y organizaron el Frente Patriótico Nacional (FPN). Sus integrantes tomaron “[...] La decisión de unirse en un Frente Patriótico Nacional para luchar por alcanzar el derrocamiento popular de la dictadura somocista y realizar en los campos políticos, económico y social los tres principios fundamentales que le caracterizan, y que son: 1) soberanía nacional, 2) democracia efectiva y 3) justicia y progreso social”.²⁷

El programa del FPN es breve y de lenguaje similar al documento del FAO, y sus planteamientos se mantienen dentro del marco ideológico del liberalismo.

A finales de 1978 el FSLN reanudó sus operativos en la montaña, lo cual provocó enfrentamientos con la GN. Humberto Ortega proyectó la estrategia de continuar la presión militar sobre el régimen, mientras en la ciudad se preparó la ofensiva final.

Al FNCF se le encomendó emboscar a las tropas de la GN para dispersar y desgastar sus fuerzas, también con el cometido de recuperar armas y municiones.

Humberto Ortega mantuvo los enfrentamientos con la GN con la idea de que harían madurar a los militantes sandinistas, al dotarlos de disciplina y espíritu colectivos. Este dirigente tercerista fue partidario de la guerra de guerrillas con apoyos espontáneos de la población; en cambio, la TGPP compartía dicha táctica, pero no la tesis del apoyo necesario de la población.

De acuerdo con la estrategia tercerista, el FNCF operó en la meseta de Estelí y en el Valle del Ocotal, en contacto con la población.

En el primer mes de 1979, Alfonso Robelo, el negociador más importante de lo que quedaba del FAO, abandonó las conversaciones, debido a la intransigencia de Somoza en cuanto a dejar el poder. Los EU habían fracasado en su intento por mediar en el conflicto.

En marzo de 1979, el FSLN atacó ciudades importantes con la idea de atraer a la GN hacia terrenos dominados por el FNCF. Entre

²⁷ López, *op. cit.*, p. 373.

marzo y mayo del mismo año, columnas del FNCF ocuparon el Jícaro, Estelí y Jinotega. El comandante de estas columnas, Francisco Rivera, detuvo el operativo para reagrupar fuerzas e instruir a los nuevos militantes.

El Frente Sur actuó con menos éxito, pues la columna guerrillera del mismo, integrada por 140 miembros, trató de atraer a la GN hacia el territorio situado entre el Océano Pacífico y el lago de Nicaragua. La respuesta de la GN fue rápida y efectiva: con ayuda de los pobladores de la zona, interceptó al contingente enemigo en campo abierto y lo destruyó.

Los terceristas rompieron con el proceso de mediación promovido por EU y abandonaron parcialmente la política de tolerancia en las negociaciones. Esto motivó el acercamiento entre la TGPP y la TI. Tomás Borge, quien salió de la cárcel por la toma del palacio efectuada por los terceristas, influyó para que la TGPP aceptara los principios fundamentales, el programa mínimo y la política de alianza tercerista.

Borge colaboró en la campaña para convencer a la opinión pública internacional de que el FSLN se había convertido en social-demócrata. El 4 de diciembre de 1978, Borge declaró en México: “Somoza nos pintó como marxistas. Es cierto que hay algunos marxistas entre nosotros pero el Frente es mucho más amplio. El concepto de guerra popular prolongada no era marxista. Es un concepto militar [...] No somos ni marxistas ni liberales, somos sandinistas”.²⁸

Los terceristas decidieron no continuar el diálogo con Somoza y las otras dos tendencias aceptaron la línea insurreccional. Fidel Castro influyó en el proceso de unificación formal del FSLN. El dirigente cubano condicionó su ayuda al frente: Ésta sólo se otorgaría por la existencia de la unidad vanguardista. “Las tres tendencias del Frente coincidieron en la necesidad de la unidad; en diciembre de 1978, las direcciones de las tres fracciones suscribieron un comunicado conjunto que señalaba: la unificación pro-

²⁸ *Apud* Nolan, *op. cit.*, p. 136.

visional, el rechazo a las negociaciones o plebiscitos y el compromiso de continuar la guerra bajo el programa del MPU".²⁹

El 7 de marzo de 1979, los dirigentes de las tres fracciones del FSLN hicieron pública la formación de la Dirección Nacional Conjunta (DNC), compuesta por nueve comandantes; en representación de la TGPP estaban Tomás Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce; de la TP, Jaime Wheelock, Luis Carrión y Carlos Núñez, y de la TI, Daniel Ortega, Humberto Ortega y Víctor Tirado. El sector socialdemócrata de la TI estuvo ausente en este repartó de poder. Humberto Ortega continuó como comandante del Ejército Sandinista. Los comandantes terceristas eran mayoría en las unidades operativas y la estrategia insurreccional predominó en el ámbito militar del frente unificado.

Después de dicha reunificación, las discusiones políticas y estratégicas fueron privadas: los nueve comandantes empezaron a tomar las decisiones por consenso y a ocultar ante la opinión pública sus diferencias.

El 29 de mayo de 1979, el FSLN lanzó su ofensiva final a través de los frentes Sur y Norte, y el 4 de junio convocó a huelga general. El 16 de junio, desde Costa Rica, se anunció la formación de un gobierno provisional integrado por Daniel Ortega (FSLN), Sergio Ramírez (grupo de Los Doce), Moisés Hassan (MPU), Alfonso Robelo (FAO) y Violeta Barrios de Chamorro (esposa de Pedro Joaquín Chamorro). También se dio a conocer su Programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional, basado en la economía mixta, el pluralismo político y el no alineamiento. El 15 de julio, el FSLN ya controlaba las ciudades de León, Masaya, Matagalpa y Diriamba. El 17 de julio, Anastasio Somoza huyó de Nicaragua, luego de dejar el poder en manos de Francisco Urcuyo, dos días después el FSLN entró triunfante en Managua, Urcuyo y la GN se rindieron y abandonaron el país.

²⁹ *Loc. cit.*

Conclusiones

La revolución nicaragüense es un hecho significativo para la historia de Latinoamérica; después de 20 años de la experiencia cubana, un movimiento armado conquista el poder a través de una política amplia de alianzas, con un discurso político moderado, participación importante de cristianos y un fuerte respaldo internacional. Las amenazas de invasión militar de Estados Unidos, así como los problemas económicos del país, originaron la pérdida de consenso del régimen sandinista (1979-1990) dentro de la sociedad civil. Esta situación sería causa fundamental de la derrota del FSLN en las elecciones de 1990. Quizás sea éste el momento donde se manifiesta el rasgo más sobresaliente del fenómeno sandinista: me refiero al hecho de haber sido un proceso capaz de poner en juego el poder político a pesar de tener como posible resultado la propia derrota electoral del frente, situación que debe ser considerada, antes que un fracaso, un avance dentro del desarrollo democrático de la vida política latinoamericana.

Bibliografía básica

- Alegría, Claribel, y D. J. Flakoll, *Nicaragua: la revolución sandinista. Una crónica política (1855-1979)*, México, ERA, 1982.
- Arias, Pilar, *Nicaragua: revolución. Relatos de combatientes del Frente Sandinista*, México, Siglo XXI, 1981.
- Blandón, Jesús M., *Entre Sandino y Fonseca*, S.L., Talleres de Impresiones y Troqueles, 1980.
- Borge, Tomás, *La paciente impaciencia*, La Habana, Casa de las Américas, 1989.
- Camacho Navarro, Enrique, *Los usos de Sandino*, México, UNAM, 1991.
- Cancino Troncoso, Hugo, *Las raíces históricas e ideológicas del movimiento sandinista; antecedentes de la revolución nacional y popular nicaragüense de 1927-1979*, S. L., Odense University, 1984.

- Carmona, Fernando, *Nicaragua: la estrategia de la victoria*, México, Nuestro Tiempo, 1980.
- Fonseca, Carlos, *Obras. Bajo la bandera del sandinismo*, t. I, Managua, Nueva Nicaragua, 1981.
- _____, *Obras. Viva Sandino*, t. II, Managua, Nueva Nicaragua, 1982.
- Frente Sandinista, *Diciembre victorioso*, México, Diógenes, 1979.
- Harris, Richard, y Carlos M. Vilas [comps.], *La revolución en Nicaragua*, México, ERA, 1985.
- López, Julio, et al., *La caída del somocismo y la lucha sandinista en Nicaragua*, San José, Costa Rica, EDUCA, 1979.
- Lozano, Lucrecia, *De Sandino al triunfo de la revolución*, México, Siglo XXI, 1985.
- Maier, Elizabeth, *Las sandinistas*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1985.
- Monroy García, Juan, *Tendencias ideológico políticas del FSLN 1975-1989*, tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, FFYL, México, UNAM, 1996.
- Nolan, David, *La ideología sandinista y la revolución nicaragüense*, Barcelona, Ediciones 29, 1986.
- Randall, Margaret, *Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy*, México, Siglo XXI, 1980.
- _____, "Somos millones..." *La vida de Doris María, combatiente nicaragüense*, México, Extemporáneos, 1977.
- Torres, Rosa María y José Luis Coraggio, *Transición y crisis en Nicaragua*, San José, Costa Rica, DEI, 1987.
- Vilas, Carlos María, *Perfiles de la revolución sandinista*, La Habana, Casa de las Américas, 1984.

INSURGENCIA Y TRANSICIÓN ESTATAL EN GUATEMALA

Carlos Figueroa Ibarra¹

Guerrilla y democracia, guerrilla y miseria

En septiembre de 1996, al firmarse el último acuerdo sustancial entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno de Guatemala —el referido al fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en la transición democrática— terminaron en dicho país 35 años de hostilidades que en diversos momentos llegaron a adquirir características de una verdadera guerra civil y tuvieron saldos en la esfera social que no pueden desconocerse.

Cuando, el 13 de noviembre de 1960, un grupo de militares se sublevó contra la corrupción del gobierno del feneral Miguel Ydígoras Fuentes, sus integrantes nunca imaginaron que su rebelión solamente sería uno de los cruentos episodios de una violencia que dejaría un saldo de alrededor de 175 000 muertos y 45 000 desaparecidos, miles más de heridos y mutilados, cientos de miles de familias afectadas por el terrorismo de Estado que las diversas dictaduras militares impusieron. Además de lo anterior, no puede desconocerse el hecho de que la Guatemala de la posguerra se en-

¹ Sociólogo guatemalteco. Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha escrito *El proletariado rural en el agro guatemalteco*, Guatemala, Universitaria, 1980, y *El recurso del miedo. Ensayo sobre Estado y terror en Guatemala*, Costa Rica, EDUCA, 1991.

frentará a un ejército de más de 40 000 hombres que deberá desmovilizarse parcialmente, un número significativo de insurgentes de ambos bandos que habrán de volver a la vida civil en una sociedad que, desgarrada por la guerra, por la década perdida y las políticas neoliberales, poco tendrá que ofrecerles. La guerra habrá acabado con las dictaduras militares, pero de ninguna manera con la miseria, la cual hoy es mayor que cuando el conflicto se inició.

¿Fue la guerra en Guatemala un hecho, en medio de todo, de carácter positivo para el desenvolvimiento de la nación? ¿El desarrollo de la insurgencia armada revolucionaria fue un acontecimiento necesario e inevitable para la democratización del país? Tales preguntas seguirán siendo debatidas, sin que acaso se llegue algún día a una respuesta inequívoca. De hecho el surgimiento de una insurgencia armada en México ya empieza a despertar los mismos interrogantes. ¿Ha contribuido el EZLN a la transición democrática en México o, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes? No nos planteamos la misma cuestión respecto al EPR, pues hasta el momento de escribir estas notas las acciones militares de dicha organización no han tenido un corolario político y un efecto en el mismo orden que los neozapatistas.

Un intelectual de primera línea en México, como lo es Héctor Aguilar Camín, se ha permitido desafiar lo que según él son dos ideas ampliamente difundidas a partir de 1994 entre políticos y periodistas, clérigos e intelectuales: 1) la violencia guerrillera puede ser fundadora de “civilidad democrática” y 2) la guerrilla es producto de la pobreza. Hace algunos años, en algún artículo publicado en la revista *Nexos*, él afirmaba que era injusto no vincular la apertura democrática en avance con los brotes guerrilleros surgidos en el país; ahora, Aguilar Camín opina que las guerrillas en el continente no han sido sino “utopías al revés, larguísimos caminos de sangre y represión para llegar finalmente a la búsqueda ansiosa de lo que empezaron rechazando: las vías políticas, la paz, la gradualidad y los acuerdos democráticos”.²

² *La Jornada*, 9 de septiembre de 1996, p. 10.

El planteamiento actual de Aguilar Camín —formulado en un momento en que la guerrilla parece estar iniciando un nuevo periodo de la vida política mexicana— aparece en Guatemala ahora que la guerrilla ha terminado su ciclo y con ello, a su vez, la vida política guatemalteca inaugura una nueva etapa. Es esencial, pues, que la respuesta a los cuestionamientos de Aguilar Camín respecto al caso mexicano tenga toda la seriedad del caso. Por supuesto que no es éste el propósito de mi artículo, sino el de explorar el asunto en el caso guatemalteco hoy que la guerra afortunadamente ha terminado. Como Aguilar Camín ha generalizado sus preguntas y respuestas en el nivel latinoamericano, me siento con derecho a expresar mi opinión respecto a Guatemala. Y mi respuesta a sus dos preguntas es afirmativa.

Sí, la insurgencia armada, por desgracia, contribuyó a impulsar en Guatemala una transición democrática. Sí, la miseria fue un factor —no el único, otro de ellos fue la opresión étnica y uno más la dictadura— propicio para que la insurgencia armada surgiera una y otra vez como Ave Fénix de sus cenizas e incluso llegara en determinado momento a contar con una extensa base social. Pero si la contestación a la segunda interrogante es afirmativa sin más, desde mi punto de vista la que merece la primera cuestión requiere una respuesta imposible a una pregunta adicional: ¿no se habría logrado lo mismo si la izquierda revolucionaria guatemalteca hubiese ensayado la vía de un movimiento político de masas por la democracia y la justicia social? Ni el dogma revolucionario que inspiró la malinterpretación de la insurgencia revolucionaria cubana ni el feroz anticomunismo de la cultura del terror presentes en el Estado y la burguesía guatemalteca hicieron posibles el ensayo mencionado. Hoy éste no es sino una hipótesis que nunca tendrá comprobación.

El hecho cierto es que en el desmontaje de la dictadura militar guatemalteca, la insurgencia armada revolucionaria fue un actor de primer orden.

¿Quién tiró la primera piedra?

A mediados de 1955, los sueños revolucionarios iniciados con la alborada de 1944 habían terminado. La primavera de los diez años —aquellos que comenzaron con el derrocamiento de la dictadura ubiquista de 1944— se extinguió cuando una conjura internacional liderada por la Casa Blanca y en particular por la CIA, aunada a una alianza reaccionaria compuesta por buena parte de la burguesía guatemalteca, la iglesia católica, la ultraderecha partidista y un sector del ejército, derrocó al gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán.

La primera ola de terror de la Guatemala del siglo xx, la observada durante la contrarrevolución de 1954, había dejado un saldo de aproximadamente 3 000 muertos, según algunas estimaciones.³ La Constitución de 1945 y el Código de Trabajo instaurados por la revolución fueron derogados, la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y las demás organizaciones sociales nacidas al cobijo de la primavera democrática resultaron desmanteladas, la reforma agraria impulsada por el régimen de Arbenz se convirtió en un recuerdo porque los miles de campesinos beneficiados tuvieron que devolver las tierras a sus antiguos propietarios y el terror se impuso mediante el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo, el cual institucionalizó la cacería de brujas.⁴

En el contexto de la clandestinidad, la izquierda revolucionaria guatemalteca, en esa época representada sustancialmente por el partido comunista —denominado Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)—, empezó a sistematizar las llamadas lecciones de la derrota. Las enseñanzas amargas del PGT pueden presentarse muy resumidamente de esta manera: el partido había confiado demasiado en una burguesía nacional que al final había capitulado ante el imperialismo, no había sido lo suficientemente enérgico para denunciar la traición de la alta oficialidad del ejército ni en rela-

³ Harnegger/Sánchez, 1984, p. 265.

⁴ CP/PGT, 1955, p. 58; Gleijeses, 1991, p. 381-386.

ción con el suministro de armas a los sectores populares para defender la revolución ni ante la posibilidad de propiciar una ruptura de los oficiales leales con los traidores, no había tenido el coraje de propalar su propio programa de clase por temor a caer en provocaciones, no había trabajado bastante para poder construir de manera sólida la alianza obrera-campesina y había descuidado su trabajo ideológico.⁵

Resulta obvio, aunque en el documento citado no sea explícito, que lo que se llamó “la vía violenta de la revolución” podía deducirse de la autocrítica del PGT y de las enseñanzas extraídas de la contrarrevolución. Una revolución antifeudal y antiimperialista, que instaurara un nuevo tipo de gobierno donde el proletariado sería la clase hegemónica, que se constituiría en una dictadura democrática revolucionaria y que reestructuraría el ejército y lo acompañaría de milicias populares, no era posible mediante la vía electoral. Sobre todo si se enfrentaba a una dictadura cuyo carácter militar ya se perfilaba. La conclusión es ya un lugar común en la izquierda guatemalteca: fue el derrocamiento de Arbenz y la instauración de un régimen dictatorial lo que sembró la violenta tempestad de cuatro décadas en Guatemala.

El nacimiento de la dictadura militar

Sin embargo, las conclusiones planteadas por el PGT solamente deben tomarse como uno de los antecedentes doctrinarios de la concepción de la violencia revolucionaria. En realidad, la dirigencia y la militancia del PGT habían nacido en la lucha política, se habían educado en ella y es posible adelantar la hipótesis de que siempre fue esta forma de lucha, y no la armada, su verdadera vocación.

De esa manera, cuando el hombre que derrocó a Arbenz —el coronel Carlos Castillo Armas— fue asesinado en junio de 1957 y este hecho abrió una nueva etapa de pugnas e inestabilidad po-

⁵ CP/PGT, 1955, p. 30-46.

lítica en el arco de las fuerzas reaccionarias protagonistas de la contrarrevolución, el PGT pareciera haber considerado la coyuntura política propicia para el inicio de un proceso de apertura política. En marzo de 1958 comenzó a difundir la línea de la “conciliación nacional”, que podría sintetizarse como “una política de acuerdo con la cual los guatemaltecos de derecha e izquierda, conservadores o comunistas, puedan convivir, ejercer en un plano de igualdad sus derechos fundamentales (de organización, de expresión del pensamiento, de creencias religiosas, de residencia en la tierra patria, etc.)”.⁶

Varios hechos, internos y externos, desvirtuaron paulatinamente la posible apertura concebida por el PGT y, además, el avance, en el seno de la izquierda, de una línea de lucha política por la democracia en Guatemala.

En primer lugar, el ejército consolidó el papel que empezó a desempeñar en los días del derrocamiento de Arbenz. Desde la época del gobierno arbencista, de manera imperceptible en un principio, después de modo cada vez más notorio, hasta llegar al momento de la contrarrevolución de 1954, las fuerzas armadas se ostentaron cada vez más como la encarnación del poder político delegado por la clase dominante, el imperio y las fuerzas políticas de la derecha guatemalteca. Así, si antes de 1944 el ejército había sido el instrumento del *dictador*, después de la contrarrevolución “se convertiría en la novia de la clase alta”.⁷ En esa condición continuaría durante los cuatro años siguientes a la caída del gobierno de Jacobo Arbenz.

El triunfo de la revolución cubana en 1959, la radicalización de ésta y su transformación en revolución socialista habrían de consolidar el proceso de instauración de la dictadura militar en Guatemala. Como es bastante conocido, la revolución cubana habría de modificar la política latinoamericana de Washington. Surgirían la *Alianza para el Progreso* y la *doctrina de seguridad*

⁶ CP/PGT, 10/1958.

⁷ Gleijeses, 1991, p. 386.

nacional,⁸ en realidad las dos caras de una política contrainsurgente cuyos actores principales serían los militares latinoamericanos. En el caso de Guatemala, esta política general dio continuidad en un nuevo contexto y con nuevos recursos a una serie de medidas iniciadas con la desestabilización y el derrocamiento del gobierno de Arbenz.

Las luchas preinsurreccionales urbanas de marzo y abril de 1962 y la aparición del primer y efímero brote guerrillero de Concuá en esas mismas fechas harían de Guatemala un escenario privilegiado para la contrainsurgencia diseñada por Estados Unidos: he aquí la razón por la cual Susanne Jonas habló en su momento de nuestro país como de “un plan piloto para el continente”.⁹ Pero sería unilateral hablar del surgimiento de las *dictaduras militares* únicamente como el resultado de un despliegue contrainsurgente de origen imperialista: el fantasma del comunismo había revoloteado desde la época de la sociedad oligárquica. La paranoia anticomunista se reforzaría en la percepción burguesa de Guatemala a consecuencia de las políticas sociales y nacionalistas de Arbenz, así como de la función del partido comunista (Partido Guatemalteco del Trabajo) como uno de los ejecutores de dichas políticas.

De esta manera, puede decirse que el papel desempeñado por el ejército en la contrarrevolución de 1954, el clima contrainsurgente propiciado por la revolución cubana y la inestabilidad política dentro del país fueron los factores que inducen a la clase dominante a delegar expresamente el poder en las fuerzas armadas con motivo del golpe de Estado de 1963. Este golpe será distinto del de 1954, pues aquí no encontramos un dubitante ejército presionado por la embajada estadounidense, sino a un cuerpo organizado que actúa como una corporación de expresa voluntad contrainsurgente.¹⁰

⁸ Tapia, 1980; Martz, 1988.

⁹ Jonas Bodenheimer, 1981.

¹⁰ Torres Rivas, 1987, cap. IV.

Al manifestarse la insurgencia, y sus ciclos,¹¹ el ejército guatemalteco sufre la transformación de la que habla Gleijeses en las páginas finales de la obra que hemos citado: “Gradualmente, al ejército le crecieron bigotes y se le desarrollaron fuertes músculos”.¹² Será el temor a la reforma o a la revolución¹³ lo que genere una nueva *apelación dictatorial*, esta vez ya no a un líder carismático o *caudillo*, sino a una institución que actúa corporativamente.¹⁴

He aquí el comienzo de un nuevo periodo de la historia guatemalteca en donde el núcleo sustancial de las decisiones políticas —aun cuando en lo referente a las económicas el empresariado siempre tuvo la última palabra— ha empezado a recaer en el ejército, en particular en su alto mando. Independientemente de los diversos rasgos que posea la *dictadura militar*, e independientemente de los distintos *tipos* que de ésta encontremos, lo anterior comenzará a constituir la característica esencial de su definición.

De la “conciliación nacional” a la lucha armada

Respecto al tema que nos ocupa, la relación insurgencia armada-transición democrática, vale la pena detenernos un momento para examinar la dialéctica entre dictadura militar y lucha armada revolucionaria. La dictadura militar se fue incubando desde el periodo de Arbenz, pues la desaparición de la figura del caudillo reaccionario o del dictador indujo a las fuerzas conservadoras del país a buscar un nuevo interlocutor para su apelación dictatorial. La amenaza revolucionaria representada por el régimen arbencista y la que después implicó la revolución cubana endureció aun más

¹¹ Figueroa Ibarra, 1991, cap. III.

¹² Gleijeses, 1991, p. 386.

¹³ En el caso guatemalteco, el golpe de 1963 no solamente se inscribe en la lógica contrainsurgente surgida en respuesta a la revolución cubana. Jonas Bodenheimer, 1981. También obedece, como causa inmediata y visible, a la posibilidad de que el expresidente Arévalo contienda por el Ejecutivo y lo gane; Torres Rivas, 1987, cap. IV.

¹⁴ Figueroa Ibarra, 1991, cap. III; 1994, p. 874.

la postura política e ideológica del ejército, también intensificó el proceso de consolidación de su papel vertebral dentro del Estado.

A su vez, el fortalecimiento de la dictadura militar y el triunfo de la revolución cubana radicalizaron a un sector importante de la izquierda guatemalteca. Así, puede decirse que si bien es cierto que este radicalismo recibía un poderoso estímulo al surgir y consolidarse la *dictadura militar* en el país, el estremecimiento ideológico —“la revolución en la revolución” de la que habló Debray— que generó la interpretación dominante de lo sucedido en Cuba también cumplió un notable papel en dicha radicalización.

He aquí, pues, la dinámica que llevó poco a poco al país a la espiral de la violencia política en crecimiento.

Desde principios de los setenta, cuando la línea de la “conciación nacional” se desechó, el PGT empezó a esbozar una tendencia hacia “la vía violenta de la revolución” que relativamente pronto tuvo una manifestación práctica. Junto a otras fuerzas, el PGT empezó a organizar la instalación de un foco guerrillero, en el norte del país, al mando del exjefe de las Fuerzas Armadas durante el periodo revolucionario, coronel Carlos Paz Tejada. Como bien lo afirman Debray y Ramírez, los primeros “foquistas” en Guatemala fueron los comunistas del PGT.¹⁵

El foco guerrillero de las montañas de Concuá tuvo una vida efímera y un fin trágico, pues el ejército localizó el contingente de 23 revolucionarios, lo cercó y aniquiló a buena parte de él: trece insurgentes cayeron en combate, entre el 12 y el 13 de marzo.¹⁶ Similar fin tuvo otro intento emprendido por un grupo que penetró en Huehuetenango por la frontera de México.¹⁷

Entre 1962 y 1967, y particularmente en el periodo de su apogeo, 1965-1966, la insurgencia organizada en las fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) levantó varios frentes guerrilleros en el país y realizó diversos tipos de acciones armadas, tales como hostigamientos, ajusticiamientos, sabotajes económicos, emboscadas a

¹⁵ Debray y Ramírez, p. 262.

¹⁶ Aguilera, 1970, p. 18.

¹⁷ Aguilera, 1970, p. 18 y 19; Debray y Ramírez, 1975, p. 262.

unidades del ejército, toma de poblaciones en la zona nororiental del país, propaganda armada, secuestros con fines económicos y políticos, acciones financieras de carácter militar.¹⁸ Resistió dos ofensivas del ejército en 1964 y 1965,¹⁹ pero la tercera, comenzada al día siguiente de la muerte de Turcios Lima (el comandante principal de la insurgencia) en un accidente automovilístico, ocurrida el 3 de octubre de 1966, culminaría en agosto de 1967 con la dispersión total de la guerrilla rural.²⁰

En el momento de su mayor auge, la guerrilla estaba constituida en el noreste del país, entre Zacapa e Izabal, por el Frente Guerrillero Édgar Ibarra (FGEI), que contaba con más de 100 hombres armados; en Izabal, el MR-13 tenía 30 hombres provistos de armamento precario; en Santa Rosa (sureste del país) había un grupo pequeño llamado “regional de Santa Rosa”; en San Marcos y Quetzaltenango, el “regional de occidente” contaba con 30 o 40 combatientes; el regional del sur disponía de similar cantidad de efectivos y el del norte de alrededor de 25. En la capital, el “regional del centro” contaba con alrededor de 80 efectivos. En total, unos 300 combatientes, con una periferia de simpatizantes y colaboradores en Zacapa e Izabal, sobre todo, de aproximadamente 5 000 personas.²¹ Un año y medio después, casi toda esta infraestructura humana y organizativa estaba virtualmente desmantelada.²²

El surgimiento del monstruo contrainsurgente

La complejidad de la respuesta a la pregunta inicial que desea contestar este trabajo es evidente cuando se analiza a la Guatema-

¹⁸ Alvarado, 1994, p. 55.

¹⁹ Debray y Ramírez, 1975, p. 290; Alvarado, 1994, p. 65.

²⁰ Debray y Ramírez, 1975, p. 290 y 299.

²¹ Debray y Ramírez, 1975, p. 285-286.

²² En realidad la ofensiva contrainsurgente parece haber obtenido éxito mucho antes del plazo de un año. En Harnecker/Monsanto, 1984, p. 245, Pablo Monsanto recuerda que, a principios de 1967, en la Sierra de las Minas quedaban únicamente seis combatientes.

la de los años sesenta. Si bien la revolución frustrada de Arbenz y el empleo amenazante de la triunfante en Cuba consolidaron a la dictadura militar, la respuesta insurgente a esta última la transformó a su vez en el monstruo contrainsurgente que horrorizó a buena parte del mundo entre los sesenta y los ochenta. En efecto, la paranoia anticomunista y la *doctrina de seguridad nacional* se entrelazaron con el inicio de la insurgencia, lo cual dio por resultado la instauración de la dictadura militar *abierta*.

Se ha dicho²³ que el golpe de Estado de 1963 tuvo “rasgos nuevos y distintos”; entre ellos se cuenta que el ejército, al derrocar a Ydígoras, haya actuado como corporación: consultó a todos los jefes militares del país y Peralta Azurdia asumió la jefatura del Estado por escalafón, en tanto oficial de mayor responsabilidad. Lo anterior es cierto y, en consecuencia, lo es también la aparición de la *dictadura militar*. Igualmente es verdad que el proceso se inició cuando el ejército le impuso al debilitado Ydígoras, en abril de 1962, un gobierno de “formato militar”:²⁴ al reestructurarse el gabinete, virtualmente todos los ministros fueron militares aun cuando buena parte de ellos tenía también títulos universitarios.

Pero, además de lo anterior, la flamante dictadura incluyó como novedad el terror, como un elemento cuantitativamente limitado, pero no por ello menos significativo.²⁵ Al hablar de la represión durante el periodo de Peralta Azurdia, Villagrán Kramer—quien fuera vicepresidente de otra dictadura, la de Lucas García—afirmará algo que es extensible al terror tal como se concebía hasta antes de su “revolución copernicana” con Ríos Montt:

[...] impulsar acciones armadas directas contra las guerrillas y controlar política e ideológicamente a los sectores de la población que no adherían abierta y públicamente al anticomunismo, usando tam-

²³ Entre otros Torres Rivas, 1987, cap. IV; Villagrán Kramer, 1994, p. 385.

²⁴ Villagrán Kramer, 1994, p. 370-371.

²⁵ Recuérdese el caso de los 28 desaparecidos, entre ellos el dirigente sindical Víctor Manuel Gutiérrez, registrado en las postrimerías del régimen de Peralta Azurdia. Villagrán Kramer, 1994, p. 410.

bién la represión cuando fuere el caso. Los altos jefes militares no concebían otra modalidad de lucha contra las guerrillas ni mucho menos la combinación de los factores militares y políticos. Algo más, estaban obcecados con esa estrategia.²⁶

El testimonio es elocuente: la insurgencia endureció al régimen y alejó aun más la posibilidad de una salida política. Es difícil llevar a cabo recuentos del terror y por ello suelen arrojar resultados diversos, aunque en los sesenta el control de las cifras del terror no fue tan complicado ni contribuyó a él una variedad de organizaciones humanitarias como la que participó al respecto en los ochenta. Así Villagrán Kramer habla de más de 2 000 personas asesinadas; Jonas, de 8 000; Torres Rivas, de 18 000.²⁷ Aunque la cifra de este último resulta exagerada a la luz de las estimaciones cuantitativas efectuadas respecto a la *tercera ola de terror* (1978-1984) —la cual fue mucho más cruenta que la segunda (1967-1972)—, otros autores²⁸ estiman casi 17 000 hechos de violencia (asesinatos, secuestros, asesinatos fallidos, atentados, cadáveres encontrados, encuentros armados) ocurridos entre 1966 y 1976.

Las circunstancias no variaron cuando el régimen pasó de su posición de dictadura militar *abierta* a una de carácter *embozado*. Por tal entenderemos al régimen político en que la institucionalidad democrática se ha restablecido por las fuertes presiones internas y externas, pero en donde el poder del ejército no se ha reducido ni un ápice. Esto fue lo que sucedió con la elección como presidente de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970). El alto mando del ejército y el empresariado vio con recelo el triunfo inesperado de este que era el único candidato civil en las elecciones presidenciales de 1966.²⁹ El resultado de ello sería el *Pacto Secreto de 1966*,³⁰ mediante el cual se acordó acortar drástica-

²⁶ Villagrán Kramer, 1994, p. 411.

²⁷ Villagrán Kramer, 1994, p. 448; Jonas, 1991, p. 69; Torres Rivas, 1989, p. 162.

²⁸ Aguilar y Romero, 1981, p. 160.

²⁹ Villagrán Kramer, 1994, p. 415.

³⁰ Villagrán Kramer, 1994, cap. X.

mente al presidente recién electo: el ejército prometía no derrocar al gobierno civil siempre y cuando se comprometiera con la lucha anticomunista (en palabras brutales, la guerra sucia de la contrainsurgencia), no negociara con los insurgentes, constituyera un gabinete de “unidad nacional” (donde se incluyera a personalidades afines a los partidos derrotados), respetara bienes y personas de los funcionarios civiles y militares del gobierno anterior y mantuviera intacta la autonomía del ejército en lo referente a su integración, organización y administración.

El pacto no sólo normaría las relaciones entre civiles y militares durante el periodo de Méndez Montenegro, sino que establecería las reglas del juego entre civiles y militares durante los sucesivos gobiernos. A partir de entonces y por los siguientes tres lustros, el ejército cosentiría el juego partidario y electoral, pero nadie duda que el epicentro del poder político residiría en el alto mando: éste se reservaría el derecho de ser el *gran censor* de la política nacional. Los sucesivos titulares del Ejecutivo³¹ no adoptarían el estereotipo de “presidente títere” asignado a Méndez Montenegro, puesto que el primer mandatario será uno de los oficiales del alto mando, con lo cual será aun más perceptible el enmascaramiento de la *dictadura militar*.

Pero las reglas del juego establecidas desde 1966 serán en lo esencial las mismas: el ejército funge como el delegado del poder de la clase dominante, pero por ello mismo actúa con autonomía respecto a ella; de sus filas salen el presidente de la república, el ministro de la defensa y buena parte de los funcionarios de la seguridad interior; tiene la última palabra en los asuntos generales de política nacional; sus decisiones en materia de seguridad, contrainsurgencia y terror son inapelables; el precio del trabajo sucio que implican las tareas anteriores consiste en garantizar impunidad a quienes lo realizan y a la alta jerarquía militar para enriquecerse. He aquí, en términos generales, el modelo de dictadura militar que con diversas variantes se observará hasta mediados de la década de los ochenta.

³¹ Arana Osorio, 1970-1974; Laugerud, 1974-1978; Lucas García, 1978-1982.

Alzamiento guerrillero de masas y transición a la democracia restringida

No es posible entender el auge de las luchas sociales urbanas y rurales de la década de los setenta y el inicio de la generalización de la guerra de guerrillas a fines de ese mismo decenio y principios de los ochenta en Guatemala, sin considerar el estallido revolucionario registrado en toda la región centroamericana a partir del asesinato de Chamorro en Nicaragua en enero de 1978. La aparición de una *situación revolucionaria* en dicho país,³² que culminará con el triunfo de la revolución sandinista, propagará el incendio revolucionario hacia El Salvador y Guatemala. En este último país, la guerra de guerrillas se expande entre 1979 y 1980 a tres cuartas partes del territorio nacional y en 1981 entra en la fase de plena generalización.³³ Si se entiende por acciones militares insurgentes los sabotajes, ajusticiamientos, ocupaciones, emboscadas, combates con el ejército, hostigamiento y propaganda armada, en 1979 hay 113 de ellas, en 1980 tal número se eleva a 500 y en 1981 es superior a 900.³⁴

Cuando, en febrero de 1982, surge la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca,³⁵ el ejército se enfrenta con estupor a la oleada revolucionaria. Un destacado protagonista de la contrainsurgencia, el general Gramajo, consignará en su libro³⁶ su sorpresa: la institución armada sufre bajas significativas; los insurgentes terroristas tienen bajo su control varios municipios de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, Chimaltenango y Sololá, y ejercen su influencia perturbadora en San Marcos, Totonicapán y la parte de tierra fría de Quetzaltenango; aproximadamente 260 000 habitantes de 35 municipios y casi 18 000 kilómetros se han convertido en pueblos fantasmas que apoyan la rebelión; los alzados

³² Lozano, 1985, cap. II y III.

³³ Payeras, 1991, p. 18 y 20.

³⁴ Figueroa Ibarra, 1991, p. 143.

³⁵ URG, 2/1982.

³⁶ Gramajo, 1995, p. 154 y 155.

abandonan las cabeceras municipales, asesinan a las autoridades locales y queman las municipalidades, para luego huir hacia las montañas; las carreteras son controladas en algunos tramos y momentos por medio de zanjas y árboles derribados, y los efectivos del ejército que transitan en ellas son atacados a menudo por medio de bombas *claymore*; las fuerzas insurgentes se sienten poderosas, en especial el EGP que cuenta con entre 10 y 12 000 combatientes, 100 000 elementos de infraestructura organizados en las fuerzas Irregulares Locales y Autodefensas Locales, las cuales a su vez influyen en 260 000 habitantes del altiplano.³⁷

Una situación que se planteaba en tales términos para el Estado, la clase dominante, los partidos derechistas y el propio ejército de Guatemala tendría que recibir una respuesta de dimensiones colosales. La actividad contrainsurgente tiene distintas fases y aun rupturas que sería largo enumerar para los propósitos de este trabajo. Baste decir que el terror estatal empieza en los cascos urbanos y de allí se empieza a irradiar hacia el campo, para llegar niveles dantescos entre 1982 y 1983.³⁸

La contrainsurgencia tendría que romper incluso con sus propios conceptos para poder detener la oleada revolucionaria. A principios de 1982, era evidente que la sola ofensiva militar era insuficiente para derrotar a los sublevados. Había que agregar a las campañas militares un ingrediente político inédito hasta ese momento y no era simplemente la “acción cívica del ejército” que había funcionado en los sesenta. Hoy se trataba de una relativa ruptura con la doctrina de seguridad nacional, invocada en ocasión del golpe de Estado que depuso a Lucas García en marzo de 1982. Ríos Montt habría de encabezar un cambio de timón en el Estado para sacarlo del estremecimiento que le había ocasionado la incorporación de las masas indígenas al movimiento revolucio-

³⁷ Esta descripción de la situación hecha por Gramajo puede ser tremendista. Finalmente su libro está en gran medida dedicado a destacar el papel del ejército y el propio en la salvación de Guatemala de la subversión comunista internacional. No obstante ello, su testimonio es indicativo de la generalización de la guerra revolucionaria.

³⁸ Figueroa Ibarra, 1991, cap. IV.

nario. La base doctrinaria del tal viraje contrainsurgente estaría en la *Tesis de la Estabilidad Nacional*.³⁹ Tal reorientación consiste en acompañar el terror contrainsurgente con medidas políticas de *carácter nacional* (no solamente de alcance comunitario, como sucedía con la “acción cívica”) que permitieran recuperar consenso político al Estado. Se trata entonces de una suerte de reformismo contrainsurgente⁴⁰ encaminado a desmontar la *dictadura militar* y sustituirla por un gobierno civil que empieza a hacer perder la iniciativa a la insurgencia.⁴¹

Pero desmontar la *dictadura militar* no es otra cosa sino el tránsito hacia la *democracia restringida*, que los militares y los ideólogos de la dictadura hacen aparecer como “transición a la democracia” y no implica el desmantelamiento del terrorismo de Estado. Todo lo contrario: el régimen de Ríos Montt será el más sangriento de la historia contemporánea guatemalteca al superar las cifras del de Lucas García: en 17 meses de gobierno el régimen asesina a más de 16 000 guatemaltecos principalmente en las áreas rurales, ocasiona la salida de más de 90 000 refugiados, principalmente a México, y desplaza en el interior a alrededor de 1 000 000 de personas. Otras medidas contrainsurgentes se agregaran a las anteriores: se crean las Patrullas de Autodefensa Civil (que en su apogeo organizarán, en un formidable dispositivo contrainsurgente, a 800 000 personas), las “coordinadoras institucionales”, los “polos de desarrollo”, las aldeas modelo, etcétera.

a finales de los ochenta, la situación militar ha variado radicalmente para la insurgencia revolucionaria. Durante varios años la URNG, por obvias razones, no aceptará de manera pública los efectos contrainsurgentes,⁴² pero cuando en enero y febrero de 1986 empieza a tender un puente hacia el presidente Cerezo y en noviembre del mismo año, en respuesta a una declaración presiden-

³⁹ Una inteligente crónica de este giro se encuentra en Gramajo, 1995, parte III.

⁴⁰ Figueroa Ibarra, 1991, cap. V.

⁴¹ Gramajo proclamará orgullosamente que el 31 de mayo de 1985 ningún oficial militar en retiro o en activo ocupaba cargo civil alguno en el gobierno, p. 232.

⁴² URNG, 1982; 2/1983; 3/1983; 8/1983; 6/1985; 9/1985; 2/1987; 2/1988.

cial, plantea la posibilidad de iniciar un diálogo en el interior del país,⁴³ el mensaje implica que la quimera de la conquista revolucionaria del poder ha sido abandonada y sustituida por la realista perspectiva de la solución negociada del conflicto interno. En realidad, a partir de fines de 1983 puede constatarse que el proyecto insurgente ha sido acotado drásticamente⁴⁴ aunque, a diferencia de lo sucedido en los sesenta, buena parte de los efectivos guerrilleros ha sobrevivido y lanzará en los años siguientes sucesivas y notables ofensivas. Pero la esencia de la guerra revolucionaria ha cambiado y en ese sentido puede hablarse de un significativo revés: el triunfo de la revolución, la conquista del poder, ha concluido como proyecto político de la misma manera en que esto empieza a ser notado aun en El Salvador, donde el FMLN tiene un poder de fuego y una irradiación muy superiores a los que en Guatemala tiene la URGN.

Independientemente de que el desmantelamiento de la *Dictadura militar* y su sustitución por la *democracia restringida* es una necesidad contrainsurgente para derrotar en lo político a la insurgencia, es imposible analizar dicha transición sin vincularla con los cambios observados en la política mundial. De manera más específica, sin relacionarla con los efectos que dichos cambios produjeron en la política de la Casa Blanca hacia América latina. Durante el periodo del presidente Carter (1976-1980), el *destino manifiesto* de expandir la democracia en el continente se relacionaba con una preocupación por los derechos humanos,⁴⁵ que en no pocas ocasiones resultó afectada por el pragmatismo político. Durante la época de Reagan (1980-1988), el acento se puso, más que en los derechos humanos, en la democracia⁴⁶ como contrapunto al totalitarismo comunista. Fácil es pensar que en este contexto, sobre todo en Centroamérica, que era zona neurálgica para los intereses estadounidenses, la apertura democrática,

⁴³ Inforpress, 1995, p. 9-11.

⁴⁴ OR, 3/1990, p. 7 y 8.

⁴⁵ Pastor en Martz, 1988.

⁴⁶ Huntington, 1991.

de modo paradójico, estaba indisolublemente unida a la contrainsurgencia. A partir de Bush (1988-1992), la política de expansión de la democracia hacia América latina dejará de tener las urgencias políticas e ideológicas del periodo anterior: la guerra revolucionaria languidece en Centroamérica, la revolución nicaragüense se ha estancado y la Guerra Fría ya la ha ganado Estados Unidos.

Lo que desde la década de los ochenta era una necesidad contrainsurgente (el desmontaje de la *dictadura militar*, la cual era una de las causas de las revoluciones) se convertirá a partir del fin de la Guerra Fría en algo propio del sentido común: surgidas como producto de la creciente agudización de la Guerra Fría, las *dictaduras militares* y las fuerzas armadas, como depositarias de la cuota esencial del poder político, pierden su fuente fundamental de sustentación. La cumbre militar interamericana celebrada en Virginia, Estados Unidos, en julio de 1995, tendrá entre sus objetivos rediscutir la concepción de la seguridad colectiva hemisférica. Militares argentinos y brasileños expresarán que “la revolución ya no es una opción”, que es necesario “redimensionalizar” a las fuerzas armadas para “enfrentar nuevos tipos de conflicto surgidos de cuestiones étnicas, religiosas, tribales”; también dirán que la nueva agenda ha “sustituido los conflictos convencionales del pasado sobre los cuales se establecieron los conceptos ya anticuados de seguridad continental”. Finalmente, los militares brasileños afirmarán que “los gobiernos militares del pasado fueron fruto de una coyuntura que ya pasó y que ahora no forma parte de este nuevo mundo” y el ministro argentino de la defensa concluirá que el objetivo principal es “la defensa del sistema institucional democrático de los países del hemisferio” y que la cumbre es el inicio de la discusión de tal tema.⁴⁷

En el tránsito a la *democracia restringida* el rasgo novedoso consistirá en que se limita la cuota de poder de la alta jerarquía militar, la cual se convertirá en un esencial factor de poder, pero no en su encarnación misma. He aquí la definición mínima de la

⁴⁷ *La Jornada*, México, D. F., 26 de julio de 1995, p. 46.

democracia restringida. La restricción se debe a que el andamiaje democrático no se sustenta en la subordinación de los funcionarios no electos (en este caso los militares) a los electos (poder ejecutivo y legislativo) como sucede en las *democracias consolidadas*,⁴⁸ sino en una tendencia al equilibrio de las cuotas de poder que corresponden a las cámaras empresariales, la clase política y el alto mando del ejército. Como puede verse, este modelo es distinto del de las *dictaduras militares*, en el cual un grupo de funcionarios no electos (en este caso la alta oficialidad de las fuerzas armadas) subordinan al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El espacio político que implica la *democracia restringida* —relativas libertades para los movimientos sociales y partidos políticos de oposición— está circundado por la continuidad del terror, el cual sigue siendo una realidad actuante —al igual que grupos paramilitares que pueden caracterizarse como escuadrones de la muerte—, como lo evidencian las cifras anuales de muertos y desaparecidos registradas en todos estos años (1986-1995) de *democracia restringida*.⁴⁹

Epílogo

En un intento de resumir las respuestas a las preguntas iniciales que han estimulado este trabajo, puede decirse que en términos generales dictadura y miseria fueron los dos grandes factores que generaron la conflagración no sólo en Guatemala sino en toda el área centroamericana. Reducir el debate a la relación miseria-guerrilla equivale a desvirtuarlo desde el principio. Quienes nos dedicamos a estudiar la violencia hoy con justicia podemos preguntarnos si la indigencia es el único factor del alzamiento neozaapatista en Chiapas. La miseria en sí misma no necesariamente genera respuestas violentas, sean motines o sublevaciones. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la penuria se combinó con

⁴⁸ Schmitter and Karl, 1991.

⁴⁹ Amnistía Internacional, 1989; ODHAG, 1992; 1993.

décadas de dictadura militar, fraudes electorales y asesinatos políticos, es decir con la ausencia de salidas políticas que permitieran a las fuerzas no únicamente de izquierda sino de centro buscar alternativas dentro de los linderos del Estado. Como esto no fue posible, la opción consistió en buscarlas *fuera del Estado y contra el Estado*.

Pero, aun así, los tres casos centroamericanos fueron distintos entre sí. Incluso cuando la miseria fue un hecho relevante en la Nicaragua somocista, no fue el factor fundamental de la sublevación. Esta función la cumplió la dictadura que, además de ser profundamente odiada, brindaba a sus adversarios la ventaja de estar personificada en un hombre, una familia, un apellido. La agregación de masas al proyecto sandinista contó por ello con una ventaja sustancial, como había sucedido antes con la Cuba de Batista y la República Dominicana de Trujillo. En el caso salvadoreño tal vez la miseria como fuente de rebelión cobró mayor relevancia por las dimensiones geográficas y las proporciones demográficas del país, hechos que hicieron más difícil la búsqueda de opciones: hay que recordar brevemente cómo la llamada *Guerra del fútbol* con Honduras, que frenó la inmigración a este país y expulsó a los salvadoreños inmigrados, agravó aun más la crisis salvadoreña. Como en El Salvador, en Guatemala el terrorismo de Estado, los fraudes electorales y las dictaduras militares se agregaron a la miseria como factores del estallido revolucionario. Pero en Guatemala la miseria misma no puede desvincularse del racismo y la opresión de que son víctimas los 22 grupos étnicos que constituyen 60 por ciento de la población: en Guatemala ser indio ha implicado una mayor desventura en el terreno de la explotación.

En lo que se refiere a la transición democrática en Centroamérica y al papel desempeñado en ella por la insurgencia armada puede decirse, sin lugar a dudas, que el saldo de la tormenta de violencia desatada por las guerras ha sido la modernización política: el desmantelamiento de las *dictaduras militares* y su sustitución por las *democracias restringidas* que paulatinamente se han ido ampliando, pero no al extremo de incluir en su programa a la justicia social. Planteados los polos de la confrontación en los

términos característicos de principios de los sesenta, uno puede llegar a la triste conclusión de que la guerra fue un factor determinante para estimular la democratización. La dictadura militar creó un núcleo de racionalidad a la idea de la insurgencia armada, y ésta finalmente hizo ver a las mentes más lúcidas en las alturas que solamente el desmantelamiento de la dictadura militar le quitaría adeptos a la lucha armada. En el caso guatemalteco, los saldos de la guerra pueden sintetizarse en los significativos acuerdos logrados en la mesa de negociaciones: sobre derechos humanos, reasentamiento de poblaciones desarraigadas, esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, identidad y derechos de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y agrarios, reformas constitucionales, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.

Con estos acuerdos que llevan a la firma de la paz y a la solución de una guerra de más de tres décadas, lo que nos ha dejado la tempestad desatada en 1954 es solamente un proyecto de nación. Para que lo escrito en los acuerdos se convierta en realidad efectiva se precisa una nueva correlación de fuerzas que emergerá de la Guatemala de la posguerra. No es mucho para lo que eran los sueños revolucionarios, pero es bastante para lo que ha sido Centroamérica en general y Guatemala en particular.

Es este el sentido general de la transición en Guatemala y en Centroamérica. Pero solamente el sentido general. Tanto en Guatemala como en Nicaragua y El Salvador, la aparición de los brotes guerrilleros acarrió a corto plazo inmensas calamidades a la población: la paranoia anticomunista se exacerbó, la cultura política del terror transitó de tradición a urgente necesidad, los asesinatos y desapariciones (selectivos, masivos, abiertos o clandestinos) se incrementaron notablemente, los ejércitos hicieron crecer de manera exponencial su poder político, la represión se cebó no sólo en la izquierda, sino también en el centro, y la economía se estropeó aun más.

Los centroamericanos vimos nacer y crecer las guerras civiles en el mundo de la Guerra Fría y las vimos terminar en el de la posguerra fría. Este cambio de época, seguramente, fue un factor

que posibilitó la transición democrática y la solución negociada del conflicto, porque sin duda transformó los temores y expectativas de las partes confrontadas. La guerra dejó de ser el camino del poder y el anticomunismo una prioridad. La solución de añejos conflictos armados (Colombia) o el surgimiento de otros en lugares donde no los habían —al menos no de manera tan relevante— (México) puede beneficiarse de este nuevo clima. De cualquier manera, sobre todo en el caso de los conflictos incipientes, vale la pena emprender los ensayos que los centroamericanos no pudimos realizar y ahorrarnos, como dice Aguilar Camín, los “larguísimos caminos de sangre y represión” para llegar a las “vías políticas, la paz, la gradualidad y los acuerdos democráticos”.

Porque a la democracia se puede llegar por el camino de la guerra; pero es mejor, muchísimo mejor, que la democracia llegue antes que la guerra.

Bibliografía

A. Libros

Aguilera Peralta, Gabriel Edgardo, *La violencia en Guatemala como fenómeno político*, tesis presentada a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título de Abogado y Notario. Guatemala, julio de 1970.

_____, *El fusil y el olivo. La cuestión militar en Centroamérica*, San José, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-DEI, 1989a.

Alvarado, Humberto, *Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo*, Guatemala, Comisión para la Celebración del Cincuentenario de la Revolución de Octubre-Universidad de San Carlos de Guatemala-Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” (Colección Revolucionaria), 1994.

- Amnistía Internacional, *Guatemala. Human Rights Violations under the Civilian Government*, AI Index AMR 34/07/89, junio de 1989.
- Debray, Regis, y Ricardo Ramírez, "Guatemala", en Regis Debray, *Las pruebas de fuego*, México, Siglo XXI, 1975.
- Figueroa Ibarra, Carlos, *El recurso del miedo. Ensayo sobre Estado y terror en Guatemala*, San José, Costa Rica, Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1991.
- Flores, Marco Antonio, *Fortuny: un comunista guatemalteco. Memorias*, Guatemala, Óscar de León Palacios-Palo de Hormigo, 1994.
- Gleijeses, Piero, *Shattered Hope. The Guatemala Revolution and the United States, 1944-1954*, Princeton University Press, 1991.
- Gramajo Morales, Héctor Alejandro, *De la guerra a la guerra. La difícil transición política en Guatemala*, Guatemala, Fondo de Cultura Editorial, 1995.
- Harnecker, Martha, *Pueblos en armas. Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entrevistas de Martha Harnecker*, México, ERA, 1984 (Serie Popular).
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma University Press-Norman and London, 1991.
- Inforpress Centroamericana, *Guatemala (1986-1994). Compendio del proceso de paz. Cronologías, análisis, documentos, acuerdos*, Guatemala, Talleres de Inforpress Centroamericana, 1995.
- Jonas Bodenheimer, Susan, *Guatemala: plan piloto para el continente*, San José, Costa Rica, Universitaria Centroamericana, 1981.
- Karl, Terry Lynn, "Central America at the End of the Cold War", en Breslauer y Ward [eds.], *Beyond the Cold War: Conflict and Cooperation in the Third World*, Regents of the University of California, 1991.
- _____, "Dilemas de la democratización en América latina", en *Foro internacional*, núm. 3, vol. xxxi, enero-marzo de 1991.
- _____, "El Salvador's Negotiated Revolution", en *Foreign Affairs*, núm. 71210, primavera de 1992.

- _____, "Modes de Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe".
- Linz, Juan J., "Transitions to democracy", en *The Washington Quarterly*, verano de 1990.
- Lozano, Lucrecia, *De Sandino al triunfo de la revolución*, México, Siglo XXI, 1985.
- Martz, John D. [ed.], *United States Policy in Latin America. A Quarter Century of Crisis and Challenge, 1961-1986*, Lincoln y Londres-University of Nebraska Press, 1988.
- Munck, Gerardo, *Social Movements and Democracy in Latin America. Theoretical Debates and Comparative Perspectives*, Washington, D.C., XVI International Congress of the Latin American Studies Association, 4 y 6 de abril de 1991.
- O'Donnell, Guillermo, y Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, The John Hopkins University Press, 1986.
- Payeras, Mario, *Los fusiles de octubre*, México, Juan Pablos Editor, 1991.
- Schmitter, Philippe C., y Terry Lynn Karl, "What Democracy Is and Is not", en *Journal of Democracy*, núm. 3, vol. 2, verano de 1991.
- Silva Girón, César Augusto, *La batalla de Gualán. Junio de 1954*. Guatemala, Impreoffset Óscar de León Palacios, 1987.
- Tapia Valdés, Jorge A., *El terrorismo de Estado. la doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*, México, Nueva Sociedad-Nueva Imagen, 1980.
- Tarrow, Sidney, *Transitions to Democracy as Waves of Mobilization with Applications to Southern Europe*, Delphi, SSCR Subcommittee Conference of Democratization in Southern Europe, 4 y 7 de julio de 1991.
- Torres Rivas, Edelberto, *Interpretación del desarrollo social centroamericano*, Centroamérica, EDUCA, 1971.
- _____, *La democracia posible*, San José, Costa Rica, EDUCA-FLACSO, 1987.

Villagrán Kramer, Francisco, *Biografía política de Guatemala. Los pactos políticos de 1944 a 1970*, Guatemala, FLACSO-Guatemala, 1994.

B. Documentos

Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, *La intervención norteamericana en Guatemala y el derrocamiento del régimen democrático*, Guatemala, junio de 1955 (CP/PGT, 1955).

Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo, *La situación política nacional y la táctica del partido*, Guatemala, noviembre de 1958 (CP/PGT, 10/1958).

Octubre Revolucionario, *Carta del Comité de Dirección de Octubre Revolucionario a los militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT-6 de enero)*, marzo de 1990, mimeo (OR, 3/1990).

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), *Informe de violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante 1992*, Guatemala, 1992.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), *Informe de violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante 1993*, Guatemala, 1993.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Proclama unitaria de las organizaciones EGP, FAR, ORPA, PGT al pueblo de Guatemala*, febrero de 1982, mimeo (URNG, 2/1982).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Las maniobras políticas de Ríos Montt y el papel del movimiento popular y democrático*, Guatemala, febrero de 1983, mimeo (URNG, 2/1983).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Fracaso militar de la campaña "Victoria 82" de Ríos Montt. Imposibilidad de la maniobra reformista. Seguridad del triunfo del pueblo y la revolución en Guatemala*, Guatemala, marzo de 1983, mimeo (URNG, 3/1983).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Informaciones sobre la actual coyuntura política guatemalteca*, Guatemala, junio de 1985, mimeo (URNG, 6/1985).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Al pueblo de Guatemala*, septiembre de 1985, edición clandestina (URNG, 9/1985).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, “Declaración política de la URNG en su V aniversario”, Guatemala, 7 de febrero de 1987, en *URNG. Boletín Internacional*, núm. 2, marzo de 1987 (URNG, 2/1987).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Comunicado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca con motivo de su VI aniversario*, Guatemala, 7 de febrero de 1988, edición clandestina (URNG, 2/1988).

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, *Guatemala, propuesta a la sociedad. Cuatro objetivos, nueve cambios, cuatro prioridades*, abril de 1995, mimeo.

DEL DESAFÍO REVOLUCIONARIO A LA REFORMA POLÍTICA. EL SALVADOR, 1970-1992

Mario R. Vázquez

Entre 1979 y 1992, El Salvador experimentó profundas transformaciones políticas. Una insurrección revolucionaria, doce años de encarnizado enfrentamiento bélico y la recomposición política de las elites culminaron, finalmente, en la desarticulación del viejo Estado autoritario y el establecimiento de una nueva institucionalidad de orientación democrática. Si bien esta reforma no significó el desplazamiento completo del poder de la vieja oligarquía —en realidad constituye un replanteamiento global de su rol hegemónico—, la magnitud, el ritmo y los alcances del cambio configuran una transformación sin precedentes en la historia salvadoreña. Así persistan condiciones extremas de marginación y pobreza, gracias a la desmilitarización de las instancias gubernamentales, el fortalecimiento del sistema parlamentario, la ampliación de las libertades públicas y el desarrollo de la participación ciudadana, El Salvador actual es un país muy distinto del que fuera hace quince o veinte años. Lejos de representar un mero balance de fuerzas entre “revolución” y “contrarrevolución”, este cambio político en El Salvador fue producto de una serie de acuerdos y modificaciones graduales iniciados en 1979 con la participación de diferentes fuerzas y grupos de presión —la Fuerza Armada, organizaciones civiles, partidos políticos de diverso signo, los ejércitos revolucionarios y sobre todo la misma derecha oligárquica— bajo la tutela de la comunidad internacional y, por supuesto, la estricta vigilancia —así como también el sustancial financiamiento— del gobierno de Estados Unidos. El complejo

carácter de la negociación política sin duda limitó los alcances del proceso democratizador en la esfera de las transformaciones estructurales, principal bandera enarbolada por la izquierda radical durante la sublevación revolucionaria de los años setenta. No obstante, el haberse iniciado —y sostenido— a partir de un movimiento insurreccional le confiere al proceso un rasgo distintivo. Como afirma Carlos M. Vilas, las transformaciones políticas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala “difícilmente hubieran tenido lugar sin un desafío revolucionario al sistema de poder”, aunque, de manera paradójica, “la reforma social y política, que hace veinte o veinticinco años era vista con desprecio por los revolucionarios, ha resultado ser el fruto más consistente de sus luchas”.¹ Vale la pena reparar en esto último a la hora de examinar la trayectoria histórica de la izquierda radical en El Salvador. No debemos olvidar que los fracasos paralelos de la alternativa reformista y la revuelta revolucionaria de 1980 contribuyeron al escalamiento de la guerra a la vez que abrieron paso a la recomposición política del bloque dominante, si bien la tenaz resistencia de los ejércitos populares a la larga introdujo en esta recomposición matices sustanciales.

En el presente artículo nos proponemos examinar el carácter y el sentido original del “desafío revolucionario” de El Salvador, así como la manera en que la izquierda radical sobrevivió a pesar de todo, logró convertirse en un factor decisivo de la reforma democrática y figuró en la posguerra como segunda fuerza política parlamentaria del país. Desde luego, todo esto es parte de una historia pendiente, como lo es, en general, la historia de las insurrecciones radicales en América latina durante los últimos treinta años. Aventura difícil de emprender pues supone rastrear elementos sustantivos celosamente mantenidos a resguardo de infidencias e intromisiones, máxime cuando numerosos protagonistas de ciertos episodios clave participan aún de modo activo en política. Quizá debido a tales dificultades los principales estudios acadé-

¹ Carlos M. Vilas. *Mercado, estados y revoluciones. Centroamérica, 1950-1990*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, 1994, p. 279.

micos acerca de la coyuntura salvadoreña (y centroamericana) de los años ochenta han eludido analizar a fondo el papel de los grupos insurgentes en la gestación del “desafío revolucionario” y privilegiado la exposición pormenorizada de los factores estructurales del conflicto social que le diera origen. No obstante, gracias a dicho interés ha sido ampliamente documentada la forma en que la modernización económica, el cambio social y el autoritarismo “conspiraron” para generar el clima idóneo del fermento revolucionario.²

En su recuento de las guerras centroamericanas, el francés Alain Rouquié resume la explosiva conjunción de dichos factores:

la prosperidad nacida de la modernización económica refuerza la polarización social: el agravamiento del desempleo y la pauperización campesina contrastan con la insolente opulencia de las oligarquías [...] En esas circunstancias, el autoritarismo resulta indispensable para conservar el *statu quo*. Se impone la coerción [...] El aislamiento deliberado de las dictaduras, que tratan como enemigos a los nuevos grupos sociales generados por la transformación económica en curso, es uno de los factores decisivos de la crisis y la violencia revolucionaria.³

Valga hacer una rápida semblanza de este proceso destacando que, durante las décadas de los sesenta y setenta, fue precisamente El Salvador el país centroamericano que exhibía los más sorprendentes índices de crecimiento. En efecto, en los proyectos de desarrollo e integración económica regional auspiciados por la CEPAL y el gobierno estadounidense, El Salvador logró una participación sumamente ventajosa gracias al peso de sus exportaciones industriales y, sobre todo, a la considerable acumulación de capital derivada de la exitosa colocación en el mercado interna-

² Véase Enrique Baloyra, *El Salvador en transición*, San Salvador, UCA, 1987; Carlos Rafael Cabarrús, *Génesis de una revolución*, México, CIESAS, 1983; Sara Gordon, *Crisis política y guerra en El Salvador*, México, Siglo XXI, 1989; Alain Rouquié, *Guerras y paz en América Central*, México, FCE, 1994, y Vilas, *op. cit.*

³ Rouquié, *op. cit.*, p. 197.

cional de sus principales productos agrícolas: café, algodón y azúcar. En las obras referidas abundan cifras e indicadores que cuantifican esta súbita bonanza. Un sostenido crecimiento del PIB, desarrollo sin precedentes de la infraestructura, captación de inversiones extranjeras, ampliación de la planta industrial e incremento de los cultivos de agroexportación caracterizaron, si bien con ciertos altibajos, el panorama productivo del país durante más de veinte años.

El impacto social del modelo económico no fue menos notorio. Hubo un importante desarrollo de comunicaciones y servicios, creció rápidamente la población urbana, se incrementaron los índices de alfabetización y escolaridad, aumentó la esperanza media de vida. Se experimentó también un crecimiento sensible de las capas urbanas intermedias, así como del número de maestros, técnicos, universitarios y profesionistas. El desarrollo de la industria maquiladora acarrió el cierre de manufacturas locales y el consiguiente incremento del subempleo y la proletarización de antiguos artesanos. Paralelamente se produjo un incremento sustantivo de la organización gremial obrera: el número de trabajadores industriales sindicalizados casi se triplicó entre 1962 y 1975 (de 26 000 a 65 000). En el campo, el desarrollo agroindustrial cobró tintes dramáticos. La expansión de los cultivos de agroexportación limitó el acceso de arrendatarios y aparceros a las tierras de las grandes haciendas. Esta alteración de las formas tradicionales de producción campesina redundó en una drástica pauperización rural que estimuló con fuerza la emigración hacia Honduras y las zonas urbanas de El Salvador, lo cual propició a su vez la formación de un numeroso semiproletariado itinerante que con el tiempo vendría a constituir masivas agrupaciones gremiales. Inicialmente, sin embargo, los progresos de la integración regional permitieron enmascarar por algún tiempo el desajuste social que el modelo generaba.

Lejos de promover la ampliación del mercado interno y un mejor equilibrio social, el crecimiento económico se tradujo en altos niveles de concentración de la riqueza, reforzando así el privilegiado *status* de la oligarquía tradicional y su ventajoso papel en la

acumulación de capital y la obtención desmesurada de beneficios. De este modo la modernización no implicó una ampliación sustancial de la clase dirigente; tampoco dio lugar al nacimiento de un sector industrial que rivalizara en riquezas y poder con la oligarquía agroexportadora. Todo lo contrario, ésta colocó bajo su control importantes porciones de la banca, el comercio y la industria manufacturera, con lo cual consolidó su hegemonía en el interior del bloque dominante. “Una sociedad de estas dimensiones, —explica Gabriel Gaspar Tapia— no podía generar un ambiente pluralista [...]”.⁴

Ciertamente, el complemento *ad hoc* del dominio oligárquico en El Salvador lo constituyeron una larga serie de gobiernos militares que asumieron como propias las responsabilidades políticas de la modernización del país y la administración del Estado. Para ello contaron con el respaldo del régimen estadounidense que desde el inicio de la Guerra Fría había buscado extender su influencia en el área. La imposición de gobiernos “anticomunistas” en Centroamérica durante este periodo, como los de Guatemala en 1954 y El Salvador en 1961, formó parte de sus estrategia preventiva contra la “expansión del comunismo” en el continente americano. La inserción activa de los gobiernos centroamericanos en la estrategia estadounidense de confrontación con el bloque socialista, y específicamente en lo tocante a sus planes de contrainsurgencia en nivel continental, se reforzó a partir del triunfo de la revolución cubana y los inmediatos brotes guerrilleros en Nicaragua y Guatemala. De este modo la vocación autoritaria del Estado salvadoreño encontró en la doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense un sólido respaldo. Con la consigna de enfrentar la “amenaza del comunismo”, el ejército y los cuerpos de seguridad exacerbaron su control sobre la disidencia política y las protestas populares.

Sin duda el despotismo pretoriano fue un factor decisivo de la preservación del orden oligárquico durante un largo periodo. Pero

⁴ Gabriel Gaspar Tapia, “La modernización de las clases dominantes centroamericanas”, en Carlos Vilas [coord.], *Democracia emergente en Centroamérica*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, 1993, p. 55.

a la larga su propia dinámica excluyente y represiva vendría a activar el cuestionamiento político del régimen por parte de sectores intermedios que, deseosos de desempeñar un papel proporcional al *status* relativo que la propia modernización oligárquica les había proporcionado, se sumarían de forma decidida al reclamo social en reivindicación de su cuota correspondiente de poder y beneficios. Ante la imposibilidad a mediano plazo de un cambio democrático y el cada vez más violento ejercicio represivo, concluye Alain Rouquié,

un sector de los sindicatos y las organizaciones campesinas se acerca a grupos revolucionarios miméticos aislados. Parte de la izquierda política y social... “gravita” hacia la “respuesta inmediatecista”, fruto de la “conciencia desesperada”. A pesar del vigor de la represión, frente a un horizonte dominado por las dictaduras que han preparado el terreno para el movimiento revolucionario... aparecen las guerrillas.⁵

Si bien factores sociales —la depauperación rural y la privación relativa de las capas medias emergentes— o políticos —como el bloqueo sistemático de espacios de participación y la generalizada violencia represiva— fueron sin duda el caldo de cultivo del “desafío revolucionario”, no se les puede atribuir por sí solos la vertiginosa radicalización del descontento. Rouquié pondera en este sentido la importancia de la teología de la liberación y específicamente el trabajo pastoral de ciertos sectores de la iglesia católica para integrar una “utopía social” catalizadora de la revuelta. En nuestra opinión, sin embargo, la transformación del reclamo social en revuelta revolucionaria se explica más bien por la influencia directa que ejercieron en la movilización reivindicativa generada por los desajustes sociales esos “grupos revolucionarios miméticos aislados”, es decir las organizaciones guerrilleras surgidas hacia finales de los años sesenta, cuya actividad vendría a dotar de estructura y estrategia al reclamo social, incluido el

⁵ Rouquié, *op. cit.*, p. 108.

movimiento organizado a partir de la acción político-pastoral de la iglesia católica.

Entre 1970 y 1980 la movilización social, el accionar de la oposición democrática y la actividad organizativa y militar de la guerrilla configuraron de conjunto el “desafío revolucionario”. No se trató sin embargo de un movimiento unido ni homogéneo. Por el contrario, evolucionó en medio de permanentes tensiones entre dos grandes vertientes de la oposición antioligárquica. En primer término, lo que pudiéramos llamar el polo reformista-demócrata constituido a lo largo de los años sesenta a partir del retorno del Partido Comunista a los primeros planos del escenario nacional, la creciente actividad social de la iglesia y el surgimiento de nuevos partidos de centro y centroizquierda como el Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y, coyunturalmente, el Partido de Acción Renovadora (PAR). Por otro lado, la opción radical revolucionaria, integrada orgánicamente hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta por núcleos radicalizados que surgieron dentro de los partidos y organizaciones sociales mencionadas. Cabe aclarar que caracterizamos estas dos vertientes encontradas de la oposición antioligárquica con base en sus respectivos paradigmas del cambio político: reforma o revolución. Pero en realidad cada una de estas grandes tendencias dio lugar a diferentes expresiones orgánicas, las cuales a su vez participaron en distintas alianzas y coaliciones de acuerdo con la misma evolución de la coyuntura, hasta dar lugar a ese fenómeno que Gabriel Zaid denominó con extrañeza “constelaciones cambiantes de amigos/enemigos”.⁶ Pese a todo, es posible mantener en términos generales la distinción entre “reformistas” y “revolucionarios” por lo menos hasta 1980. Examinar el respectivo papel que cada una de estas tendencias cumplió en la erosión del régimen autoritario y dar cuenta del enconado conflicto que sostuvieron entre sí por el liderazgo de las masas a lo largo del periodo de incubación insurreccional (1970-1980) resulta fun-

⁶ Gabriel Zaid, “Colegas enemigos. Una lectura de la tragedia salvadoreña”, en *Vuelta*, núm. 56, México, julio de 1981.

damental para comprender la radicalización explosiva del movimiento popular salvadoreño y la sobreposición de un proyecto de transformaciones estructurales de orientación socialista al anhelo generalizado de mayor equidad y actualización democrática del sistema político.

Los primeros núcleos de la izquierda radical se estructuraron orgánicamente entre 1969 y 1970 como producto de diversas escisiones del Partido Comunista Salvadoreño, una de ellas encabezada por su propio secretario general, Salvador Cayetano Carpio. Convertidas en grupos clandestinos, dichas escisiones agruparon en torno suyo a disidentes radicales de distinta procedencia para dar origen a las primeras formaciones guerrilleras de El Salvador: las Fuerzas Populares de Liberación-Farabundo Martí (FPL), encabezadas por el tristemente célebre comandante “Marcial” (el mismo Carpio), y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre cuyos jóvenes cuadros figuraban los futuros comandantes guerrilleros Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho y Francisco Jovel, estos últimos fundadores y jefes de la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC)—organizaciones creadas poco más tarde. No viene al caso anotar la larga lista de quienes simpatizaron tempranamente con los primeros núcleos guerrilleros o se incorporaron de lleno a sus actividades. Basta señalar que entre ellos se contaban numerosos estudiantes, algunos incluso de acomodada posición social, así como dirigentes obreros y campesinos, sacerdotes y destacados intelectuales de izquierda.

En un primer momento del desarrollo de las organizaciones político-militares, la elaboración de un planteamiento programático fue concebida como parte de las definiciones estratégicas iniciales y de los principios mismos de cada organización. De hecho durante varios años las diferencias en torno a la estrategia del movimiento revolucionario dieron lugar a agrias disputas entre las distintas facciones. Éstas giraban en particular en torno al ritmo del proceso (insurrección o guerra prolongada) y al tipo de alianzas que podrían establecerse con otras fuerzas políticas y sociales en cada etapa de la lucha. Por encima de sus desacuer-

dos, sin embargo, los distintos grupos guerrilleros se diferenciaron tajantemente de la vertiente reformista en dos puntos centrales: en concebir la vía armada como única forma de acceso al poder y por lo tanto como eje de la estrategia revolucionaria, y en insistir en el carácter proletario de la revolución salvadoreña y proclamar el marxismo-leninismo como orientación doctrinaria del movimiento.⁷ A su vez intentaron codificar un discurso nacional revolucionario justificativo de su estrategia. Éste alcanzaría su expresión más depurada en la obra del poeta Roque Dalton García, asesinado en 1975. Dado el atemperamiento posterior de las posturas radicales de la insurgencia, ha habido la tendencia a desvirtuar la orientación ideológica inicial del “desafío revolucionario”. Se argumenta al respecto que aquellas expresiones radicales no eran sino la retórica y el tono propios de la época, y que en realidad el leninismo predicado no llegó nunca a arraigar como auténtica ideología de la revuelta. Pero, en los hechos, lejos de representar una especie de radicalismo “juvenil”, la adopción de aquellos principios doctrinarios dotó al movimiento de singular coherencia orgánica y temple combativo, afianzó sus bases obreras y campesinas, orientó la formulación de un programa de transformaciones estructurales y permitió una identificación estrecha con aliados externos: Cuba, y posteriormente la URSS y el Bloque Socialista, así como Libia, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la guerrilla vasca (ETA) y otros movimientos revolucionarios de América latina.

Por otra parte, entre los saldos negativos de este radicalismo doctrinario debe considerarse el distanciamiento cada vez más insalvable respecto de los sectores reformistas, partidarios de una transición, si bien no estrictamente pacífica, al menos sí más mo-

⁷ Vgr. la Resistencia Nacional en 1976 descartaba tajantemente la posibilidad de una “revolución nacional democrática [...] donde juegue un papel importante la burguesía nacional (como plantea el PCS)”, pues la revolución en El Salvador tendría desde sus inicios “un carácter antiburgués y antiimperialista [...] de donde se desprende que es el proletariado [...] la única fuerza capaz de dirigir(la)”. “Estrategia política de la Resistencia Nacional”, en *Por la causa proletaria*, núm. 26, San Salvador, mayo-junio de 1976.

derada en cuanto se refiere sus alcances. El problema no fue únicamente de índole ideológica. La guerrilla no sólo impugnó la tibieza de los partidos reformistas sino también se lanzó de lleno a disputarles su base social, engrosando sus filas a costa de aquellos partidos que hasta entonces habían constituido el principal referente de la oposición antioligárquica. De este modo, auge y declive del polo reformista entre 1972 y 1979 coincidieron con el surgimiento y cenit del “desafío revolucionario”. No se trató de un simple cambio de estafeta condicionado por la ola represiva o la espontánea “desesperación de la conciencia”. El masivo vuelco radical se dio en el marco de una enconada disputa entre reformistas y revolucionarios por el liderazgo de la oposición y específicamente por el control político del movimiento popular organizado. Es verdad que no se produjo un enfrentamiento violento entre ambas facciones, pero esta pugna representó una escisión estratégica entre los promotores fundamentales del cambio político; aunque estaban emparentados en cuanto a composición social y orígenes orgánicos se refiere, pronto los distanciaron hondas diferencias ideológicas y métodos de acción poco compatibles.

El saldo de esta división fue negativo para los partidos reformistas empeñados en circunscribir su actividad pública a los estrechos marcos de la legalidad vigente —mientras desarrollaban en cambio una intensa actividad conspirativa entre altos círculos sociales y políticos—, en tanto, por su parte, la guerrilla promocionaba alternativas más amplias de participación popular así como métodos altamente conspirativos y en extremo eficaces de organización y acción directa. Esto mismo permitió a los núcleos radicales ganar amigos y reclutar militantes en los ámbitos más diversos. La seducción revolucionaria abarcó también a militares, capas medias y aun elementos de la alta burguesía. En ciertos casos, sobre todo en el campo, la guerrilla contó con el abierto respaldo de sectores radicales de la iglesia, cuya notable labor organizativa entre el campesinado hacia finales de los años sesenta se había orientado primero a respaldar la campaña electoral de la Democracia Cristiana. Pero también creció a partir de su propia actividad organizativa. En este aspecto los activistas gue-

rrilleros demostraron mucha mayor eficiencia que el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Asociaciones campesinas, gremios estudiantiles, sindicatos obreros y multitudinarios frentes de masas se desarrollaron durante los años setenta con los auspicios de la guerrilla. Esto significaba una variante sustancial del planteamiento foquista característico de la mayoría de los experimentos guerrilleros latinoamericanos desde el triunfo de la revolución cubana. En El Salvador, el afán de establecer un vasto apoyo popular organizado a la revuelta armada respondía en buena medida a las mayoritarias concepciones leninistas —y en particular al “marxismo vietnamita”— que desde un inicio predominaron al respecto. Por otro lado, las características poblacionales y geográficas del país impedían formular otras opciones.

El detalle del trabajo organizativo de los activistas revolucionarios y su papel en la formación de los “frentes de masas” constituye un episodio poco conocido de la revuelta armada. Inclusive autores tan acuciosos como Sara Gordon o Alain Rouquié explican esta ligazón como resultado del “acercamiento” de las organizaciones populares a unos núcleos clandestinos que imaginan a la sombra. Al parecer la historia es muy distinta. Un buen número de cuadros guerrilleros estuvieron involucrados en el trabajo de masas de manera paralela a su accionar clandestino. Aunque esta política de estrecha vinculación entre ambos niveles de trabajo significó un alto costo en el nivel de las células operativas, redundó favorablemente en una acelerada radicalización “por contacto” de las organizaciones populares, para cuyos miembros la guerrilla no era un anónimo grupo de héroes “enmontañados” sino gente con la que trabajaban y convivían de manera cotidiana.

Prácticamente desde su nacimiento, las FPL dieron inicio a una febril actividad organizativa. En su caso particular dicha labor fue facilitada por una temprana alianza con sectores eclesiásticos radicales que desde antes habían estado involucrados en la organización gremial del proletariado agrícola. Tal fue la base principal del Bloque Popular Revolucionario (BPR), fundado en 1975, el más numeroso de los “frentes de masas” auspiciado por la guerrilla. Lo mismo puede decirse de la Resistencia Nacional que

desde 1974, antes de escindirse del ERP, participó en la formación del Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) que llegó a aglutinar el más importante contingente obrero; del propio ERP, que en 1977 fundó las Ligas Populares el 28 de febrero, y del PRTC, que apareció más tarde con el Movimiento Popular de Liberación. Al igual que el BPR, la base de todos estos “frentes de masas” estaba constituida mayoritariamente por miembros activos de sindicatos y asociaciones gremiales. En términos estrictos, estos agrupamientos no eran precisamente “frentes” en el sentido de coaliciones de grupos diferenciados de manera orgánica. Eran más bien disciplinadas formaciones partidarias estructuradas por sectores (campesino, obrero, estudiantil) que en todos los casos respondían a organismos superiores de conducción de acuerdo con el modelo del centralismo democrático, si bien en muchos casos se buscó la integración corporativa de instancias gremiales. Así, por ejemplo, el sindicato magisterial, importantes federaciones de sindicatos industriales y las más numerosas uniones campesinas aparecían afiliadas como tales al FAPU o al BPR. Desde luego, en estos casos se buscaba garantizar la influencia de determinado grupo político-militar en los gremios estratégicos o más numerosos del país. Cada uno de estos “frentes” tenía un estilo particular de acción y organización interna, así como una estrategia “propia”, amén de consignas particulares y toda una gama de emblemas y símbolos de identidad grupal. Todo ello en correspondencia con el diseño estratégico de cada una de sus matrices guerrilleras. Éstas a su vez destinaban a sus “frentes de masas” cuadros políticos y militares, así como cuantiosos recursos producto de sus operaciones de “recuperación” económica. Este flujo hizo posible financiar el trabajo organizativo y la formación de cuadros, sostener huelgas y movilizaciones masivas, elaborar propaganda y obtener las armas destinadas a la “autodefensa”. Sobra decir que la rivalidad de los distintos “frentes”, derivada del afán de expandir sus respectivos espacios de influencia, retroalimentó el sectarismo propio de los grupos guerrilleros y, en su momento, dificultaría el impulso de proyectos unitarios.

Acerca de lo anterior cabe hacer una aclaración importante. Es un hecho que la conducción de los “frentes de masas” y de las asociaciones gremiales más importantes de El Salvador estuvo directamente a cargo de las organizaciones político-militares. Sin embargo, ello no significó que hubieran sido meras fachadas para el proselitismo o la implementación de actividades armadas. Como apunta Edelberto Torres Rivas, este periodo de integración del movimiento revolucionario también representó para los sectores tradicionalmente marginados de la actividad política “una experiencia nacional popular de nuevo tipo”, dentro de la cual cobró especial significado el reencuentro con viejas prácticas de resistencia y lucha antioligárquica, y a partir de la cual se produjo otro de los fundamentos esenciales de la sublevación: la adopción de la violencia por grandes sectores populares como un lenguaje propio para reivindicar sus aspiraciones sociales en respuesta a la violencia originaria, la injusticia estructural del orden oligárquico.⁸

Al concentrar buena parte de su esfuerzo en estructurar la base social de la revuelta armada, las formaciones guerrilleras experimentaron un relativo desfase entre crecimiento numérico y cualificación militar. En los planes de las distintas organizaciones se preveía el desarrollo paralelo de una fuerza guerrillera propiamente dicha y un vasto soporte miliciano. Pero dado el masivo crecimiento de su base de apoyo tanto los partidarios de la guerra prolongada como los que sustentaban la tesis insurreccional privilegiaron la formación de milicias. De hecho, durante la mayor parte de los años setenta el accionar bélico de las guerrillas se restringió a audaces golpes de mano destinados a obtener fondos económicos (asaltos y secuestros), acciones de fogeo, propaganda, sabotaje y presión psicológica (incluidos atentados dinamiteros), así como actos de represalia directa contra jefes militares, funcionarios, miembros de la oligarquía y colaboradores de los cuerpos represivos. Aunque estrictamente hablando estas accio-

⁸ Véase Edelberto Torres Rivas, “Notas para comprender la crisis política centroamericana”, en Labastida *et al.*, *Centroamérica: crisis y política internacional*, México, Siglo XXI, 1985.

nes no constituían una seria amenaza militar para el régimen, significaban una declaración de guerra a la que el Estado respondió con nuevos y más crueles actos represivos. A su vez, la ruidosa presencia de la guerrilla contribuyó a generar un ambiente de “terror” revolucionario que alimentó la paranoia anticomunista. Ejército, cuerpos de seguridad y fuerzas paramilitares asumieron la responsabilidad de combatir sin miramientos ese “complot internacional” largamente esperado, con lo cual la polarización y la violencia se incrementaron de manera vertiginosa. Conforme se hizo más evidente la vinculación de los “frentes de masas” con la insurgencia armada la represión adquirió también una nueva dinámica. Si hasta entonces se había practicado sobre todo mediante acciones *post factum* de represalia a las protestas y las movilizaciones reivindicativas, en la medida que las masas populares adoptaron la acción directa como lenguaje político el terrorismo estatal se transformó en el instrumento instintivo de la contrainsurgencia y el gobierno militar asumió de manera cada vez más definida el carácter de dictadura contrarrevolucionaria. Así, el recurso de la violencia devino el fundamento de la acción política de ambas facciones. En la perspectiva insurgente la posibilidad de llevar a efecto una sublevación generalizada significaba la culminación de un proyecto insurreccional fraguado largamente. Para los abanderados de la contrarrevolución, un levantamiento armado representaba una oportunidad inigualable para eliminar en masa a las turbas opositoras. Quienes sustentaban esta última tesis proponían de manera abierta seguir el ejemplo de 1932, año en que, tras un frustrado levantamiento armado fueron asesinados alrededor de 30 000 mil campesinos “comunistas”, en su mayor parte indígenas del occidente del país. Esta tendencia fascista no sólo iba a arraigar en el ejército y los cuerpos de seguridad; su influencia abarcó también a un amplio sector del bloque dominante, estratos medios y capas populares. Tales serían los casos de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), agrupación campesina auspiciada por el ejército para contrarrestar y reprimir en las zonas rurales a las organizaciones de izquierda, y más tarde la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido político

encabezado por el oficial de inteligencia Roberto D'Aubuisson, promotor de los fatídicos “escuadrones de la muerte”.⁹

Escisión nacional y guerra civil se impusieron entonces bajo este doble signo de sublevación y masacre. Fueron resultado de tal polaridad, traducida políticamente en la preeminencia de las tendencias radicales así dentro del aparato estatal como en el seno de la oposición antioligárquica, que como parte de su estrategia de toma o conservación del poder, según el caso, propiciaron la confrontación armada. En este contexto las corrientes moderadas no tuvieron ni la oportunidad ni la capacidad orgánica para erigirse en alternativa de poder. Con el pretexto de estar enfrentando una amenaza comunista, los gobiernos militares de turno se negaron reiteradamente a ampliar el espacio a la oposición democrática. Si bien desde los años sesenta la oposición había podido obtener el reconocimiento oficial de algunos triunfos electorales locales (alcaldías y diputaciones), en las elecciones presidenciales de 1972 la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición integrada por el PDC, el PCS y el socialdemócrata MNR, fue despojada de un legítimo triunfo. La historia volvió a repetirse cinco años más tarde. Poco después sería asesinado el único diputado comunista, Rafael Aguiñada Carranza. Otro gran promotor de la reforma, el sector liberal de la iglesia católica, fue también blanco de la escalada fascista. Crimen tras crimen, la dinámica represiva fue sumando argumentos a la causa de los insurgentes que no dejaron de aprovechar los reveses de sus rivales políticos para sumar adeptos. Pero las hondas diferencias programáticas y la desconfianza mutua parecen haber impedido la formación de una alianza reformista-revolucionaria durante el periodo de gestación insurreccional. En esto puede haber pesado tanto el credo anticomunista de Napoleón Duarte y otros dirigentes democratacristianos como el sectarismo acendrado de los grupos guerrilleros, que si acaso contemplaban

⁹ ORDEN fue disuelta en 1979, pero gran parte de sus bases pasaron a integrar la Defensa Civil, fuerza paramilitar que desempeñó un importante papel en la contención de la expansión rural de la guerrilla. ARENA, como es sabido, evolucionó hasta convertirse en la principal fuerza política del país.

dicha posibilidad lo hacían sobre la base de una subordinación de los aliados “pequeñoburgueses” a la “vanguardia revolucionaria”.¹⁰ Un poco más adelante, tironeado entre las presiones de su mermada militancia, la creciente represión de que era objeto y la seducción propia de la propuesta insurgente —compatible, a fin de cuentas, con sus principios ideológicos—, el Partido Comunista iba a renunciar a sus posiciones moderadas para asumir de lleno la causa de la sublevación. También haría lo propio un sector de la iglesia católica comprometido con la organización popular. En este sentido el caso personal del arzobispo Óscar Arnulfo Romero iba a ser emblemático, aunque en realidad, aparte de monseñor, el resto de la jerarquía eclesiástica evitó comprometerse con la sublevación.

Tras el fraude electoral de 1977 la eficacia de la alternativa reformista quedó totalmente en entredicho. Las fuerzas revolucionarias aprovecharon este fracaso para ampliar su influencia sobre el movimiento popular e imprimirle un énfasis aun más radical. La acción directa rindió importantes frutos en ese sentido; contribuyó a solucionar conflictos laborales, ganó así nuevos prosélitos y abonó con sangre y experiencia combativa el proceso insurreccional. La mística de guerra de los “frentes de masas” se hizo pública y patente a partir de entonces. Proliferaron manifes-

¹⁰ En 1976 la Resistencia Nacional se planteaba que antes de completar “las tareas económicas y políticas de la gran revolución socialista” se debía pasar por una etapa de transición en la que el Estado, bajo control de “la clase obrera, el campesinado y las capas medias”, habría de imponer una “dictadura democrática revolucionaria” en la cual, “encabezadas por la vanguardia unificada de los verdaderos comunistas”, las fuerzas revolucionarias compartirían el poder con sectores democráticos pequeñoburgueses. En este mismo documento se perfilaban algunas de las características de la plataforma de gobierno que tres años después habría de postular la izquierda unificada: “El contenido del programa de gobierno refleja el carácter de la alianza obrero-campesina y la alianza con sectores de las capas medias democráticas y la pequeña burguesía. Dándose la hegemonía del proletariado revolucionario.” *Por la Causa Proletaria*, núm. 26. Estos planteamientos de la Resistencia Nacional, sin embargo, eran considerados “reformistas” por las Fuerzas Populares de Liberación que postulaban el salto al socialismo sin ninguna intermediación que implicara alianzas con sectores no revolucionarios. Véase FPL “Farabundo Martí”, *La práctica revolucionaria es la mejor confrontación de líneas estratégicas y tácticas*, San Salvador, 1978.

taciones, huelgas y ocupaciones de tierras, acompañadas cada vez más a menudo por grupos armados de “autodefensa”. A esa altura las distintas opciones insurreccionales conformaban indiscutiblemente la tendencia hegemónica del movimiento popular organizado. También para entonces los partidarios de “cortar por lo sano” conformaban la tendencia dominante dentro del aparato estatal. La represión gubernamental se incrementó hasta cobrar el carácter de terrorismo generalizado y la masacre pronto adquirió dimensiones masivas. El descabezamiento sistemático de sindicatos, gremios y organizaciones campesinas, el asesinato flagrante o encubierto, pero siempre brutal, de activistas sociales y la disolución a balazos de manifestaciones callejeras se integraron en un esfuerzo global por inhibir la sublevación, dentro del cual el combate directo a las estructuras militares de la guerrilla era sólo una parte.

El triunfo sandinista en Nicaragua en julio de 1979 vino a darle un nuevo giro a la coyuntura salvadoreña. Desde luego suscitó un enorme entusiasmo entre las masas radicalizadas y acrecentó su efervescencia. Además permitió de inmediato a los grupos insurgentes contar con una estratégica base de operaciones y abastecimiento logístico. Por si fuera poco, cuando se produjo el desenlace de la revuelta antisomocista, el régimen salvadoreño era desbordado por el acoso revolucionario y una severa crisis interna. Es difícil calcular los recursos bélicos de las fuerzas revolucionarias durante los últimos meses de 1979, aunque sin duda contaban entre sus filas varios miles de “milicianos” escasamente armados y con poca experiencia de combate formal, además de un núcleo guerrillero de algunos centenares de hombres. La reciente experiencia de Nicaragua, sin embargo, permitía considerar que en condiciones similares era posible llevar hasta sus últimas consecuencias el ánimo insurreccional de las masas, establecer una amplia coalición opositora cuyo centro reformista se subordinara a la conducción de la “vanguardia” y, al mismo tiempo, lograr una cobertura internacional favorable a partir de alianzas con gobiernos “amigos”, para atar de manos a los “halcones” estadounidenses y, además de todo, contar en el momento decisivo con un respaldo logístico masivo desde el exterior. La audacia parecía

ser la clave de su éxito. Claro que los sandinistas habían gozado de condiciones excepcionalmente favorables para su causa y, exhibiendo una habilidad política sin precedente entre los grupos insurgentes latinoamericanos, lograron capitalizar el desgaste nacional e internacional del régimen somocista. Pero así como los guerrilleros nicaragüenses habían sabido explotar tan propicias circunstancias, los salvadoreños confiaban en poder hacer lo propio a partir del peso numérico de sus combativos “frentes de masas” y el creciente desgaste político del presidente Carlos Humberto Romero. Guardaban, además, un par de ases bajo la manga: cierto trabajo conspirativo que venían desarrollando desde hacía algún tiempo entre jóvenes oficiales de la Fuerza Armada y una creciente red de apoyo logístico que involucraba no sólo a Nicaragua y Cuba sino también al Panamá de Torrijos.

Los guerrilleros, sin embargo, no eran los únicos en El Salvador que tramaban derrocar al gobierno. Ante el creciente desgaste del régimen diversos grupos de interés se habían consagrado también a la misma tarea. A la presión de los “frentes de masas” y el accionar de la guerrilla se agregaron las presiones del gobierno estadounidense ante la ineficiencia gubernamental y la flagrante violación de los derechos humanos. El ejército, principal soporte orgánico del régimen, pronto se fraccionó en diversas tendencias. En esa coyuntura se constituyó un amplio frente representativo, el Foro Popular, en cuya dirigencia figuraban reconocidos dirigentes de la antigua coalición electoral opositora de centroizquierda, la UNO. La formación de este organismo —un auténtico frente— representaba la oportunidad de constituir una alianza reformista-revolucionaria. De hecho, contó desde un principio con la participación de organizaciones populares y destacados personajes identificados con la izquierda radical, si bien ni los “frentes de masas” ni las fuerzas guerrilleras respaldaron públicamente esta iniciativa auspiciada por sectores moderados. Aunque la plataforma del Foro Popular expresaba las demandas de una amplia coalición de centro-izquierda, similar a la que habían establecido los sandinistas con la burguesía antisomocista en Nicaragua, era claro que ante la perspectiva inminente de un estallido insurrec-

cional los objetivos de estas distintas tendencias opositoras resultaban diametralmente opuestos.¹¹ Los moderados —democratacristianos, socialdemócratas y otros, como los jesuitas de la Universidad Centroamericana, por ejemplo— no apostaban al estallido insurreccional sino más bien a evitar el previsible baño de sangre que éste acarrearía y buscaban capitalizar la presión del movimiento popular para forzar una serie de reformas sociales y políticas. Sus gestiones conspirativas apuntaban al derrocamiento del régimen en alianza con sectores no precisamente revolucionarios, entre los cuales se contaban grupos del ejército e inclusive la Embajada Americana. Esto determinó que las fuerzas revolucionarias participaran en el Foro con sumo recelo, aunque insertaron cuadros de confianza en dicho espacio para no quedar al margen de una posible maniobra y en un momento dado poder jalonear hacia la izquierda a los reformistas “honestos”.

El 15 de octubre un incruento golpe de Estado depuso al coronel Romero de la presidencia de El Salvador e instauró en el poder a una Junta Revolucionaria de Gobierno cívico-militar. En ella estaban representados sectores castrenses que de una u otra forma respaldaban el cambio —aunque de ellos solamente la llamada Juventud Militar podría caracterizarse como verdaderamente reformista. A su lado figuraban prominentes personajes del Foro Popular: el dirigente socialdemócrata Guillermo Manuel Ungo y el exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Román Mayorga Quiroz, así como el empresario Mario Andino. Otro numeroso contingente reformista se sumaría de inmediato al régimen y ocuparía diversas carteras ministeriales. En cambio los grupos guerrilleros mostraron de inmediato su repudio a lo que aun los más “flexibles” de ellos consideraban mera “maniobra del

¹¹ En septiembre, el Foro Popular dio a conocer una plataforma cuyos contenidos centrales eran: a) el cese a la represión, la liberación de presos políticos y la disolución de cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte; b) el ejercicio efectivo de libertades democráticas, fundamentalmente libertad de expresión, de organización y de movilización; c) la adopción de medidas económicas y sociales de emergencia como mejoras salariales y control de precios, y d) el inicio de una reforma agraria. Véase Gordon, *op. cit.*, p. 270.

imperialismo”. Desde su propia perspectiva radical, este repudio no carecía de justificación. Era difícil imaginar una salida insurreccional a corto plazo ante un gobierno que se proclamaba abiertamente reformista y les “arrebataba” sus banderas justo cuando los “frentes de masas” alcanzaban su más alto nivel de movilización y combatividad. Cuestionada por la izquierda radical, esta primera Junta debió enfrentar también a las fuerzas de la ultraderecha enquistadas en el ejército, los cuerpos de seguridad y las fuerzas paramilitares, y cuya reacción inmediata al golpe de Estado consistió en recrudecer la “guerra sucia” contra los “frentes de masas”, para boicotear el posible entendimiento entre la Junta de Gobierno y la izquierda radical. Así, lejos de atemperarse, la violencia represiva llegó a niveles extraordinarios en los meses que siguieron al golpe de Estado. Y los intentos de la Junta para contenerla resultaron infructuosos. En realidad, los reformistas colocados en el gobierno carecían por sí mismos del poder suficiente para desplazar a los miembros fascistas de la Fuerza Armada. Otros sectores del ejército o la propia Embajada Americana tampoco adoptaron una postura de fuerza al respecto, temerosos de ahondar las escisiones internas del ejército. Esta crítica situación condujo a buena parte de los antiguos “foristas” a abandonar el gobierno en enero de 1980, luego de lo cual el Partido Demócrata Cristiano asumió de lleno la representación civil ante la Junta y se hizo cargo de los ministerios vacantes. A cambio de su participación en la Junta, el PDC obtuvo el compromiso del ejército de respaldar una plataforma reformista que incluyera entre otras cosas la transformación agraria, las nacionalizaciones de la banca y el comercio exterior y la futura convocatoria a una asamblea constituyente. Esta maniobra sólo fue posible gracias al decidido apoyo estadounidense. Al parecer, la dirigencia de dicho partido creyó encontrar en el gobierno de Estados Unidos un mejor aliado estratégico para impulsar aquellas reformas que la izquierda radical, de la cual la separaban hondas diferencias. Desde luego esta otra Junta de Gobierno fue repudiada al unísono por las organizaciones revolucionarias, empeñadas en hacer estallar la insurrec-

ción a corto plazo, y por la ultraderecha, que a fin de cuentas veía instalado en el poder a su viejo enemigo José Napoleón Duarte, el popular candidato de la coalición reformista en los comicios presidenciales de 1972. A pesar de estos ataques la influencia estadounidense impidió nuevas fracturas en el gobierno o las fuerzas armadas y logró mal que bien subordinar a la ultraderecha, no sin otorgarles amplias concesiones a los extremistas que ocupaban altos cargos en el ejército y los cuerpos de seguridad. A causa de ello continuaron las matanzas de opositores a manos de patrullas militares, fuerzas policíacas y “escuadrones de la muerte” con el propósito de ahogar en sangre los preparativos insurreccionales.

El fracaso de la primera Junta de Gobierno y el ascenso al “poder” de la Democracia Cristiana terminó de resquebrajar la vieja coalición reformista. Con anterioridad, el Partido Comunista había decidido incorporarse a la lucha armada. Poco más tarde se integró formalmente el Frente Democrático Revolucionario (FDR), organismo en que figuraban, al lado de los poderosos “frentes de masas”, el pequeño MNR, referente en el país de la Internacional Socialista, una fracción minoritaria del PDC (la llamada “tendencia popular”) y elementos aislados de la burguesía. El FDR era concebido por la guerrilla como el referente político más amplio del levantamiento insurreccional. Su plataforma para la formación de un Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) representaba el “programa mínimo” de la revolución. En ella se proclamaba el agotamiento de “los intentos fascistas y reformistas para superar la crisis” y se postulaba el carácter popular, antioligárquico y antiimperialista del movimiento. Los cambios estructurales más importantes que se reivindicaban, las reformas agraria, bancaria y del comercio exterior, así como ciertas disposiciones en materia social —política salarial justa, construcción masiva de viviendas, alfabetización, creación de un sistema nacional de salud—, bien podían inscribirse dentro de un plan reformista modernizador. De hecho, se derivaban de la plataforma del Foro y recogían las viejas demandas de la oposición democrática. Sin embargo, conforme al ejemplo nicaraguense, la sustitución de la Fuerza Armada y

los cuerpos represivos por un nuevo ejército popular habría de garantizar la hegemonía revolucionaria.¹²

1980 fue el año crítico de la revuelta armada en El Salvador. El 22 de enero, en una muestra de fuerza sin precedentes, cientos de miles de manifestantes inundaron las calles de la capital celebrando la formación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM). Entre tal acontecimiento y la fallida “Ofensiva Final” lanzada por la guerrilla en enero de 1981 iba a definirse el desenlace estratégico del “desafío revolucionario”. La estabilización “en el poder” de la Junta de Gobierno encabezada por Duarte, la brutal campaña de aniquilamiento emprendida contra el FDR y la incapacidad de las fuerzas guerrilleras para capitalizar militarmente su trabajo de organización popular en el momento oportuno determinaron a fin de cuentas el fracaso de la insurrección. Desde luego, tales factores resultaron condicionados en última instancia por la decisión de Estados Unidos de impedir la caída de una pieza más del dominó centroamericano en manos del “comunismo”.

Como señalamos antes, debido al explosivo crecimiento de los “frentes de masas”, el desarrollo militar de las organizaciones guerrilleras se había concentrado en la formación de milicias y comandos urbanos. Según el ejemplo nicaragüense, la masiva participación de este tipo de unidades pobremente armadas pero con alta disposición combativa podía resultar decisiva como auxiliar de las fuerzas permanentes de la guerrilla en un contexto insurreccional. Pero las condiciones peculiares de El Salvador —sobre todo su alta densidad demográfica y la extensa red carretera— habían dificultado el establecimiento temprano de enclaves rurales para la formación de fuerzas permanentes. Poco a poco, la evolución del trabajo rural de los “frentes de masas” permitió emprender la “limpieza” de ciertas regiones del interior. En 1980,

¹² Véase “Plataforma programática del Gobierno Democrático Revolucionario”, en Ignacio González Jansen, *La batalla de El Salvador*, México, Prolibro, 1981. Como reconocería más tarde un comandante del FMLN, ese programa pretendía “la creación de las bases económicas para desarrollar el socialismo”. Fermán Cienfuegos, *Veredas de la audacia. Historia del FMLN*, México, Roque Dalton, s.f., p. 83.

cuando el empeño principal de la contrainsurgencia se hallaba concentrado en las zonas urbanas, la eliminación de patrullas paramilitares y el desplazamiento por la fuerza de población que no simpatizaba con la causa revolucionaria fue definiendo áreas rurales donde se reunían condiciones favorables para el desarrollo de un ejército guerrillero. Así nacieron los primeros “territorios liberados”.

Desde finales de 1979 la falta de armamento de las fuerzas guerrilleras, así como la insuficiente preparación de sus cuadros militares, habían comenzado a suplirse con respaldo exterior. Durante el año siguiente, centenares de combatientes salvadoreños viajaron a Cuba para recibir entrenamiento y, no sin muchas dificultades, una complicada red logística empezó a introducir pertrechos de guerra en cantidades significativas. La instauración del “poder popular” en algunas zonas rurales permitió a la guerrilla hacer planes en función de recibir masivamente armamento procedente de Nicaragua. Con tal fin se ocuparon en el litoral sudoriental diversos puntos clave y se prepararon pistas de aterrizaje en las zonas controladas del centro del país. Inclusive se llegó a considerar posible un desembarco masivo de combatientes salvadoreños desde el exterior para reeditar la experiencia de los últimos meses de la lucha contra Somoza, durante los cuales la guerrilla sandinista fue abastecida en gran escala, a través de Costa Rica, por los gobiernos de Cuba, Panamá y Venezuela. Sin embargo, en el caso salvadoreño resultaba demasiado evidente el involucramiento de gobiernos revolucionarios en tanto apenas comenzaba a afincarse la relación con la Internacional Socialista, cuya cobertura política había resultado fundamental en el caso nicaragüense.

Mientras en determinados puntos del interior salvadoreño se iniciaba la formación de los futuros ejércitos populares, la represión continuaba diezmando los “frentes de masas” y sus grupos milicianos. Numerosos activistas murieron en combate, pero muchos más cayeron inermes a manos del ejército, la policía o los “escuadrones de la muerte”. Sindicatos y gremios fueron descabezados y sus bases forzadas al repliegue o al exilio; la ocupación militar de la Universidad privó a las organizaciones populares de

su más importante santuario ciudadano; El Salvador entero se pobló de mártires: el arzobispo Romero, el rector de la Universidad, los líderes del FDR... Y la desesperada respuesta militar de las unidades guerrilleras no logró compensar aquellas pérdidas mayores. Finalmente los planes de abastecimiento logístico en gran escala se habían suspendido ante la amenaza de Estados Unidos de emprender represalias directas contra los gobiernos involucrados (Cuba, Nicaragua y Panamá), de manera que los recursos militares recibidos por la insurgencia durante 1980 se limitaron a una cantidad relativamente escasa de armamento liviano y sólo una parte de los combatientes entrenados en Cuba, ya que el resto debió aguardar largos meses en Nicaragua antes de poder retornar poco a poco al país. De este modo era imposible enfrentar con eficacia la ofensiva del gobierno contra el FDR y las milicias populares. Por si ello fuera poco, a pesar de la coordinación formal establecida entre las distintas organizaciones guerrilleras, toda una serie de desavenencias internas y desplantes sectarios impidieron adoptar una estrategia común. La misma fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en octubre de ese año, ocurrió en el marco de serias disputas en el seno de la coalición guerrillera, buena parte de las cuales debe ser atribuida al credo fundamentalista y sectario de las FPL, la organización guerrillera más numerosa y mejor estructurada de El Salvador, cuyos privilegiados vínculos con Cuba le conferían a su patriarca, Cayetano Carpio, un *status* singular en la cúpula revolucionaria.

No fue sino hasta enero de 1981 cuando las fuerzas guerrilleras pudieron emprender una maniobra coordinada a nivel nacional. Bautizada como "Ofensiva Final" por la propaganda rebelde, la acción del 10 de enero consistió en realidad en una serie de ataques de regular envergadura y corta duración llevados a efecto por columnas guerrilleras y unidades milicianas en diferentes ciudades del país, tras lo cual emprendieron un repliegue generalizado hacia sus santuarios rurales. Estrictamente hablando, no fue una derrota, pero sus alcances fueron limitados porque no se registraron hechos capaces de compensar la inferioridad táctica de la insurgencia, como el ya mencionado respaldo logístico del ex-

terior, un fraccionamiento importante del ejército enemigo o el levantamiento masivo de contingentes populares.

Después de esta maniobra las fuerzas de la guerrilla se vieron reducidas a sus zonas de control en el interior del país. Fuera de allí la actividad de las milicias decayó notablemente hasta ser prácticamente anulada por los cuerpos represivos, resultando poco exitosos los intentos de la insurgencia por sostener el accionar de sus núcleos urbanos. En el campo, la contraofensiva gubernamental dio lugar a bárbaras masacres. Decenas de miles de campesinos buscaron refugio en las ciudades o en los campamentos de la ONU situados en Honduras. Vastas zonas del interior quedaron des pobladas y en torno a los bastiones guerrilleros se estableció una red de posiciones del gobierno reforzadas por milicias campesinas contrarrevolucionarias, detrás de la cual se comenzó a desarrollar una zona intermedia de predominio gubernamental constituida inicialmente por las cooperativas establecidas a partir de la Reforma Agraria. Los magros resultados de la “Ofensiva Final” hicieron ver con claridad cómo tras un año de salvaje arremetida contrarrevolucionaria las bases políticas de la sublevación habían quedado desarticuladas casi por completo, en tanto el desarrollo militar de las fuerzas revolucionarias era aún incipiente. A su vez, el arribo inmediato del conservador Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos hacía prever nuevas y mayores dificultades para la insurgencia. Gracias a su intervención, la Democracia Cristiana logró mantenerse en el gobierno contra viento y marea, y, si bien esto sólo fue posible gracias al respaldo político, económico y militar estadounidense —con alguna aportación también de Venezuela y Alemania Federal—, muy pronto el gobierno de Duarte demostraría su capacidad para reconstituir, con base en dicho apoyo, una base social significativa. De modo paralelo, la derecha oligárquica iba a asumir la difícil tarea de rearticular su propia representación política, sin dejar por ello de participar intensamente en la persecución de activistas clandestinos y boicotear de uno u otro modo al gobierno democristiano. El ejército gubernamental, por su parte, logró mayor cohesión interna al ex purgar de su seno a los elementos reformistas —la mayoría de los

cuales rechazó, a pesar de todo, unirse a la guerrilla— e inició una nueva etapa bajo la conducción directa de especialistas estadounidenses en contrainsurgencia.

En el marco de un replanteamiento estratégico global de la hegemonía de Estados Unidos, la administración Reagan adoptó un papel más enérgico en Centroamérica que el anterior gobierno demócrata. Si bien la intervención de la URSS nunca fue más allá de lo necesario para mantener una determinada presión sobre su rival, su presencia en el conflicto regional contribuyó a exacerbar las tendencias más agresivas del gobierno de Washington. Ante la posibilidad de que se establecieran en la región nuevos regímenes similares a los de Cuba y Nicaragua, aquél se empeñó en asumir directamente la conducción política y militar de la cruzada contrarrevolucionaria, con fundamento en un diseño estratégico integral que comprendió la desestabilización del gobierno sandinista mediante la guerra “encubierta” —bloqueo económico, amenazas de invasión, patrocino de grupos contrarrevolucionarios, etcétera—, la reestructuración de las fuerzas armadas, policiales y paramilitares de los países vecinos y la instauración en ellos de gobiernos capaces de insertarse adecuadamente en su estrategia contrainsurgente. En respuesta, las fuerzas revolucionarias mejoraron su coordinación para incrementar su potencial militar y oponer al proyecto estadounidense un modelo de confrontación de largo aliento. Gracias al respaldo de Cuba y el bloque socialista, el ejército nicaragüense pronto se convirtió en el más poderoso de Centroamérica y las fuerzas rebeldes de El Salvador pudieron armarse y resistir las ofensivas gubernamentales. Al mismo tiempo, de acuerdo con el ejemplo sandinista, los revolucionarios salvadoreños se esforzaron en procurar el entendimiento con los demócratas liberales de Estados Unidos, la Internacional Socialista y otros gobiernos latinoamericanos interesados en contener la agresiva política de la administración Reagan.

En la evolución del conflicto centroamericano durante los años ochenta se pueden reconocer dos grandes periodos. El primero, caracterizado por un amplio despliegue militar, el consiguiente escalamiento de los conflictos armados locales y el incremento

de la tensión en toda el área centroamericana; el segundo, por el establecimiento de mecanismos *ad hoc* para la búsqueda de soluciones políticas al conflicto regional y a los distintos conflictos locales. Durante el primero de estos periodos el escalamiento de la guerra resultó relativamente favorable a las fuerzas revolucionarias. Frente al masivo volumen de recursos desplegado por Estados Unidos, los éxitos logrados en el campo de batalla por el ejército nicaragüense y la guerrilla salvadoreña representaron un significativo revés para sus planes estratégicos de contención revolucionaria. En el caso de Nicaragua, este triunfo relativo redundó en un reforzamiento del poder sandinista; en El Salvador, fue aprovechado por el FMLN para recuperar internamente cierta influencia política y a la vez consolidar su reconocimiento internacional como fuerza beligerante. Pero al insertarse de lleno en la geopolítica regional, el conflicto salvadoreño se había convertido en escenario de una confrontación de mayores proporciones donde gravitaban de manera determinante elementos ajenos a su dinámica interna y con ello los alcances del proyecto insurgente quedaron condicionados al desenlace global de aquel otro enfrentamiento. Durante más de diez años la izquierda salvadoreña estuvo consagrada, junto con Cuba, Nicaragua y otras fuerzas antiimperialistas de la región, a resistir la presión militar y política de Estados Unidos. Gracias al escalamiento bélico a nivel regional, el FMLN logró oponer al ejército salvadoreño un considerable poder de fuego, pudo reconstruir parcialmente sus estructuras clandestinas y, por ende, recobrar también su influencia política dentro del país. Sin embargo, ni siquiera el despliegue cada vez más efectivo de recursos militares fue capaz de reanimar la insurrección o cuando menos lograr un viraje sustancial en la correlación de fuerzas. Los estrategas norteamericanos, luego de fracasar en sus esfuerzos por contener el avance de la insurgencia en El Salvador y revertir por la fuerza de las armas la revolución nicaragüense, y al no considerar indispensable empeñarse en una invasión masiva con sus propias tropas, optaron por mantener indefinidamente una presión constante sobre la región para impedir cambios drásticos en la correlación de fuerzas y, en el caso de Nicaragua, esperar a

que el desgaste económico y político del régimen sandinista rindiera sus frutos. De modo paradójico, en la misma medida que las fuerzas revolucionarias incrementaron su poderío militar, las perspectivas de alcanzar el triunfo y consolidar exitosamente un sistema político alternativo se fueron esfumando. El caso de Nicaragua ofrece el mejor ejemplo en tal sentido: las victorias obtenidas por el ejército sandinista en su lucha con la “contra” contrastaron con los fracasos en materia económica y la bancarrota política del gobierno revolucionario. En El Salvador, pese a no poder erradicar a la guerrilla, la intervención estadounidense siempre fue lo bastante enérgica para impedir un triunfo revolucionario, a la vez que estimuló transformaciones políticas puntuales destinadas a reducir las posibilidades de que el proyecto insurgente se impusiera. La distensión Este-Oeste acarreó también consecuencias desfavorables para el proyecto radical. El fin de la actitud beligerante de la Unión Soviética ante Estados Unidos se tradujo en el reconocimiento de su *status* imperial en la región centroamericana. Con ello, el modelo de confrontación compartido por los sandinistas y las fuerzas insurgentes perdió un importante respaldo, y éstos debieron hacer concesiones fundamentales en aras de una *solución política negociada*. *En un principio esta opción fue bloqueada sistemáticamente por el gobierno estadounidense, cuando en 1983 el riesgo de que los conflictos locales desembocaran en una guerra generalizada motivó que gobiernos latinoamericanos impulsaran iniciativas de negociación regional como la del Grupo Contadora. Pero a partir de 1986 los gobiernos centroamericanos mismos, tutelados por Washington, asumieron un papel más activo en la pacificación del área. Con ello se inició un proceso de paulatina distensión y entendimiento básico entre las fuerzas enfrentadas. Finalmente, el desenlace de la confrontación estratégica mundial selló el destino de los movimientos revolucionarios en el istmo. Tras el explícito retiro de la URSS del escenario regional y el ascenso de George Bush a la presidencia de Estados Unidos la negociación política vino a cobrar un vuelo inesperado. En 1990 los sandinistas se vieron obligados a entregar el gobierno a una coalición opositora de centroderecha luego de su derrota en*

los comicios presidenciales; en correspondencia, las fuerzas de la “contra” fueron desarmadas. Dos años después, tras un largo y complicado proceso de negociación, el FMLN acordó la paz con el gobierno salvadoreño.

Hemos hecho hincapié en las vinculaciones externas del conflicto salvadoreño para explicar la evolución del mismo tras la derrota de la insurrección en 1980, pues el curso de la guerra civil *durante los años ochenta estuvo determinado de manera global* por la inserción del “desafío revolucionario” en la confrontación geoestratégica que involucró a toda el área centroamericana. Sin embargo, es indispensable tomar en cuenta que durante diez años de guerra civil El Salvador no fue sólo un espacio de enfrentamiento entre la resistencia revolucionaria respaldada desde el exterior y el proyecto contrainsurgente patrocinado por Washington; también fue escenario de importantes cambios internos que en su conjunto delinearon la recomposición global del sistema político. Algunos de estos cambios, como la modificación sustancial de las relaciones sociales en el campo a partir de la Reforma Agraria, la creación de nuevos frentes gremiales reformistas (o de centro-izquierda), la organización del gobierno civil y el establecimiento de un sistema parlamentario competitivo, fueron resultado de la gestión reformista-contrainsurgente de la Democracia Cristiana entre 1980-1982 y 1984-1989. Por el contrario, otros aspectos decisivos del cambio tuvieron su origen en la exitosa reorganización política de la derecha oligárquica en ese mismo periodo. Ésta, aunque amenazada seriamente por el “desafío revolucionario”, logró reestructurar su propia representación alrededor de un nuevo partido, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en torno al cual se aglutinaron los principales gremios empresariales, los altos mandos del ejército y los más influyentes medios de comunicación masiva. De esta manera, la derecha oligárquica no sólo pudo revitalizar su anterior hegemonía sino que fue capaz de extenderla a amplios segmentos de la sociedad y reconquistar así mucho terreno perdido. Sus triunfos consecutivos en todas las elecciones parlamentarias desde 1987, así como

su doble victoria en los comicios presidenciales de 1989 y 1994, no dejan duda al respecto.¹³

El predominio de la derecha contrarrevolucionaria se consumó de manera simultánea a la negociación de la paz y a la aplicación de importantes reformas, lo cual constituyó una gran paradoja dentro de la transformación salvadoreña: la democratización del sistema político, si bien ha significado la ampliación de libertades y derechos, así como la apertura de amplios espacios de participación, representación y disenso, redundó también en la modernización y el fortalecimiento de la hegemonía oligárquica, fenómeno que sintetiza el trayecto del cambio político en El Salvador iniciado gracias al empuje del “desafío revolucionario”. La derrota estratégica de la insurrección popular y el posterior fracaso de la opción reformista demócrata-cristiana permitieron que el reordenamiento político se produjera en el marco de la recomposición hegemónica de la derecha oligárquica, la cual, pese a haberse opuesto activamente al proyecto reformista-contrainsurgente patrocinado por Estados Unidos, resultó ser la beneficiaria final de la intervención norteamericana.

La subsistencia política y militar del FMLN, aunada a la activa participación de otras fuerzas opositoras y grupos de presión nacionales e internacionales (iglesias, agrupaciones gremiales, gobiernos, partidos y agencias extranjeros, etcétera), determinó condicionamientos sustanciales a dicha recomposición. De singular importancia en este sentido fue la gradual adaptación de la izquierda revolucionaria a las adversas circunstancias impuestas por el retiro de la URSS del escenario político centroamericano. Como señalamos anteriormente, tras el revés de 1980, el FMLN había insistido en reestructurar el proyecto insurreccional a partir de una copiosa acumulación de recursos militares provenientes del exterior. Entre 1982 y 1989 logró construir una sólida organización militar en las zonas rurales y enfrentar con éxito a las tropas del gobierno. Esta eficaz militarización, a la vez que hizo posible la

¹³ Véase Gabriel Gaspar Tapia, *El Salvador: el ascenso de la nueva derecha*, México, Centro de Investigación y Acción Social, 1989.

sobrevivencia de la izquierda revolucionaria, determinó su relativo aislamiento del proceso político nacional, y no fue poco lo que contribuyó a distorsionar la propia percepción de su circunstancia y sus posibilidades. En realidad ni siquiera el notable crecimiento militar y político experimentado hacia finales de los años ochenta por la guerrilla logró revertir su inferioridad estratégica. Los más sonados triunfos de las armas insurgentes llegaron demasiado tarde, cuando ya el “desafío revolucionario” había perdido por completo su vigencia en tanto transformación radical de las estructuras sociales.

El proyecto político de la insurrección se fue desdibujando de manera gradual tras el abandono explícito de la plataforma del Gobierno Democrático Revolucionario por el FMLN en 1984. De allí en adelante no se puede hablar con propiedad de un proyecto insurgente. No lo hubo. Las sucesivas plataformas enarboladas por la guerrilla nunca tuvieron por objeto sintetizar programáticamente ningún proyecto coherente de transformación estructural. Sólo buscaban responder a la presión internacional o a los requerimientos coyunturales de la negociación con el gobierno. Para entonces era evidente que la principal fortaleza de la guerrilla no estribaba, como en los años setenta, en el vigor de su proyecto, sino en el volumen de fuego que era capaz de concentrar. Gracias a esta cualidad, sin embargo, pudo avanzar con relativa seguridad hacia los resbaladizos terrenos del reformismo armado, enarbolando su indiscutible poderío militar como instrumento de presión en aras de obtener determinadas garantías. No demasiadas, por cierto. La negociación que puso fin al conflicto armado consistió en establecer los términos en que el FMLN podía sumarse, en las condiciones más decorosas posibles, a la recomposición del sistema político que había dado inicio desde algún tiempo atrás. Sin ser iniciativa suya, su aporte específico al respecto no fue despreciable. A cambio de las armas se obtuvo la disolución de los viejos cuerpos policíacos y paramilitares, una depuración parcial del ejército y el juicio moral a los criminales de guerra. Asimismo, se logró insertar a un numeroso contingente de cuadros y activistas de la izquierda en los nuevos espacios

de la “sociedad civil”. Y, aunque sin duda el alto costo de semejante desenlace en términos de pérdidas humanas lo hacen ver como una suerte de victoria “pírrica”, el papel central de la sublevación revolucionaria en el desmantelamiento del estado autoritario y la democratización de las instituciones políticas salvadoreñas resulta insoslayable.

Noticia Bibliográfica

Desde principios de los años ochenta, la guerra civil en El Salvador ocupó la atención de periodistas, analistas políticos y científicos sociales. A continuación señalaremos algunos de los trabajos más relevantes al respecto publicados en nuestro país o de fácil localización en bibliotecas mexicanas. En primer lugar cabe mencionar el libro del sociólogo francés Alain Rouquié, *Guerras y paz en América Central* (México, Fondo de Cultura Económica, 1994) que, pese a imprecisiones menores, es sin duda el mejor y más actualizado trabajo acerca de las guerras centroamericanas publicado hasta la fecha. Desde una perspectiva muy cercana a la suya, Sara Gordon, en su libro *Crisis política y guerra en El Salvador* (México, Siglo XXI, 1989), hizo un pormenorizado estudio del caso salvadoreño hasta la coyuntura de 1980. Un buen análisis del golpe de 1979 y los acontecimientos posteriores hasta 1982 puede encontrarse en el libro de Enrique Baloyra, *El Salvador en transición* (San Salvador, UCA, 1987); en tanto, Gabriel Gaspar Tapia, en *El Salvador: el ascenso de la nueva derecha* (México, Centro de Investigación y Acción Social, 1989), examina la recomposición política de la derecha oligárquica. Acerca de la escalada bélica de los ochenta y la injerencia militar estadounidense, pueden consultarse las partes dedicadas al caso salvadoreño en los libros de Raúl Sohr, *Centroamérica en guerra* (México, Alianza Mexicana, 1989), y Michael T. Klare y Peter Kornbluh [coords.], *Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los ochenta* (México, CONACULTA-Grijalbo, 1990). Vale la pena mencionar también ciertas obras de carácter periodístico o testi-

monial que proporcionan importantes referencias de la guerra civil. La única edición formal de documentos internos de la guerrilla correspondientes a la década de los setenta es *Por la causa proletaria*, volumen publicado por el Partido Socialista de Costa Rica en 1979. Otro testimonio singular de los primeros años de lucha guerrillera es el de Ana Guadalupe Martínez, *Las cárceles clandestinas de El Salvador* (México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1980). En contraparte, debemos mencionar el libro de Stephen Webre, *José Napoleón Duarte y el Partido Demócrata Cristiano en la política salvadoreña, 1960-1972* (San Salvador, UCA, 1985). Visiones contrapuestas acerca del conflicto, y que a la vez perfilan significativas tendencias de opinión dentro de la clase intelectual mexicana, son las de Adolfo Gilly, *Guerra y política en El Salvador* y *La senda de la guerrilla* (México, Nueva Imagen, 1981 y 1986, respectivamente), y Gabriel Zaid, “Colegas enemigos. Una lectura de la tragedia salvadoreña” (*Vuelta* núm. 56, México, julio de 1981). Por su parte, los trabajos periodísticos de Manlio Tirado, *La crisis política en El Salvador* (México, Quinto Sol, 1980) e Ignacio González Jansen, *La batalla de El Salvador* (México, Prolibro, 1980), contienen documentos y testimonios correspondientes al momento culminante de la insurrección. Entre las muchas entrevistas con dirigentes guerrilleros publicadas en México destacan las de Marta Harnecker, *Pueblos en Armas* (México, ERA, 1982), entre los relatos vivenciales cabe mencionar los de Charles Clements, *Guazapa, testimonio de guerra de un médico norteamericano* (San Salvador, UCA, 1986), Norma de Herrera, *La mujer en la revolución salvadoreña* (México, Claves Latinoamericanas, 1983), Francisco Mena Sandoval, *Del ejército nacional al ejército guerrillero* (San Salvador, Venceremos, 1993), y Ana Kelly Rivera, *¿Valió la pena?* (San Salvador, Sombrero Azul, 1995).

COLOMBIA: HETEROGENEIDAD DEL MOVIMIENTO GUERRILLERO, MULTIPOLARIDAD DE LA GUERRA Y MARAÑA NEGOCIADORA

Juan Manuel Ibeas Miguel
Luis Fernando Moncada Agudelo

I. Antecedentes

En Colombia, en la década de los sesenta, se combinan una serie de circunstancias internas e internacionales que constituyen un terreno fértil para el desarrollo de las guerrillas revolucionarias. A diferencia de algunos países latinoamericanos en donde la guerrilla emerge en cierta medida irradiada por la revolución cubana, en esta nación andina, su génesis y desarrollo mantiene una línea de continuidad con experiencias armadas vinculadas con profundos conflictos agrarios, como es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Entre las causas internas que explican el surgimiento del movimiento insurgente nos encontramos con tres factores diferenciados pero complementarios: la herencia de fenómenos históricos derivados de la “violencia” que sacudió el país entre 1948 y 1953, el régimen político impuesto por el “Frente Nacional” caracterizado como una “Democracia restringida” y, por último, el papel del Partido Comunista Colombiano (PCC), matriz de las diversas fuerzas revolucionarias de Colombia.

En cuanto a las influencias externas, las más relevantes son, junto al legado de la revolución cubana que influye en amplios sectores de la juventud latinoamericana, el contexto internacional de la Guerra Fría, el proyecto continental de defensa estraté-

gica contra el comunismo elaborado por el Pentágono y, por último, las tensiones y crisis del movimiento comunista internacional provocadas por la disputa chino-soviética reflejada en el PCC.

Este conjunto de influencias exógenas se conjugan con la tradición guerrillera nacional, cuyo legado histórico y político más inmediato son las guerrillas liberales de los años cuarenta y cincuenta y con la radicalización de sectores urbanos.

Las relaciones entre los partidos tradicionales, liberal y conservador se caracterizaron hasta 1958 por un profundo sectarismo. Tras un periodo de predominio liberal iniciado en 1930, el Partido Conservador vuelve a dirigir el Estado en 1946. Apoyado en el fraude y la coacción, consigue imponer su hegemonía, mientras el país se sumerge de nuevo en las viejas confrontaciones interpartidistas. En este contexto, el 9 de abril de 1948 se produce el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, suceso catalizador de la “violencia”, periodo de intenso conflicto armado entre los partidos conservador, en el poder, y liberal, en la oposición, cuyo escenario principal fue el área rural y que provocó entre 1946 y 1964 más de 200 000 muertos.¹

La “violencia”, inicialmente de marcado carácter político partidista, adquirió progresivamente un mayor contenido reivindicativo y social. Durante esta etapa se produjo un auténtico proceso de expropiación agraria contra los pequeños campesinos. Ante la naturaleza de dicho proceso, el imaginario político de algunos sectores de la guerrilla liberal experimentaron una evolución que los llevó hacia posiciones más radicales y a aproximarse al PCC.

El 13 de julio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla accede al poder mediante un golpe de Estado y decreta una ley de amnistía para los alzados en armas a la que se acoge la mayor

¹ No existe acuerdo sobre la duración real del enfrentamiento ni sobre el número de víctimas. Las cifras que se citan son aportadas por Paul Oquist en su libro ya clásico *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Bogotá, IEC, 1978. Para el historiador británico E. J. Hobsbawm, la “violencia” “representa probablemente la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental”, *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, 1974, p. 264.

parte de las guerrillas liberales² inducidas por la dirección del Partido Liberal. El modo en que se produjo la entrega de las armas y el desinterés mostrado por la dirección liberal ante la situación de abandono en que quedaban sus antiguas fuerzas guerrilleras creó un gran sentimiento de frustración en ellas.

La imagen del gobierno militar de Rojas Pinilla, presentada inicialmente como fórmula pacificadora, pronto fue cuestionada. Guadalupe Salcedo, dirigente guerrillero que encabezara la desmovilización de las guerrillas liberales en los Llanos Orientales, fue asesinado en Bogotá. El 9 de junio de 1954 se produjo en esta misma ciudad una masacre de estudiantes universitarios. El gobierno emprendió una actividad anticomunista: en abril de 1955, el ejército comenzó a ocupar militarmente las regiones agrarias influidas por el PCC ubicadas en el sur del país y en 1956 un decreto presidencial ilegalizó a esa agrupación. Estos hechos frustraron las expectativas de muchos sectores de la población respecto a los cambios institucionales y reactivaron, en las zonas agrarias, los núcleos de autodefensa, los cuales se transformaron en guerrilla móvil.

En 1956 el PCC asumió los postulados del XX Congreso del PECUS, celebrado ese mismo año, que proponían la transición pacífica hacia el socialismo mediante reformas democráticas. Esta orientación marcó la estrategia futura del PCC que, opuesto a la táctica revolucionaria cubana y descontento por el deterioro del gobierno de Rojas Pinilla, chocó con el voluntarismo, la impaciencia y la radicalidad de diversos sectores urbanos, fundamentalmente juveniles.

Al caer el régimen militar, en 1957, la actividad del PCC se orientó a adquirir carácter legal y consolidarse como fuerza política-electoral. Para el PCC la lucha armada era exclusivamente un instrumento de autodefensa de las masas, pero nunca un medio

² Algunos grupos de guerrilla liberal continuaron alzados en armas con propósito de autodefensa, o simplemente ocultaron las armas en previsión de eventuales persecuciones; otros degeneraron al practicar el bandolerismo (generalmente al servicio de terratenientes).

para la toma del poder. El triunfo de la revolución cubana llevó a la línea oficial del partido a emprender en su interior una lucha ideológica contra el “guerrillerismo”, definido como tendencia pequeñoburguesa que trataba de sustituir la lucha de las masas por la acción de los grupos armados. Ante esta postura sectores urbanos del partido y de la Juventud Comunista (JUCO), critican la posición reformista y conciliatoria del PCC y se escinden con el fin de emprender la creación de nuevas organizaciones políticas.³

Con un país sumido en la violencia y bajo un régimen militar, los dirigentes de los partidos liberal y conservador decidieron, mediante los pactos de Sitges y Benidorm,⁴ poner fin a la violencia y erradicarla de sus relaciones interpartidarias. Además acordaron desplazar a los militares del poder y evitar el surgimiento de una fuerza política autónoma distinta de los partidos tradicionales. Fruto de estos acuerdos y tras la salida del general Gustavo Rojas Pinilla, derrocado por una Junta Militar, se estableció en 1958 el Frente Nacional, nuevo régimen político emanado de una reforma constitucional encaminada a reconciliar y pacificar el país.

El Frente Nacional fue un modelo político que garantizó la alternancia presidencial entre los partidos liberal y conservador y el reparto paritario de los cargos públicos. Este modelo sui generis estableció una democracia restringida y excluyente apoyada en la declaratoria permanente del estado de sitio. Las trabas impuestas por el régimen del Frente Nacional dificultaron la formación de terceras fuerzas políticas e impidieron el surgimiento de organizaciones legales de oposición, lo que sin duda alguna contribuyó al desarrollo del movimiento guerrillero.⁵

³ Estos sectores desprendidos del PCC se distinguen así: uno es partidario de la lucha armada revolucionaria y de la abstención electoral, y critica duramente el pacifismo y el reformismo del PCC, al considerar que el país afronta una situación prerrevolucionaria. Otro coincidía con la anterior apreciación política, pero difería respecto a la viabilidad de la acción armada inmediata, a la vez que ponía su acento principal en la organización de movimientos urbanos.

⁴ Sitges y Benidorm son ciudades españolas.

⁵ Sobre el Frente Nacional véanse, entre otros: J. Hartlyn, *La política del régimen de coalición*, Bogotá, Tercer Mundo-Uniandes-CEI, 1993 y D. Pécaut, *Crónica de dos décadas de política colombiana (1968-1988)*, Bogotá, Siglo XXI, 1988.

II. Las guerrillas de los años sesenta y setenta

En Colombia, en lugar de hablar de la guerrilla, es más apropiado referirse a ella con el plural “guerrillas”, ya que es un actor múltiple y heterogéneo.⁶ En una perspectiva histórica, cuatro organizaciones han compuesto el mosaico de la insurgencia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Cada una de ellas nace de situaciones peculiares, adopta idearios políticos diferenciados y formas de operar propias que configuran su perfil particular.

Los antecedentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), organización guerrillera pionera, se encuentran en los núcleos de autodefensa campesina que, influidos por el PCC, se desarrollaron en el sur del país durante la “violencia” y en algunos sectores de la guerrilla liberal opuestos a la entrega de las armas durante el gobierno de Rojas Pinilla, que transitaron ideológicamente hacia las posiciones defendidas por el PCC.

La fundación de las FARC tuvo lugar a partir de la ofensiva militar emprendida en 1964 por el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966) contra las regiones del sur del país donde los campesinos practicaban la autoorganización y la autodefensa, bajo influencia comunista: Marquetalia, Guayabero, El Pato y Riochiquito. El Estado lanzó una extensa operación con el fin de extirpar las denominadas “Repúblicas Independientes”.⁷ La operación consistió en desplegar miles de soldados para desalojar algunos centenares de familias campesinas que habitaban esta zona de colonización.⁸

⁶ Eduardo Pizarro, “La guerrilla en Colombia”, en *Controversia*, núm. 141, CINEP, 1987.

⁷ Nombre dado por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado a las zonas agrarias en que el PCC contaba con una destacada presencia política, además de formas campesinas organizadas.

⁸ Tal acción militar se produce en pleno auge de la Guerra Fría, por lo que contó con la asesoría y apoyo de Estados Unidos dentro del plan LASO (Latin American Security Operation).

Las autodefensas campesinas sobrevivientes a esta operación de exterminio realizaron en 1964 la Primera Conferencia del “Bloque Sur”, que elaboró el “programa agrario de los guerrilleros” y, dos años más tarde, en la Segunda Conferencia Nacional de guerrilleros, constituyeron las FARC. Esta organización comenzó a expandirse y consolidarse en términos inversamente proporcionales a la presencia del Estado, fundamentalmente en zonas de frontera, también llamadas de colonización campesina.

Las raíces del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran en núcleos de exguerrilleros liberales, en sectores urbanos radicalizados y en las juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Este último había surgido a su vez a finales de la década de los cincuenta como disidencia del Partido Liberal opuesta a la alternancia bipartidista institucionalizada por el Frente Nacional y asumió una posición de defensa y solidaridad ante la revolución cubana. Sus juventudes y sectores más radicalizados comenzaron a simpatizar con la lucha armada, motivo por el cual fueron expulsados mientras el MRL se reintegraba a la línea oficial del Partido Liberal.

El núcleo constitutivo del ELN fue la brigada “José Antonio Galán”, integrada por miembros de la juventud del MRL, bajo la orientación de Fabio Vásquez Castaño. Este grupo viajó a Cuba en 1962, donde recibió formación militar, y más tarde, influido por el foquismo guevarista, plantea un proyecto similar para Colombia.

El 7 de enero de 1965 tuvo lugar su primera acción guerrillera con la toma del pueblo de Simacota (Santander), operativo en que hizo públicos sus objetivos políticos en el denominado “Manifiesto de Simacota”.⁹ Por estas mismas fechas se iniciaron con-

⁹ En sus principios programáticos plantea: “El Ejército de Liberación Nacional ha surgido de la necesidad del pueblo colombiano de poseer un brazo armado combativo y consciente, capaz de asegurarle, mediante la lucha frontal contra sus enemigos, la toma del poder y el establecimiento de un sistema social acorde con el desarrollo del país, que libere a las masas de la explotación a que han estado sometidas durante toda su historia, y facilite y encauce el desarrollo y el progreso de nuestro pueblo.” Extracto del órgano *Insurrección* de 1965. Tomado de Camilo Torres, *Escritos escogidos*, Colombia, Cimarón, 1986.

versaciones con el padre Camilo Torres y el Frente Unido.¹⁰ El Ejército Popular de Liberación (EPL) se constituyó en el brazo armado del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista), (PC de C-ml). Las pugnas chino-soviéticas surgidas en el seno del movimiento comunista internacional generaron en el PCC algunas fracturas resueltas en 1965 con la escisión de un grupo opuesto a la línea oficial prosoviética que pasó a denominarse PC de C-ml. Para el naciente organismo político, de inspiración maoísta, el triunfo de una verdadera revolución era imposible sin la conducción de un partido marxista-leninista. En este sentido consideraban que el revisionismo, encarnado por el PECUS y el PCC, era la penetración de la ideología burguesa en el partido del proletariado y, por lo tanto, un obstáculo para la revolución. El triunfo de ésta y del socialismo eran inviables sin el recurso de la violencia revolucionaria. Tras caracterizar la situación sociopolítica colombiana como prerrevolucionaria, comenzaron a diseñar una línea militar, conforme a la cual el campo se convierte en escenario principal. La dirección del partido se traslada a zonas rurales como paso previo para preparar la “Guerra Popular Prolongada” y construir el brazo armado del partido.

Tras varios intentos frustrados, el EPL irrumpió en 1967 en el Alto Sinú y San Jorge—con la participación de antiguos guerrilleros liberales— y comenzó a consolidarse en el noroeste colombiano.

El Movimiento 19 de Abril (M-19) presenta un perfil original frente al resto de las organizaciones guerrilleras de ese momento

¹⁰ El sacerdote y sociólogo Camilo Torres, docente y capellán de la Universidad Nacional de Colombia se puso en contacto con el movimiento estudiantil durante una década de fuertes tensiones sociales. De ese escenario surgió el Frente Unido, organización liderada por Camilo Torres y sustentada en su carisma. En este movimiento de raíz cristiana se integran muchos exmilitantes del MRL, así como diversos sectores sociales creyentes y no creyentes. El Frente Unido alcanzó una amplia influencia política en el país. Cuando se discutió internamente sobre la participación en las elecciones comenzaron sus desmembramientos. Mientras unos sectores optan por la vía electoral, los más radicales apuestan por la lucha armada y se integran al ELN, incluido el propio Camilo Torres, quien murió en su primer combate con el ejército el 15 de febrero de 1966.

en Colombia y se convierte en prototipo de las denominadas guerrillas de “segunda generación”.¹¹

Su origen se encuentra determinado por el contexto político de comienzos de la década de los setenta. El 19 de abril de 1970 tuvieron lugar las elecciones presidenciales que concedieron un dudoso triunfo al candidato del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana Borrero, frente al general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la ANAPO,¹² Alianza Nacional Popular.¹³

Para las fuerzas políticas de izquierda este mismo periodo está acompañado de una doble crisis que afecta a la lucha armada y a la lucha de masas. La primera estaba determinada por el fracaso de la teoría guevarista del foco, la muerte del cura guerrillero Camilo Torres y el carácter de autodefensa de las FARC, además de los reveses militares del ELN y del EPL, los cuales se hallaban al borde de su extinción. Paralelamente se produjo un replanteamiento de la lucha de masas, inducido por la experiencia de la ANAPO, que fue incapaz de defender y mantener su caudal electoral, y la experiencia de la Unidad Popular chilena acallada a sangre y fuego. Estos hechos llevaron a cuestionar las posibilidades de éxito de un movimiento de masas por medios legales y electorales.

La nueva organización, cuya primera acción pública consistió en sustraer la espada del libertador Simón Bolívar en enero de 1974, responde a la frustración política generada por el régimen excluyente del Frente Nacional y al intento de ampliar mediante

¹¹ Las características de estos movimientos son descritas por Eduardo Pizarro (1987), de acuerdo con analistas como César E. Sereseses. Destacan por intentar consolidar su presencia en núcleos de población, diversificar y atribuir mayor importancia a las relaciones “diplomáticas”, interesarse por las raíces nacionales, adoptar un discurso latinoamericanista e identificarse con las luchas centroamericanas y caribeñas...

¹² La Alianza Nacional Popular nace en 1962 como resultado del retorno a la política del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Este movimiento de estilo político populista surge como coalición electoral de liberales y conservadores, ya que, según establecía el Frente Nacional, se impedía presentar candidatos que no perteneciesen a alguna de estas agrupaciones.

¹³ Con este suceso, en palabras del historiador Marco Palacios, “se resquebrajó la tradición republicana y significó el final de las reglas de honor y honorabilidad política de modo que la legitimidad del régimen se vio seriamente disminuida”. Conferencia pronunciada en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, mayo de 1996.

la presión militar el espacio político democrático y la participación popular. En el M-19 confluyeron sectores procedentes de las FARC y de la ANAPO. De las FARC llegan líderes como Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, descontentos con el ruralismo de esta organización. Transmiten experiencia guerrillera y contenido ideológico marxista. De la ANAPO provienen dirigentes como Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Almarales y Ever Bustamente, profundamente desencantados con las posibilidades de la democracia parlamentaria y con la dirección de la ANAPO. Aportan trabajo de masas y estilo político populista.

Desde su inicio, el M-19 trató de combinar trabajo de masas y lucha armada. Logró desarrollar esta última en el área urbana, con cierto éxito, aunque posteriormente se vio obligado a extenderla en el campo. Frente al discurso abstracto y difuso de otras organizaciones, reivindicó las raíces nacionales y las tradiciones históricas de Colombia y Latinoamérica e introdujo novedades en aspectos técnico- operativos y tácticos de la guerra de guerrillas.

III. Las guerrillas en los años ochenta

En el lapso comprendido entre el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 y la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de 1980 por el M-19, se registraron hechos significativos que definen el contexto político de los ochenta. Se multiplicaron las expresiones de descontento social al margen de los cauces institucionales y en respuesta a ellas se recrudeció el autoritarismo del Estado. Durante la administración de Julio César Turbay (1978-1982), aumentó el protagonismo de las Fuerzas Armadas amparadas en el estado de sitio y el Estatuto de Seguridad, lo que acentuó el uso ilegal de la violencia por parte de éstas y la violación de los derechos humanos.

En esos años los grupos insurgentes realizaron redefiniciones internas, ampliaron sus apoyos, su expansión geográfica y su actividad.

Las FARC, tras su VII Conferencia Nacional celebrada en 1982, dejan de reivindicar su carácter de autodefensa para asumir la perspectiva de la construcción de un ejército con el objetivo de la toma del poder.¹⁴ El ELN, tras el duro golpe sufrido en 1973 en Anorí (Departamento de Antioquia) y la superación de sus crisis intestinas, comienza a reconstruirse. El EPL renuncia al maoísmo en 1980 y reorienta su acción política hacia las masas y la guerra insurreccional.

El M-19 realizó acciones audaces y espectaculares de propaganda armada, entre ellas la toma de la Embajada de la República Dominicana, en febrero de 1980,¹⁵ con la cual una organización guerrillera conseguía por primera vez una interlocución política en Colombia. Entre las exigencias planteadas al gobierno en esta acción, se pide la realización de un gran Diálogo Nacional para resolver los problemas del país. Con este hecho, la paz, la negociación y, en definitiva, lo político adquieren mayor importancia y se inicia un giro en el desarrollo del conflicto interno.

En 1981, Jaime Bateman¹⁶ formuló una propuesta de paz al gobierno sobre la base de una amnistía para los presos políticos, una tregua bilateral, el levantamiento del estado de sitio y el Diálogo Nacional. La importancia de esta iniciativa política estriba en que, a diferencia de las otras organizaciones que asumían la guerra como la forma de resolver una contradicción histórica sólo dirimida con la derrota del contrario, el M-19 planteaba una postura más flexible y realista: la guerra ya no era un absoluto sino un medio de presión para obtener transformaciones democráticas. Esta propuesta encontró eco en sectores sociales que no se sentían representados por los partidos tradicionales pero tampoco compartían la lucha armada.

Simultáneamente, el M-19 empieza a desarrollar operativos militares en las áreas rurales del sur del país e imprime un nuevo

¹⁴ Tras esta conferencia empezaron a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP.

¹⁵ En esta ocasión se retuvo a 20 representantes de delegaciones internacionales, entre ellos doce embajadores, incluidos el de EU y el nuncio apostólico.

¹⁶ Comandante del M-19 desde su fundación hasta que en 1983 muere en un accidente de aviación.

rítmo en el desarrollo de las actividad guerrillera más allá del simple hostigamiento y repliegue.

Durante los años ochenta irrumpe un nuevo tipo de organizaciones que comparten con el M-19 muchas de las características de las denominadas guerrillas de segunda generación: el Partido Revolucionario de los Trabajadores, (PRT), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria “Patria Libre” (MIR-PL),¹⁷ y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).¹⁸ Además de un grupo escindido de las FARC en 1983: Frente Ricardo Franco.

El presidente Belisario Betancur (1982-1986) asumió en su programa de gobierno la búsqueda de la paz y emprendió una política novedosa frente a las guerrillas, al reconocer su interlocución política. Adelantó una amnistía gracias a la cual muchos de los guerrilleros detenidos salieron en libertad y como contrapartida pidió el desarme de la insurgencia sin llevar a cabo ni diálogo ni tregua.

A pesar de sus ambivalencias, el gobierno, con su propuesta de paz, adquirió la iniciativa política que hasta ese momento correspondía al M-19. Otro pilar de la política gubernamental fue el anuncio de reformas políticas que en la práctica se redujeron a aprobar la elección popular de alcaldes y a posibilitar la legalización de una nueva fuerza, la Unión Patriótica (UP).

La respuesta de las fuerzas guerrilleras a la propuesta gubernamental de paz no fue inmediata ni uniforme; cada organización realizó una apreciación diferente del momento político. En mayo de 1984, en la Uribe,¹⁹ las FARC firmaron los acuerdos de tregua y cese del fuego. Posteriormente, el EPL —que lanzó la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)—, y el M-19 fir-

¹⁷ Tanto el PRT como el MIR (Patria Libre) surgieron de la Tendencia Marxista Leninista Maoísta (TMLM), escindida en 1975 del PC de C-m-l.

¹⁸ El MAQL irrumpió como organización guerrillera en 1984 en el Departamento de Cauca, resultado de la transformación de las autodefensas indígenas, enfrentadas a paramilitares y terratenientes, en grupo armado de carácter permanente.

¹⁹ En el área rural de este municipio situado en el Departamento del Meta, se encontraba la sede del secretariado de las FARC, conocida como Casa Verde.

maron una tregua bilateral con el gobierno el 23 de agosto de 1984. El grupo Autodefensa Obrera (ADO) también se sumó a los acuerdos.²⁰

Frente a las guerrillas firmantes de los acuerdos de cese del fuego y tregua se perfiló otro bloque de organizaciones, el Frente Ricardo Franco, MAQL, ELN, PRT, y el MIR-Patria Libre²¹ se opuso a la propuesta de Betancur por considerarla una maniobra de la burguesía para derrotar al movimiento guerrillero.

La tregua se caracterizó por su precariedad, ya que la política de Betancur recibió un débil apoyo de los partidos, el Congreso, los gremios y las Fuerzas Armadas. Para éstas, la tregua debía significar el desarme de la insurgencia, con base en el precepto constitucional que les atribuye el monopolio de la fuerza.

La debilidad de estos apoyos, unida a la carencia de mecanismos efectivos de verificación y a los constantes incidentes entre el ejército y las guerrillas firmantes de los acuerdos, provocó paulatinamente el deterioro del proceso. Hechos como las heridas sufridas por el dirigente del M-19, Carlos Pizarro, por disparos de la policía el mismo día de la firma de la tregua en el municipio de Corinto (Cauca), los sucesos de Yarumales y los Robles, el atentado contra Antonio Navarro Wolff, vocero legal del M-19, el cerco de aniquilamiento contra uno de los frentes del EPL en el Viejo Caldas, entre otros, terminaron por truncar el proceso negociador con ambas organizaciones. A mediados de 1985, el M-19 consideró rota la tregua por el gobierno y reanudó su actividad militar, aunque manifestó su disposición al diálogo.

En noviembre de ese mismo año, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá, con la pretensión de juzgar a Belisario Betancur por violar la tregua. El presidente de la República esta vez no negoció y los militares actuaron sin ningún tipo

²⁰ Este pequeño grupo, formado a finales de los setenta como guerrilla urbana inspirada en la experiencia armada del Cono Sur, se autodisolvió tras la firma de la tregua con Betancur.

²¹ FPRT, MIR-Patria Libre y ELN configuran a principios de 1985 la trilateral, proyecto que, hegemonizado por la última de esas tres organizaciones, se plantea construir un ejército revolucionario como vanguardia colectiva de las fuerzas guerrilleras.

de control. En la acción de desalojo del comando guerrillero murieron más de un centenar de personas, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia y varios magistrados; además se produjeron varias desapariciones forzadas y la destrucción del Palacio de Justicia.

Este suceso constituyó para el M-19 un serio revés militar y político que le supuso un importante desgaste ante la opinión pública; con él se rompió su lógica, según la cual la política fundada en la paz y la negociación cumplía un papel central. El M-19 quedaba a la deriva.

Por su parte, el EPL, tras el asesinato de su vocero legal Óscar Willian Calvo, el 20 de noviembre de 1985, reanudó sus acciones guerrilleras ofensivas. Mientras tanto, las FARC continuaron en tregua a pesar de los hostigamientos emprendidos por el ejército.

La UP se constituyó en 1985, tras los acuerdos de tregua y cese del fuego Gobierno-FARC.²² Contó con el respaldo del PCC, la participación de algunos dirigentes guerrilleros en la legalidad, además de sectores independientes y de izquierda. Compitió electoralmente con los partidos tradicionales y obtuvo un notable apoyo electoral.²³ Este movimiento político se consolidó poco a poco en áreas rurales y urbanas donde influían las FARC y el PCC, pero comenzó a debilitarse por la acción del paramilitarismo, que atacó a sus dirigentes, militantes y simpatizantes con el pretexto de formar parte del brazo político de las FARC, aún en tregua.

Se puede afirmar que el gobierno enfrentó a la guerrilla como un asunto político y no meramente militar, lo cual representa un rasgo diferenciador de los ochenta respecto de décadas precedentes; este espacio permitió reflexionar sobre la posibilidad de una salida política negociada.

²² Al respecto, véase N. Buenaventura, *Unión patriótica y poder popular*, Bogotá, CEIS, 1987.

²³ En las elecciones legislativas de 1986, lanzó a Jaime Pardo Leal como candidato a la presidencia de la República. En las elecciones legislativas, en las que estableció algunas alianzas con otros grupos, obtuvo tres senadores y nueve representantes. En estas convocatorias electorales cosechó resultados bastante satisfactorios si se tiene en cuenta la marginalidad electoral crónica de las fuerzas de izquierda en Colombia; alcanzó más de 300 000 votos, lo que significó cerca de cuatro por ciento de los sufragios emitidos.

La tregua fue un ámbito político y militar sui géneris. Para las organizaciones que negociaban se abrió un espacio donde era posible expresarse públicamente a través de sus voceros, mientras en otros escenarios continuaban los combates. Para las Fuerzas Armadas se trataba de una limitación impuesta por el poder civil a su misión constitucional.

El 25 de mayo de 1985 se realizó la Primera Cumbre de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), a la que asistieron el ELN, MAQL, MIR-PL, PRT y el Frente Ricardo Franco, además del M-19 y el EPL, aún en tregua. Las FARC no asistieron debido a que en la cumbre participaría el grupo Ricardo Franco.

Paralelamente a la tregua y a los intentos de alcanzar una paz negociada, se multiplicaron otros hechos violentos, especialmente los relacionados con el narcotráfico. Se establecieron alianzas entre sectores terratenientes, narcotráfico y Fuerzas Armadas, con un objetivo común: acabar con la insurgencia. Se desató la guerra sucia y proliferaron los grupos paramilitares, instrumentos de represión ilegal fundamentalmente dirigidos contra la oposición política y la protesta social.²⁴

Una vez rota la tregua, en la CNG se incrementan los esfuerzos para lograr la unidad de acción y cooperación táctica y técnica. Se plantea la construcción de una alternativa de poder a partir de la confluencia de las estructuras políticas y militares de las organizaciones revolucionarias. La muerte de dos de los principales artífices de la CNG, el comandante del M-19, Álvaro Fayad, en agosto de 1985, y del comandante del EPL, Ernesto Rojas, en febrero de 1987, constituyen un duro golpe para este propósito unitario.

En octubre de 1987 se celebró la Primera Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Las FARC se incorporaron a ese proyecto unitario después de la expulsión del Frente Ricardo Franco²⁵ de la CNG. En la reunión se propuso realizar

²⁴ Sobre los vínculos entre paramilitarismo y narcotráfico, véase Carlos Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Documentos Periodísticos, 1990.

²⁵ El grupo Ricardo Franco surgió en 1983 de una escisión de las FARC. En su actividad armada opta por formas terroristas como los atentados contra algunos dirigentes del

un diálogo directo con el gobierno que abriera vías a una salida política negociada del conflicto armado.

A pesar de la aparente unidad del movimiento guerrillero, había diferentes apreciaciones de la realidad política nacional, así como de las posibles alternativas del conflicto. A mediados de 1988, el M-19, sin contar con la CGSB, decidió secuestrar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y para liberarlo exigió que se llevara a cabo una “Cumbre Nacional”, con el objetivo de explorar caminos para resolver el conflicto armado. Con este operativo militar, el M-19 se proponía reiniciar y abanderar la vía del diálogo. Por su parte, la CGSB criticó el carácter unilateral de la acción y ratificó que cualquier diálogo con el gobierno debía celebrarse en forma conjunta.

En septiembre de 1988, forzado por los acontecimientos, el presidente Virgilio Barco (1986-1990) lanzó su “Iniciativa para la paz”. A diferencia de las treguas firmadas durante la administración Betancur, esta iniciativa exigía de antemano que la guerrilla demostrara su intención pacífica y su voluntad de reincorporarse a la vida civil. La CGSB interpretó tal demanda como un plan de rendición limitado a exigir el desarme de las guerrillas.

El M-19 continuó con su particular proceso de negociación con el gobierno y concentró sus combatientes en el campamento de Santo Domingo (Cauca). La unidad interna de la CGSB comenzó a agrietarse ante la imposibilidad de llegar a acuerdos concretos. Afloraron las ambivalencias, alianzas y relaciones de fuerza internas e incluso se desataron muchas de las tensiones acumuladas dentro de cada una de las organizaciones integrantes. El tema clave de discusión interna era si la bandera de la paz abría realmente un nuevo camino ante la imposibilidad de ganar la guerra o podía ser, por el contrario, una maniobra política útil para mejorar las condiciones del desarrollo de la guerra revolucionaria.

PCC. En enero de 1986 este organismo se hizo tristemente célebre por la masacre de Tacueyó (Cauca), en la que fueron torturados y asesinados 164 de sus combatientes acusados de ser infiltrados del ejército. Fue expulsado de la CNG y terminó disolviéndose.

En las organizaciones guerrilleras se libraban acalorados debates entre los partidarios de negociar la desmovilización de modo inmediato y quienes, por el contrario, planteaban que el fin de cualquier negociación no debía ser otro que el de impulsar transformaciones políticas y sociales. Esta disyuntiva rompió los frágiles nexos de la CGSB —incluso en el seno mismo de las propias organizaciones integrantes de ella—, donde ni la propuesta de guerra ni la de paz obtuvieron consenso.

Desde el Estado, mientras unos sectores veían con beneplácito la reanudación de los diálogos, otros apostaban por una salida estrictamente militar y la guerra sucia.²⁶

Al igual que cinco años antes, el tema de la guerra y la paz volvía a polarizar al gobierno, a las fuerzas guerrilleras y a la opinión pública, pero ahora en un contexto mucho más complejo. Otros factores de violencia se habían agudizado, especialmente el narcoterrorismo, que comenzó a actuar de manera selectiva con enorme crudeza, como al asesinar al precandidato liberal a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, o de modo indiscriminado, al consumir masacres.

El M-19 decidió negociar con el gobierno tras juzgar imposible ganar la guerra militarmente y considerar que una nueva fuerza política legal renovadora debía capitalizar la existencia de un espacio político en el país. En octubre de 1989, en su Conferencia Nacional, acordó renunciar a las armas, reinsertar a sus combatientes en la vida civil y constituir un nuevo movimiento político. El 2 de noviembre firmó con el gobierno un “Pacto político por la paz y la democracia”, mediante el cual el régimen se comprometió a emprender iniciativas legislativas, entre ellas una reforma constitucional y programas para incorporar a los combatientes a la vida civil. El 9 de marzo de 1990 se efectuó en el campamento de Santo Domingo (Cauca) la entrega de armas por parte del M-19 ante una veeduría de la Internacional Socialista.

²⁶ Al respecto, véase *Terrorismo de Estado*, Bruselas, NCOS, 1994, y *Tras los pasos perdidos de la guerra sucia*, Bruselas, NCOS, 1995.

El acuerdo gobierno-M-19 incluía el establecimiento de reformas políticas y sociales en el país, pero el Congreso las obstaculizó porque rechazaba sus aspectos fundamentales, lo cual puso en evidencia la incapacidad de las instituciones para impulsar los cambios. A decir de Pizarro —excomandante del M-19 y precandidato presidencial, poco antes de su asesinato en abril de 1990—, “adoptamos la paz a pesar de la mezquindad de la clase política, pues nuestra mayor victoria es haber vencido el miedo a dejar las armas para asumir los riesgos de la paz”.²⁷ El M-19 se mantuvo fiel a su compromiso y optó por aglutinar esfuerzos con otros sectores sociales para realizar una Asamblea Nacional Constituyente.

IV. Las guerrillas de los noventa: reinserción, diálogos y guerra

La década de los noventa se iniciaba con la transformación del M-19 en organización política legal, con el nombre de Alianza Democrática M-19 (AD M-19). Otros sectores de la insurgencia también se cuestionaban la lucha armada, puesto que el crecimiento militar no encontraba su correspondencia en el ámbito político. Esta autocrítica fue compartida por sectores mayoritarios del MAQL, el PRT y el EPL, organizaciones que finalmente secundaron la vía iniciada por el M-19.

La decisión de negociar y desarmarse fue motivada por la perspectiva de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el desgaste provocado por las diversas violencias, el fenómeno del narcotráfico, la debilidad política y militar de las organizaciones y su fraccionamiento interno, así como los cambios acaecidos en el contexto internacional.

Por el contrario, las FARC, el ELN y un sector del EPL no se sumaron a este proceso, ya que lo consideraron una traición a la causa revolucionaria. Reivindicaban el diálogo y la negociación en la

²⁷ Álvaro Villarraga, y Nelson Plazas, *Para reconstruir los sueños*, Bogotá, Progresar, 1995, p. 262.

medida que implicasen cambios políticos y socioeconómicos. La paz debía ser consecuencia de profundas reformas y la guerrilla su garante.

La ANC se convocó, durante la presidencia de César Gaviria Trujillo (1990-1994), gracias a una fuerte presión popular y frente a los recelos de la clase política tradicional opuesta a la instauración de cambios políticos y sociales. Para ello, mediante elección popular se designaron 70 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna y sentar las bases de un nuevo pacto político.

El 9 de diciembre de 1990, se celebraron las elecciones a la ANC. En ellas, la AD-M19 cosechó resultados muy positivos al obtener alrededor de 1 000 000 de votos²⁸ y 19 delegatarios. Este mismo día, el ejército bombardeaba y tomaba Casa Verde, sede del secretariado general de las FARC.

Reunida la ANC en 1991, el PRT entregó sus armas el día 26 de enero, el EPL el 1° de marzo y el MAQL el 31 de mayo. Una vez integrados a la vida civil, el PRT y el EPL, tras autodisolverse como organizaciones armadas, confluyeron en la AD M-19, mientras el MAQL apoyó a la Alianza Social Indígena (ASI).

En julio de 1991 concluyeron las sesiones de la ANC y con ello entró en vigor una nueva Constitución donde se adjudicaba un amplio reconocimiento a los derechos fundamentales, la descentralización político-administrativa, el carácter pluriétnico de la nación y la democracia participativa. De este modo se pretendió relegitimar al régimen político, así como establecer un nuevo marco de convivencia pacífica entre los colombianos.²⁹ No obstante, las medidas de fuerza aplicadas contra el secretariado de las FARC frustró la posibilidad de establecer un verdadero pacto político y social de alcance nacional que integrase realmente al conjunto de los colombianos, a la vez que presagiaba una salida

²⁸ En los comicios presidenciales de mayo de 1990, que otorgaron la máxima jefatura del Estado a César Gaviria, la AD-M19, tras el asesinato de su candidato Carlos Pizarro, había obtenido 750 000 votos, lo que representaba trece por ciento de los sufragios emitidos.

²⁹ Sobre la Constitución de 1991, véase, entre otros, G. Gallón, *Guerra y constituyente*, Bogotá, 1991, y *Revista Foro*, núm. 16, Bogotá, diciembre de 1991.

en falso de la crisis. Así se cerró la posibilidad de lograr un acuerdo con la principal organización guerrillera y con el ELN.

La respuesta de la insurgencia no se hizo esperar y en enero de 1991 lanzó una importante ofensiva cuyo peso fundamental recayó en las FARC, que dejaba abiertas las posibilidades del diálogo. A finales de abril de 1991, portavoces de las FARC, desde la Embajada de Venezuela en Bogotá, reclamaron el reinicio de las negociaciones. Por su parte, sectores de la sociedad civil y la ANC convocaron al gobierno y a la insurgencia a reabrir el diálogo.

A mediados de mayo, en Cravo Norte (Arauca), tuvo lugar un encuentro entre representantes de las FARC, del ELN y un sector del EPL y el gobierno. Entre junio y noviembre de 1991, se efectuaron rondas de conversaciones entre el régimen y la CGSB en Caracas (Venezuela) y, tras un paréntesis, se anudaron entre marzo y junio de 1992 en Tlaxcala (México).

A finales de septiembre de 1992, el gobierno descartó la posibilidad de continuar los diálogos. Después del fracaso de estos contactos se produjo una escalada del conflicto, y tras una acción de las FARC en Orito (Putumayo), el régimen decretó, en noviembre, el Estado de Comoción y la declaratoria de la Guerra Integral.

Mientras tanto, como prolongación de la política de negociación de “paz parcelada”³⁰ ya iniciada durante la administración anterior, se continuó el diálogo y la negociación con distintos sectores de organizaciones armadas aún activas. En virtud de ello se desmovilizaron, en marzo de 1992, los Comandos Ernesto Rojas, disidencia del EPL, y comenzaron los acuerdos con un grupo escindido de la UC-ELN, la Corriente de Renovación Socialista (CRS),³¹ que entregó las armas el 9 de abril de 1994. Este último proceso sirvió de estímulo para emprender negociaciones con di-

³⁰ Término acuñado por Eduardo Pizarro para referirse al modelo de negociación diseñado por el presidente Virgilio Barco, que impulsó la negociación por separado con cada una de las organizaciones guerrilleras.

³¹ Este grupo escindido de la UC-ELN en 1992, atrajo fundamentalmente a sectores urbanos de la Costa Atlántica (Sucre y Bolívar) y Medellín. Una buena parte de su militancia procedía del MIR-PATRIA LIBRE, organización que se había fusionado con el ELN en 1987. El 9 de abril de 1994, en el campamento de Flor del Monte (Sucre), cerca de 300 guerrilleros depusieron las armas.

versos grupos de Milicias Populares en Medellín. También en junio de 1994, el gobierno nacional suscribió un nuevo acuerdo de paz con otra pequeña disidencia del EPL, el Frente Francisco Garnica.

El balance global de los procesos de reinserción, que implicó a siete grupos armados y alrededor de 4000 hombres, es bastante complejo debido a la enorme fragmentación y heterogeneidad de las organizaciones que participaron en ellos. En términos generales, se redujeron a posibilitar la reincorporación a la vida política legal de los exguerrilleros y a ofrecerles algunas compensaciones económicas y sociales. Por el contrario, el proyecto de construir nuevas fuerzas políticas alternativas al bipartidismo, lo que inicialmente pudo representar la AD-M19, pronto mostró sus limitaciones. No sólo se produjo un desarme militar, sino también un desarme ideológico hasta el punto de desdibujar la identidad. Muchos líderes fueron absorbidos por el establecimiento o marginados de la actividad política.

En el caso de la AD-M19, renunció desde un principio a ser oposición y durante la administración Gaviria asumió el Ministerio de Salud. A decir de Antonio Navarro Wolff, dirigente máximo de la AD-M19, uno de los principales problemas de esta organización consistió en que “No supimos definir una personalidad política”.³² Además adoptó los vicios clientelistas y electoralistas de los partidos tradicionales. No obstante, en el haber del M-19 y de las otras organizaciones desmovilizadas está la audacia de renunciar a las armas en un país donde hay tantos actores violentos y de conseguir vínculos, aunque coyunturalmente, con un importante sector de la opinión pública nacional.

Un caso muy peculiar de la exacerbación de la violencia se ha presentado en la región bananera de Urabá, donde además de la confrontación militar guerrilla-ejército y de la fuerte presencia paramilitar se registra un conflicto entre sectores desmovilizados del EPL—ahora movimiento Esperanza, Paz y Libertad—, enfrentados a sus antiguos compañeros de organización aún alzados en

³² Entrevista con Navarro Wolff, “¿Qué pasó con la AD M-19?”, en *Revista Foro*, núm. 24, Bogotá, 1994, p. 57-62.

armas y el V frente de las FARC. La pugna responde a una lucha por el control político y sindical de la región en una guerra abierta cuyas víctimas principales son militantes y simpatizantes de Esperanza, Paz y Libertad y del PCC.³³ El paramilitarismo ha sacado provecho de esta situación de canibalismo político para ampliar su área de influencia y control territorial.

Las guerrillas hoy

Los diversos procesos de negociación permitieron desmovilizar a diversos grupos; sin embargo la insurgencia sigue plenamente activa e incluso ha intensificado su operatividad. Las FARC y el ELN son las dos organizaciones más importantes, aunque hay otros grupos menores como sectores del EPL, el Comando Jaime Bateman Cayón y pequeñas organizaciones con reivindicaciones étnicas, además de pequeños grupos de extrema izquierda que esporádicamente realizan actividades de proselitismo armado y organizaciones de milicias tanto urbanas como rurales, algunas de ellas dirigidas por las FARC, como las denominadas Milicias Bolivarianas, y otras orientadas por el ELN.

Las guerrillas colombianas han registrado un crecimiento constante. Se estima que las FARC y el ELN cuentan con un pie de fuerza no inferior a los 13 000 hombres en armas. No sólo se trata de fuerzas numerosas y en constante aumento, sino además en permanente expansión territorial en las esferas regional y municipal. Actualmente hay cerca de 100 frentes guerrilleros,³⁴ que operan

³³ Esta conflictiva situación característica de Urabá se superpone a una disputa histórica. En esta región donde actúan el PCC y el PC de C-ML, así como las FARC y el EPL, las contradicciones políticas entre unas y otras organizaciones se resolvieron con las armas, en especial a partir de 1978, cuando un grupo de combatientes desertó del V frente de las FARC y creó los Núcleos Consecuentes Marxistas-Leninistas, que se integraron posteriormente, bajo la dirección de Bernardo Gutiérrez, al EPL. La vinculación de ambas organizaciones a la CGSB terminó por limar asperezas; pero, después de la desmovilización de un sector del EPL, el conflicto se recrudeció y afectó a las organizaciones políticas afines.

³⁴ Los frentes guerrilleros corresponden a estructuras militares guerrilleras distribuidas en áreas de influencia política y militar de cada organización insurgente.

en más de la mitad de los 1 100 municipios colombianos. Esta influencia no se traduce automáticamente en control territorial, pero significa que en dichas áreas las guerrillas constituyen un actor político y militar de primer orden, en algunos casos superior, incluso, a la fuerza gubernamental. También es notable su desarrollo operativo, expresado en la capacidad de concentrar y dispersar fuerzas para acciones ofensivas-defensivas y en la modernización de su infraestructura logística y de comunicaciones.

Las organizaciones alzadas en armas son fuerzas básicamente rurales, tanto por su composición social como por el escenario principal en que actúan e incluso por su cosmovisión; este ruralismo es más marcado aun en las FARC. Tal hecho, en un país predominantemente urbano, plantea algunas paradojas:

Por un lado ha permitido su fortalecimiento militar, pero su protagonismo político en el escenario nacional ha sido muy inferior a lo que cabría esperar de un movimiento armado de las dimensiones señaladas. Su proyecto político, por el momento, no ha sido capaz de cautivar a las grandes mayorías y ha carecido de propuestas claras e inmediatas de alcance nacional frente a los graves problemas del país.

Por otra parte, cabe señalar que actúan predominantemente en áreas en gran medida marginales, pero que han adquirido un peso esencial en la economía del país por su influencia en zonas de extracción de recursos naturales como el gas y el petróleo, de agroindustria e incluso de cultivos ilícitos y de elaboración de narcóticos. Es previsible que aumente la importancia de estas regiones, por lo cual cabe augurar que en ese ruralismo, fuente de muchas de sus debilidades, puede estar también la base de su futuro crecimiento político y militar.

La insurgencia cuenta además con frentes urbanos.³⁵ A pesar de que el escenario fundamental de la guerra de guerrillas es el rural, no significa que la ciudad y los núcleos urbanos estén totalmente excluidos como campo de operaciones y de actividad e influencia

³⁵ En Colombia, las guerrillas urbanas no han logrado desarrollarse. Los intentos más serios para hacerlo los protagonizó en su primera etapa el M-19, aunque también otras organizaciones, en distintos momentos, realizaron esfuerzos en este mismo sentido.

política y militar. Las fuerzas urbanas esporádicamente realizan acciones para procurarse recursos financieros y de propaganda. Esta menor influencia guerrillera en la ciudad no es tan sólo fruto de una decisión política, pues depende también de otros factores como el mayor control estatal y el menor protagonismo político de los rebeldes. De este modo, su interlocución con el país se ve mermada porque su escenario de proyección y acción se circunscribe básicamente a la esfera local y municipal de áreas rurales.

La táctica impulsada por el movimiento insurgente tiene como objetivo inmediato ampliar su influencia y poder en la esfera local y municipal dentro de una estrategia de extenderse progresiva y lentamente como una mancha de aceite.

En la lógica de las guerrillas, la guerra se subordina a un proyecto ideológico, pero se carece de una sólida proyección política, lo que favorece, en consecuencia, cierta militarización de las propuestas, situación paradójicamente reforzada por la guerra sucia y el paramilitarismo que ha eliminado, y elimina, a quienes intentan impulsar proyectos políticos alternativos y que de alguna manera podrían cumplir esa función de intermediación política.³⁶

A grandes rasgos la situación actual del movimiento guerrillero es la siguiente:

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyo máximo comandante es Manuel Marulanda Vélez, son la guerrilla más numerosa y con mayor poder militar. Actualmente podrían estar integradas por más de 9 000 combatientes. Su proyecto armado tiende a consolidarse, cuenta con más de 60 frentes distribuidos en todo el país, aunque su presencia más consolidada se encuentra en la Cordillera Oriental y el sur de los Llanos Orientales. Ejerce influencia en no menos de 500 municipios. Mantiene una estructura de mando muy jerarqui-

³⁶ La experiencia de la Unión Patriótica, partido político que en menos de diez años ha visto caer asesinadas en sus filas a más de 2 500 personas —incluidos dos candidatos presidenciales, senadores, representantes a la cámara, diputados departamentales, alcaldes, concejales—, en lo que ha venido a definirse como auténtico “genocidio político”, pone en evidencia las nulas garantías imperantes en Colombia para el desarrollo de una oposición política democrática.

zada y una gran disciplina interna propia de un ejército. Históricamente ha sido el grupo cuya dirección ha sido menos castigada.

Desde su fundación ha compartido con el PCC un mismo proyecto de sociedad, pero se trata de dos organizaciones diferenciadas hasta por sus propias estructuras. Con el fin de evitar el genocidio sufrido por la UP, las FARC actualmente se proponen impulsar un proyecto organizativo alternativo de carácter clandestino.

Respecto a los supuestos vínculos de esta organización con el narcotráfico —fenómeno que impregna la economía, la política y la sociedad colombiana—, cabe señalar que desde el gobierno se hacen esfuerzos por difundir la imagen de la insurgencia como un cártel más, con el objeto de desacreditarla y deslegitimarla, recibir respaldo y apoyo internacional para la lucha contrainsurgente e intentar exonerarse de su propia responsabilidad. La dirección de las FARC-EP niega estos nexos y a la vez afirma que el narcotráfico no tiene defensa ni ética ni moral ni política. No obstante, el poder del narcotráfico es evidente, sobre todo en zonas dedicadas a cultivos ilícitos, localizadas en áreas donde las FARC tienen influencia. De igual modo, una buena parte de su base social está constituida por pequeño campesinado que en gran medida trabaja en ellos.³⁷ En las regiones donde hay tales cultivos y algunos frentes de las FARC, se ha señalado reiteradamente el cobro de “impuestos” —también denominado gramaje— a quienes se dedican al ilícito negocio.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), dirigido por el exsacerdote de origen español Manuel Pérez, es en realidad una confederación de grupos y columnas estructurada como movimiento político-militar. Está integrado por una cifra superior a los 3 000 guerrilleros, por más de 30 frentes y actúa en no menos de 250 municipios, principalmente del nororiente colombiano.

Este grupo realiza un trabajo político sólido en distintos movimientos cívicos y organizaciones sociales surgidas en barrios po-

³⁷ La respuesta represiva del Estado a las marchas campesinas de agosto y septiembre de 1996 —en el Putumayo, Guaviare, Casanare y Caquetá—, que reivindicaban la búsqueda de alternativas diferentes a la fumigación con glifosfato, refuerzan la legitimidad de la insurgencia en estas regiones.

bres de las grandes ciudades, así como entre el campesinado de algunos departamentos. Insiste en la liberación nacional frente al imperialismo y por ello exige nacionalizar los recursos naturales, esencialmente el petróleo. Responde a un planteamiento ideológico tercermundista muy penetrado por elementos de la Teología de la Liberación y del Marxismo-Leninismo. Una parte importante de su financiamiento proviene de la extorsión a las grandes compañías petroleras, pues de ellas obtiene importantes recursos. El Frente Domingo Laín, asentado en el Departamento de Arauca, es el que cuenta con mayor capacidad para recaudar fondos y el más reacio a una salida negociada. Es de destacar el grado de respeto y tolerancia demostrado por el ELN frente a su sector escindido y desmovilizado, la Corriente de Renovación Socialista, comportamiento nada frecuente en la insurgencia colombiana.

En varias ocasiones, el ELN se ha pronunciado en favor de una salida negociada, algo impensable en la década pasada. Francisco Galán, segundo en el mando de esa organización, se encuentra detenido en la actualidad y actúa en la cárcel como interlocutor frente al gobierno.

En su tercera y última Conferencia Nacional celebrada en 1996, el ELN ha insistido en la necesaria unidad interna de organización y en la búsqueda de la cohesión con el movimiento guerrillero. Este énfasis responde al riesgo de fraccionamiento interno, dado su carácter de auténtica federación de grupos, y a su propia situación de inferioridad militar respecto a las FARC. Recientemente ha planteado una negociación parcial sobre el tema petrolero y ha hecho suya la bandera de la humanización del conflicto mediante el respeto al Derecho Internacional Humanitario.³⁸

El Ejército Popular de Liberación (EPL), brazo armado del PC-ml, que desde su división en 1990 vivió un proceso de revitalización en el noroeste colombiano, posteriormente sufrió, tras pro-

³⁸ Pronunciamiento del ELN enviado a la Asamblea por la Paz, "Petróleo: paz y progreso para la nación", organizada por la Unión Sindical Obrera (USO) en Bogotá a finales de agosto de 1996.

gresivos golpes, deserciones y desmembramientos, una profunda crisis que lo ha colocado al borde de la extinción.

Su política de inflexibilidad frente a sus antiguos compañeros de armas ha sido notable y es responsable del asesinato de numerosos exguerrilleros. Su anterior crecimiento acelerado quizá no fuese ajeno a un proceso de descomposición como organización revolucionaria y a cierta tendencia a la bandolerización denunciada en numerosas ocasiones. Incluso su pertenencia a la CGSB llegó a ser cuestionada por las otras organizaciones guerrilleras. Su máximo dirigente, Francisco Caraballo, se encuentra encarcelado y muestra actualmente mayor flexibilidad, pues incluso ha lanzado una propuesta de negociación.

El Movimiento Bateman Cayón —pequeño grupo guerrillero disidente del M-19 ubicado en el norte caucano, Valle, y con actividad esporádica en el occidente del Tolima—, mantiene propuestas originales: habla de tregua pero no de entrega de armas ni de reinserción; plantea reformas sociales y simultáneamente defiende el desarrollo de la Constitución e insiste en el aspecto local. Para atraer a la opinión pública, ha realizado distintas acciones de propaganda armada, pero desde diciembre de 1995 ha iniciado un proceso de distensión por desgracia frenado a mediados de 1996. Tras la muerte de Alonso, uno de sus fundadores y principal ideólogo, se sumió en una profunda crisis, agudizada por el hecho de que su área de actividad es un territorio dominado por las FARC.

Guerra y negociación durante el gobierno de Samper

Al llegar Ernesto Samper a la presidencia hubo expectativas favorables para iniciar un diálogo que forjara una salida política negociada al conflicto armado. En su discurso de toma de posesión, el 7 de agosto de 1994, usó un lenguaje tan conciliador como ambiguo; anunció que la paz sería su política de Estado y planteó una propuesta novedosa: “Diálogos en medio de la guerra”. Esta posición original y realista tuvo buena acogida de amplios sectores de la población e incluso de la propia guerrilla. Sin embargo,

en ese mismo discurso llamó a las Fuerzas Armadas a acentuar su actividad contra la subversión pues —aseguró entonces— la fuerza era una condición indispensable para el “diálogo útil”.³⁹

Días después, el Ministro de Defensa, Fernando Botero, anunció la creación de las Cooperativas de Seguridad en las áreas rurales, lo que implícitamente era un cheque en blanco para legalizar los grupos paramilitares. La política presidencial sobre la paz y la guerra nacía así con una gran ambigüedad y planteaba serias dudas sobre su viabilidad.

El presidente nombró a un Alto Comisionado de Paz con rango ministerial. A mediados de 1995 se produjo un primer intento de acercamiento entre la CGSB y el gobierno, respaldado por el régimen de Costa Rica. Las FARC propusieron desmilitarizar el área rural de la Uribe como garantía para iniciar la negociación. En junio de 1995, en un memorando interno, el comandante del ejército Harold Bedoya se opuso al diálogo. Días después, las posibilidades de acercamiento y distensión se diluyeron, al no llegarse a establecerse un clima mínimo de mutua confianza; al mismo tiempo, se produjo la renuncia del Alto Comisionado de Paz, Carlos Holmes Trujillo.

La presidencia de Ernesto Samper se ha empañado por el escándalo debido al supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero del narcotráfico, lo que se ha traducido en una profunda crisis de legitimidad y de gobernabilidad.⁴⁰ Ésta se ha agravado por la presión de Estados Unidos, cuyo embajador en Bogotá, Myles Frechette, ha llegado a calificar a Colombia de “narcodemocracia”.

El mandatario, atado de pies y manos debido a las graves acusaciones que pesan en su contra, ha intentado mantenerse en la presidencia a cualquier precio. No ha dudado en apoyarse en los

³⁹ La lógica de este planteamiento alienta una escalada del conflicto y una mayor militarización.

⁴⁰ Las acusaciones contra el presidente Samper, la renuncia y el posterior encarcelamiento de su ministro de Defensa, Fernando Botero, director de su campaña electoral, y el procesamiento judicial de algunos congresistas son muestras del alcance de la crisis política.

sectores más duros de las Fuerzas Armadas, lo que se manifiesta en el nombramiento del general Harold Bedoya —identificado con las tendencias más represivas y destacado adversario de la solución negociada— como comandante del ejército y, más tarde, comandante de las Fuerzas Armadas. De este modo, el poder político y de maniobra de los militares ha crecido de forma desmesurada. La política real de Samper frente al conflicto interno ha sido netamente militarista, lo cual ha dado al traste, hasta el momento, con la posibilidad de una negociación con la insurgencia.

Después del fracaso de los contactos iniciados con la CGSB, el gobierno acogió con agrado la disposición del Movimiento Bateman Cayón de negociar, ya que le permitió, por un tiempo, seguir enarbolando la bandera de la paz. En un país tan azotado por la violencia, mantener diálogos con algún grupo guerrillero es una forma de legitimarse y ampliar apoyos.⁴¹ Empero, tras el bloqueo de los diálogos sostenidos con el movimiento Jaime Bateman a mediados de 1996, no hay una política gubernamental de paz ni mucho menos una política de Estado en esa dirección.

V. ¿Hacia dónde camina el conflicto?

Desde mediados de 1996, en el país se han producido hechos tendientes a agudizar la polarización armada. El gobierno, el Congreso y el ejército, así como sectores gremiales, han profundizado en las políticas de mano dura, que propugnan una contrarreforma constitucional, la reestructuración de las fuerzas armadas y una mayor actividad contrainsurgente, todo ello en aras de obtener a corto plazo una victoria militar sobre la insurgencia.⁴² Para

⁴¹ Colombia ostenta el triste título de ser el país más violento del mundo con una tasa anual de 88 muertos por cada 100 000 habitantes y una cifra absoluta de 35 000 muertos anuales.

⁴² La autonomía militar para establecer el orden público, la facultad permanente de imponer el estado de sitio (estado de conmoción interior, según la nueva Constitución) y la deliberada identificación entre protesta social y subversión se traducen en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y en una crisis permanente del estado de derecho.

ello, el Estado colombiano dispone de unas fuerzas armadas experimentadas, que cuentan en su haber con una trayectoria de más de tres décadas de lucha contrainsurgente,⁴³ un aparato logístico en permanente renovación, un presupuesto en constante ascenso y un asesoramiento militar externo, principalmente de estadounidenses, además de la alianza con el paramilitarismo.

Durante agosto y septiembre de 1996, la insurgencia desplegó una fuerte ofensiva militar con la que obtuvo importantes éxitos militares y políticos.⁴⁴ Con ella el movimiento guerrillero —y en concreto las FARC— ha dado muestras de su capacidad de combate y de estar cumpliendo un plan estratégico de largo alcance cuyas etapas desarrolla con éxito. La insurgencia cuenta en su favor con factores como un medio geográfico extenso, montañoso y selvático, donde la tecnología militar tropieza con enormes limitaciones; una importante base social en amplias zonas campesinas del país alimentadas por las condiciones socioeconómicas de extrema inequidad y por complejos problemas sociales, y una gran capacidad técnico-operativa capaz de poner en jaque a las Fuerzas Armadas, además de una larga tradición de lucha guerrillera enriquecida durante generaciones.

A pesar de estos factores propicios para la continuidad y el desarrollo del combate, ni la guerrilla ni el ejército están en capacidad de derrotar a su adversario, situación definida por algunos analistas como “empate militar negativo” y por otros como “empate estratégico negativo”.

Las guerrillas se encuentran muy lejos de tomar el poder, no poseen territorios liberados, no pueden actuar aún como interlocutores políticos firmes y carecen de unidad real; además, su proyecto no cuenta con el suficiente apoyo de las masas.

⁴³ El ejército colombiano cuenta con más de 140 000 efectivos, 20 000 de los cuales son soldados profesionales; además, la Policía Nacional está integrada por 94 000 agentes.

⁴⁴ La toma de poblaciones en diversos departamentos, la paralización de las vías de comunicación en medio país mediante un paro armado y la ocupación de la base del ejército de las Delicias (Departamento de Putumayo), por las FARC, en la cual éstas capturaron a 67 soldados.

El Estado, por su parte, no está en capacidad de contener el crecimiento de la guerrilla. La corrupción, el desprestigio y la pérdida de legitimidad de la clase política, del gobierno y de las Fuerzas Armadas son tan grandes que no suscitan ninguna credibilidad. Los cuerpos castrenses succionan grandes recursos, están implicados en casos de narcotráfico y han demostrado una evidente falta de eficacia.

Las posibilidades de iniciar negociaciones durante la presidencia Samper no son muy grandes. Con un gobierno débil y un mandatario tan cuestionado nacional e internacionalmente, por sospecha de corrupción y de vínculos con el narcotráfico, no parece haber condiciones para comenzar un diálogo serio.

Por lo demás, para que un proceso de negociación avance y fructifique las partes en conflicto deben ser conscientes de tener más cuestiones que ganar en la mesa de negociaciones que en el “campo de batalla”. La guerrilla no ha agotado sus posibilidades de expansión y crecimiento; por su parte, el Estado pretende dialogar con una guerrilla debilitada política y militarmente con el objeto de ceder el menor número posible de concesiones en las eventuales negociaciones.

La guerra se presenta así como un padecimiento crónico cuya resolución en el plano militar no se vislumbra ni a corto ni medio ni a largo plazos. Parece imponerse la lógica de la guerra, la cual no excluye que mientras más intenso resulte el conflicto más numerosas sean las voces en favor de una salida política y más imperiosa tal solución negociada.

El peso de la guerra sobre el conjunto de la economía del país llega a 3.4 por ciento del PIB, el coste en vidas humanas y el grado de sufrimiento de la población no cesan de aumentar, el cansancio y el hastío de la población civil es patente frente a una situación donde ella es la principal víctima.

Distintos sectores de la sociedad civil —empresarios, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, movimientos sociales, sectores de los partidos políticos— elevan reclamos en favor de la paz. De hecho se han abierto algunos canales de comunicación entre representantes de las FARC y una Comisión de Conciliación

Nacional presidida por el excanciller Augusto Ramírez Ocampo e integrada por diversos sectores de la sociedad colombiana gracias a la intermediación del gobierno costarricense.

El papel que corresponde desempeñar a la sociedad civil en la búsqueda de la paz es esencial. No obstante, la misma polarización del conflicto tiende a cerrar los espacios para los sectores democráticos que apuestan por una salida civilista.

Para concluir, las organizaciones guerrilleras, aunque predominantemente rurales, son fuerzas en constante expansión y con una notable influencia en los municipios. No se plantean tomar el poder de inmediato sino el desarrollo de un plan estratégico político y militar para consolidarse. En el panorama colombiano, constituyen la insurgencia fuerzas armadas de oposición al régimen social y político que actúan por motivaciones políticas. Del desenlace del conflicto depende que se transformen en un ejército insurgente con capacidad de definición militar y en un nuevo movimiento político del país. Se han mostrado partidarias de una solución política negociada al conflicto interno, para lo cual han lanzado propuestas de diálogo y acuerdo.

De parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas, se observa un fortalecimiento de las tendencias más autoritarias. En estas condiciones, es necesario iniciar una “política de Estado” sincera y eficaz encaminada a solucionar por la vía negociada un conflicto cuya principal víctima es la población civil.

El desenlace final del antagonismo en el plano político y militar es aún incierto. Mientras tanto, el respeto de los derechos humanos y la humanización del conflicto son exigencias perentorias.

Siglas empleadas

AD M-19: Alianza Democrática Movimiento 19 de Abril.

ANAPO: Alianza Nacional Popular de Oposición.

ANC: Asamblea Nacional Constituyente.

ASI: Alianza Social Indígena.

CGSB: Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.

CNG: Coordinadora Nacional Guerrillera.
CRS: Corriente de Renovación Socialista.
ELN: Ejército de Liberación Nacional.
EPL: Ejército Popular de Liberación.
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
JUCO: Juventud Comunista.
LASO: Latin American Security Operation.
MAQL: Movimiento Armado Quintín Lame.
MIR-PL: Movimiento de Izquierda Revolucionaria "Patria Libre".
M-19: Movimiento 19 de abril.
MRL: Movimiento Revolucionario Liberal.
PCC: Partido Comunista Colombiano.
PC de C-ml: Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista).
PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética.
PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores.
UP: Unión Patriótica.
USO: Unión Sindical Obrera.

Bibliografía comentada

Alape, Arturo, *La paz, la violencia: testigos de excepción*, Bogotá, Planeta, 1985.

Reconstrucción, mediante numerosas entrevistas, de los hechos más destacados desde 1950 a 1984 relativos a la violencia y sus orígenes, al surgimiento de la guerrilla, a los acuerdos gobierno-alzados en armas, las treguas, amnistías y pacificaciones.

Arenas, Jacobo, *Cese el fuego. Una historia política de las FARC*, Bogotá, Tercer Mundo, 1985.

Balance histórico del secretario político de la más antigua organización guerrillera de América latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde su fundación hasta la firma de la tregua durante la administración Betancur.

_____, *Correspondencia secreta del proceso de paz*, SL, La Abeja Negra, 1989.

- Recopilación de cartas, notas y comentarios realizada por Jacobo Arenas, secretario político de las FARC, sobre el proceso de negociación desde el establecimiento de la Comisión de Paz en 1983 hasta 1987.
- Behar, Olga, *Las guerras de la paz*, Bogotá, Planeta, 1990.
 Conjunto de entrevistas por medio de las cuales se efectúa un repaso histórico de la guerrillas colombianas desde su fundación hasta la toma del Palacio de Justicia, con especial atención al proceso de negociación.
- Bejarano, Jesús Antonio, *Una agenda para la paz*, Bogotá, Tercer Mundo, 1995.
 Aborda el problema de construir la paz en Colombia e insiste en los diálogos de Caracas. Incluye un estudio comparativo de los procesos de negociación de Colombia, El Salvador y Guatemala.
- Calvo, Fabiola, *EPL: diez hombres, un ejército, una historia*, Bogotá, ECOE, 1985.
 Libro sobre el surgimiento del Ejército Popular de Liberación, brazo armado del PC de C-ml, hasta la firma de la tregua y su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Contiene interesantes entrevistas con sus principales dirigentes.
- Gallón, Gustavo, *Derechos humanos y conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Comisión Andina de Juristas, 1991.
 Aporta elementos para elaborar una tipología de las guerrillas colombianas. Insiste en el aspecto geográfico donde se combinan territorio, población y proyecto estratégico.
- García Durán, Mauricio, *Procesos de paz. De la Uribe a Tlaxcala*, Bogotá, CINEP, 1992.
 Examen de las negociaciones del gobierno con los alzados en armas entre 1986 y 1991, exploración de sus mecanismos y análisis de la posición de los diferentes actores armados frente a los acuerdos.
- Guzmán Campos, G., O. Fals Borda y E. Umaña Luna, *La violencia en Colombia: estudio de un proceso social*, 2 vols., Bogotá, Carlos Valencia, 1980.
 Estudio clásico y esencial para comprender el periodo conocido como la "violencia" y sus expresiones regionales. Compagina la perspectiva analítica y descriptiva. Incluye un interesante material fotográfico y numerosos mapas.

Harnecker, Martha, *Unidad que multiplica. Entrevista a dirigentes máximos de la Unión Camilista E.L.N.*, Quito, 1988.

Serie de entrevistas con los principales dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, mediante las cuales se refleja el perfil político militar de esta organización.

_____, *Combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Suramérica, 1988.

Entrevista con el exsecretario general del Partido Comunista Colombiano sobre un fenómeno tan polémico como lo es la combinación de todas las formas de lucha y el análisis de ella como proceso histórico.

Molano, Alfredo, "Violencia y colonización", en *Revista Foro*, núm. 6, Bogotá, 1988, p. 25-37.

Establece la relación entre procesos de colonización agraria y el fenómeno de la violencia.

Landazábal Reyes, Fernando, *El precio de la paz*, Bogotá, Planeta, 1985.

Análisis desde la perspectiva de un general retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia con una larga trayectoria de lucha contra-insurgente sobre el conflicto interno y las posibilidades de solucionarlo.

Lara, Patricia, *Siembra vientos y recogerás tempestades*, 2a. ed., Bogotá, Planeta, 1991.

Serie de entrevistas con los principales dirigentes del M-19: Jaime Bateman, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Navarro Wolff. Se brinda especial atención a las primeras etapas del movimiento.

López de la Roche, Fabio, *Izquierdas y cultura política. ¿Oposición o alternativa?*, Bogotá, CINEP, 1994.

Estudio del movimiento insurgente desde la perspectiva de la cultura política, a partir del contexto formativo de las izquierdas de los años sesenta y setenta y análisis de la evolución ideológica del Partido Comunista, el EPL y el M-19.

Pizarro, Carlos, *Guerra a la guerra*, Bogotá, Tiempo Presente, 1988.

Entrevista con el comandante del M-19 Carlos Pizarro, quien habla de la concepción política del movimiento, de su líder Jaime Bateman, del desarrollo de operativos más destacados y de la problemática de la negociación.

Pizarro, Eduardo, "Entre la guerra y la paz. Puntos de vista sobre la crisis colombiana de los años ochenta", en *Controversia*, núm. 141, Bogotá, CINEP, 1987.

Estudio sobre las guerrillas colombianas en que se considera su origen y los factores internos y externos que intervienen, las etapas que atraviesan, los distintos grupos y el proceso de reconciliación nacional.

_____, *Las FARC: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Tercer Mundo-IEPRI, 1991.

Historia de la guerrilla comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde su nacimiento como autodefensa hasta que se propuso combinar todas las formas de lucha.

_____, *Insurgencia sin revolución*, Bogotá, Tercer Mundo-IEPRI, 1996.

Crítica dirigida a la guerrilla colombiana que ha fracasado en su intento revolucionario. Se utiliza una perspectiva comparada para analizar la insurgencia crónica colombiana, frustrada en su intento revolucionario. Incluye un sugerente marco analítico para estudiar la violencia política.

Ramírez, Socorro y Luis A. Restrepo, *Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)*, CINEP-Siglo XXI, 1989.

Radiografía y evaluación del proceso de paz registrado en la presidencia de Betancur, con un análisis de sus contradicciones internas, un estudio de las motivaciones de los actores y un examen de la lógica interna. Se destacan las circunstancias que condujeron al deterioro final del intento pacificador.

Ramírez Tobón, William, *Estado, violencia y democracia*, Bogotá, Tercer Mundo-IEPRI, 1990.

Analiza la capacidad de representación del Estado colombiano, sus efectos en el régimen, la relación entre democracia y violencia y el proceso de paz con el M-19. Igualmente, evalúa el proceso de paz de la administración Barco y los perfiles políticos de las guerrillas (M-19, FARC, EPL y ELN).

Sánchez Gonzalo, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, Bogotá, El Áncora, 1994.

A lo largo de cinco ensayos se intenta esclarecer el tipo de relaciones y vínculos establecidos entre guerra y política en el desarrollo histórico de Colombia hasta el presente.

Sánchez, Gonzalo y Ricardo Peñaranda [comps.], *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1986.

Recopilación de artículos fundamentales para estudiar la “violencia”. Incluye algunos trabajos sobre diversas formas de lucha insurreccional desde los años sesenta a nuestros días.

Villarraga Álvaro y Nelson Plazas, *Para reconstruir los sueños. Una historia del EPL*, Bogotá, Fundación Cultura Democrática, 1994.

Estudio exhaustivo de los treinta años de existencia del Partido Comunista ML y del Ejército Popular de Liberación, desde sus orígenes hasta la fase de negociación y entrega de armas.

Villamizar Darío, *Aquel 19 será*, Bogotá, Planeta, 1995.

Historia completa del Movimiento 19 de Abril, M-19, desde su nacimiento a su desarme.

Cuadro 1 Organizaciones guerrilleras colombianas

	FARC	ELN	EPL	M-19	PRT⁴⁵/MIR-PL⁴⁶	MAQL
Año de fundación y procedencia	1964 Guerrillas comunistas y liberales, autodefensas campesinas influidas por el PCC.	1965 MRL, brigada José Antonio Galán. Grupos guevaristas y cristianos.	1967 Escisión del PCC, MRL.	1972 ANAPO y FARC	1974 Escisión PC de C-ml llamada Tendencia Marxista Leninista Maoísta (TMLM).	1984 Movimiento indígena y campesino en el departamento del Cauca.
Ideología	Influencia de la línea PCC (PCUS).	Guevarismo, cristianismo revolucionario y marxismo-leninismo.	Maoísmo (pro-PC Chino), hasta 1980. Línea pro-Albania hasta 1988.	Bolivarianismo-nacionalismo y populismo.	Maoísmo. Marxismo-Leninismo.	Indigenismo.
Relación político-militar	Organización militar. Estrategia FARC, PCC y todas las formas de lucha 1982 FARC-EP.	Organización político-militar. 1978 La guerra es el escenario principal. 1980 Lo político es prioritario. 1987 UC-ELN. Vinculo con organizaciones sociales de base.	Brazo armado PC de C-ml. Partido de vanguardia a la cabeza de un frente de masas y un ejército revolucionario.	Movimiento político-militar. Vinculación lucha armada-pueblo. Las armas como forma de presionar transformaciones democráticas y sociales.	Partido con estructura militar. Prioridad de lo político organizativo. La lucha armada subordinada al partido.	Movimiento armado vinculado con las organizaciones sociales indígenas (CRIC).

⁴⁵ Fracción de PC de C-ml denominada Tendencia Marxista Maoísta (TMLM) que después de 1984 se convierte en el PRT.

⁴⁶ Un sector escindido de la TMLM, junto con otros, funda en 1982 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria "Patria Libre". En 1987, éste se integra al ELN.

FARC **ELN** **EPL** **M-19** **PRT/MIR-PL** **MAQL**

<p>La lucha armada revolucionaria</p>	<p>Inicios de autodefensa campesina que se transforma en guerrilla móvil. 1982 Bastión de construcción de un ejército revolucionario.</p>	<p>Foquismo. Guerra popular. Presión sobre las multinacionales.</p>	<p>De la guerra popular prolongada a la guerra popular insurreccional.</p>	<p>Inicia como guerrilla urbana. Después de 1980, construye ejército que liga la actividad armada urbana y rural.</p>	<p>Guerrilla urbana con proyección rural.</p>	<p>Autodefensa indígena y campesina.</p>
<p>La paz</p>	<p>La paz puede ser el resultado de un triunfo revolucionario o de profundas transformaciones sociales que hagan inviables las armas.</p>	<p>La única paz posible es el triunfo de la revolución y el socialismo.</p>	<p>Hasta 1989, la paz sólo era posible tras el triunfo revolucionario; luego pasa a ser fruto de acuerdos políticos y transformaciones sociales.</p>	<p>A partir de 1980, la paz sólo es posible mediante un acuerdo entre las partes con frontadas; de ahí la razón de ser de la flexibilidad con que asume la guerra.</p>	<p>En sus inicios paz igual a triunfo revolucionario; tras cambios en su interior y producto de un acuerdo político que posibilite transformaciones.</p>	<p>Garantías de seguridad para las organizaciones sociales indígenas. Cambios socioeconómicos para las comunidades indígenas.</p>
<p>Negociación</p>	<p>Tregua 1984-1988. Diálogos en Caracas. 1992 Diálogos en Tlaxcala.</p>	<p>No tregua. Diálogos en Caracas y Tlaxcala. 1992 Escisión de ccs que se desmoviliza en 1994.</p>	<p>Tregua 1984-1985. Negociación 1990. Desmovilización 1991. Un sector disidente continúa en armas.</p>	<p>Tregua 1984-1985. Negociación y desmovilización 1989-1990. Movimiento disidente. Jaime Bateman continúa en armas.</p>	<p>No tregua en 1984. Negociación y desmovilización en 1991.</p>	<p>No tregua en 1984. Negociación y desmovilización en 1991.</p>

Cuadro 2

Gobiernos entre 1978 y 1996: políticas de paz, negociaciones y diálogos

	Turbay (1978-1986)	Betancur (1982-1986)	Barco (1986-1990)	Gaviria (1990-1994)	Samper (1994)
Desarrollo del conflicto armado⁴⁷	<p>El M-19 toma la embajada de República Dominicana.</p> <p>Recomposición interna de la guerrilla.</p> <p>Surgimiento de nuevas fuerzas insurgentes.</p> <p>Estatuto de seguridad.</p> <p>Fuerte represión estatal (detenciones, torturas).</p> <p>Aparece el MAS en 1981.</p>	<p>Crecimiento de los grupos paramilitares.</p> <p>Desapariciones y asesinatos políticos.</p> <p>Violencias conexas al narcotráfico.</p> <p>El ELN mantiene su acción armada y, junto con el MUR-PL y el PRT, rechaza la tregua.</p> <p>Toma del Palacio de Justicia.</p> <p>Nacimiento de la CNG en 1985.</p>	<p>Narcoterrorismo.</p> <p>Incremento de la guerra sucia.</p> <p>Intensificación de los combates guerrilla-ejército.</p> <p>Atentados del ELN contra la infraestructura petrolera del país.</p> <p>Aparición de las milicias populares en las principales ciudades.</p> <p>1988 Ruptura de la tregua por las FARC.</p> <p>Asesinato de líderes políticos.</p> <p>Declaración de guerra al narcotráfico.</p> <p>Secuestro de Álvaro Gómez por el M-19.</p>	<p>Toma de la Casa Verde, sede del secretariado de las FARC.</p> <p>III Cumbre CGSB.</p> <p>Incremento de grupos paramilitares, así como de las masacres cometidas por ellos.</p> <p>Política de someter a justicia a los narcotraficantes.</p>	<p>Guerra integral.</p> <p>Creación de las cooperativas de seguridad.</p> <p>Intensificación del conflicto en Urabá.</p> <p>Multiplicación de frentes guerrilleros e intensificación de las acciones armadas.</p> <p>Mayor protagonismo del paramilitarismo en la guerra contraguerrillera.</p> <p>Desde su fundación en 1985, la UP ha sufrido más de 3 000 asesinatos.</p>

⁴⁷ Todas las administraciones han decretado el estado de sitio. En la nueva Constitución se prescribe el estado de conmoción interior.

Samper (1994)

Gaviria (1990-1994)

Barco (1986-1990)

Betancur (1982-1986)

Turbay (1978-1986)

<p>Política de paz del gobierno</p>	<p>Derrotar militarmente a la guerrilla.</p>	<p>Diálogo nacional. Amnistía. Comisión de paz. Oposición de los militares y fuerzas civiles al diálogo. Acuerdos de la Uribe con las FARC y nacimiento de UP. Elección popular de alcaldes.</p>	<p>Plan Nacional de Rehabilitación. Iniciativa para la paz de Virgilio Barco. Proyecto de reforma constitucional.</p>	<p>Diálogos con la CGSB en Caracas y Tlaxcala. Negociación con CRS. Negociación con las Milpas. Estrategia de diálogo y sometimiento a la justicia del narcotráfico. Intensificación de la presión militar sobre la guerrilla para ablandar sus exigencias políticas.</p>	<p>Aceptación del diálogo en medio del conflicto. Pérdida de interlocución política del presidente ante las acusaciones de corrupción.</p>
<p>Políticas de paz de las organizaciones guerrilleras</p>	<p>Propuesta del M-19 de amnistía, tregua bilateral y diálogo nacional.</p>	<p>Tregua bilateral gobierno-FARC, M-19, EPL y ADO.</p>	<p>1988 Ruptura de la tregua con las FARC. Negociación y desmovilización del M-19. Comienzo de negociaciones gobierno-EPL, PRT y MAQL.</p>	<p>Desmovilización del EPL, PRT y MAQL. La CGSB (FARC, ELN y un sector del EPL) rechaza el modelo negociador del gobierno. Intensificación de las acciones armadas para ganar terreno en la negociación. Desmovilización de la CRS.</p>	<p>Diálogo con el Movimiento Jaime Bateman Cayón. Contactos en Costa Rica de la CGSB con el gobierno.</p>

Fuente: elaboración propia con base en el artículo de Mauricio García (1992): "Guerra y paz con la guerrilla, de Turbay a Gaviria", en *Análisis*, núm. 65, Cinep, p. 55-63.

EL LENGUAJE DEL PODER Y EL PODER DEL LENGUAJE: LOS MIL Y UN DÍAS DEL ZAPATISMO

Ignacio Sosa

El alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y los acontecimientos que de él se derivaron plantean dos tipos de problemas. El primero comprende las causas que lo provocaron y los motivos de quienes optaron por la decisión límite de la rebelión. Este tipo de problemas se centra en los insurrectos, en sus valores, en sus normas, en su tradición. El segundo incluye tanto la desesperación de las comunidades indígenas y el abandono de su resignación y fatalismo, como su capacidad de acción; del mismo modo, abarca la cuestión de si los agentes de la modernidad pueden superar, sin recurrir a la violencia, el atraso y sus condicionantes.

La rebelión zapatista se produce en un momento y en un contexto donde, rotos los paradigmas que orientaron la convivencia de los mexicanos durante el último medio siglo, la sociedad se preguntaba hacia dónde y cómo ir, con qué ritmo y, sobre todas las cosas, quiénes se orientarían en esta nueva dirección y a quién o a quiénes se dejaría atrás.

La rebelión zapatista plantea en forma simultánea preguntas sobre cómo la sociedad mexicana concibe su pasado, su presente y su futuro. Si cada nuevo proyecto requiere una reestructuración del pasado, puede señalarse que, en el caso del proyecto modernizador de Carlos Salinas de Gortari, la visión se centró única y exclusivamente en lo que, hipotéticamente, México se convertiría una vez que se efectuaran los ajustes necesarios y se estableciera un nuevo convenio que regulara las relaciones comerciales

entre México y Estados Unidos. El ambiente que la administración de Salinas había logrado crear era el de una nación que abría una brecha entre las frustraciones de su ayer y las esperanzas de su mañana. Se confiaba en que, del mismo modo y a la misma velocidad que México se vinculara con Estados Unidos, se arrancaría el estigma del subdesarrollo y de las condiciones históricas que lo habían generado.

El centro de la discusión sobre el zapatismo radica menos en el momento insurreccional que en el proyecto de nación que se está construyendo. Una modernidad sin desigualdades entre los componentes de la sociedad. Una colectividad homogénea que, sin soslayar las diferencias entre sus miembros, establece claras reglas para la convivencia armónica entre sus distintos integrantes.

En los dos tipos de problemas enunciados se ponen de relieve los recursos democráticos empleados por el EZLN. El énfasis puesto en estos contenidos, y no en otros posibles, se destaca porque el zapatismo ha sido el único movimiento insurreccional que, permanentemente, ha dado cuenta de sus actos a la opinión pública. El diálogo en sus diferentes momentos ha sido el rasgo dominante. No sucedió así con otros movimientos insurreccionales en que las cuestiones ideológicas impuestas por la Guerra Fría obligaban a gobiernos e insurrectos a adoptar un discurso referido a otro contexto y a otra lucha. Tampoco sucedió así en otras experiencias centroamericanas donde la escalada militar del conflicto desencadenó sangrientas guerras civiles; en ellas, las armas, y no los argumentos, ocuparon un lugar central.

La salida negociada del conflicto insurreccional ocurre en un contexto dominado por el autoritarismo. Es bien sabido que, en las sociedades democráticas, conflicto y negociación representan un binomio indisoluble pero, en el caso de los regímenes autoritarios, constituyen por el contrario extremos antagónicos. En los países democráticos el conflicto forma parte natural del sistema; en cambio, en las sociedades autoritarias se identifica con el caos, la anarquía. Su aparición significa tragedia. En estas sociedades el conflicto se interpreta como un hecho externo y, por lo tanto, inexplicable.

Las salidas negociadas de los conflictos armados en el área circuncaribeña son experiencias novedosas, registradas en el contexto de las así llamadas transiciones a la democracia. Hasta hace unos lustros la represión era la fórmula aplicada sin restricción alguna; conflicto y represión, pues, fueron una constante en la vida política y en la existencia cotidiana de algunos países del área, particularmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En el caso del zapatismo destaca la rapidez con que se planteó y se aceptó, por ambas partes, gobierno y zapatismo, la salida negociada propuesta por la sociedad civil.

Los orígenes

La génesis del EZLN, como la de cualquier organización clandestina, está vedada para quienes no forman parte de su núcleo fundacional. Se mantiene en la memoria de sus miembros y, tal vez, en los archivos de los servicios de inteligencia —en nuestro medio, así se llama a quienes se ejercitan en la transcripción, acrílica, de las confesiones de los desertores y de los informes, muchas veces anónimos, que grupos interesados les hacen llegar. Se sabe, de cierto, que quienes ayudaron a formarlo realizaron en la zona un trabajo previo que les llevó diez años de esfuerzos. La fecha de fundación del EZLN es el 18 de noviembre de 1983.

Resulta paradójico que respecto al movimiento político más importante de los últimos años, sobre el cual se han pronunciado la mayoría de los analistas y los intelectuales mexicanos, se cuente con tan poca información. Poco, por no decir nada, se sabe de las personas que lo fundaron, sobre sus congresos —si los hubo—, reuniones, pugnas relativas a cuestiones estratégicas o concepciones ideológicas de los individuos o grupos que lo conformaron. Tampoco se conocen las publicaciones, si existieron, que permitan conocer el desarrollo de su pensamiento, de cómo éste fue evolucionando, de cómo y por qué abandonaron su dogmatismo. No se sabe nada sobre su programa o programas originales, así como tampoco la región o regiones donde actuaron antes.

Salvo un publicitado texto difundido, presumiblemente, por fuentes de inteligencia militar —las cuales, por la información que contienen, se basan en datos facilitados por un desertor—, el resto de lo que se conoce sobre la composición del EZLN lo han divulgado comunicados, posdatas y entrevistas del propio subcomandante Marcos.

Se ignora mucho sobre el complejo proceso requerido para que la dirigencia mestiza pudiera no sólo entrar en contacto, sino en comunicación, con las cuatro etnias habitantes de la región. Poco se sabe sobre el conflicto que debe haberse producido cuando se enfrentaron dos cosmovisiones distintas, la ladina y la indígena, dos maneras de percibir el tiempo y la velocidad y orientación de los cambios necesarios para eliminar la distancia geográfica e histórica que divide a los distintos pueblos componentes de la sociedad mexicana. También se desconocen los problemas y los ajustes derivados de los enfoques sobre el valor y la importancia del individuo y el significado actual y futuro de la comunidad indígena. Asimismo, nada se sabe de lo relativo al proceso de indoctrinamiento nacionalista de los cuadros del EZLN.

No se conoce tampoco la relación, si la hubo, entre los núcleos que organizaron y dieron su perfil actual al zapatismo y los grupos o partidos que realizaron intentos previos de organización indígena.

No se ha narrado la historia de aquellos jóvenes sensibles que en Chiapas, un siglo después, repitieron la experiencia *narodnik* rusa de ir al pueblo en busca de una respuesta que los ambientes ciudadanos no fueron capaces de ofrecer. Esa experiencia, que busca todavía un cronista, se registró en un escenario donde se mezclan varias lenguas y hombres de distintos rumbos. Los estudiosos la llaman la Nueva Babel y en ella se dieron cita visiones religiosas y milenaristas que dieron abrigo y protección a los desplazados de siempre. A los místicos les ofrecía un territorio para cumplir su misión de propagar el evangelio. A los románticos, un pueblo al cual redimir. A los idealistas, una oportunidad para ofrecer el sacrificio de sus propias vidas con el fin de que otros pudie-

ran vivir mejor. Junto a estas expresiones de la naturaleza humana, aparecieron cientos de aventureros, ahora llamados ingenieros, economistas, sociólogos y antropólogos, en busca de la riqueza natural y humana que contienen esos territorios. Éstos ofrecían maderas y recursos energéticos, para aprovecharlos se precisaban tecnologías novedosas y cuantiosas inversiones.

En ese escenario surgieron modernos complejos hidroeléctricos que, si bien transformaron el paisaje, no provocaron un cambio en el tejido social en que unos, los indígenas, buscaban tierra; otros, los oligarcas, conservar su riqueza; los de allá, propalar la palabra de la fe y proteger al indígena, y los de más allá, una causa social que les diera proyección política. Ellos y los zapatistas serán los protagonistas de una epopeya en la que México se descubre, a partir de 1994, con una deuda interna de quinientos años de explotación, más dramática y urgente de resolver que la deuda externa por la cual los pulidos funcionarios de la CEPAL exclamaron que la década de los ochenta había sido, para la América latina, una década perdida.

Los jóvenes que por oleadas se acercaron a Chiapas, desde la década de los años setenta, tenían visiones contradictorias sobre la sociedad que querían y el camino que seguirían para alcanzarla. Proponían a los indígenas de Chiapas una serie de cambios todos ellos en función de una demanda básica: la tierra. Por otra parte, la participación de la iglesia como fuerza constante, como única defensora que fue durante años de la expoliada población creó, asimismo, condiciones para entender y tratar de resolver el viejo conflicto.

Si bien los caminos propuestos por los distintos grupos fueron diferentes, el objetivo común, compartido con la iglesia, era el de organizar políticamente a aquellas poblaciones atomizadas cuyo único mecanismo de defensa, la comunidad, les había permitido supervivir.

Otro rasgo compartido por las diferentes oleadas fue la experiencia de comprobar la notable capacidad de la oligarquía para seguir conservando sus privilegios y no sólo eso, sino aumentar-

los mediante el control que ejercieron sobre los fondos federales destinados precisamente a beneficiar, en principio, a los expoliados indígenas.

La común indignación ante la injusticia fue otro rasgo compartido. Sin importar las motivaciones, surgieran éstas de la ideología o la religión, o fueran espontánea reacción humana, la injusticia que veían ante sus ojos les resultaba intolerable. Sin embargo, en todos estos esfuerzos la solución al problema era, por así decirlo, un producto exógeno a las comunidades.

A la tercera oleada de jóvenes le correspondió, hasta donde se sabe, articular y conciliar en forma conveniente las aspiraciones locales y regionales de la población indígena, con la visión que ellos, los jóvenes idealistas, tenían no sólo de la sociedad nacional, sino de la internacional.

Los mecanismos propuestos variaron en función de los intereses de cada grupo. En un caso, se propusieron formas de organización que encontrarían un aliado en el Estado; en otro, se consideró que la proletarianización campesina iniciaría el camino al socialismo; en un tercero, la enseña a seguir fue la anarco-zapatista de que la tierra es de quien la trabaja; y, por último, obra del EZLN, la transformación de la demanda de tierra en un movimiento ascensional que reclamara no sólo ésta, sino los derechos humanos todos.

Con el EZLN se añadieron dos elementos novedosos. El primero de ellos fue la pretensión de articular las reivindicaciones indígenas con las demandas nacionales de democratización y justicia social, y su orientación en contra de los clásicos procedimientos gubernamentales. El segundo, la vía de la guerra para iniciar el camino a la democracia.

El lenguaje político

El lenguaje político precede a los actos, los anuncia, les da sentido. Sin este código que ordena los acontecimientos, los jerarquiza, éstos se harían presentes en forma caótica, sin sentido. Con la aparición, el primero de enero de 1994, del Ejército Zapatista de

Liberación Nacional, el lenguaje político mexicano recuperó su significado básico referido a los problemas del mando y la obediencia, a las relaciones de igualdad que deben imperar entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, a las relaciones de desigualdad que realmente existen entre unos y otros, a la igualdad que ha de reinar entre todos los miembros de la sociedad y a las inocultables e injustificables desigualdades que en la realidad los separan.

El lenguaje del poder

El esfuerzo de presentar en forma sintética el discurso oficial puede resultar gratuito por ser bien conocido, pero debe intentarse por ser indispensable para entender el tipo de diálogo entre el gobierno y el EZLN.

El lenguaje de quienes detentan el poder consiste en una serie de aseveraciones que se sostienen a sí mismas y que no requieren de evidencia empírica ni de constatación alguna, aunque se las pretende fundamentadas en las experiencias de la sociedad. El conjunto de aseveraciones conforma un universo autocontenido y autosostenido que se despliega, avanza y retrocede, para adecuarse a cada nueva circunstancia.

Las aseveraciones articulan un discurso cerrado, autosuficiente, compuesto de axiomas, principios y valores. Estos componentes tienen la característica común de ser absolutos, atemporales, trascendentes. El conjunto de sus afirmaciones conforma un sistema circular porque la primera sostiene a la segunda, ésta a la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a la última; ésta, a su vez, se convierte en soporte de la primera. El sistema así constituido excluye dudas y críticas; éstas pertenecen a un universo ajeno porque en el sistema político vigente todo es certidumbre.

Las afirmaciones pueden desglosarse de la siguiente manera. La inicial, de la cual se desprenden todas, señala que al principio era el caos. Éste, históricamente hablando, corresponde a casi un siglo comprendido entre la guerra de Independencia y el fin de la

etapa armada de la Revolución de 1910. Antes de que el actual sistema político funcionase, de acuerdo con el lenguaje que se glosa, todo era anarquía. Realistas contra patriotas, liberales contra conservadores, nacionalistas contra entreguistas, capitalistas contra obreros y campesinos, etcétera.

La segunda aseveración, y la luz se hizo, describe el fin de la interminable guerra fratricida de la Revolución mexicana como consecuencia de la institucionalización de la figura del presidente. Ésta, de acuerdo con el mensaje autocontenido en el discurso político, era indispensable porque la sociedad mexicana requiere un líder. Los sucesivos líderes-presidentes, según el discurso aquí considerado, han guiado a la sociedad al más largo periodo de paz continua, a la estabilidad y al desarrollo del que se disfruta.

La tercera aseveración sostiene que el sistema presidencialista se autoperfecciona constantemente y que su desarrollo posibilitará la creación de un sistema democrático. Sólo al afinarse éste la democratización será posible. Esto es así porque la sociedad requiere un líder que prolongue la paz hasta hoy disfrutada, que consolide los logros del desarrollo alcanzado, para que el desarrollo se consolide y desemboque en la democracia que todos deseamos, etcétera.

El análisis de tal discurso muestra que de la figura del presidente se desprenden las explicaciones sobre los derroteros seguidos por el sistema político mexicano —en éste, la democracia está al final y no al principio de la organización política— y que la función del sistema político imperante es organizar y preparar a la sociedad para recibir la democracia y no a la inversa, como pudiera pensarse. De acuerdo con el discurso oficial, la democracia se deriva del gobernante y no a la inversa.

El presidente, alfa y omega del lenguaje político predominante en estas tierras, al ser la figura central, es intocable, pues se supone que en él descansa la estabilidad de la sociedad entera. Las críticas a su persona son descritas, por el código político del poder, como producto de intereses empeñados en conducir a la sociedad mexicana, siempre al borde del caos, a un nuevo periodo

de inestabilidad. Cualquier otra fórmula política distinta del presidencialismo equivale a desencadenar el caos.

La pieza fundamental del lenguaje y del sistema políticos mexicanos es el presidente. Éste es intérprete de los sentimientos de la nación, guía de la sociedad y líder del partido. Es fiel de la balanza en las pugnas interpartidarias y faro que ilumina la ruta segura en momentos de incertidumbre como los actuales.

El presidente, en todo el discurso político, equivale a orden y cualquier intento de desafiarlo equivale a desorden. En otras palabras, el presidencialismo o el caos es la enseña del sistema contra la que el EZLN se rebeló.

El segundo segmento del lenguaje y del sistema político es el partido, el cual se describe como el instrumento del que se vale el presidente para cumplir sus metas, organizar una población atomizada y desarticulada. El partido es la herramienta mediante la cual se organiza la sociedad.

Presidente y partido han creado a la sociedad, la han organizado, le han señalado metas y la han guiado en forma segura evitando peligros y asechanzas. La sociedad, en su estado actual, es producto de la sabiduría política del dúo dinámico representado por el Ejecutivo y el partido, su fiel aliado. Ambos están en la base del sistema, lo sostienen y son causa, no efecto, de su buen funcionamiento.

Presidente y partido son promotores, impulsores, de los cambios ocurridos en la sociedad desde su aparición en la década de los años treinta. Los cambios que han dado su perfil actual a la sociedad mexicana han sido obra exclusiva del líder, del guía. Cuando los cambios son promovidos y realizados por éste, y por su partido, la sociedad obtiene beneficios y su seguridad se incrementa. Por el contrario, cuando fuerzas ajenas proponen cambios o los realizan por sí mismas, entonces su sentido pasa de ser positivo a negativo y, en consecuencia, conducen al caos y a la inseguridad.

De la suma de constituyentes mencionados se infiere que presidente y partido hacen del mando autoritario una virtud, al igual que de la obediencia sin crítica, pues se parte del supuesto de que

la crítica sólo entorpecerá el ritmo de desarrollo, lo obstaculizará. La verticalidad del mando y la puntual obediencia son los ejes sobre los que gira todo el discurso político del poder imperante.

El poder del lenguaje

Sin los componentes mencionados en los párrafos anteriores, sin valorar el sentimiento de lealtad o de rechazo que han despertado en la sociedad, no es posible comprender los significados democráticos de la propuesta fundamental del zapatismo: mandar obedeciendo.

La insistencia de los zapatistas en su credo y en su vocación democrática y los múltiples ejemplos de su ejercicio democrático tienen la intención didáctica de demostrar a quienes no forman parte del Ejército Zapatista que éste representa en nuestro medio una experiencia de rechazo, en todos los órdenes, del autoritarismo y sus representantes.

El lenguaje del EZLN en su Declaración de la Selva Lacandona y sus posteriores comunicados se alejó del esoterismo imperante y de los tecnicismos en boga. Buscó como interlocutores no a los representantes del poder establecido, no a los distintos personeros del sistema político vigente, sino a los ciudadanos comunes, a la opinión pública. Fiel a sus principios democráticos, buscó sus pares entre la ciudadanía y a ella se dirigió para exponerle sus razones, convencerla de la visión que ofrecía del país, y, por último, para convertirla en su aliada. En forma paradójica, su lenguaje se mostró eficiente en grado extremo, pues logró romper, por medio de comunicados y posdatas, la barrera del silencio y del disimulo representada por los medios en general y por la televisión en particular.

Una voz solitaria, lejana, persuasiva, apartada de los tópicos dominantes, provista de argumentos contundentes derivados de la experiencia común de los mexicanos, de su historia; la voz de un mexicano, dirigida a mexicanos, para hablarles de cosas mexicanas, se sobrepuso, en forma inesperada, al discurso oficial y sus

poderosos medios de divulgación. El lenguaje político del zapatismo logró romper el hechizo del país formal, imaginario, y presentar al país real; la ilusión salinista del país a punto de ingresar al mundo de las naciones industrializadas creada, de conciertos por la millonaria propaganda oficial y los poderosos grupos empresariales, dueños del tiempo libre y de los ahorros de los mexicanos, perdió su brillo en pocos días.

El éxito del lenguaje zapatista fue tan sorprendente como el hecho de haber logrado, previamente, movilizar a miles de indígenas en Chiapas considerados antes refractarios al cambio. La forma en que el grupo insurgente inicial logró esto en apartadas regiones y los medios que empleó para ello, se escribirán en el futuro, puesto que ahora esa parte queda en la penumbra por haberse realizado en forma clandestina y con objetivos de defensa. No se conocen, como queda apuntado, nombres y apellidos de los pocos mestizos integrantes del grupo que relevó a la primera generación preparada para la lucha armada. No se sabe de sus propuestas teóricas ni de las organizaciones que directa o indirectamente participaron al formularlas. Pero la parte que es pública, la que sí se conoce, la que invadió las vidas de miles, los acompañó en sus traslados al trabajo en oficinas, talleres y escuelas, la que los animó en sus conversaciones en todo el país, es un fenómeno que requiere un análisis pormenorizado, puesto que convirtió al anónimo y oscuro ciudadano en un protagonista identificado con la causa de los marginados, que invadió la ciudad, paralizó sus calles y la obligó a escuchar las demandas de los indígenas.

De estos cambios operados en la ciudadanía es de lo que se puede y se debe dar cuenta, porque de la organización interna del EZLN, de sus personajes y de sus líderes, así como de su historia, como se apuntó, sólo sus propios cuadros, sus militantes, sus teóricos, pueden hacerlo. Aunque, bien pensadas las cosas, también las policías encargadas de combatirlos podrían ofrecer su perspectiva. Sin embargo, las partes capaces de aportar información cercana a los hechos han guardado silencio. Unas por razones estratégicas y otras por motivos de inteligencia —así se llama en la jerga burocrática a burócratas civiles y militares dedicados a

preparar informes confidenciales, es decir reservados para los ojos de otros burócratas—, pero todas han optado por no difundir lo que saben. Por esos motivos que convienen al juego político de ambas partes, es necesario referirse sólo a lo que se ha expresado a través de los comunicados, al lenguaje en ellos empleado.

Al aparecer el zapatismo quedó atrás el lenguaje economicista, tecnocrático, de la política que velaba las cuestiones de la legitimidad gubernamental al centrarse en los temas del desarrollo y la modernización. El lenguaje tecnocrático, vigente hasta la aparición del zapatismo, confundía el lenguaje político de la ciudadanía con el del bolsista y lo identificaba con el del accionista y el del empresario. Ese lenguaje describía al gobierno en términos de agente financiero más interesado por la ganancia de unos pocos que por el bien común. Para este lenguaje, los problemas sociales se mantenían como tales, única y exclusivamente, porque los anteriores gobiernos los habían enfocado desde una perspectiva equivocada, paternalista.

Si el lenguaje político de la democracia se distingue del autoritario por el hecho de que los actos de gobierno en el primer caso se consultan y, en el segundo, simplemente se imponen, con el zapatismo las cuestiones de la consulta permanente y del mando que obedece se convirtieron en obligado y permanente ejercicio.

Si se confrontan ambos lenguajes es posible distinguir las diferencias que hay entre el soliloquio y el diálogo. El discurso oficial, acostumbrado al soliloquio, a la negación de cualquier posible réplica y a manejar como único argumento el del Estado de derecho, no da razones para explicar su actuación porque considera que no las necesita. Por eso su insistencia machacona en los preceptos legales que definen la rebeldía como delito. El castigo fue la respuesta inicial que la administración pública dio al reclamo de justicia zapatista. En una segunda etapa ofreció el olvido del castigo, la amnistía, como la solución para el conflicto. ¿Qué se olvidaba con la amnistía? ¿La rebelión o las causas que la provocaron?

En la práctica informativa registrada a lo largo de las etapas del conflicto es posible contrastar, mediante el seguimiento de los hechos efectuados por la prensa, los contenidos de los lengua-

jes oficial y zapatista y, en particular, del origen histórico del conflicto y de la sociedad mexicana, así como del posible futuro de ésta y del problema que se vivía en Chiapas.

Tradición y modernidad frente a frente

Lo primero que resulta evidente al cotejar los mensajes de ambos bandos es que la idea de nación homogénea e integrada no funciona más. En el eje del mal desenvolvimiento se encuentra el programa, inconcluso o agotado, de la Revolución mexicana.

Las explicaciones sobre la suma de problemas sin resolver —asignaturas pendientes— en los órdenes económico, político y social difieren en los discursos zapatista y gubernamental. Para el gobierno heredero de la revolución mexicana, por paradójico que ello resulte, la explicación radica en el hecho de que las anteriores administraciones siguieron una política equivocada, paternalista, populista. Para el EZLN, más paradójicamente aun, la razón se encuentra en que la presente y las anteriores administraciones se apartaron de los ideales del nacionalismo revolucionario, de la defensa de la soberanía y del programa de justicia social.

En el debe y el haber del programa de la Revolución mexicana, la cuestión social, la cuestión agraria y la cuestión indígena no fueron resueltas; tampoco lo fue la industrialización soñada. La modernización sólo logró parte de sus objetivos, fue un proyecto trunco idéntico al paisaje urbano de la mayor parte de las ciudades mexicanas, donde dominan las construcciones a medio hacer. Son habitables a medias, a medias son un logro, a medias son inservibles.

La crítica zapatista al abandono del ideario revolucionario se sintetiza en el vocablo neoliberalismo. Éste, en opinión de los insurrectos, es la renuncia al proyecto de soberanía nacional y soberanía popular. La defensa del programa neoliberal a cargo del gobierno no menciona la parte histórica de la sociedad nacional. Apuesta, sí, por que el futuro le dé la razón y demuestre que, a la postre, los equivocados eran sus opositores.

En el lenguaje de la polémica es fácil advertir que el gobierno dejó por completo en manos del zapatismo el ideario de la Revolución mexicana, y la ideología de los movimientos que aspiran a la justicia social y al bien común. El pasado cercano o lejano, la historia patria, no es asunto que importe a las administraciones tecnócratas. Lo que no dejó en manos del zapatismo fue la interpretación del presente ni la visión del futuro.

La definición del presente se tornó en un tema central y se formuló a partir de las categorías de atraso y modernidad. La modernización, programa para alcanzar la modernidad y el desarrollo, la constituyeron, la constituyen aún, piezas sin sustitución en el discurso político contemporáneo.

Las categorías del lenguaje político sufrieron un cambio porque antes del conflicto se hablaba en términos absolutos de igualdad, de libertad, de seguridad y de progreso. El conjunto de ellas se definía como desarrollo. Sus contrapartes, desigualdad, fatalismo e inseguridad, se sintetizaban en el discurso oficial en la noción de atraso. Éste se describía como un cáncer introducido en el sistema por la historia colonial, por la composición étnica, pero en ningún caso era producto del mismo. La función gubernamental era resolver la contradicción existente entre el atraso y el desarrollo y esta tarea se equiparaba con la de una máquina o impulso modernizador, que debía arrastrar o empujar el pesado e inmóvil fardo de la tradición. Si ésta era un freno y obstáculo para la sociedad entera, al gobierno correspondía removerla.

Esta forma de ver y entender la tradición y a sus representantes, dominante no sólo en los círculos políticos, sino en amplios sectores de los círculos académicos, cuando se enfrentó al panorama de la rebelión no supo adaptarse a la nueva circunstancia. No tuvo respuesta a estas interrogantes: ¿quién es moderno y quién es atrasado? ¿Cómo se han establecido y de qué tipo son los vínculos entre la modernidad y el atraso? ¿De qué clase de atraso y de qué modernidad se trata? ¿Cómo, quién y de qué forma introduce el cambio en la sociedad tradicional? ¿El cambio puede ser endógeno o necesariamente exógeno? ¿La coexistencia entre tradición y modernidad es armónica o contradictoria, pacífica o violenta?

La representación simbólica del lenguaje político sirve para velar, para ocultar los aspectos dramáticos de los actos de fuerza, de violencia, del aparato estatal. Una cosa es postular como objetivo eliminar, resolver, la contradicción entre atraso y desarrollo, y otra, muy distinta, es reconocer que el problema abstracto, teórico, tiene una implicación concreta. Se trata de hombres, mujeres y niños de carne y hueso que son condenados por el desarrollo a desaparecer, sin juicio, sin ser escuchados, porque representan al obstáculo de la tradición.

El lenguaje político oficial se decidió, sin consulta mediante, en favor del desarrollo. Lo que no resolvió, ni con ni sin consulta, es quién y por qué el desarrollo excluye a la tradición. ¿Por qué los así llamados hombres modernos excluyen de su sociedad a los hombres que no son modernos? ¿Quién ofreció y con qué argumentos a los modernos el derecho a condenar a los que no lo son?

Estas preguntas, que pudieran parecer retóricas, no lo son cuando se observa la reacción del zapatismo a las políticas implantadas por el sistema político en los últimos lustros. La rebelión zapatista es un ajuste de cuentas del sector considerado más atrasado de la sociedad, con aquellas fuerzas que, en los hechos, efectivamente, representan lo arcaico, lo tradicional, de la sociedad chiapaneca y de la sociedad nacional.

Como arquetipo de lo arcaico, el lenguaje zapatista señala la estructura de la sociedad chiapaneca misma, pues ilustra los mecanismos tradicionales, premodernos, de que se ha valido la oligarquía local para conservar el poder. Sociedad en la que las decisiones las ha tomado permanentemente un pequeño y excluyente grupo de hacendados y ganaderos. El sistema político por ellos conformado es excluyente y se basa en la explotación primitiva de la mano de obra a la que se le arrebatan la tierra y los frutos que de ella obtiene.

Excluyente porque, como cualquier oligarquía que se respete, es un círculo compuesto únicamente por quienes detentan en forma simultánea propiedad y poder político y que adoptan, en el dicho, la fraseología del gobierno representativo y revelan, en el hecho, su vocación por conservar una sociedad patriarcal y patrimonial.

El asedio permanente de ganaderos y hacendados, en otras palabras mestizos y blancos, sobre los indígenas ha permitido congregar la violencia contra ellos en tiempos pasado y presente. El prejuicio sobre la desigualdad natural de los hombres es, en ese sector chiapaneco, un artículo de fe útil para justificar las diferencias de oportunidades entre los grupos.

El “nosotros” tan empleado en los discursos oficiales, que hipotéticamente representa a la sociedad nacional o mestiza, sociedad de los iguales, incluye al yo, al tú, al él, así como al vosotros, pero excluye al *ellos*, los indígenas. El nosotros, gramatical y políticamente hablando, es una figura colectiva usada para justificar y establecer diferencias, distancias entre los que se consideran iguales y los que son privados de ese conocimiento.

El *ellos*, en el lenguaje político chiapaneco, es una referencia indirecta para no nombrar, para descalificar, a aquellos contra los que se ejerce la violencia en sus formas políticas, económicas, sociales y culturales. *Ellos* son la comunidad a la que el liberalismo quiso destruir; *ellos* son la comunidad que la modificación del artículo 27 quiere privatizar; *ellos* son los indígenas que la sociedad nacional quiere desaparecer mediante su mestización —incorporación a la sociedad nacional la llaman—, *ellos* son los representantes a los que la sociedad quiere modernizar; *ellos* son los que el EZLN ha puesto a combatir contra la exclusión.

La mestización, dogma de la antropología oficial, y la modernización neoprivatizadora, artículo de fe de la tecnocracia en el poder, son contradictorias porque pretenden eliminar lo que consideran obstáculos para la modernización y, a la vez, justifican, en los hechos, a los sectores más reaccionarios. La coexistencia de varios tipos de relaciones, individualistas y comunitarias, históricamente correspondientes a formaciones sociales distintas, plantea interrogantes que el discurso político mecanicista fundado en el conflicto entre tradición y modernidad difícilmente puede responder.

Ningún escenario como el chiapaneco para estudiar las complejas relaciones entre los diversos agentes que forman el entramado de tradición y modernidad. Cuantiosas inversiones

estatales en admirables empresas hidroeléctricas coexisten con salarios deprimidos. Administraciones federales que convierten la modernidad en su discurso favorito entran, sin embargo, en componendas con una oligarquía que se ha distinguido por su capacidad de resistir a las políticas nacionales y mantener la preeminencia de pactos regionales e intereses locales sobre los de la sociedad nacional.

En este escenario, la última frontera, han coexistido durante los últimos años discursos revolucionarios y prácticas caciquiles arcaicas. La última frontera, amén de ser un referente geográfico, plantea con precisión el gran problema límite: ¿cómo implantar cambios sin afectar intereses? ¿Cómo y quién realiza las transformaciones requeridas para entrar a la modernidad? La respuesta tradicional, arcaica, de la administración pública es la de permitir al desarrollo que avance hasta que por sí solos los cambios se presenten. Cuando los cambios se presentaron con el EZLN, de una forma inesperada para el gobierno —la rebelión—, la respuesta fue defender el *statu quo*.

El lenguaje oficial

El discurso oficial cumplió el ritual compuesto de cinco pasos practicado por los gobiernos enfrentados a la rebeldía. El primer paso consiste en negar el conflicto; éste no existe hasta que lo acepta la parte demandada, en este caso la propia administración pública. El segundo consiste en declarar ilegal al movimiento insurreccional e ignorante de las instituciones encargadas de garantizar la justicia que da estabilidad al sistema todo; a esta etapa corresponde la propuesta de amnistía. Con el tercer paso se pretende, luego de haber reconocido la existencia del conflicto, minimizarlo; se intenta así convencer a la opinión pública nacional e internacional de que se trata de un enfrentamiento local que sólo involucra a un pequeño grupo, a comunidades reducidas. El discurso oficial procura por todos los medios presentar el conflicto como un asunto local e impedir su posible escalamiento a nivel

nacional. El cuarto tiene dos variantes: la primera consiste en atribuir el conflicto a causas endógenas que pueden ser ideológicas, en afirmar que los responsables son externos y no representan a las comunidades, las cuales han sido engañadas; en la segunda se acusa a los dirigentes de perseguir objetivos turbios y riquezas, o de responder a impulsos patológicos. El quinto paso estriba en atribuir la responsabilidad del conflicto a la administración pública precedente. Éste se describe como herencia del pasado, producto de errores cometidos por otros regímenes. Los argumentos oficiales se apresuran a deslindar al actual gobierno de las causas históricas del conflicto; en un intento de eludir responsabilidades, señalan que éstas se limitan al presente y, sin dejar de reconocer las condiciones de extrema pobreza y explotación imperantes entre la población indígena, afirman, por ejemplo, que los beneficios de la Revolución mexicana no llegaron nunca a Chiapas.

Analizados como un todo, los cinco pasos persiguen el objetivo único de convencer al ciudadano de que el sistema político, si bien tiene pequeñas fallas, en conjunto puede seguir funcionando con eficacia. El lenguaje oficial, al obstinarse en reducir la escala del conflicto, al definirlo ya como local, ya como étnico y minoritario, intenta convencer a la opinión pública de que la estabilidad del sistema no se pone en duda cuando surge una insurrección solitaria. Asimismo, cuando invoca el Estado de derecho pretende mostrarse como celoso guardián que obedece y hace obedecer las leyes. Mediante este recurso intenta persuadir al ciudadano de que la legalidad que ampara el orden vigente no puede modificarse; al mismo tiempo, pasa por alto las incesantes iniciativas sexenales que, sin tregua, han modificado la ley fundamental que da forma y constituye a la sociedad mexicana.

El lenguaje del EZLN

El discurso del EZLN, por su parte, argumenta que, agotados los reiterados reclamos de justicia en cada una de las instancias prescritas por las leyes, ejercidos todos los recursos legales ante los

distintos niveles de autoridad, sin resultado alguno, la única vía para hacer oír ancestrales demandas es la insurrección.

El discurso del levantamiento zapatista fue novedoso porque no apeló a otras leyes ni recurrió a otros argumentos que los propios del liberalismo, que son la base del sistema político vigente. No ejerció una crítica ajena a éste ni propuso un orden alternativo distinto al que debiera imperar de acuerdo con los principios constitucionales. Jugó con sus reglas, aceptó los principios en los que se basa, argumentó con su lógica, empleó los recursos que permite y empleó todo ello para cuestionar al gobierno.

Los motivos del discurso zapatista, presentes en forma reiterada en sus comunicados, forman parte de esa herencia que los países occidentales se enorgullecen de haber convertido en patrimonio universal. En el discurso del EZLN se invoca la legalidad por ser el instrumento que pondrá fin a la ilegalidad, se apela a la justicia para dar fin a la inequidad, se convoca a la democracia para liquidar el autoritarismo, se postula como valor supremo la igualdad sobre la desigualdad, se privilegian los intereses de la nación y no los de las corporaciones; por último, se llama a los ciudadanos, no a quienes dicen representarlos.

El lenguaje empleado por el zapatismo se refiere permanentemente al orden y por éste entiende el cumplimiento de los postulados constitucionales. ¿Cómo un movimiento que solicita el cumplimiento de tales preceptos puede ser calificado como ilegal? ¿Cómo denominar local y no nacional a un programa político que postula una ley para todos?

La crónica de los mil y un días del zapatismo

Para el historiador del presente comentar las relaciones que éste guarda con el pasado, así como con el posible futuro, es una temeridad porque, al contrario de lo que sucede con el historiador del pretérito puro, se puede encontrar a la vuelta de la esquina con un hipotético lector que, con justa razón, interpreta los acontecimientos de distinta manera.

Otro motivo para mostrar reserva es que los hechos recientes tienen implicaciones incómodas, políticamente hablando, sobre todo cuando se trata de definir, en forma explícita, la toma de partido en pro o en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Una razón más para opinar con cautela sobre los tópicos referidos al EZLN es que, al respecto, han expresado su punto de vista las mejores plumas del país, amén de los más distinguidos antropólogos, sociólogos, politólogos, ensayistas, periodistas, historiadores y juristas. Todos ellos han echado mano de sus respectivos arsenales teóricos y han generado una amplia literatura que, de seguir así, pronto requerirá la formación de grupos especializados de estudio más interesados en lo que se ha escrito sobre el zapatismo, que en el zapatismo mismo. Cabe destacar, sin embargo, que el aporte sustantivo del EZLN a la democratización de la vida política del país, el impulso por él generado en favor de la transición democrática, no ha ocupado el lugar relevante que merece.

Otro hecho que obliga a opinar con mesura es que el público que ha seguido la noticia posee exactamente el mismo tipo de información que la mayoría de los analistas, de tal suerte que éstos, para poder decir algo nuevo, deben intentar recurrir al expediente de la historia comparativa y señalar, en forma abundante, analogías y diferencias, las cuales pueden ampliar el horizonte pero no aportar nuevos elementos de juicio que, en última instancia, constituyen el objetivo de toda investigación.

Un último motivo para actuar ponderadamente es que las reacciones ante los cambios registrados a partir de la aparición del EZLN despiertan emociones en favor o en contra. Los observadores, como parte que son de la sociedad, no pueden sustraerse a ellas. Un supuesto análisis basado únicamente en argumentos convincentes, equidistantes y equilibrados puede ser un objetivo académico, pero también un mecanismo para eludir una definición política.

Hechas estas aclaraciones, debe señalarse que, desde la perspectiva historiográfica, no se pueden rebasar los precisos límites de una crónica, puesto que cualquier narración histórica, para poder serlo, requiere de un desarrollo de los acontecimientos y éstos todavía se encuentran en curso.

El oficio de historiador choca en este punto con las reacciones de la sociedad mexicana. El oficio exige fechas, nombres, documentos, elementos todos que sirven para reducir al mínimo el ejercicio lúdico de la imaginación. La sociedad, al menos la interesada en el zapatismo, prefiere alejarse del espíritu cartesiano que todo lo impregna de claridad y transparencia. Asimismo, la sociedad mexicana en este punto rechaza la *glassnot* que fue preludio del fin de la Unión Soviética; prefiere, en cambio, el misterio que rodea el origen, del mismo modo que prefiere un rostro oculto, que habla sin embargo con verdad a rostros desnudos pero que maquillan sus palabras. No obstante lo anterior, toda reseña histórica requiere un mínimo de información.

La narración del momento insurreccional que dio a conocer a la opinión pública al EZLN es simple y bien conocida. Los once días siguientes, si bien no tuvieron la misma intensidad y trascendencia que aquellos que, según John Reed, conmovieron al mundo, sí estremecieron, como ningún otro hecho reciente, a amplios sectores de la opinión pública mexicana. El espectro de las reacciones fue muy amplio. Sorpresa, admiración, rechazo y, sobre todas las cosas, una inquietud generalizada por la suerte de los hombres que habían elegido el camino de la rebelión. Hubo quienes, en forma pública, pidieron que a los zapatistas se los considerara traidores a la patria y se los fusilara por el daño que, según los acusadores, le habían causado a México ante la opinión pública internacional. Otros, en cambio, vieron en esas acciones el espíritu quijotesco propio de quienes han perdido toda esperanza. Pero la opinión mayoritaria externó su preocupación por la excesiva fuerza de la posible respuesta del gobierno mexicano.

Desde los primeros días se advirtió en las principales ciudades que amplios sectores de opinión no juzgaban peligroso el movimiento insurreccional y sí, en cambio, el posible escalamiento del conflicto.

Resulta sorprendente que lo que muchos movimientos insurreccionales en México y en América latina no lograron hacer en muchos años, con muchas acciones, lo haya conseguido el EZLN en pocos días, con pocos disparos. ¿Cómo ocurrió esto?

¿Cómo explicarlo? ¿Por qué la gente adoptó inicialmente no tanto la causa zapatista como la defensa de los zapatistas mismos?

A partir de esas interrogantes, el análisis del zapatismo requiere un estudio en un doble nivel. El EZLN, por una parte, y lo que puede ser llamado zapatismo, la participación de la sociedad civil en la solución del conflicto, por la otra. Ésta, sin adoptar la vía insurreccional del EZLN, sí hace suyos sus reclamos. Si se entienden y justifican las causas de la rebeldía, ¿de qué vamos a pedir perdón? Se comparte la tesis de que debe decirse *basta* tanto a la injusticia histórica como a la actual y, sobre todo, se hace propia la convicción de que para la democracia es necesaria la participación de todos.

Se estableció así un diálogo a distancia basado en los comunicados del subcomandante y la ansiosa lectura efectuada de ellos por la opinión pública. En estos acontecimientos el gobierno perdió la brújula: derrotado en lo ideológico, sin tener una respuesta satisfactoria para los reclamos de la sociedad, se colocó en una posición defensiva, de la cual le ha resultado muy difícil salir. Al aceptar que los rezagos tenían un origen histórico, intentó eludir su propia responsabilidad, pero la opinión pública, advertida de la intención, preguntaba: ¿entonces qué ha estado haciendo el gobierno durante todos estos años? Al señalar el régimen que se vivía en un estado de derecho y que había mecanismos para solucionar el conflicto, la sociedad civil se preguntaba: ¿y por qué los tribunales nunca resolvieron nada? Atrapado en su inmovilismo, en su discurso tradicional y su desinterés por un problema que lo distraía de su escenario favorito, Estados Unidos, el gobierno intentó única y exclusivamente tácticas dilatorias.

¿Qué motivó a la gente a tomar partido por la defensa de la causa zapatista? Para explicar este fenómeno es preciso aclarar de modo satisfactorio las motivaciones profundas de quienes respondieron a la convocatoria de la Selva Lacandona. Si bien ésta había llamado a la sociedad a unirse en la campaña militar contra el gobierno mexicano, la reacción fue muy distinta, pues consistió en demandar el establecimiento del diálogo.

Rebelión y represión o de la ausencia de democracia

Si la descripción del momento insurreccional contiene pocos datos, su interpretación, por el contrario, recorre un amplio espectro de opiniones encontradas entre sí. Desde las que insisten en la raigambre interna, nacional, hasta las que ponen el acento en factores externos. Ni unas ni otras, sin embargo, destacan el hecho de que la discusión versó fundamentalmente sobre la democracia o, mejor dicho, sobre la ausencia de ésta.

Las dos partes del conflicto se acusaron mutuamente de desconocer y burlar los mecanismos institucionales que garantizan una convivencia pacífica a todos los miembros de la comunidad. Del —en este punto— coincidente lenguaje empleado por las partes, así como por observadores externos, se desprende que la causa única de la insurrección consistió en la falta de democracia. El discurso zapatista acusó al gobierno por su origen espurio, ya que burló la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones de 1988. El discurso oficial, por su parte, culpó a los zapatistas de pasar por alto los mecanismos consensuales. Asimismo, se manifestaron distintos matices al interpretar el significado de democracia. Las tesis oficiales consideraban que la democracia es un asunto de reglas, de procedimientos ya en funcionamiento. Los zapatistas, por su parte, afirmaban que es una cuestión de tareas por realizar.

En este contexto, la participación de la sociedad civil fue determinante. Con sus numerosas manifestaciones, expresó que el fiel de la balanza era el mismo para el gobierno y para los insurgentes. El clamor popular expresó a las partes que si la causa del conflicto había sido la ausencia de la democracia, la solución del problema debía encontrarse en los consensos. La sociedad civil, de esta manera, se situó entre los antagonistas y los forzó al diálogo. Con ello obligó a las partes a mostrar en los hechos su convicción democrática. ¿Cómo ocurrió tal cambio? ¿Cómo de la pasividad mostrada en múltiples ocasiones se convirtió en parte activa del proceso político?

Varios estudiosos, en distintos países, han señalado que, a causa de la falta de democracia, se debilitan los sentimientos de so-

lidaridad entre los grupos, clases y pueblos que componen a una nación. Asimismo, han explicado que la opinión pública de las sociedades no democráticas, al carecer de mecanismos que le permitan expresarse y oponerse a las que considera políticas equivocadas, permanece pasiva. Durante la gestión de Salinas, se había llegado al extremo de entender la solidaridad, acto de adherirse a una causa común, como un programa de administración pública para los que menos poseían. La solidaridad se entendía como dádiva gubernamental y no como acto de apoyo mutuo entre grupos sociales diferentes.

En forma paradójica, el primer efecto democratizador del zapatismo surgió en forma espontánea. La solidaridad de la sociedad urbana y mestiza con los indígenas se hizo patente de distintas maneras. Resultó sorprendente que, por vez primera, en México el indio vivo, presente, tuviera la misma admiración que el indio muerto. Mediante las reacciones en favor del zapatismo se pudo apreciar un cambio sin precedentes en la sociedad. El ejemplo de los numerosos etnocidios ocurridos en el México del siglo XIX —de los cuales pueden mencionarse tres: de mayas, mayos y yaquis— resultaban ahora repugnantes y se consideraban inadmisibles en el contexto actual.

El discurso civilizatorio, de progreso y riqueza tan en boga hace una centuria, había perdido cien años después su capacidad de convencimiento y de convocatoria. Para el ciudadano común de fines de siglo resulta evidente que ni el progreso ni la riqueza son bienes al alcance de todos, como tampoco lo fueron los frutos civilizatorios. A cada día, en cada esquina, a cualquier observador le resulta fácil constatar que los efectos excluyentes de ese modelo positivista actualizado por el neoliberalismo se multiplican.

La recuperación, por la memoria colectiva, del significado que tiene la ausencia del registro del holocausto decimonónico mostró que el descuido y la apatía de la sociedad mexicana ante el indígena, uno de sus componentes básicos, quedaba atrás, y que el discurso oficial aprovecha ahora, como último reducto para

preservar el *statu quo*, la confusión entre autonomía y soberanía, como si este problema no se hubiese resuelto ya de distintas formas en las sociedades industrializadas.

A ese cambio sustantivo lo acompañaron otros. Los analistas coinciden en que ese primero de enero de 1994 se produjo en la sociedad mexicana un cambio. Unos lo vieron como un cambio de país: el anhelado estatuto de nación primermundista y vecina de Estados Unidos rendía sus primeros frutos; es decir, la opinión pública determinaba el rumbo a los dirigentes políticos; para otros, el cambio fue la constatación de que México seguía conservando un potencial en los jóvenes que rechazaban la vía del enriquecimiento personal como único programa de vida.

El país no cambió con los hechos de esos primeros días pero, como queda apuntado, el discurso político sí sufrió una radical transformación. Ésta no sólo se advirtió en la forma de referirse a la correlación internacional entre los países modernos y los no modernos, sino a la relación entre los propios componentes de la sociedad mexicana. De las asimetrías con el poderoso vecino que dominaban el discurso académico y político, se pasó rápidamente a las asimetrías perceptibles en el seno mismo del país y a la constatación reiterada de que las diferencias en el interior mismo de la sociedad son tan grandes como las que la separan del exterior. La etapa del silencio sobre las tareas inconclusas había llegado ya a su término. Con el diálogo apareció la necesidad de discutir no tanto sobre el pasado y el presente, como sobre el futuro. ¿Cómo será éste? ¿Quiénes serán capaces de darle forma?

Los diálogos de San Andrés Larráinzar: dos visiones del futuro

Para amplios sectores de la opinión pública, con los acuerdos para establecer un diálogo entre los representantes y el EZLN, atrás quedaron la insurrección y la represión. Son puntos pretéritos de la agenda política nacional. Lo que para la opinión pública se juega en los diálogos es demostrar, en los hechos, si ambas partes son

capaces, mediante la negociación, de llegar a un acuerdo pacífico del conflicto, o si una o las dos partes sólo los emplean como un mecanismo para ganar tiempo.

El resultado de esos diálogos aún se ignora. No se sabe todavía qué resultará de ellos, cómo y cuándo. Lo que se tiene por cierto es que está en riesgo la confianza de la sociedad en sus gobernantes y en el EZLN. A los dos corresponde mostrar en los hechos su vocación democrática. Ni el silencio ni la espera interminable pueden ser respuesta.

¿Cuáles son los mensajes que se están enviando a través del diálogo? ¿Cuáles los objetivos del zapatismo y cuáles los del gobierno? ¿A quiénes se dirigen tales mensajes? En una sociedad profundamente escindida y jerarquizada como la mexicana, no es posible hablar de consensos, de acuerdos nacionales. El zapatismo representa un fenómeno político y social donde se reflejan las contradicciones características de la sociedad mexicana contemporánea, que sin haber concluido las tareas nacionales aspira a la globalización, sin abandonar su tradicionalismo hace de la modernización su bandera, sin tener una infraestructura industrial competitiva adopta el principio de la libre competencia como dogma y, sobre todas las cosas, de una sociedad donde se formula el discurso de la integración y el mestizaje para ocultar una realidad marginadora y discriminadora de los indígenas.

La crónica de los diálogos de San Andrés tiene como tema central el planteamiento de un nuevo pacto social, el cual implica una crítica al anterior, vigente, y una propuesta sobre el que vendrá.

Si los movimientos insurreccionales, por definición, son rebeldes, no todos ellos consideran necesario establecer un nuevo pacto social. El propuesto por el zapatismo pretende posibilitar la transición a la democracia y, en ésta, incorporar a los indígenas en los términos definidos por ellos mismos y no por los hipotéticos de una población abstracta, homogénea.

Para el sistema político mexicano, acostumbrado a emplear un lenguaje en que la figura del presidente y su partido político se identificaban con la sociedad entera, los diálogos significan cam-

bio radical en los esquemas teóricos propios de la academia y el discurso oficial. Una nueva identidad está forjándose.

El discurso oficial consideró durante mucho tiempo que su crítica al desarrollo del país era la única posible y que la alternativa que proponía era, asimismo, la única correcta. El tono monocorde, exclusivo y excluyente del discurso negaba la existencia de otras voces y otras tonalidades. La parálisis de la sociedad ante las propuestas del propio sistema le permitió pontificar tanto sobre los errores del pasado como de sus aciertos para el futuro. Pero en los diálogos de San Andrés debe demostrar que posee una respuesta útil para incorporar a todos los mexicanos, indígenas y no indígenas, a un proyecto común. Sin embargo, la identidad que se está reclamando tiene poca similitud con la esbozada en el esquema del gobierno en curso.

La retórica oficial que pretende dar sentido a la sociedad entera se caracterizó, durante los dos últimos sexenios, por un notable esfuerzo de convencer. Según aquélla, la colectividad, como un todo, está a sólo un paso de cruzar el umbral de la modernidad. Las reformas necesarias para igualarse de manera cabal con Estados Unidos, ayer colosal vecino y enemigo, hoy difícil pero promisorio socio, se cumplen pese a todos los obstáculos. La agenda gubernamental se define a sí misma como modernizadora y, en consecuencia, se apresura a demoler los obstáculos representados por las normas constitucionales que garantizan la soberanía nacional.

El discurso zapatista plantea problemas diferentes. El primero de ellos es que la hipotética sociedad neoliberal no sabe cómo resolver el gran y viejo problema de qué hacer con las comunidades. ¿Esperar a que, como todo lo sólido, se desvanezcan en el aire? ¿Darles el empujón final confiando en que el edificio de la tradición se encuentre tan carcomido que no ofrecerá resistencia alguna?

Para el EZLN, al igual que para la opinión pública, los hechos han demostrado que no ocurrió ni lo uno ni lo otro: el pasado representado por la comunidad indígena es tan sólido y se halla tan presente como en las otras etapas de la sociedad mexicana y

no sólo es capaz de ejercer una resistencia pasiva —lo cual resulta sorprendente para todos—, sino una muy activa y diligente. Sin tener una respuesta, el gobierno ha tratado de ganar tiempo en espera de que las contradicciones de la sociedad chiapaneca y del propio zapatismo se hagan evidentes.

Para el EZLN, el discurso de la modernización neoliberal no ofrece respuesta para los sectores más desprotegidos, marginales, a los que, sin decirlo, se condena a desaparecer mered a las fuerzas impersonales del mercado; la comunidad indígena y sus integrantes son acusados por éste cuando, en realidad, son víctimas. La falta de dinamismo de la agricultura se atribuye a las formas tradicionales de propiedad ejidal y comunal. Éstas, al considerarse un freno para el desarrollo del campo, en consecuencia, deben dar lugar a la propiedad privada, que es la más evolucionada, la más moderna, de las formas de propiedad.

Este tipo de modernidad, para los zapatistas, abre espacios al capital extranjero y a los empresarios y los cierra a los ciudadanos. Su crítica al proyecto neoliberal es porque sólo entiende de aspectos económicos: se empeña en difundir el evangelio económico y guarda silencio sobre sus aspectos democráticos; olvida lo referente a la democratización de la propiedad y de la vida política, entendidas ambas como la oferta de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Esta modernidad pretende conocer las leyes del desarrollo capitalista internacional, pero está vuelta de espaldas a las características del desarrollo nacional.

Del resultado de los diálogos de San Andrés, aunque no exclusivamente de ellos, se espera la forja de una nueva identidad. Empero, quedan otros problemas por resolver en forma previa. Por ejemplo: ¿es posible plantear la necesidad de un nuevo pacto social si sólo se cuenta con el apoyo de intelectuales y la colaboración esporádica de figuras internacionales? ¿Con una sociedad civil en la que el observador se pregunta dónde están los trabajadores, los campesinos y los sectores populares organizados?

Pese a todo, la sociedad civil representa el único factor, el único apoyo externo al EZLN. Está integrada por quienes no militan en un partido, es un cuerpo amorfo, de múltiples facetas, que des-

confía no sólo del partido en el poder, sino de los restantes que actúan como comparsas. Organización espontánea, sin líderes, sin representantes y, sobre todas las cosas, desconfiada de las organizaciones políticas tradicionales. Lectora ávida, individualista, proteica y cansada de promesas incumplidas. ¿Qué tan confiable es como punto de apoyo para un programa de aliento y esfuerzo sostenido? ¿Qué relación guardará en el futuro con el EZLN?

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha demostrado que tiene una notable capacidad para resistir y luchar. Demostró, en los hechos, ser capaz de acciones insospechadas que conmovieron al país. Ayer nadie sabía de su existencia. Hoy, nadie lo ignora. Mañana, seguramente se escribirá su historia.

Se ha querido sostener que el desafío zapatista al presidencialismo, al partido hegemónico que lo representa y al sistema partidista que lo apuntala fue lanzado a la sociedad nacional; empero, los lúcidos ensayos muestran que ésta es por igual partícipe de la crítica al presidencialismo y al corrupto sistema político que lo ha propiciado.

ÍNDICE

Presentación	
Ignacio Sosa	7
La legión del Caribe. La insurrección democrática en Centroamérica y el Caribe (1940-1954)	
Enrique Camacho	47
El llano y la sierra dos conceptos insurreccionales en la Revolución Cubana	
Martín López Ávalos	75
De la crítica de las armas a las armas de la crítica: la insurrección en Venezuela	
Ruperto Retana Ramírez	105
La insurrección democrática en Nicaragua: conservadores, liberales y marxistas	
Juan Monroy	137
Insurgencia y transición estatal en Guatemala	
Carlos Figueroa Ibarra	169
Del desafío revolucionario a la reforma política El Salvador, 1970-1992	
Mario R. Vázquez	195
Colombia: heterogeneidad del movimiento guerrillero, multipolaridad de la guerra y maraña negociadora	
Juan Manuel Ibeas Miguel y Luis Fernando Moncada Agudelo	229
El lenguaje del poder y el poder del lenguaje: los mil y un días del zapatismo	
Ignacio Sosa	269

Insurrección y democracia en el Circuncaribe,
editado por el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, se terminó de imprimir el mes de febrero de 1998 en los talleres de Sigma Servicios Editoriales S. C., Av. Revolución 1101, Mixcoac, México, D. F. La edición, en papel cultural de 90 g, consta de 500 ejemplares.



ISBN 968-36-6603-5